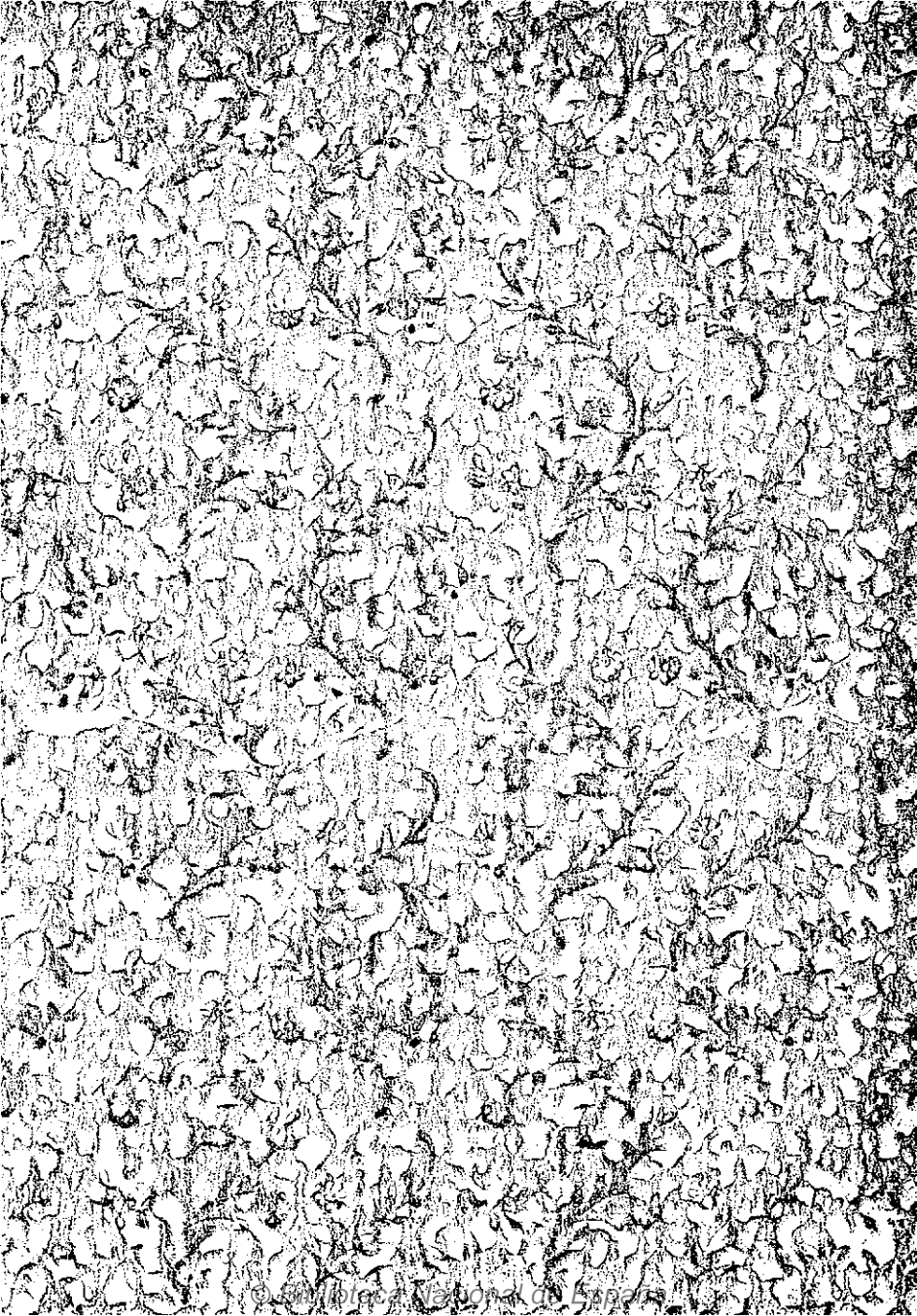
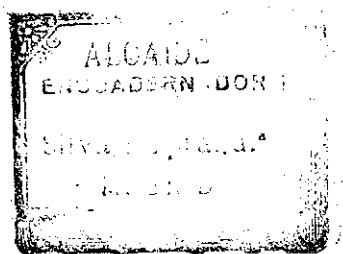


H. a.
3282

H. a.
3282





R

"LA CULTURA ARGENTINA"

ANDRÉS LAMAS

RIVADAVIA

Su obra política y cultural

Con un prólogo de

ÁLVARO MELIAN LAFINUR



BUENOS AIRES

«La Cultura Argentina» — Avenida de Mayo 646

1915

Impreso en los Talleres Gráficos de L. J. ROSSO y Cia.
453⁴ - CALLE BELGRANO - 475 - Buenos Aires

Rivadavia

ANDRES LAMAS

Cuenta en el número de los escritores rioplatenses que actuaron en la política y en las letras de ambas márgenes del Plata. Nació en Montevideo el 2 de Marzo de 1817; pasó la mayor parte de su vida fuera del Uruguay, viviendo alternativamente en el Brasil y la Argentina, hasta fijar su residencia definitiva en este último país.

Su carrera política y diplomática fué accidentada; descolló como hombre de pensamiento: historiador, polemista y literato. La colección de sus escritos constituiría numerosos volúmenes. En 1849 dió a luz sus "Apuntes Históricos sobre las agresiones de Rozas", en parte reeditados en Buenos Aires por Angel J. Carranza (1877). En Río Janeiro publicó un famoso escrito: "Andrés Lamas a sus compatriotas" (1855), que tuvo grandes consecuencias políticas, y un tomo sobre "Negociaciones diplomáticas" (1858). Incorporado a la vida pública argentina, escribió numerosos ensayos históricos y financieros, entre los cuales se destacan: "Rivadavia", Buenos Aires, 1882; "El génesis de la Revolución", La Plata; "Estudio histórico y científico del Banco de la Provincia de Buenos Aires", Buenos Aires, 1886; etcétera.

El estudio histórico sobre la vida y obra de Bernardino Rivadavia, que constituye el presente volumen, fué editado oficialmente por el Gobierno Argentino en la obra consagrada a celebrar el centenario del eminente estadista. Trata principalmente de los dos grandes períodos de su actuación política y cultural; en un segundo volumen, que no llegó a publicar, el autor se proponía completar el estudio de Rivadavia y de su época. A fin de colmar ciertas lagunas biográficas D. Alvaro Melián Lafinur ha escrito expresamente para esta reedición las páginas que le sirven de prólogo.

Andrés Lamas falleció en Buenos Aires el 23 de Septiembre de 1891.

"LA CULTURA ARGENTINA"

R 57 779
ANDRÉS LAMAS

RIVADAVIA

Su obra política y cultural

Con un prólogo de
ÁLVARO MELIAN LAFINUR



BUENOS AIRES
«La Cultura Argentina» — Avenida de Mayo 646
1915

BERNARDINO RIVADAVIA

El nombre del patricio cuyo carácter y cuya obra intento bosquejar aquí, sintetiza una etapa trascendental de la historia argentina. Acaso ninguna otra época de la misma,—salvo la de Rosas, con muy opuesta significación,— pueda ser tan propiamente designada con el nombre de un solo héroe, como lo es “la época de Rivadavia”. La sola enunciación de estas palabras, evoca todo un cuadro histórico, donde, en medio a las agitaciones tumultuosas de un período todavía caótico, cabe entrever algo así como una anticipación promisorio de la socialidad actual.

Durante ese período, Rivadavia llena el escenario argentino con su amplio ademán autoritario y su premioso afán constructivo. Buenos Aires es entonces a modo de una enorme fragua, en donde cunde, incesante, el eco de un martilleo sonoro. Urge forjar los instrumentos modeladores de la nacionalidad. La patria está de prisa. Su leal regidor va y viene en un laboreo infatigable. Investiga, proyecta, prevé, encauza, corrige, remedia, prescribe y ejecuta. Todo lo abarca; todo lo afronta. Y entre el himno de los poetas que cantan bajo el estímulo de este moderno Augusto republicano, la admonición de los filósofos que propagan nuevas ideas liberadoras y el amable rumor de una socie-

dad más refinada y más culta, van surgiendo aquí y allá, como por virtud de un conjuro poderoso. la Universidad emancipada de los pristinos moldes escolásticos, las instituciones económicas, la caridad organizada y pródiga; mientras el gobierno define su carácter representativo, se inicia una era de libre discusión, el estado afirma su supremacía sobre la clerecía abusiva, y la tierra, celosamente custodiada por el gobernante tutelar, fructifica, llena de majestad agraria, para que todo sea próspero y feliz en aquel florecimiento fecundo.

La Revolución de Mayo no tuvo por objeto provocar un cambio meramente exterior y formal: erigir un gobierno autóctono, constituir una nueva entidad política, para que el país siguiera siendo, intrínsecamente, la misma colonia mezquina, con sus limitaciones y su indigencia, con sus dogmas y su ignorancia. Traía una significación mucho más honda aquel ideal, en virtud de cuya fuerza propulsora se vertió tanta sangre y se realizaron tan crueles sacrificios, ya en la brega contra el dominador, ya en las cruentas luchas intestinas, hasta consolidar un régimen perdurable. La Revolución importaba un propósito de transformación, así en los menesteres materiales como en las cosas ideales. Era en su esencia un movimiento de liberación integral, que no buscaba sólo la independencia con respecto a España, o a cualquiera otra nación que hubiera intentado sojuzgarnos, como lo intentara Inglaterra, sino también y más que todo, promover sobre el suelo americano un orden de libertad, de justicia, de dignificación y de solidaridad humanas. Este sentido profundamente liberal y demo-

erático de la obra de Mayo, no es contrariado ni aun por las mismas efímeras veleidades monarquistas de sus hombres, en un instante de confusión y de temor. Tales tentativas,—destinadas de todos modos al fracaso,—se generaban en el desconcierto de la primera hora y en la creencia errónea de que ése fuera el único modo de cohonestar, ante las fuertes naciones de Europa,—entonces en plena reacción monárquica y absolutista,—la actitud levantisca de estos pueblos. Ante la posibilidad de que ello suscitara la intervención decisiva de aquellas potencias en pro del restablecimiento inmediato del poder peninsular en el Río de la Plata, pudieron Rivadavia, Belgrano y otros, creer por un momento que la salvación estaba en adoptar esa forma de gobierno, más simpática y admisible para esas naciones que el odiado republicanismo. Este extravío fugaz no desvirtúa en lo mínimo el fuerte aliento de liberalismo y de democracia que desde el primer instante inspiró a la Revolución. Ella tuvo en Rivadavia un ejecutor ardoroso y eficiente, como tenía en Moreno su doctrinario y su tribuno.

Todas las reformas liberales eran inherentes a la obra de emancipación; estaban implícitamente contenidas en ella. La superioridad de Rivadavia consiste en haber sido quien llevara a término o formulara al menos concretamente la mayor parte de esas reformas: desde las que procuraban la liberación de la conciencia colectiva mediante una nueva cultura, hasta las que buscaban la transformación económica, a través de un nuevo régimen de la agricultura y del comercio.

Es sabido cómo desde el primer momento se produjeron entre los elementos dirigentes de la Revolución, dos tendencias antinómicas e inconcilia-

bles: la de Saavedra, reaccionaria y estrecha, que no veía en aquella acción sino un mero cambio de autoridades, y la de Moreno, que poseía la visión honda y verdadera del movimiento. No en balde se hallaba influenciado por las grandes ideas liberales del siglo XVIII (1). Rousseau, cuyo *Contrato Social* tradujera divulgándolo entre su gente, Montesquieu, Mably, Raynal, Filangieri, Quesnay, Jovellanos y los enciclopedistas, le habían sugerido la concepción de una sociedad libérrima dentro del orden y de la igualdad. Por dudosas, exageradas o utópicas que puedan parecernos actualmente, en su mayor parte, esas doctrinas, cuando Moreno comenzó a formar su espíritu, constituían el *non plus ultra* en materia de filosofía política, de ciencia económica y de credo social. Por otra parte, ellas contienen la suma de verdad relativa o pragmática que las legitima como fuerzas históricas eficientes. Las ideas pasan y se desvanecen, sustituidas por nuevas concepciones; pero no es poco, sin duda, que en su instante hayan tenido influencia universal y virtualidad creadora. Así la teoría *contractualista* y toda esa filosofía un tanto candorosa del siglo XVIII, es en suma lo que da forma a la Revolución francesa, e influye también en la nuestra, penetrando aquí por intermedio de Moreno y de Belgrano, familiarizado también, este último, con el libro de Juan Jacobo y las doctrinas fisiocráticas de Quesnay.

Aquella divergencia fundamental en el modo de apreciar los hechos y las cosas, originó, como se sabe, la caída de Moreno. Surge entonces Rivada-

(1) INGENIEROS: "El contenido filosófico de la cultura argentina".—("Rev. de Filosofía", Enero, 1905).

via como miembro del Triunvirato que la misma Junta creara, obligada por las circunstancias y ante las pretensiones atentatorias de la oligarquía saavedrista, se decide a disolverla por un enérgico decreto, quedando el Triunvirato como único poder hasta la celebración del Congreso Constituyente. Esta actitud dictatorial de Rivadavia ha sido muy diversamente juzgada. Algún escritor ponderado y distinguidísimo, pretende que ese acto,—condenado por él severamente,—ha sido el origen primitivo de la honda querella que por tanto tiempo dividió a los argentinos, precipitando sobre el país la anarquía asoladora; pues los diputados provincianos, que se habían incorporado a la Junta (indebidamente, como lo sostenía Moreno), al ser expulsados por Rivadavia, llevaron a sus provincias respectivas el germen del odio y la resistencia a Buenos Aires y a la tendencia centralizadora; odio y resistencia que habían de manifestarse más tarde de modo tan funesto.

Por mi parte, no hablo aquí como porteño ni como unitario. Pero para juzgar ecuánimemente la actitud de Rivadavia y asignarle la significación que le corresponde, creo menester considerar las circunstancias bajo cuyo influjo él obró y los móviles que le impulsaron a aquella medida, ilegítima, si se quiere, desde el punto de vista que pudiéramos llamar constitucional.

Urgía entonces, como lo dijo Rivadavia en el manifiesto que siguió a aquel golpe de estado, constituir un gobierno central fuerte, y de amplia capacidad ejecutiva, para prevenir los peligros que amenazaban a la Revolución e impulsar la guerra de independencia. La Junta era al respecto un verdadero obstáculo. La intrusión en ella de los di-

putados provincianos,—que Moreno combatiera decididamente y que fué la causa inmediata de su renuncia y alejamiento,—convertíala en un organismo extraño e inconducente, sin carácter definido ni autoridad legítima: ¡Un Ejecutivo de 22 cabezas!

Había transmitido aparentemente las funciones ejecutivas al Triunvirato, pero, en realidad, su aspiración a erigirse en gobierno omnímodo manifestábase de modo muy claro, en las disposiciones del *Reglamento Orgánico*, que el Deán Funes redactara y merced al cual la Junta venía a quedar provista de atribuciones arbitrarias y exageradas, no dejando al Triunvirato más que la responsabilidad de la obra revolucionaria. Ese régimen híbrido era insostenible en circunstancias en que se requería la acción rápida y expeditiva de un ejecutivo sin trabas, y ello explica la resolución de Rivadavia, cuya probidad de intenciones, por lo demás, se puso inmediatamente de manifiesto con la promulgación del *Estatuto Provisional* que reglaba y limitaba los actos del gobierno. En realidad, la anarquía había ya asomado “la cabeza viperina”, como dice Groussac, con aquella intromisión de los diputados provinciales en la Junta, y no es dado responsabilizar a Rivadavia de hechos fatales e ineluctables. En todo caso, su actitud no fué sino una consecuencia de la confusión entre el liberalismo de los fines y el liberalismo de los medios, que López ha señalado magistralmente. Persiguiendo el objetivo liberal de la Revolución, Rivadavia echaba mano de un medio antiliberal y peligroso como precedente, aunque tal vez inevitable en aquella situación.

Durante su presencia en ese gobierno (1811-1812), caracterízase, pues, Rivadavia, por la firmeza del

ánimo, la decisión a toda prueba, la energía categórica. Asoma ya en él también el estadista futuro, el organizador vigoroso y sistemático, pero los tiempos, adversos a toda obra constructiva, apenas le permiten desarrollar otras cualidades que aquéllas, tan necesarias entonces, por otra parte. Así imprime como *Secretario de la guerra* poderoso influjo al movimiento militar, salva la disciplina del ejército y el principio de autoridad, sofocando la insurrección del Regimiento de patricios y, al ahogar en germen el levantamiento de A'zaga, aventa definitivamente el peligro de los elementos reaccionarios.

En realidad, puede considerarse a Rivadavia el continuador de Moreno en el gobierno. Lo es también en la obra cultural del país. Si el primero fundó, en medio del desorden del momento y con un admirable sentido de las necesidades espirituales, la Biblioteca pública y persiguió desde su cátedra de *La Gaceta* el destierro de la ignorancia, que junto con la anarquía señalara como los dos grandes adversarios de nuestra democracia, él fundará más tarde la Universidad laica y legalista, y propenderá ardorosamente al desenvolvimiento de la mentalidad argentina. Ambos encabezan así, al par, las jornadas de la libertad y nuestra tradición intelectual, y de ellos parte la corriente que, a través de continuadores gloriosos, llega hoy hasta las modernas universidades de La Plata y de Tucumán.

Educado en la *Escuela del Rey* y en el *Colegio de San Carlos*, Rivadavia no siguió luego otros estudios oficiales. Su falta de filiación universitaria,

avalora aún más la obra de este apasionado de la Universidad. A pesar de no ser abogado, aparece en algunas ocasiones defendiendo pleitos, y ello le vale la invectiva mordaz de Moreno, sin duda un tanto exagerada. De cierto amplió luego su acervo intelectual mediante lecturas continuas, pero, con todo, su ilustración no era muy vasta ni poseía la cultura clásica, común a los togados de la época. Era, ante todo, un pensador espontáneo, capaz de elaborar ideas propias y de comprender y asimilar rápidamente las ajenas, siempre dentro de un orden de aplicación social. Esto es lo que,—sumado a su potencia ejecutiva,—hace de él un tipo de estadista conspicuo, y es así como concibió planes y teorías institucionales incompatibles algunas con el medio o el momento histórico, factibles otras, que llevó a término su voluntad heroica.

Resalta en la índole de su espíritu, como observa Avellaneda, la aptitud para acoger toda suerte de ideas, la exención de prejuicios, en lo fundamental; la carencia de preocupaciones dogmáticas. Su formulismo exterior puede inducir a equivocación en este sentido. Examinando bien sus actos, ello resulta exacto, sin embargo. Formada una convicción en su ánimo, podía llegar a la terquedad al sostenerla, pero es indudable que había mucho de ecléctico en él y que tomaba lo bueno, o lo que creía bueno, allí donde lo encontrara. Es de notar al respecto, cómo la resistencia al extranjero, típica en las colonias durante las épocas que siguieron a su emancipación, y que como dice Alberdi (1) está presente en la orientación constitucional de los pueblos americanos,—que conceptuando como el mayor peligro el

(1) "Bases". Cap. II, págs. 10 y 11, y *Passim*.

influjo político europeo, en cualquiera de sus formas, trataban de preservarse de él,—no tuvo cabida en el ánimo de Rivadavia. El es el primero que llamará a los extranjeros por un grandioso decreto, brindándoles facilidades para poblar y explotar estas tierras. Parece evidente asimismo que estaba exento de todo *misoxenismo* (1) el gobernante que desde su iniciación, procurara, como más tarde Sarmiento, traer sabios europeos para constituir aquí un *Establecimiento Científico*. Esta amplitud sin reservas de su mentalidad, esta comprensión profunda de los intereses superiores y futuros de la civilización y de la cultura, en un hombre de su época, educado en el estrecho ambiente de la colonia, es rasgo que atestigua la superioridad de su espíritu y explica sus anticipaciones, no siempre felices, sin embargo.

Poco después de la sustitución del primer Triunvirato, fué Rivadavia encargado, junto con Belgrano y Sarratea, de gestionar en Europa el reconocimiento de la independencia americana. Las instrucciones al respecto no podían ser sino muy vagas. Esa misión no tuvo resultados prácticos y dió lugar, en cambio, a incidencias inconvenientes. Por lo demás, Rivadavia no era diplomático ni político práctico. Faltaba en él el sentido de la precaución y esa segunda vista para sorprender el designio ajeno y desviarlo por una hábil maniobra o volverlo en provecho propio. No era de la pasta de que se hacen los Metternich y los Talleyrand, ni había nacido para triunfar en incidentes de cancillería. Mesurado y severo, como era exteriormente, se entregaba en espíritu con facilidad, a poco

(1) Odio contra el extranjero.

que alguna perspectiva halagara su imaginación, siempre en trance de concebir grandezas. Nada más lejos de su ánimo generoso que la sabia máxima: "Acuérdate de desconfiar". Había en él ese candor que acompaña por lo general a la fe inquebrantable en el alma de los creadores en el mundo moral, o de los reformadores sociales. Tal vez su caída de más tarde se debió, en parte, a esa carencia de sutileza, de honda penetración, de sagacidad para gobernar. Ignoró la idiosincrasia de los hombres del interior. Engañado por *las representaciones de las cosas*, no veía, como dice Maquiavelo, la *verità effettuale*.

Su actuación diplomática en Europa es una página opaca de su biografía. Víctima primero de las maquinaciones de Sarratea y de las intrigas de Cabarrús, incide en errores, por fortuna más risueños que fatales. En sus trámites posteriores ante la Corte de España, su conducta, aunque empeñosa y digna, resulta equivocada y deficiente.

Durante su larga permanencia en París y Londres, Rivadavia podía apreciar de cerca el funcionamiento del gobierno parlamentario y estudiar el juego de las instituciones en sus principales resortes. El movimiento de la *Restauración*, el constitucionalismo liberal de Benjamín Constant, el filosofismo político de Royer Collard, aquellas batallas de ideas entre los grandes tribunos de la Francia, el espectáculo del parlamento en auge, impresionábanle vivamente, suscitando en él el deseo de trasplantar aquéllo a la escena de su país. Al mismo tiempo se vinculaba a Lafayette, a de Pradt (1),

(1) Este ilustrado Abate publicó en favor de América algunos folletos que tuvieron mucha repercusión. Pueden verse al respecto algunos detalles interesantes en una

a Humboldt, manteniendo con ellos una correspondencia de ideas que abría nuevos horizontes a su inteligencia. Sentía asimismo el influjo de Jeremías Bentham,—su amigo en Inglaterra,—y de Stuart Mill, y cultivaba con agrado la literatura romántica de Mme. de Stael y de Chateaubriand.

Conviene tener presente también, para explicarse el espíritu con que Rivadavia, vuelto a Buenos Aires, iniciaría su acción reformadora y liberal, el deslunbramiento, puede decirse, que produjera siempre en él la renovación económica, cultural y política realizada en España por Carlos III, Carlos IV, en los comienzos de su reinado, y sus grandes ministros. Campomanes, Jovellanos, el de Aranda, y sobre todo Floridablanca, se le antojaban los verdaderos paradigmas de un estadista tal como él aspiraba a ser. Es evidente que varias de sus iniciativas posteriores, fueron, en cierto modo, inspiradas en los actos de aquella Corte. La *Sociedad de Damas de Beneficencia*, es, aunque con más grandes alcances, un trasunto de la *Junta de Damas*, como la reforma eclesiástica toma pie, por lo que respecta a las propiedades del clero, en la doctrina del *regalismo* desenvuelta por Campomanes (1), y profesada entonces por todos los hombres de Estado en España. Reconocerlo así no implica rebajar el mérito de este estadista eminente. La invención en materia política y social, es punto menos que imposible. Las instituciones verdaderas y viables (pues no me refiero aquí a utopías), na-

carta de Rivadavia a Pueyrredón, fechada en París el 22 de Mayo de 1817. "Contribución documental para la Historia del Río de la Plata". Editado por el Museo Mitre. Tomo 4. Pág. 239, etc.

(1) "Tratado de la Regalía de Amortización", etc. Escribale D. Pedro Rodríguez Campomanes. Madrid, 1763.

cen como resultado de necesidades sociales, y basta a la grandeza de un gobernante el ser capaz de erigirlas, aunque ellas sean la concreción de largas observaciones y experiencias ajenas: siempre, desde luego, que convengan a la socialidad a que se aplican. Y sin duda de ninguna case, es éste el único modo de hacer obra social duradera y eficiente, de acuerdo con la inducción positiva y la ciencia política experimental. Más que la falta de originalidad completa en esas creaciones, podría desmedrar la significación de Rivadavia estadista, la falta de importancia práctica de algunas cosas que se empeñaba en llevar a cabo y, desde luego, su error constitucional. Por lo demás, quedan en su haber iniciativas completamente propias, en cuanto las concibió directamente al contemplar el estado del país; y, finalmente, la prueba de la legitimidad y conveniencia (que es lo esencial) de casi todas sus reformas, sean ellas auténticas o imitadas, está en la perduración y prosperidad de las mismas a través de tantos años de evolución progresiva. Como dice Sarmiento en página del *Facundo*, "todas sus creaciones subsisten, salvo las que la barbarie de Rosas halló incómodas para sus atentados".

Al ascender, pues, al gobierno como ministro del Coronel Martín Rodríguez (1821-1824), venía Rivadavia munido de un considerable bagaje de observación y de experiencia. Estaba maduro ya en él el estadista emprendedor y pertinaz. Es ésta la época de su apogeo, y cuando, en medio del coro admirativo que le formaban sus coetáneos, su personalidad se nos ofrece en su máximo relieve, tan disminuído, ¡ay!, por los sucesos posteriores. Convencido de su valía y de la importancia de su misión,

asumió el alto papel que le discernían las circunstancias y desplegó sus cualidades de entidad dirigente, dando amplia expansión a sus modalidades peculiares. Amaba la pompa, los signos exteriores del mando, el decoro gubernativo. Y esto, tal vez más que por vano alarde, por creer así robustecido el principio de autoridad a los ojos de la masa, y pensar, sinceramente, que también eso era un elemento de cultura. Más tarde Sarmiento preconizaría a su vez el *frac* como exponente de "civilización", frente al chiripá y la blusa de la "barbarie".

De estatura mediana, ancho de hombros, prominente el abdomen y cortos los brazos; un tanto rígido y con la cabeza erguida, ceremonioso y solemne, sin flexibilidad mundana ni espíritu de broma en momento alguno, el señor Rivadavia se imponía en cualquier parte a la consideración general, por la dignidad de su porte y maneras y por su palabra pulquérrima. Dice don Vicente Fidel López que la gravedad de su rostro inspiraba, no sólo respeto, sino hasta cariño, a causa de la nobleza en él reflejada. Sabía interesar a las damas, a favor de una cantidad inagotable de anécdotas de las cortes europeas y conocimientos prácticos que prodigaba en su conversación, siempre elevada y correctísima. Una señora afirmó una vez, amablemente impresionada por su trato, que era "muy interesante y... precioso", lo cual hizo reír mucho a la concurrencia. Tenía Rivadavia la cabeza bien formada, corto y rizado el cabello, los labios gruesos y salientes, voluntarioso el mentón, la mirada tranquila y franca. Vestía siempre con extremada pulcritud y abusaba del espadín de etiqueta, llevándolo diariamente cuando ejercía cargos públicos. Mantenía

las distancias, evitando cualquier familiaridad chocante; y este *noli me tangere*, conservado severamente en todo momento, si podía restarle simpatías, es seguro que consolidaba más su autoridad.

El Coronel Rodríguez confióle la cartera de Gobierno y Relaciones Exteriores. Inmediatamente se puso a la tarea. Por su iniciativa comenzó a imperar por primera vez en Buenos Aires el régimen representativo, aumentándose al doble el número de representantes que serían elegidos por medio del sufragio universal. Organizóse el Poder Judicial, estableciéndose las normas por que se regirían las relaciones entre éste, el Ejecutivo y el Congreso. Rivadavia remitió entonces a la Junta de Representantes sus proyectos sobre *Inviolabilidad de la propiedad, Seguridad personal (Habeas Corpus)* y *Libertad de Imprenta*, prescripciones estas dos últimas que había ya formulado en 1811, pero que sólo ahora cobraron sentido real. Una de sus más nobles iniciativas fué en este período la *Ley de Olvido*, en virtud de la cual podían retornar al país todos los argentinos expatriados por asuntos políticos. Su compañero de gabinete, el Ministro de Hacienda don Manuel J. García, secundaba la labor de Rivadavia creando instituciones de crédito, regularizando el régimen impositivo y las aduanas y favoreciendo en todas formas el desarrollo del comercio. Comenzó en ese tiempo a construirse también, por iniciativa del Ministro de Gobierno, el puerto de la *Ensenada*. Entretanto, se establecían en Buenos Aires aguas corrientes, se organizaba la vialidad en la provincia, facilitando el tráfico, y se promovía la inmigración europea. La *Reforma Militar* y la *Sociedad de Damas de Be-*

neficencia, que tan grande significación ha cobrado después, son también creaciones de esa época.

Rivadavia acometió entonces su célebre reforma eclesiástica. Los derechos y privilegios del clero asumían a la sazón proporciones exorbitantes e incompatibles con la autoridad y desarrollo del Estado. La perduración al respecto del viejo régimen español, aunque con algunas modificaciones introducidas por los gobiernos anteriores del Río de La Plata, otorgaba a la Iglesia prebendas, atribuciones y fueros que no cabían dentro de un sistema liberal y progresista como el que se aspiraba a implantar. Por otra parte, la desorganización y relajación existente entre algunos elementos religiosos,—y que llegó hasta traducirse en hechos criminales,—exigía la intervención gubernativa en forma terminante por la propia dignidad de la institución, que Rivadavia estaba lejos de querer atacar en su carácter esencial y legítimo. En realidad, su acción no fué anticatólica como pretendían entonces los interesados en acusarle ante la opinión de hereje y materialista. Su proyecto tendía a dos finalidades tan oportunas como razonables: restringir hasta sus límites verdaderos las propiedades y derechos del clero e imponer a aquellos de sus miembros que lo desprestigiaban con sus actos, la austeridad y severa disciplina correspondientes a su investidura. Obtuvo así las leyes sobre libertad de conciencia y abolió las “manos muertas”, haciendo que se declarasen bienes del Estado los que se conservaban como pertenecientes a conventos ya suprimidos. Las órdenes monásticas fueron secularizadas, como también los cementerios. Se abolieron los fueros personales del clero y los diezmos y primicias que la Iglesia percibía. Al mismo

tiempo dictáronse severas ordenanzas sobre la conducta de los religiosos.

La imposición del este proyecto dió lugar a tremendas discusiones, y en una de las sesiones de la Cámara, Rivadavia hubo de llegar a la exaltación colérica para lograr su aceptación: "Y si me apuran,—dijo,—vive Dios!, que voy a salir de la moderación de los términos medios y de la hipocresía que aquí se llama decencia, para pedirles a estas bóvedas que se abran medio a medio, y que dejen pasar un rayo de luz solar que, para vergüenza de los que resisten esta reforma, ha de poner en desnuda transparencia los hombres, los protagonistas y las cosas" (1).

Por medio de esta reforma de verdadera trascendencia, se abatían grandes obstáculos para la libertad moral e intelectual, el Estado entraba en posesión de valiosos bienes detentados hasta entonces indebidamente y que permanecían improductivos, y se organizaban las funciones del clero para que él pudiera actuar dignamente, dentro del orden y de la legalidad.

Otra trascendental innovación iniciase también en este período fecundo. El decreto de 17 de Abril de 1822, suscrito por Rivadavia y ratificado por el de Julio del mismo año, marca, como dice Avellaneda, "una de las fechas más importantes de nuestra legislación agraria". Por él se decretaba la inmovilidad de la tierra bajo el dominio del Estado, prohibiéndose la extensión de títulos a favor de los particulares. Ello tenía por objeto poder ofrecer las tierras en garantía del primer empréstito que se gestionaría en Londres y que la Junta

(1) LOPEZ: "His. de la Rep. Arg.", Tomo IX. Pág. 110.

de Representantes autorizó por Ley de 18 de Agosto de 1822. De esta manera se planteaba ya la futura adopción de la *enfiteusis*, pues interdicha así, tanto la venta como la donación de la tierra pública, por quedar ésta comprometida como garantía de ese préstamo, sólo restaba un medio de hacerla *fructificar*, como dijera expresivamente el ministro don Julián Segundo de Agüero, cuando en 1826 se discutió la ley agraria. Ese medio era el arrendamiento. Pero el arrendamiento simple no podía constituir aliciente bastante poderoso para los colonos, tratándose de un país despoblado y sin vías de comunicación. Era menester entonces arbitrar un procedimiento más eficaz para interesar a los agricultores, y el gobierno prohibió al efecto un sistema que, sin constituir desde luego la *enfiteusis* de molde romano o medioeval, participaba un tanto de su carácter.

Ese rótulo no correspondía en realidad a aquella ley, pero fué designada así para diferenciar su contenido del arriendo común. El objeto de esa política agraria era, como decía la ley, “obtener la ocupación permanente del suelo, sin otro medio que el de un contrato transitorio; asegurar su cultivo sin dar la propiedad”. Con ese fin, brindaba a los colonos poderosos estímulos que no ofrece el arrendamiento simple. El contrato sería, como mínimo, de veinte años, lo cual alejaba para el interesado la posibilidad de su desalojo en cualquier momento y la pérdida del fruto de sus afanes. En caso de venta de la tierra, el *enfiteuta* tenía derecho de preferencia, como también en caso de renovación del contrato. Al caducar la *enfiteusis*, podía el colono exigir el pago de las mejoras que hubiera introducido en la propiedad. Si quería tras-

mitir sus derechos a un tercero, se le eximía del *laudemio*, o sea el pago de la quinquagésima parte del precio de la venta, al dueño principal, que establece la *enfiteusis rigurosa*. Además, el canon enfitéutico tomaba aquí la forma de un impuesto ajustado al valor respectivo de cada terreno, y era inalterable durante cada período de diez años, al cabo de los cuales se haría una nueva valuación.

Todas estas disposiciones, que constituían la *neo-enfiteusis* (si se me permite la denominación), adoptada bajo la presidencia de Rivadavia (1826), pero que se insinuaba ya con sus decretos de 1822, ofrecían positivas ventajas para el agricultor y tendían eficientemente a lograr la ocupación y aprovechamiento de la tierra pública en forma amplia y progresiva. Ello explica el éxito de aquella ley que alcanzó en el Congreso unánime aprobación en cuanto a su conveniencia económica, discutiéndose solamente en su faz política; o sea si el Congreso de Buenos Aires podía legislar al respecto sobre todo el país sin anuencia de las provincias.

Las concesiones enfitéuticas se realizaron principalmente desde 1826 a 1829, dando lugar a un verdadero florecimiento agrario. Posteriormente, el sistema fué relajándose a causa de su mala administración, hasta desaparecer totalmente. Inadecuado para épocas más recientes, no puede desconocerse que en el tiempo de su adopción fué de provechosa utilidad para la economía nacional.

Concomitantemente con tan profundas reformas económicas y sociales, promovíase en torno a Rivadavia un intenso renacimiento cultural. Es entonces cuando frente a la Universidad cordobesa, teológica y escolástica, se erige la de Buenos Aires, plasmada de acuerdo con los nuevos ideales demo-

eráticos; cuando Lafinur, en el aula de San Carlos, renueva la enseñanza filosófica, revelando las teorías de Locke y Condillac, y mantiene sus polémicas famosas con el padre Castañeda; cuando por todas partes el pensamiento se agita en busca de nuevas normas y nuevas concepciones; se comenta la oratoria parlamentaria, los salones se animan con inusitado brillo, se admiran los cuadros de Monvoisin y Pellegrini, se cultiva la música, se aplaude en el teatro la tragedia clásica y la oda de Juan Cruz Varela se expande sobre el agro floreciente, como la geórgica virgiliana sobre las campiñas fecundas de la Roma de Augusto.

El paso de Rivadavia por la presidencia (1826-1827), marca el término de aquel régimen de progreso y de cultura. Tras la caída dolorosa vendrá el estrago, la ruina, el triste cielo de la anarquía y del terror.

Al recibirse de la presidencia, comienza Rivadavia por declarar que la organización nacional no es posible "si no se da a todos los pueblos una cabeza, un punto capital que regle a todos y sobre el que todos se apoyen; y al efecto, es preciso que todo lo que forme la capital, sea esencialmente nacional". En consecuencia, elevó acto continuo el proyecto de capitalización de Buenos Aires, que provocó tan ardientes debates en la Cámara, cuya "temperatura moral", que diría Taine, presagiaba lo que había de sobrevenir en breve. El Ministro don Julián Segundo de Agüero, defendió aquella ley con dialéctica incontrastable e impresionantemente serenidad, en un discurso que ha quedado céle-

bre (1). La ley fué aprobada, pero ya en aquellas sesiones Dorrego perfilaba su oposición implacable, y frente al partido neo-directorial, que estaba junto a Rivadavia, se erguía el fantasma de los caudillos en alarma.

La guerra con el Brasil agravaba terriblemente la situación que desde el punto de vista económico se había tornado desesperante. En estas circunstancias quiso Rivadavia llevar a término su tentativa de unificación nacional. Grave y funesto error. La constitución, triunfante en el Congreso, fué rechazada por las provincias, y el presidente hubo de dimitir ante aquel derrumbe de su gran empresa.

¡ Ah! , ¡ ni Rivadavia ni sus hombres conocían el interior ni a los hombres del interior! Creían en la omnipotencia de las teorías y de las fórmulas. Confiaban demasiado en que la causa del orden y de la cultura había de imponerse por su sola virtualidad. Antes de alejarse, don Julián Segundo de Agüero afirmaba aún con convicción candorosa: "Seremos llamados de nuevo. Esto es transitorio. Hemos de volver". Lo que vino después era el más negro de los desengaños.

La constitución unitaria del 26, ¿era en sí un absurdo y una quimera? Nada menos que eso. Examinada en principio, vista a la luz de la ciencia constitucional, era tal vez la que más convenía al país. Como dice Groussac(2), "el régimen de Rivadavia pudo ser tan viable como el imperio liberal

(1) V. "Trabajos legislativos de las primeras Asambleas argentinas". Coleccionados por Uladislao S. Frías. Tomo III. Págs. 289 y siguientes.

(2) Paul Groussac. Noticia biográfica del Dr. don Diego de Alcorta. Caps. I y II. "Anales de la Biblioteca". Tomo 2.

en el Brasil. No hay espíritu reflexivo que sustentara hoy la absurda tesis partidista de Dorrego y Moreno (Manuel), a saber: que para conseguir el orden en la libertad, único fin de todo gobierno, el mecanismo federal era entonces más obvio que el unitario; lo que equivaldría a decir que exige menos aptitudes y educación política en el ciudadano". Los hombres más doctos de la época, en disciplinas jurídicas y en materia social, que formaban el Congreso, la votaron casi por unanimidad. Las provincias se hallaban muy lejos de poder constituir verdaderos Estados federales. Como puntualizó muy bien el General Mansilla en uno de los debates, carecían en absoluto de elementos intelectuales para formar sus propios gobiernos y de recursos para un régimen autonómico legal. Por lo demás, la constitución que había sido hecha sobre la base de la de 1819, era acertada en todas sus disposiciones. Tan es así, que la de 1853 que nos rige, apenas se aparta de ella en ese sentido, siendo por lo demás casi idéntica. Por ello ha podido decir Magnasco (1) que "los ensayos prácticos del generoso código de 1853, nos han retrotraído firmemente a la reventada constitución rivadaviana, mucho menos transactiva y permeable, restaurándose así por virtud de nuestra genuina economía, el documento ajusticiado de 1826". Es sabido que la carta actual no es "ni la esencialmente federal de los Estados Unidos ni la constitución unitaria de Chile, representando un sistema que participa del federativo y del unitario" (2). No

(1) OSVALDO MAGNASCO: "Rivadavia". Discurso. 1910.

(2) LUIS V. VARELA: "Hist. Const. de la Rep. Arg." Tomo III. Pág. 465.

era, pues, la Constitución en sí lo que importaba el gran error de aquella presidencia, sino el pretender su adopción en un momento histórico que la hacía imposible. La frase,—que ya va siendo una sentencia,—de Gorriti, define en su amarga ironía el verdadero carácter del conflicto; si la Constitución fué rechazada, no es porque fuera unitaria ni federal, sino simplemente “porque era una constitución”. Era ingenuo, en efecto, pensar que los gobernadores del interior,—como no fuera por la fuerza,—se avinieran a un régimen que trunchara su independencia y autoridad. El gobierno no estaba en condiciones de someterlos, ya que su ejército se hallaba ocupado en la guerra contra el Brasil. Lo sensato hubiera sido no precipitar los acontecimientos, aguardando ocasión más propicia, sin proceder inconsultamente a destruir el gobierno de Buenos Aires y erigir una presidencia inestable.

El desastroso resultado de la misión García ante la Corte del Brasil, agravó las dificultades, y Rivadavia optó por retirarse del gobierno. Habían sido prematuros sus intentos. Aquella tentativa, bien intencionada, pero errónea, marca el comienzo del desorden y del despotismo.

No cabe duda de que si Dorrego y Manuel Moreno, hombres cultos y sinceramente apasionados de la doctrina federativa, procedieron por convicción y de buena fe, los gobernadores que rechazaron la Constitución hicieronlo casi todos por mezquinos intereses personales o por sugestión ajena. Tal es el caso de Quiroga. El señor don Juan N. Madero nos ha conservado al respecto una anécdota importante: En 1834 (durante el gobierno de Viamonte), el señor Madero, acompañado del Ge-

neral Lavalle, se entrevistó con Facundo Quiroga por un asunto particular. Al retirarse, como oyera Quiroga que iba a ver a Rivadavia (quien acababa de llegar de Europa a bordo del bergantín francés "L'Herminie", de donde el Gobierno no le dejaba desembarcar), preguntóle:—"¿Es Vd. amigo del señor Rivadavia?—Sí, general.—Y ¿por qué no le dejan desembarcar?—No lo sé, y creo que él tampoco, pues aún no ha recibido contestación del gobierno a la nota que le dirigió.—Pues ya que Vd. va a verle, dígame de mi parte que me ofrezco como su fiador y que disponga del General Quiroga en cuanto crea que le puede servir.—Y dirigiéndose a Lavalle, añadió: ¡Cuántas veces me ha pesado no haber aceptado la Constitución del año 26! No lo hice, porque Costa y Haedo me dijeron que no lo hiciera..." Luego, dice el Sr. Madero, siguió haciendo consideraciones sobre lo que llamaba "sus errores de aquel tiempo", y por fin le pidió lo llevara a ver a Rivadavia, pero esa entrevista no se realizó. ¡A buenas horas se arrepentía Facundo!

A raíz de su renuncia, encerróse Rivadavia en la quinta solariega que poseía en Buenos Aires. Más tarde se trasladó a Europa, de donde regresó en 1834, como dejó referido (1), sin lograr permanecer en la ciudad. Dirigióse al Uruguay, de donde fué expulsado por Oribe, y entonces se refugió en Río de Janeiro. De allí partiría más tarde a

(1) Rivadavia desembarcó, pero fué inmediatamente vuelto a bordo por orden del gobierno de Viamonte. Según una versión, esa medida se debió a que, sabedor el Gobierno de que iba a ser asesinado por una patrulla de bandidos, quiso evitarlo de tal manera. Otra versión pretende que ello fué simplemente un acto de arbitrariedad sugerido por la influencia de Rosas. Lo cierto es que poco después se dictó una orden de destierro, prohibiendo a Rivadavia tornar al país.

Cádiz, donde murió en la pobreza, abrumado por la decepción y el sufrimiento, y engañando sus forzados ocios con la traducción de los *Viajes de Anara*, en cuyo prólogo evoca melancólicamente la patria distante.

¡Ah!, la amargura infinita del exilio; la más dolorosa de las pruebas para quienes amaban su tierra por sobre toda otra cosa en el mundo! ¿Por qué esa crueldad de la suerte? Moreno, San Martín, Las Heras, Alberdi, Varela, Lafinur, Rivadavia... Todos muertos lejos de la patria. Es triste, en verdad, imaginarles peregrinando en suelo extraño, perseguidos por la injusticia de los hombres y de las cosas, y plañiendo como el Ovidio de Las Pónticas la lejanía del amado solar nativo.

Nescio qua natale solum dulcedine captos
Ducit, et inmemore non sinit esse sui... (1)

A pesar de sus errores,—que no hemos atenuado en lo mínimo,—Rivadavia queda para la posteridad como una de las más altas figuras de nuestra historia civil. Su vida es una lección de moral y de energía, harto digna de ser señalada a las generaciones del presente. Nadie más sincero, más patriota, más orientado hacia el bien, que este varón probo y generoso: voluntad férrea y coercitiva, allá en las horas inciertas del Triunvirato; mente creadora y directriz, en los años de su ministerio histórico; espíritu extraviado por un falso miraje, pero exento de pequeñez y de toda pasión inoble, en los días difíciles que precedieron a su angustioso descenso, cuando concibiendo a su modo la grandeza de la patria, echóse todo entero a la ardua

(1) Ex Ponto. Epist. tertia.

empresa en que había de sucumbir, sin duda porque, como dice el más justo y acertado de sus historiadores (1), "el mal era más fuerte que el remedio".

No hay sobre nuestro suelo quien no le deba la ofrenda sagrada de su gratitud. Débensela los hombres y las cosas, ya que todos benefician de la previsión insigne que anidara en aquella mente tutelar. Vinculadas están a su memoria todas las instituciones y los seres que componen nuestro organismo de nación: el gobierno representativo, que él fundó; el ejército, cuya grandeza fundamentó; la Universidad, que extrajera de su obscuridad antigua sacándola a la luz de nuevas disciplinas; el clero, que le conceptuara su enemigo y a quien él quiso simplemente dignificar con sólo imponerle la legítima tutela del Estado; la tierra, que guardó con celosa probidad; el comercio y la industria, cuya libertad proclamó; la mentalidad nacional, que fomentó en la labor investigativa de los hombres de ciencia, en el pensar de los filósofos y en la canción de los poetas; la imprenta, que liberó de censuras agraviantes; los hombres de naciones extrañas, para quienes amplió nuestra hospitalidad; la raza de color, que redimió de su vieja ignominia; la mujer argentina, de quien hizo su aliada y a quien amó en sus virtudes cardinales: el culto del hogar, la exquisitez de la cultura, el evangélico ejercicio de la caridad... los muertos, los mismos muertos a cuyas cenizas procuró el decoro de la piadosa urna, erigiendo la ciudad apacible donde ahora reposan... Repose él, a su vez, de su vasta, ímproba jornada, viendo desde su altura de inmortalidad, cómo flore-

(1) Paul Groussac. Obra citada. Cap. II, pág. XXVII.

cen sobre el suelo nativo las semillas que arrojó al pasar. Y sea ésa,—ya que en vida sólo alcanzó la injusticia, la negación, el olvido,—la única recompensa para quien buscara austeramente, en el espacio de su agitada existencia, la ventura de su pueblo, siempre encendido por el ideal de una magna patria y por el gran amor de su tierra.

ALVARO MELIÁN LAFINUR.

1915.

INTRODUCCION

I

La Comisión Central del Centenario de D. Bernardino Rivadavia resolvió reunir en un libro la descripción y todos los documentos de la grande festividad, de origen popular, que las autoridades y el pueblo hicieron suya, convirtiéndola en una verdadera y solemne apoteosis.

Al distribuir sus trabajos la comisión especial, encargada de organizar la compilación, se sirvió designarme para que llenase con una introducción histórica las primeras páginas del libro.

La síntesis de la vida y de los títulos de D. Bernardino Rivadavia al agradecimiento, a la veneración de su país, y a la admiración de su más remota posteridad, estaba hecha en la magnífica oración pronunciada por el General D. Bartolomé Mitre, ante la pirámide de Mayo y entre los aplausos del pueblo congregado para celebrar el primer centenario del natalicio del más eminente de los estadistas argentinos.

Hecha esa síntesis, y hecha con competencia y con maestría, sólo me cabía el análisis.

En el estudio parcial de los actos del grande hombre no tuve por objetivo el hombre mismo, ni la comprobación de sus títulos a la inmortalidad.

Los hombres siempre son hombres, por grandes

que sean: y como hombres, accesibles al error o a los errores de su época; sujetos a sus propias pasiones, o influenciados o arrastrados por las pasiones de su tiempo; sin el poder de hacer todo el bien que conciben o desean, y obligados a resignarse al bien posible y en la forma en que el bien es hacedero.

Por eso los títulos a vivir en la memoria de las generaciones del porvenir, que es lo que constituye la inmortalidad humana, no pueden aquilatarse en los detalles de la vida de un hombre.

Cuando luchando consigo mismo y con los otros hombres, venciendo sus propias dificultades y las que encuentra en el camino, incurriendo hoy en error y reparándolo mañana, cosechando experiencia y poniéndola a provecho, se llega a producir alguno de aquellos actos o a descubrir o enseñar alguna de aquellas verdades que se incorporan benéficamente en la vida de un pueblo, o de todos los pueblos, que mejoran su condición y aceleran su progreso, son esos actos o esas verdades las que, por haberse incorporado a la vida de una colectividad humana, adquieren su duración, esto es, la inmortalidad que ella puede discernir.

D. Bernardino Rivadavia es un ejemplar visible de la verdad de este criterio histórico.

Fundó el gobierno representativo-republicano, y ese es el gobierno del pueblo argentino: este pueblo ha hecho suyas las bases que él dió a la organización administrativa y a las instituciones de crédito; difunde la educación, que él recomendó como la primera necesidad del pueblo y el primero de los deberes del Estado; cultiva las ciencias, cuyas enseñanzas él mejoró o introdujo; y por fin, recuerda su nombre en los preciosos vellones que hoy

constituyen la fuente principal de la riqueza de este país, y lo encuentra en todos los adelantos morales y materiales que realiza o que intenta, porque todas las sendas del progreso han sido exploradas por su acción o su iniciativa precursora, porque en todas ha dejado su estela luminosa.

Los actos, las iniciativas, los ideales de Don Bernardino Rivadavia, que han llegado a ser, y que son, institución orgánica, creencia, doctrina, aspiración argentina, hacen, por ese sólo hecho, la inmortalidad de su nombre.

Es una de esas glorias de las que ha dicho un historiador moderno, “ que se conservan en la memoria del pueblo sin el auxilio y con independencia del arte histórico ”.

II

El estudio que emprendí de los actos de la vida pública del señor Rivadavia, tuvo, pues, por único objeto precisar bien los hechos, conocer las circunstancias en que se produjeron, y por un método a la vez crítico y narrativo, llegar a presentarlos de manera que resultase, con la mayor claridad que me fuera posible, la verdad de los hechos mismos, que es el fin legítimo de estas investigaciones; y las enseñanzas políticas, las experiencias o las comprobaciones científicas que de ellos pudieran deducirse, que es en lo que consiste la utilidad de la historia.

He prescindido de todas las apreciaciones que se habían hecho de los actos del señor Rivadavia, aun de las mías, que no siempre he encontrado correctas; y los he estudiado directamente en los do-

cumentos más auténticos y en los testimonios contemporáneos más autorizados, que he buscado con diligencia, aunque no con éxito completo.

Respecto a los actos políticos, he llevado en cuenta que se han producido en una época de debates ardientes y de pasiones de partido, cuyos ecos, aunque ya debilitados, no se han perdido todavía en la lejanía de los tiempos; y por eso, sólo me he permitido juzgar a los opositores del señor Rivadavia por sus propios actos y por sus propias palabras, que he intercalado en el texto, citando las fuentes de que las tomo, aunque estas intercalaciones frecuentes perjudiquen a la composición literaria.

Los actos administrativos, me han impuesto una labor pesadísima, porque no tenemos todavía ningún ensayo de historia administrativa.

He debido recurrir a los documentos, que ni siquiera están reunidos y clasificados en parte alguna.

Para la apreciación de aquellos actos, me ha sido indispensable estudiar sus antecedentes coloniales, la doctrina y la legislación coetánea de otros países, y últimamente sus resultados prácticos, lo que me ha traído, en algunos, hasta nuestro tiempo.

Entre los actos de concepción más alta y de mayor trascendencia, descuella, sobre todos, la ley agraria del señor Rivadavia, porque es base fundamental de una organización social, y se relaciona con uno — quizá el primero — de los problemas sociales de nuestro tiempo.

Esta importancia inmensa, me ha obligado a estudiar la ley argentina en lo que tiene de original,

a la luz de la ciencia de su época y de la ciencia posterior, hasta la de estos mismos días.

Por estas circunstancias, mi trabajo ha tomado proporciones que lo han hecho inadecuado para este libro.

Agrégase a la falta de espacio, la del tiempo, que se me mezquina, y que me era necesario hasta para rever y dar alguna corrección a lo que he ido escribiendo al paso que consultaba los documentos.

Conciliando las dificultades indicadas, le daré a este libro los capítulos de la parte política de mis estudios, que presentan a D. Bernardino Rivadavia bajo aspectos nuevos, corrigen algunos errores muy generalizados; reservándome hacer, por separado, una edición completa, para la cual revisaré, o reharé, lo poco que hoy entrego a la imprenta sin corrección alguna (1).

III

El primero de los capítulos que van en seguida trata de la aparición de D. Bernardino Rivadavia en la vida pública y de sus actos como hombre de gobierno en los años 1811 y 1812.

La incorporación de los Diputados de las Provincias a la Junta de Mayo de 1810 y la separación del Dr. Moreno, quebrantó la unidad del pensamiento y de la acción de aquel Gobierno, comprometiendo, por una serie de desastres, los destinos de la revolución.

Para salvarlos, la misma Junta, declarando su

(1) Esta edición hubo de hacerse en dos volúmenes, que llevarían por título "D. Bernardino Rivadavia y su tiempo".

impotencia, depositó el Poder Ejecutivo en un triunvirato, dándole por Secretario al Sr. Rivadavia.

Ocupó en ese gobierno la misma posición que el Dr. Moreno en la primera Junta: como éste concentró y fortaleció la acción ejecutiva, y obtuvo de ella mayores resultados.

En ese gobierno fueron reorganizados los elementos militares de la revolución, que repararon los desastres de las armas patrias y las ilustraron en el Norte y en el Oriente con las victorias de Tucumán, de Salta y del Cerrito. Se desvanecieron las complicaciones con la Corte de Portugal, obteniendo la evacuación de la Banda Oriental por el ejército portugués, y dejándole a la historia de la naciente diplomacia argentina algunas de sus más bellas páginas; y la reacción de los elementos españoles, que era uno de los mayores peligros, fué, no sólo vencida y decapitada en Buenos Aires, sino extirpada para no volver a reaparecer.

La guerra con España asumió su verdadero carácter de guerra de independencia.

Por todos estos actos y resultados, a que está ligado su nombre y que llevan el sello de su genio y de su carácter, Rivadavia tiene derecho a ser contado entre los primeros y más meritorios revolucionarios de Mayo.

Al mismo tiempo que adquiría ese derecho, como patriota y como hombre de acción, se revelaba como organizador y como pensador profundo y original en las ciencias sociales.

Las doctrinas difundidas por el doctor Moreno, disolventes de la sociedad y del régimen colonial, tomaron en manos de Rivadavia formas gubernamentales.

Por este medio, al paso que abolía y sustituía, oficial y directamente, todas las bases esenciales del sistema colonial, evitaba los peligros de las doctrinas de Rousseau, aptas para demoler y para desligar, pero incompatibles con las condiciones prácticas de la libertad social, del orden y del gobierno de la sociedad.

Las bases del sistema representativo republicano, fundado definitivamente por Rivadavia en su famoso Ministerio de 1821 a 1824, — la división de los tres altos poderes del Estado, la amovilidad de los mandatarios, la publicidad administrativa, la seguridad de las personas y de las propiedades, por la ley que reconocía y garantía los derechos individuales, y la más amplia libertad de la imprenta, todas, sin excepción, se encuentran en sus actos de 1811 a 1812.

También en estos años, 1811 y 1812, revelando que no participaba de ninguna de las preocupaciones atrasadas de los hombres del país y que aún dominaban en los países más adelantados de Europa, verificó, administrativamente, la supresión absoluta del sistema colonial, por medio de la abolición de los monopolios; por la legislación aduanera más liberal de su tiempo, más liberal aún que la de las épocas posteriores de su país; por los derechos reconocidos en los extranjeros, igualándolos a los nacionales en todas las esferas del trabajo comercial e industrial; por los alicientes que dió a la inmigración, y, por fin, por las diversas medidas con que trató de libertar la acción y los esfuerzos individuales de las trabas oficiales que los contrariaban.

Fué en el año de 1812 en el que pronunció oñi

cial y axiomáticamente esta profunda verdad —
“ *no hay libertad ni riqueza sin ilustración* ”.

Promovió, con esa convicción, un gran establecimiento, al que daba origen y carácter popular, para el cultivo y la enseñanza de las ciencias, en las que incluía la *economía política*, adelantándose en esto, y por muchos años, a la misma Inglaterra y a la misma Francia.

En el capítulo que publicamos están consignados éste y otros actos de aquella época, que demuestran que Rivadavia entendía entonces, como entendió después, las funciones del Estado.

El hombre de 1811 y 1812 era el mismo hombre de 1821 a 1824; con la misma preparación, con la misma ciencia o con las mismas intuiciones, con los mismos propósitos, con las mismas iniciativas, con las mismas iluminaciones y previsiones del porvenir.

Ahí están sus actos. No son numerosos, porque pasó rápidamente por la esfera del gobierno: pero su ministerio de 1821 a 1824 no es más que la continuación, la ampliación, el desarrollo lógico de sus ideas y de sus propósitos de 1811 y 1812.

Pasó rápidamente en estos años, como va dicho; los intereses, las pasiones y los vértigos de las luchas políticas y personales se sobrepusieron a todo, y a todos los arrastraron hasta precipitarlos en el caos de 1820.

Cuando reapareció Rivadavia, todo lo que él hizo pareció nuevo; y como él había residido, y por muchos años, en Europa, fácilmente se creyó que de allí venía todo lo que con él había venido.

La generalidad de los hombres es siempre poco benévola con los que les hacen sentir su superioridad.

dad; y está, por consiguiente, predispuesta a acoger lo que pueda disminuirla.

Se hizo, pues, opinión corriente que Rivadavia no tenía otro mérito que el de la aplicación, no siempre oportuna o discreta, de lo que había conocido en Europa.

Aunque hubiera sido eso cierto, ello no había disminuído su mérito tanto como lo imaginaban los que se empeñaron en amenguarlo; porque, aparte la cuestión de originalidad, que en nuestro siglo no podía ser absoluta en estas materias, el inmenso e incontestado mérito de Rivadavia no consistía en ella, sino en este hecho, que bastaba para constituir su inmortalidad: "de una sociedad caótica surgió, al impulso de su inteligencia, de su carácter y de su voluntad sana y patrióticamente poderosa, una sociedad organizada bajo el gobierno representativo-republicano, y dotada de todas las condiciones de una sociedad civilizada y encaminada por las sendas del progreso humano".

Pero, como ya lo he dicho, y sus actos lo comprueban, Rivadavia era en 1811, antes de salir de su ciudad natal, el organizador, el reformador, el iniciador, el precursor de 1821 a 1824.

Los sabios extranjeros, con los cuales se intimó en Europa, le concedían allá lo que después se intentó negarle aquí; y se lo concedían porque ni como hombre político ni como hombre de ciencia se esclavizó a ninguna autoridad ni se afilió a ninguna escuela, manteniéndose entre ellos con la originalidad de su carácter y de su genio, con la independencia de su criterio (1).

(1) En la edición completa publicaré varias cartas dirigidas al Sr. Rivadavia por el general Lafayette, Hum.

Estudiándolo en su manera de entender las funciones del Estado, le veo, como le veían sus amigos en Europa, tomando de cada escuela lo que le parecía verdadero; y sólo aplicando, con un criterio enteramente suyo, lo que creía adaptable a las condiciones especiales de su país.

Este eclecticismo lo puso en el camino de la sabiduría, que consiste, como dicen las letras sagradas, en separar la luz de las tinieblas (2).

Por eso su ciencia política y administrativa sobrepasó en varias partes a su época, y en alguna, como, por ejemplo, en la ley agraria, es, ahora mismo, ciencia aventajada.

IV

Era también creencia general, de que he participado, que Don Bernardino Rivadavia pertenecía a la escuela unitaria francesa, y que traía a la organización de su país los principios de una centralización absoluta, que lo ponía en pugna con todas las autonomías provinciales.

También se ha creído, y se cree aún entre nosotros, que en el congreso de 1826 se debatieron doctrinariamente los principios de las dos escuelas en que nominalmente aparecía dividido.

El segundo capítulo que publico, y que corresponde a los años de 1826 y 1827, establece la verdad.

La *unidad de régimen* no fué propuesta ni vota-

boldt, Destutt de Tracy, de Pradt, Obispo Gregoire, Saulnier, etc.

(2) De doctis viris potest quod creati sunt ut dividerent lucem ac tenebras. (Gen. I. c. I, v. 18).

da como principio, sino como necesidad creada por las condiciones especiales del país y de la época; y nunca se acentuó más el eclecticismo de Don Bernardino Rivadavia que cuando se trató de esta organización nacional.

La constitución de 1826 es mixta, como la de los Estados Unidos de 1787 y la Argentina de 1853; y Rivadavia asentaba en ella las bases cardinales del sistema federal, dándoles a las provincias toda la porción de gobierno propio que podían desempeñar educándose, instruyéndose y adquiriendo los hábitos de una administración regular, que les eran indispensables para ir, gradualmente, emancipándose de la acción central, que, según Rivadavia mismo, debía ir desapareciendo al paso que las provincias fueran poniéndose en condiciones de atender regularmente, por sí mismas, todos los servicios provinciales.

Rivadavia conocía bien el mecanismo y la historia de la constitución norteamericana; y hallamos en sus papeles observaciones profundas que posteriormente hizo Tocqueville, al explicar por qué aquella constitución que en los Estados Unidos es el orden y la libertad, trasplantada a Méjico, como lo fué, no pudo aclimatarse allí ni evitar el desgobierno y la anarquía, ni las dictaduras que la anarquía engendra y reproduce.

Ahora, que he estudiado bajo todos sus aspectos la revolución argentina y la situación en que se encontraban las provincias en 1826, he podido apreciar la verdad con que dice Bechard, (uno de los publicistas más adversos a la centralización francesa), que *“ cuando las naciones se civilizan, cuando están cansadas de guerras y de falsa libertad, se encaminan a la centralización; y que*

cuando vuelven a la barbarie, el gobierno se rompe y se disemina ”.

Creo que era esta última la evolución que se realizaba en aquellos tiempos; y que para salir de la disolución, reconstituyendo la nación y organizándola en condiciones de libertad y de progreso, era indispensable centralizar el poder y hacerlo eficiente, por los resortes legales que se pusieran a su disposición, para que pudiese llenar los fines del gobierno en la forma que indicaban las necesidades y las conveniencias sociales, que debían consultarse y atenderse. Ninguna ley orgánica puede dejar de acomodarse al estado del país que está destinada a gobernar; porque, como lo dice Cormenin, “ las instituciones humanas sólo tienen una utilidad temporaria y relativa: buenas para una época, son malas para otras ”.

El estado de las Provincias en 1826 no sólo justificaba sino exigía una centralización absoluta; esto es, política o gubernamental, y administrativa.

Sin embargo, D. Bernardino Rivadavia, distinguió y separó lo que corresponde a los intereses comunes, a los de toda la nación, que son generales y reclaman una dirección única, de lo que se refiere a los intereses locales, que pueden ser administrados y mejor atendidos, separadamente, por cada localidad.

Para los primeros, estableció la centralización o sea *la unidad de régimen* nacional, sin el cual no habría *nación*. Esa unidad existe del mismo modo, como ya lo he dicho, tanto en la Constitución de los Estados Unidos como en la actual Constitución

Argentina. Bajo este aspecto, tan unitarias son éstas como la argentina de 1826.

En cuanto a los intereses especialmente provinciales, él admitió el principio de que su administración correspondía a las provincias.

La nación administra lo que es de todos: cada provincia administra lo que es peculiarmente suyo. Esta es la base del régimen federal; y esa base está en la Constitución de 1826.

Verdad es que admitiendo el principio, no le dió una aplicación práctica absoluta; pero esto sucedía porque no era absolutamente practicable. Ningún principio puede ser aplicado en mayor extensión que la posible, y si fuera necesario probarlo, ahí están ahora mismo los códigos y otras leyes nacionales que no existen en los Estados Unidos.

Las provincias no se bastaban a sí mismas, y no tenían ni suficiente personal idóneo, ni hábitos de buena administración.

El déficit de los fondos provinciales, por ejemplo, tenía que ser suplido por el fondo nacional.

Del fondo nacional sólo podía disponerse con arreglo a los preceptos que son esenciales en el gobierno representativo: luego, el suplemento tenía que ser votado por la legislatura nacional y su inversión justificada como se justificaban todas las inversiones nacionales.

Esto no era el falseamiento de un principio: al contrario, era conciliar el hecho, desgraciadamente existente, con la observancia de principios que son fundamentales en la organización constitucional de la nación, a que las provincias pertenecían.

La dependencia nacía del déficit, que era un hecho provincial: suprimido este hecho, aquella desaparecía; y como uno de los medios más efica-

ces para operar esa supresión era la regularidad y la práctica de la buena administración, ella era promovida, directamente, por la obligación de sujetarse a la ley del presupuesto y a las leyes de contabilidad.

Es éste uno de los pocos puntos en que la Constitución actual difiere de la de 1826; y como no todas las provincias han llegado a bastarse a sí mismas, y reciben subvenciones para servicios provinciales y aun municipales, conviene estudiar cuál de las dos constituciones ha consultado *prácticamente* mejor el presente y el porvenir de las autonomías provinciales.

Por la de 1826 *era obligatorio* atender al déficit de los presupuestos provinciales; y eso debía hacerse al votarse el presupuesto nacional, sin propuesta ni solicitud especial ni parcial del Poder Ejecutivo.

El suplemento dado en las condiciones de la Constitución de 1826 hacía de los Consejos Provinciales escuelas prácticas de buena administración y adquirir los buenos hábitos administrativos es adquirir la capacidad del gobierno propio.

Sin esta capacidad, que sólo puede obtenerse por aquellos hábitos, la organización federal estará falseada por su base; esta base es el municipio que sabe gobernarse y que se gobierna a sí mismo: el municipio autónomo dentro de su órbita, como la Provincia dentro de la suya. Sin esto, no existe, en realidad, sistema ni gobierno federal.

Si el municipio o la provincia no tienen la capacidad o los medios del gobierno propio, es preciso dárselos, y de manera que puedan llegar a adquirirlos y a poseerlos por sí mismos.

Es esto lo que intentaba Rivadavia, reconociendo

do las necesidades presentes y futuras de su país, para armonizar la institución con la verdad de los hechos existentes y con los medios adecuados para modificarlos.

Cuando esta armonía no es real, cuando existe la independencia en el derecho y la dependencia en el hecho, se confunden las nociones de lo lícito y de lo ilícito, se pervierte la opinión y la conciencia pública y se cae, forzosamente, en la arbitrariedad, que convierte la sumisión a la ley en la sumisión a las personas encargadas de ejecutarla.

Rivadavia evitaba este escollo mortal, porque al inocular en el organismo nacional el principio federal, lo conservaba en su aplicación dentro de lo verdadero y de lo posible, lo que le daría condiciones de vida y de desarrollo natural.

Las instituciones, como todo lo humano, tienen sus ideales, cuya realización no puede verificarse fuera de esas condiciones. Fuera de ellas, el ideal se aleja en vez de aproximarse.

El capítulo en que se registran los actos de que acabo de ocuparme, encierra verdadera enseñanza.

Los oposiciones, intransigentes en cuanto a las personas, que no quieren recibir de manos de sus adversarios el mismo bien que anhelan; que no se lo dejan hacer, y aceptan sin escrúpulo todos los medios de impedirselo, derribándolos, no hacen más que ruinas, inhabilitándose para realizar el bien que combatieron e impidieron.

Sólo sobrevive lo que es intrínsecamente bueno, verdadero, necesario.

La oposición de 1826 no ha fundado nada, no le ha sobrevivido nada, ni como institución, ni como doctrina; porque la *federación*, como ella la entendía; era una simple liga de caudillos o de goberna-

dores provinciales, y esa liga era muchísimo más inconciliable con toda organización nacional que lo fué la liga de 1778 entre los verdaderos *Estados* de la América inglesa.

Rivadavia ha sobrevivido: ahí está la Constitución Nacional, Constitución de transacción como la de 1826; y que, como ésta y la de los Estados Unidos de 1787, establece la unidad del régimen nacional.

Ahí están los Poderes Nacionales⁶ en posesión de la Ciudad de Buenos Aires, nacionalizaba como Capital de la República Argentina.

V

Ya que no me es posible retardar más la publicación de este libro, como me sería necesario para complementarlo con los detenidos estudios que he hecho sobre la ley agraria de Rivadavia, debo, al menos, dejar consignado en estas páginas un resumen de lo más esencial, para demostrar cómo anticipándose en más de medio siglo a la ciencia de su tiempo, él es, hasta hoy, el único estadista americano que ha comprendido que siendo herederos de las experiencias de nuestros antepasados debíamos aprovecharlas al organizar sobre nuestras tierras desiertas nuevas colectividades humanas.

La cuestión agraria perturbó al mundo romano, como en nuestros días aqueja y perturba a las sociedades europeas; y estas perturbaciones acusan un vicio orgánico cuya causa residió antes, como reside ahora, en la apropiación individual de la tierra.

Organizar sobre esa base, es condenarse a los

mismos males y a las mismas perturbaciones, dificultándole a este mundo que llamamos nuevo, quizá porque es el último incorporado a la civilización actual, la misión que le corresponde en el perfeccionamiento sucesivo y continuo de la humanidad.

La ley agraria argentina eliminaba la causa mórbida del organismo de las sociedades europeas.

Suprimida la apropiación individual de la tierra, quedaba extirpado el germen feudal que le es inherente; y sustituidos los impuestos diversos y desiguales que ahora existen, por la renta de la tierra, que *sería la única del Estado*, (1) se abatían las barreras que entorpecen el movimiento de la industria y del comercio.

Extirpado el germen feudal y abatidas esas barreras, sólo quedaban de pie las desigualdades naturales que, bien lejos de ser un mal, producen, por la diversidad de aptitudes, la diversidad de servicios que demanda la organización y el progreso social.

En esta forma y por estos medios la ley agraria de Rivadavia encerraba la más radical y benefactora innovación social de nuestro siglo.

Esta innovación sólo podía verificarse sencilla y fácilmente en América, cuyas tierras estaban desocupadas y se conservaban, como lo son naturalmente, de propiedad común.

Realizar y consolidar tamaña revolución, habría sido trasladar a la América el ideal de la perfección social.

Digo esto con la más entera y entrañable convicción, después de haber estudiado con sumo detenimiento el *enfiteusis perfeccionado* de Rivadavia,

(1) Rivadavia creía, y así está escrito, que con esa renta se podría llegar a la supresión de las aduanas.

bajo todos sus aspectos, en todas sus relaciones, en todas sus consecuencias.

La parte original de Rivadavia le da a ese enfiteusis *todos los efectos benéficos de la propiedad privada de las tierras, sin ninguno de sus inconvenientes, que son fundamentales.*

En honor de este país, tanto como en el de Rivadavia, debo agregar que no fué ése un resultado casualmente obtenido.

Los inconvenientes de la propiedad privada de la tierra y los medios de evitarlos, conservando los estímulos y los buenos resultados de esa propiedad, se estudiaron escrupulosamente; y la ley agraria, iniciada por Rivadavia, sólo fué aceptada después de estudios y de meditaciones prolongadas.

El expositor más claro y convencido de los motivos y de los propósitos de esa ley, fué el doctor D. Julián S. de Agüero, una de las inteligencias más trascendentales y bien nutridas de su época.

Por desgracia, esos motivos y esos propósitos pasaron casi desapercibidos para la generalidad, preocupada de cuestiones más ardientes: no se popularizó su conocimiento, no se hicieron conciencia ni opinión pública, quedando encerrados en aquel grupo de pensadores distinguidos que la reacción contra las ideas del Sr. Rivadavia arrojó de la escena de su país.

Al amparo de esa reacción, la legislación antigua fué recobrando su imperio; y el retroceso llegó tan lejos, que no sólo se enajenaron las tierras enfiteúticas, sino que se premiaron con tierras públicas los servicios militares, repartíendolas como se hacía con las antiguas legiones romanas (1).

La legislación consuetudinaria, cuya fuerza era

(1) Rosas dispuso la enajenación de las tierras da-

poderosa por su raigambre social, se fué robusteciendo por los intereses personales que creaba y por el apoyo que le prestaba la autoridad de la ciencia europea, que ha sido nuestra maestra y nuestra autoridad científica.

Esta ciencia tiene un punto de partida diametralmente opuesto al que debió ser, al que era el nuestro.

Ella parte de la apropiación individual de la tierra como hecho irrevocablemente consumado hace muchos siglos; como hecho indestructible, intocable, porque con él está secularmente identificada toda la organización social europea; porque es la piedra angular que no puede removerse sin desequilibrar y derrumbar, entera, esa sociedad fundada por el feudalismo, y radicada por la desigualdad de castas, por los privilegios aristocráticos y las jerarquías monárquicas.

Nuestro punto de partida era la tierra desocupada, que se conservaba como propiedad común, y no ofrecía obstáculo para que, utilizando la experiencia de las sociedades viejas, conmovidas y enfermas, fundáramos la sociedad nueva sobre bases sanas y naturales, sobre las bases de la igualdad humana, y de la distribución de la riqueza por medio del cambio de servicios.

Creo que basta aclarar la diversidad de estos puntos de partida para dejar demostrado que, en éste, como en otros problemas sociales, la ciencia

das en enfiteusis. Por un solo decreto puso en venta 1500 leguas.

Por la ley de 8 de Noviembre de 1839 hizo un repartimiento de tierras como premio: A los Generales, 6 leguas; a los Coroneles, 5; Tenientes Coroneles, 4; a Sargentos Mayores, 2; Capitanes, 1; Oficiales de Capitán abajo, 3/4; Sargentos, 1/2; Cabos y Soldados, 1/4.

européa no es para nosotros una guía idónea y segura.

La ciencia europea, en su laudable defensa del orden social, atacado por las exageraciones y las irracionalidades del comunismo, ha esforzado y multiplicado los argumentos más o menos especiosos, con que ha pretendido cohonestar la apropiación individual de la tierra; pero como, al fin, la ideología no es la medicina, y ningún argumento puede eliminar del organismo el principio mórbido que lo atormenta, la ciencia moderna ya viene, poco a poco, estudiando la causa del mal, reconociéndola, y buscándole el remedio.

Después de los muchos que han ideado, todos insuficientes, vienen a buscarlo en el enfiteusis.

Stuart Mill y después de éste Lavelaye, Leroy Beaulieu, (reciente y esforzado campeón del orden social europeo) y otros, han reconocido ya la conveniencia y la necesidad, al menos en algunos casos, de establecer un enfiteusis perfeccionado en reemplazo de la propiedad perpetua de la tierra; pero ninguno ha ideado, hasta ahora, bases a la vez tan perfectas en relación con las necesidades del desarrollo de las culturas y de los principios de la equidad, como las de la ley agraria de Rivadavia, que bien puede llegar a ser la legislación del porvenir.

Reconociendo la conveniencia de la nacionalización de la tierra, los discípulos de Stuart Mill fundaron en Australia la asociación *Land tenure reform league of Victoria* con el objeto de obtener del Estado, cesando en la venta de las tierras públicas, las diese en enfiteusis. El programa de esa asociación, expuesto en su circular de 5 de enero de 1872, y que parecería una novedad, es, a la vez, un

resumen de argumentos contra la apropiación individual de la tierra, y una justificación de las ideas y de los propósitos de Don Bernardino Rivadavia sobre la tierra pública.

En Java y en Nueva Zelandia se ha legislado ya con arreglo a estos sanos principios, disponiéndose que la tierra pública se dé en enfiteusis, por 75 años en Java, y en Nueva Zelandia por 14 años, renovables por otros 14, pero con el canon doble.

Lavelaye, criticando severamente la enajenación de las tierras en Estados Unidos, en Australia y en el Canadá, es de opinión que sería “ mucho más
“ ventajoso concederlas temporariamente por una
“ especie de contrato enfiteútico por 99 años, por
“ ejemplo, aun por 150, si aquel plazo les parece
“ corto. Al fin de ese lapso de tiempo el Estado
“ entraría en posesión de las tierras mejoradas,
“ que tendrían un grande valor: podría conceder-
“ las de nuevo por otros 99 años: y así podría el
“ Estado sacar provechos considerables de la tie-
“ rra, absorbiendo, al cabo de cierto espacio de
“ tiempo, la casi totalidad de eso que los econo-
“ mistas llaman la *renta del suelo*, vale decir, la
“ parte de renta que representa la fecundidad na-
“ tural y primitiva de la tierra, y que es distinta
“ del interés del capital o de los beneficios del cul-
“ tivador. Este método de contrato enfiteútico
“ sería un medio de establecer *el impuesto único*
“ *y de suprimir toda esa variedad de impuestos*
“ *que son acompañados de tantas vejaciones y de*
“ *tantos desperdicios de fuerza social*. No traería,
“ por otra parte, ningún inconveniente la aplica-
“ ción de esta teoría, porque podría decretarse
“ que las concesiones enfiteúticas debían renovar-

“ se veinte años antes de su término; y de este modo la cultura nunca se entorpecería ”.

M. Leroy-Beaulieu, después de transcribir la opinión de Lavelaye, dice:

“ Nosotros no vacilamos en *declararnos partidarios de este método para los países donde una grande parte del territorio está todavía desocupado. Los Estados Unidos y la Australia podrían evitarle a las generaciones del porvenir todas las dificultades financieras y los embarazos económicos contra los cuales luchan hoy los pueblos contemporáneos. El número y la actividad de los settlers no disminuirían por esta sustitución de las concesiones por 99 o por 150 años a las concesiones perpetuas. Esta sería la realización del impuesto único sobre la tierra* ” (1).

Este triunfo de la base de la ley agraria de Rivadavia en la moderna ciencia europea, es completo, absoluto.

Y este triunfo será extensivo a todo el sistema agrario de Rivadavia tan luego como el texto de su ley y la inteligencia que le daban sus expositores, sean conocidos por los economistas, que buscan en el enfiteusis el medio de evitar *todas las dificultades con que hoy luchan los pueblos contemporáneos*.

Los contratos enfiteúticos por 99 ó por 150 años, como los propone Lavelaye y los admite Leroy-Beaulieu, no están bien calculados para llenar todos los fines sociales que deben consultar y satisfacer.

(1) “*Traité de la Science des Finances*”, par Paul Leroy Beaulieu. Tome 1er., pág. 65. París, 1877.

Esos plazos tan extensos tienen por objeto confesado, y justificado, dar estabilidad a los intereses que se adhieren a las mejoras y a la cultura de la tierra, que es la razón que, como fundamental, aducen los partidarios de su apropiación individual.

Pero ese fin se llena más cumplidamente por el sistema de Rivadavia, porque aunque la concesión sea sólo por 20 años, renovable por 10, desde que esta renovación sea ilimitada y el derecho del enfiteusis transferible, este enfiteusis así perfeccionado, tiene, como ya lo he dicho, y me complazco en repetirlo, *todos los efectos benéficos de la propiedad privada de las tierras, sin ninguno de sus inconvenientes, que son fundamentales.*

Pero en esta forma, que es la de Rivadavia, obteniéndose mejor esos efectos benéficos, se consulta no sólo a las conveniencias sociales, sino al derecho de la sociedad, ahora desatendido aunque tiene el mismo título y es tan sagrado como el de los individuos.

“ Lavelaye dice, que el Estado al entrar en posesión de las tierras mejoradas al término de los contratos enfiteúticos de 99 o de 150 años, sacaría provechos considerables, absorbiendo, al cabo de cierto espacio de tiempo, la casi totalidad de lo que los economistas llaman renta de la tierra, esto es, la parte que corresponde a su fecundidad natural y primitiva, que es diversa del interés del capital y de los beneficios del cultivador, siendo éste el medio de establecer el impuesto único ”.

Desde luego, observaré que en la renta de la tierra existe, además de la que señala Lavelaye, otra también distinta de la que produce el capi-

tal y el trabajo del cultivador, que es la que resulta del capital y del trabajo social.

Mr. Wolowski, otro de los economistas de la escuela de Leroy-Beaulieu, lo reconoce en las siguientes palabras:

“ La renta no es, pues, solamente la consecuencia de la producción agrícola, sino, sobre todo, *el resultado del progreso económico de la Sociedad*” (1).

Como este punto es capital y suelen oscurecerlo con el aparato y el tecnicismo científico, pretendo aclararlo con dos ejemplos nuestros, llanamente presentados.

Para demostrar la naturaleza de la renta y la existencia del crecimiento del valor de la tierra con independencia del capital y del trabajo individual, invertidos en ella por sus propietarios, pongámonos en presencia de un terreno no tocado por la mano trabajadora del hombre, pero que está situado en el centro o en la proximidad de una población que prospera por su trabajo industrial y comercial: ese terreno abandonado tiene un valor crecido y creciente ¿quién se lo ha dado? ¿El capital?, ¿el trabajo individual? No: ningún capital, ningún trabajo individual ha concurrido a ese valor: lo ha acrecido y lo acrece el trabajo, el progreso social de la localidad en que se encuentra.

Otro terreno de igual extensión y de idénticas condiciones, ubicado donde no le alcanza el beneficio de la acción social, tendrá valor escaso y estacionario.

Es, pues, evidente que aquel valor crecido y creciente es una creación social: a ella han concurrido

(1) “Journal des Economistes”, 2.ª serie, 3.ºr. année, tomo 10, pág. 73.

todos los elementos sociales; en las altas esferas, el político y el sabio: el magistrado que distribuyendo la justicia garante los derechos civiles: el soldado que vela por el orden y la seguridad pública e individual: el comerciante que provee a los abastos y a las salidas: el industrial que alimenta el trabajo y valoriza los productos: el proletario que arrienda su brazo: en fin, todos los que consumen, incluso el anciano, ya inútil, que se despide de la vida, y el niño que la comienza.

La caída de Rosas, que restableció la inviolabilidad de los derechos naturales y sociales, que abrió el río de la Plata y sus grandes afluentes al intercambio universal y a todas las corrientes de la inmigración, a los hombres, a la ciencia, a los capitales, quintuplicó, en breve tiempo, el valor, a la vez que la renta de las tierras de Buenos Aires.

Muchos de los grandes propietarios de esas tierras, bien lejos de haber concurrido a la obra libertadora, le fueron hostiles, prestando su apoyo real o moral al sistema desvalorizador, y sin invertir en ellas de nuevo ni un solo peso ni el trabajo de un día, se encontraron con su fortuna quintuplicada.

Nada peculiarmente suyo, nada que legítimamente les corresponda tienen en ese aumento de valor producido por el esfuerzo y la abnegación, el sudor y la sangre de dos generaciones de patriotas, de dos generaciones de batalladores y de mártires.

Próximamente vamos a tener otro ejemplo.

La edificación de la capital de la Provincia, la mejora del puerto de la Ensenada, van a aumentar el valor de las tierras circunvecinas. ¿A qué título adquieren tal aumento de valor los propietarios de esas tierras? Legítimamente, ese aumen-

to pertenece al capital y al trabajo social que lo produce.

El enfiteusis de Rivadavia le daba a cada uno lo que es suyo: el individuo dueño de lo que produce su capital y su trabajo: la sociedad de lo que produce el suyo.

Y Rivadavia llegaba a este resultado por el medio sencillo y equitativo del canon movable o de la renovación periódica del enfiteusis: cada diez años, por ejemplo, un jurado compuesto de los vecinos de la localidad establecía el valor de la tierra; el canon absorbía el interés que correspondía al crecimiento que hubiera tenido ese valor por el progreso realizado por el esfuerzo social, y se lo devolvía a la sociedad, quedando los enfiteutas con la propiedad y con el goce de lo que les pertenecía.

Rivadavia, en cuanto a las tierras públicas, restablecía el derecho de la propiedad social. Fuera de ese derecho, estamos en el feudalismo y en el comunismo. El título de la propiedad es el *trabajo*.

El comunismo, desconociendo ese título, permite adquirir y gozar lo que no es resultado del trabajo y de las actitudes personales.

La renovación a plazo más corto del enfiteusis o el canon movable es el único medio de alcanzar los fines que Lavelaye se propone; y el impuesto único que debía resultar de la absorción por el Estado, de la parte que le corresponde en el producto de la tierra, no tiene, en cuanto a la percepción del impuesto, forma más precisa ni más oportuna.

Por otra parte, siendo creciente el valor de la tierra, es indispensable la renovación del canon en cortos períodos para que no se altere por el tiempo la igualdad social.

Un canon de 99 o 150 años, no respondería a nin-

guno de los altos fines a que debe corresponder el contrato enfiteútico.

El día en que el sistema agrario argentino de 1826 sea conocido y estudiado en el mundo científico, Rivadavia ocupará un lugar preeminente entre los reformadores de su siglo.

En cuanto a este país, si esa legislación hubiese sobrevivido a la presidencia de Rivadavia, la República Argentina quizá ya podría darle al mundo el ejemplo de una gran nación sin impuestos, formándose los recursos de su tesoro con las rentas que, además del interés, del capital, de los frutos, de las mejoras y de la retribución del trabajo, perciben hoy los particulares que, en número relativamente reducido, se han apropiado a vil precio las tierras públicas.

M. Leroy-Beaulieu, después de haberse declarado partidario del enfiteusis en los países que tienen grandes extensiones de tierras desocupadas, evitando, por ese medio, las dificultades con que luchan los pueblos contemporáneos haciendo posible el impuesto único, exclama:

“ Apartémonos de esas comarcas lejanas, con
“ las cuales las nuestras no tienen ninguna ana-
“ logía, porque la propiedad perpetua existe des-
“ de tiempo inmemorial sobre toda la extensión
“ del territorio ”.

Estas palabras debieron ser escritas con amargura, que comprendo y que siento, al pensar que les estamos cerrando a las generaciones americanas el camino que ya nos indica la misma ciencia europea — y que el genio de Rivadavia nos había abierto — para evitar los males que padece el organismo europeo.

En esta materia no se han consultado ni las conveniencias más inmediatas. Estamos colonizando y no se ha tenido ni la previsión de reservar la tierra para colonizar atendiendo, ante todo y sobre todo, las conveniencias sociales; se ha dado la tierra, y se da, en grandes extensiones a los hombres de dinero, y el interés público queda subordinado al interés privado.

La provincia de Buenos Aires, enajenando su tierra pública, se coloca ya en situación de reproducir el fenómeno que se produjo en Inglaterra cuando algunos señores de grandes extensiones de tierras las despoblaban para entregarlas a la ganadería.

El ganado excluye al hombre, aquí y en todas partes.

La explotación cómoda de la ganadería primitiva contraría el aumento de población, el desarrollo de la agricultura y de las industrias.

Van a principiar los conflictos entre el interés público y el interés privado que el enfiteusis de Rivadavia habría prevenido.

Buenos Aires, Marzo de 1882.

ANDRÉS LAMAS.

D. Bernardino Rivadavia y su tiempo

(FRAGMENTOS)

1810 — 1812

- D. Bernardino Rivadavia y el Dr. D. Mariano Moreno, en el Cabildo abierto, 22 de Mayo de 1810.—El Dr. Moreno, Secretario de la 1.ª Junta: Concentra la acción del Gobierno y la hace eficiente para ahogar vigorosamente la reacción, y para llevar las armas revolucionarias hasta el Alto Perú.—Pone en manos del pueblo el Contrato Social de Rousseau: descomposición de la sociedad colonial: la revolución reviste carácter social, adquiere el nervio de la acción popular y la fuerza expansiva de los principios democráticos.—El Dr. Moreno resiste la incorporación al Gobierno de los Diputados de las Provincias.—Es vencido.—Incorporación de los Diputados.—Separación del Dr. Moreno.—Los sucesos le dan razón.—Se debilita la acción del Gobierno.—Desastres y peligros de la revolución.—La segunda Junta reconoce la necesidad de vigorizar la acción ejecutiva y la delega en un Triunvirato, del que nombra Secretario a D. Bernardino Rivadavia.—Rivadavia toma en este Gobierno la misma posición que tuvo el Dr. Moreno en la Junta de Mayo.—La segunda Junta, que toma el título de Conservadora, expide un Estatuto que le subordina la acción del Triunvirato. Este lo resiste, disuelve la Junta y promulga un nuevo Estatuto, por el que toma el título de "Gobierno superior de las Provincias del Río de la Plata".—Por este Estatuto se crea una Asamblea General, que funcionaría hasta la reunión del Congreso que debía convocarse.—Reunida esta Asamblea, declara corresponderle la autoridad "suprema".—El Triunvirato la disuelve.—Rivadavia, como el Dr. Moreno, juzga indispensable la concentración de la acción gubernativa para dominar los peligros de la revolución. Obtiene, como la Junta de 1810, la justificación del éxito.

Don Bernardino Rivadavia nació a la vida pública en el famoso Cabildo abierto del 22 de Mayo de 1810.

Al pasar a la Sala de Acuerdos, donde debía ex-

presar y rubricar su voto cada uno de los concurrentes, Don Bernardino Rivadavia y el Doctor Don Mariano Moreno se aproximaron casi al mismo tiempo a la mesa en que los votos eran recibidos, y los dos expresaron la misma opinión con las mismas palabras (1).

Así se nos presentan unidos e iluminados por las claridades de aquella magnífica aurora, los nombres que debían representar en la época histórica que se abría en aquel momento y por aquel acto supremo, la emancipación de la colonia, la demolición del régimen, la creación del régimen nuevo que iba a sustituirlo, preparando los destinos de las nuevas nacionalidades sudamericanas.

El Dr. D. Mariano Moreno fué el primero en la acción, como secretario de la Junta de Gobierno, instalada el 25 de Mayo.

Vamos a reproducir el juicio que sobre su acción habíamos formado.

Se mostró, desde luego, hombre de gobierno manifestando, desde sus primeros actos, que la represión no funda nada durable ni fecundo sino cuando el poder que somete a las individualidades a la obediencia de la autoridad, es, a la vez, simultáneamente, el poder que las ampara y las tranquiliza, que las garante en todo lo que tienen derecho a ser garantidas.

Esta es la parte más difícil de los gobiernos que nacen de las conmociones populares: deben moderar la acción de los elementos que los elevaron, encerrarlos en los límites del derecho, obligarlos a

(1) Estos datos van registrados en el acta del Cabildo de 22 de Mayo de 1810, y en ella podrá verse la proximidad en que se encontraban los dos ilustres patriotas.

respetar el derecho en las individualidades que combatieron, haciéndoles comprender prácticamente que si ellos crearon un gobierno, ellos no son gobierno, y que los vencedores deben entrar como los vencidos dentro de la esfera del derecho común.

Estos fines eran atendidos por el doctor Moreno, declarando, desde el primer día, que se castigaría todo conato contrario a la estrecha unión que debía existir entre *todos los habitantes de las provincias*, o que concurrieran a la *división* entre españoles *europeos* y españoles *americanos*, porque esta división era contraria a la *tranquilidad* de los particulares (esto es, contraria a su derecho individual) y *al bien general del Estado*, vale decir, al derecho social, y a los fines de la institución que llamamos gobierno.

Y para que esta buena política fuera mejor aceptada por los revolucionarios, el doctor Moreno les presentaba al virrey derrocado como un hombre digno de veneración por su carácter y por el *distinguido patriotismo con que en favor de este país se había ofrecido a repetir en cualquier destino sus importantes servicios*.

Este ofrecimiento era, sin duda, verdadero, en el momento en que fué hecho: pero el Dr. Moreno no podía darle importancia ni consecuencia. El, mejor que nadie, conocía a Cisneros y los desfallecimientos morales de que, apenas repuesto, se arrepentía y trataba de enmendar.

Por el momento, sin embargo, el ofrecimiento servía al propósito gubernamental del doctor Moreno, que era, como debía ser, restablecer la tranquilidad pública, afirmar con ella, y por medio de ella, al naciente gobierno, y aplazar tanto como fuera posible, la lucha que, más o menos tarde ha-

bían de trabar con ese gobierno los elementos del regimen colonial.

El Gobierno necesitaba tiempo para apoderarse de todos los medios administrativos, para extender la esfera de su acción, para aumentar sus elementos, disciplinarlos, darles cohesión y organizarlos regularmente.

Si le faltaba tiempo, si la reacción se precipitaba, toda esa sana y previsora política era imposible: no tenía aplicación práctica.

La reacción arrastraría al Gobierno por diverso camino: y lo arrastró, porque, pronunciándose inmediatamente, el Gobierno ya no pudo pensar más que en los medios de dominarla y extirparla.

En la noche del mismo día 25, del día del ofrecimiento de Cisneros, cuando todavía resonaban las campanas que anunciaban el advenimiento del nuevo Gobierno, el decaído y, al parecer, resignado virrey, recibía los ofrecimientos que hacía desde Córdoba (en carta fecha 19 de Mayo) el general Liniers: estos ofrecimientos lo reanimaron, y sin vacilar los aceptó, autorizando a aquel jefe para que restableciese, por la fuerza de las armas, la autoridad real.

Como consecuencia de esta resolución, que les fué conocida, los oficiales de marina que se encontraban en este puerto, se pronunciaron contra el nuevo Gobierno y se dirigieron a Montevideo, donde, bajo el mando del Comandante Salazar, concurrieron directa y eficazmente a que se declarase y organizase la resistencia a la Junta de la Capital.

Este nuevo Gobierno comprendió bien y encaró con firmeza la situación que se le creaba.

Obró con vigor y, sobre todo, con oportunidad,

para ahogar la reacción y para alejarla del único centro que tenía su poder y su fortuna.

En la noche del 20 de Junio fueron sorprendidos y embarcados, y al día siguiente emprendieron viaje para Canarias, el Virrey y los Oidores que, como él, conspiraban contra el Gobierno.

Esa medida dejó sin jefes, sin centro y sin guías a los reaccionarios de la Capital. Necesitaron casi dos años para reanudar la conjuración con D. Martín de Alzaga.

El 26 de Agosto fueron pasados por las armas, en la *Cruz Alta*, jurisdicción de Córdoba, el general Liniers y los jefes que con él habían levantado contra la Junta el pendón real.

Esta ejecución tranquilizó el interior y llevó las armas patrias a completar, como consecuencia de la victoria de Suipacha, el sangriento escarmiento de los jefes peninsulares del Alto Perú, que, de acuerdo con Liniers, encabezaban la reacción armada.

Esta lucha, una vez empeñada y ensangrentada, no admitía términos medios ni transacción alguna.

Ella iba a asumir las proporciones de una guerra hondamente social, porque era en el fondo de la sociedad donde existían los más eficaces, aunque menos visibles elementos de la reacción.

Los reaccionarios vendrían a la lucha con la bandera tradicional, con los dogmas políticos, con las ideas, las creencias y los hábitos sociales del antiguo régimen, en el cual había nacido y se había educado la sociedad entera; y ninguna sociabilidad se reforma ni ningún culto se suplanta sino por medio de los ideales, de los fanatismos, de las verdades

y de las utopías de otra sociabilidad y de otro culto nuevo.

La clara inteligencia del doctor Moreno lo alcanzó desde el primer momento; y mientras con brazo vigoroso ahogaba el gobierno la reacción o la alejaba, él ponía en manos del pueblo un nuevo catecismo político y social en la traducción del *Contrato Social* de Rousseau. Así, la división de los hombres, que la reacción hacía inevitable, se fortificaba y se ahondaba porque se hacía división de doctrina, y de doctrina exagerada, y, por esta condición, doblemente irreconciliable con todas las bases y con todas las formas de la sociedad fundada por la conquista, por el derecho divino y el absolutismo monárquico, por el privilegio y la inquisición.

Con esa bandera ya no habría hombres vencidos ni hombres vencedores: la lucha sería de autonomías y de doctrinas fundamentales para la organización y el gobierno de la sociedad.

Desplegada esa bandera por la más vigorosa inteligencia de la revolución, entraron en esta nueva y grande contienda los elementos populares, tales como los habían preparado las invasiones inglesas y la conspiración contra la autoridad metropolitana.

El verdadero historiador tendrá que estudiar esos elementos en los cuarteles de los patricios, en los clubs, en los cafés, donde se reunía la juventud, distraída de toda otra ocupación por el manejo de las armas y por las novedades políticas, y que no conocía otros medios ni otros resortes de acción política que los que acababa de ensayar, ya formándose para derrocar a la autoridad por las bayonetas, ya reuniéndose tumultuariamente en la

plaza pública, penetrando en los corredores y golpeando las puertas de la sala consistorial, para imponer sus voluntades.

Ese estudio explicaría, en nuestro sentir, todos los trastornos y toda la descomposición interna que produjo la revolución; explicaría las luchas individuales y la preponderancia del militarismo.

Pero las luchas individuales explicarían también el maravilloso espectáculo que presentaba una colonia española que intentaba realizar de un golpe, sin preparación, sin transición, todas las teorías de la filosofía y de la revolución francesa.

La guerra civil, como la guerra exterior, debían ser guerras contra España.

En la una, se combatirían sus ejércitos: en la otra, sus dogmas políticos y sociales, sus teorías y sus formas de gobierno, las ideas que las engendraban, los símbolos que las representaban.

Ninguna individualidad podría levantarse, ningún prestigio podría crearse o sostenerse, ninguna ambición satisfacerse, sino distinguiéndose y conquistando sus títulos en uno de los dos campos en que se encerraba una misma guerra, la guerra contra España por las armas o las ideas, la guerra soldadesca, si podemos expresarnos así, o la guerra social y política (1).

El Dr. Moreno quemó las naves de la revolución en el día en que colocó en presencia de la soberanía radicada en una casta y representada por un hombre, la soberanía originaria del pueblo, representada por el mayor número, por la *muchedumbre*, que es a la que corresponde el gobierno, según el *Contrato Social*, de Rousseau.

(1) Palabras del Dr. Moreno al fundar su voto en el acuerdo de la Junta de 18 de Diciembre de 1810.

Juzgado este grande acto en sí mismo, él no sólo hacía irreconciliable la guerra con España, sino que decidía la forma orgánica del pueblo que por ella debía emanciparse.

Las rivalidades de las clases superiores entre americanos y europeos habrían podido producir la emancipación conservando las jerarquías sociales que existían en la colonia: pero la revolución, identificada con los principios proclamados por el Dr. Moreno, era el abatimiento de esas jerarquías la descomposición absoluta de la sociedad colonial; la preponderancia de los elementos populares que, con todas sus rudezas y con todos sus excesos, eran una fuerza invencible, como medio, y el triunfo de la forma democrática, como consecuencia y como fin.

Esta es la gloria del doctor Moreno: él le dió a la revolución su carácter social, el nervio de la acción popular y la fuerza expansiva de los principios democráticos.

Empeñada así la lucha, era necesario, para llevarla a buen término, concentrar y dirigir los elementos que debían sostenerla; para lo cual se hacía indispensable vitalizar y dar unidad a la acción del gobierno.

En este propósito, resistía que se incorporasen a la Junta Gubernativa, que era la de la capital, los diputados electos por las provincias a virtud de la invitación que se les había hecho por la circular de 27 de Mayo de 1810, " por considerarla contraria " al bien general del Estado en las miras sucesivas " de la gran causa de su constitución " (1).

Verificada la incorporación de los Diputados

(1) "La revolución de Mayo", por Andrés Lamas. Revista del Río de la Plata, tomo 4.º—Buenos Aires, 1872.

provinciales, ese acto terminó la carrera política y, poco después, la vida del ilustre Dr. Moreno.

Los sucesos dieron razón al Dr. Moreno. El ingreso de los Diputados a la Junta Gubernativa, y la falta de una inteligencia y de un carácter que la subordinase a una dirección única, produjo la debilidad, la lentitud y la inseguridad de su acción.

Ella misma, abrumada por los desastres y los peligros de la revolución, que no había podido evitar y que no podía conjurar, tuvo la patriótica y honrada franqueza de declararlo por el Acuerdo de 23 de Septiembre de 1811.

“ Teniendo en consideración, dijo, a la celeridad y energía con que deben girar los negocios de la patria, y las trabas que ofrece al efecto. la multitud de los vocales, por la variedad de opiniones que frecuentemente se experimentan, ha acordado constituir un poder ejecutivo compuesto de tres vocales y tres secretarios sin voto ”.

Don Bernardino Rivadavia, secretario de guerra, tuvo en este Triunvirato ejecutivo, la misma posición que el Dr. Moreno en la Junta de 1810.

La Junta, al crear el Triunvirato, estableció que ejercería sus funciones *bajo las reglas o modificaciones* que debería establecer la misma Junta, que tomaba el nombre de *Conservadora*, y *ante la cual serían responsables de sus acciones los miembros que componían el Poder Ejecutivo*.

En estos términos el nuevo ejecutivo no era más que una comisión de la Junta, sin atribuciones propias, pues todas dependían de las reglas o modificaciones que la Junta se reservaba; lo que indujo al Triunvirato a pedirle un reglamento *que determinara su conducta en el despacho de los negocios*.

La Junta lo expidió el 22 de Octubre siguiente atribuyéndose todas las facultades legislativas, y, entre ellas, la de cambiar semestralmente, por elección suya, uno de los miembros del Ejecutivo.

Este, después de haber oído al Cabildo de Buenos Aires, fundándose en que la Junta se erigía en soberana, sujetándolo todo a su autoridad para perpetuarse en el mando y arbitrar sin regla sobre el destino de los pueblos; y, en que en tal sistema no siendo el gobierno más que “ una autoridad intermediaria y dependiente, no correspondería a “ *los fines de su instituto*, ni tendría su creación “ otro resultado que complicar el despacho de los “ negocios y retardar las medidas que reclamaba “ urgentemente la situación, quedando abandonada “ la salud de la patria al cuidado y a la arbitrariedad de una corporación, que en tiempos más “ felices y con el auxilio de un poder ilimitado “ no pudo conservar las ventajas conseguidas por “ el patriotismo de los pueblos contra los enemigos “ de su sosiego y de su libertad ”, concluía por rechazar el reglamento sancionado por la Junta substituyéndolo por otro suyo, mediante el cual asumía el poder supremo con el título de *Gobierno Superior Provisional de las Provincias Unidas*, hasta la apertura del Congreso que debía convocarse luego que lo permitiesen las circunstancias, al cual serían responsables, los miembros del Triunvirato y sus Secretarios, de su conducta pública, o a la *Asamblea General* que por aquel acto se creaba, si a los diez y ocho meses no se hubiese reunido el Congreso.

Este estatuto distinguía, como también lo hacía el de la Junta, los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y la falta del Congreso la su-

plía con la *Asamblea General*, que acabamos de nombrar, y que debía componerse del Ayuntamiento, de las representaciones que nombrasen los pueblos y de un número de ciudadanos electos por el vecindario de la capital, en la forma que se prescribiría.

Esta asamblea se reunió, pero habiendo declarado que le correspondía la autoridad *suprema*, en el día 6 de Abril de 1812, el Ejecutivo la disolvió por un decreto, reteniendo, por ese acto todo el poder público.

Este acto, como el de la disolución de la Junta, sólo podían explicarse por circunstancias que no daban espera y como medidas de salvación pública.

El ejecutivo había manifestado en el preámbulo de su estatuto, cuáles eran las circunstancias en que asumía el poder, en los siguientes términos:

“ Por el occidente, derrotado o disperso nuestro
“ ejército del Desaguadero; expuestas a la ocupa-
“ ción del enemigo las provincias del Alto Perú;
“ interceptadas nuestras relaciones mercantiles y
“ casi aniquilados los recursos para mantener el
“ sistema. Por el Oriente, un ejército extranje-
“ ro (1), a pretexto de socorrer a los Gobernado-
“ res españoles, que invocaron su auxilio, avan-
“ zando sus conquistas sobre una parte la más pre-
“ ciosa de nuestro territorio; el bloqueo del río
“ paralizando nuestro comercio exterior; relajada
“ la disciplina militar; el Gobierno débil; desma-
“ yado el entusiasmo, el patriotismo perseguido;
“ envueltos los ciudadanos en todos los horrores
“ de una guerra exterminadora, y obligado el Go-
“ bierno a sacrificar, al imperio de las circunstan-
“ cias, el fruto de las victorias con que los hijos

(1) El ejército portugués.

“ de la Patria, en la Banda Oriental, han enriquecido la historia de nuestros días ” (1).

Estos peligros no estaban dominados, aunque la situación había mejorado, al menos aparentemente, cuando el Ejecutivo disolvió la Asamblea de 1812.

Y decimos, al menos *aparentemente*, porque, como después fué visto, nunca había estado la revolución más aventurada, puesto que se tramaba, en la misma Capital, una conjuración poderosa en combinación con el ejército portugués, que se estacionaba sobre el Uruguay, y con el realista, que después de haber dominado al Alto Perú marchaba sobre Jujuy.

Rivadavia creía, como Moreno, que la acción del Ejecutivo, para luchar con la reacción armada, debía ser expedita y absoluta en toda la esfera que abarcaba el peligro que debía dominar: y fué, sin duda, porque tenía ese convencimiento, que no retrocedió ante los dos golpes de estado que le devolvieron y le conservaron al gobierno de que hacía parte, la misma autoridad suprema de que se había investido la Junta de 1810.

Estos actos son comunes en todas las revoluciones: las circunstancias los imponen, los justifican y los legitiman dentro de los límites de la necesidad.

La autoridad que asumió el Triunvirato tuvo también, como la de la Junta de 1810, la justificación del éxito.

Todos los peligros fueron desvanecidos en 1811 y 1812, como lo habían sido en 1810, por el uso dis-

(1) Se refiere a la evacuación de la Banda Oriental por el ejército patrio.

creto, inteligente y enérgico de la suma del poder público.

Esos peligros consistían:

1.º En las complicaciones exteriores.

2.º En la desorganización y en la escasez de los elementos militares, desmoralizados por desastres recientes.

3.º En la reacción de los elementos españoles dentro de la misma capital, y en combinación con las tropas españolas de Montevideo y del Perú y con el ejército portugués.

Veamos cómo se conjuraron.

II

Complicaciones Exteriores.—Política de la Princesa Doña Carlota Joaquina, contrariada por el Embajador Inglés Lord Strangford.—Auxilios dados a Montevideo.—Insuficiencia de esos auxilios y apurada situación de la plaza.—Entrada del Ejército Portugués a la Banda Oriental.—Lord Strangford alarma al Embajador Español Casa Irujo sobre las miras de los Portugueses: se entiende con D. Manuel de Sarreatea, Agente de Buenos Aires: Amenaza al Príncipe Regente con una ruptura de relaciones si no retira su Ejército de la Banda Oriental: Por estos medios se llega en Río de Janeiro a convenir en un armisticio, obligando a Buenos Aires a someterse a lo que acordasen la Inglaterra y el Portugal con la Regencia de España.—Buenos Aires inutiliza ese acuerdo, despertando en el General Elío las desconfianzas contra los Portugueses; y negocia con él un tratado de pacificación, mediante el cual retira su Ejército de la Banda Oriental, quedando obligado Elío a hacerla evacuar por los portugueses.—Este tratado desagrade a todos, a Artigas, a la Corte Portuguesa, a la princesa Carlota, a los españoles del Alto Perú y de Montevideo.—Retirada de Artigas, manteniéndose en hostilidad con los Portugueses.—El Gobierno Portugués recibe el tratado como una injuria.—Resuelve detener su Ejército en la Banda Oriental y ordena a su General que exija del Gobierno de Buenos Aires con dignas reparaciones, autorizándole, además, para que se entienda con Vigodet, Gobernador de Montevideo, y con el General Goyeneche, comprometiéndose por este acto en las injurias de la princesa Carlota: Reclamación del General Portugués, con el carácter de ultimátum.—Contestación dignísima del Gobierno de Buenos Aires.—Ruptura inminente con los Portugueses.

Al recibirse el Triunvirato del Gobierno, ya se encontraba en el territorio oriental un ejército portugués a las órdenes de don Diego de Souza,

que había traspuesto la frontera en el mes de Julio de aquel año de 1811, con el pretexto de reprimir los atentados, decían, cometidos por la caballería irregular de los orientales en los territorios fronterizos, pero en la realidad, para obligar a la Junta de Buenos Aires a que levantase el asedio de la plaza de Montevideo y evacuase el territorio de la Banda Oriental.

Desde antes de la revolución de Mayo habían existido dos políticas en lucha en los Consejos del Príncipe Regente de Portugal, después D. Juan VI, cuya Corte se había trasladado a Río de Janeiro en 1808, a consecuencia de la ocupación del Portugal europeo por un ejército francés.

La princesa D.^a Carlota Joaquina, esposa del Príncipe Regente, señora inquieta, ambiciosa, cuyas pasiones no eran contenidas por ningún escrúpulo, enconada por el malogro de los esfuerzos que había hecho para obtener la Regencia de estos países, no omitía medio alguno para comprometer al gabinete de Río de Janeiro en la política de una intervención armada que, coadyuvando a las tropas españolas, concurriese a sofocar la revolución en el Río de la Plata.

Pero ella tenía un adversario poderoso en el embajador inglés Lord Strangford, que le aconsejaba al Príncipe Regente la misma abstención que se había impuesto la Inglaterra en las perturbaciones de la América española.

A pesar de ser ésa, en efecto, la política inglesa, el Almirante Sir Sidney Smith era favorable a la Princesa, lo que, contrariando y dificultando la acción diplomática, indujo al embajador a solicitar que el Príncipe Regente escribiese directamente al Soberano Inglés, manifestándole, confiden-

cialísimamente, su real desagrado por la persona del Almirante, y el deseo de que se le retirase el mando de las fuerzas marítimas. Accedió el Gobierno Británico, y no tardó en llamarlo a Inglaterra sustituyéndolo por el Vicealmirante de Courcy (1).

Pero la Princesa tenía un auxiliar, más poderoso que el que se le quitaba, en las doctrinas que se propagaban en Buenos Aires, y que despertando en el Príncipe Regente el instinto de la propia conservación, lo arrastraron, en varias ocasiones, a emanciparse, aunque cautelosa y secretamente, del predominio de la diplomacia inglesa, a que estaba habituado.

Con este auxiliar, la Princesa obtuvo que, malograda la interposición del Gabinete del Brasil para que cesasen las hostilidades en el Río de la Plata, en los términos en que la propuso por la nota dirigida, en 30 de Mayo de 1811, a la Junta de Buenos Aires y al Gobierno de Montevideo (2), el Príncipe Regente le permitiera socorrer esta plaza.

Se autorizó el embarque para Montevideo del armamento de infantería y caballería que sus agentes compraron en Río de Janeiro.

La princesa envió una imprenta, cuyo material le suministró la *Tipografía Real*, para que se fundara una Gaceta en Montevideo en oposición a la de Buenos Aires (3).

Se mandó entregar alguna pólvora a los agentes de la Princesa, aunque el Gobierno no la tenía abundante.

(1) Pereira da Silva, "Historia da Fundação do Império Brasileiro"; refiriéndose a la "Defensa y Memorial" que sir Sidney Smith publicó en Londres en 1812.

(2) Pereira da Silva. Apéndice del tomo 3.

(3) Pereira da Silva. Nota de Lord Strangford, reclamando.

Se cerraron los ojos del Gobierno delante de las copiosas expediciones de víveres que, por cuenta de los particulares y bajo la garantía de Da. Carlota Joaquina, abastecían la sitiada plaza de Montevideo (1).

Desatendiendo las reclamaciones de Lord Strangford, se le mandó entregar al ministro español, marqués de Casa Irujo, un buque inglés con cargamento de armas para Buenos Aires que había recalcado a Río de Janeiro, con el pretexto de que navegaba con papeles españoles; y Casa Irujo lo envió a Montevideo.

No pudiendo obtener dinero del tesoro real, la princesa Carlota, parodiando ridículamente el grande acto de Isabel la Católica, mandó sus joyas a Montevideo, para que se vendiesen o rifasen, aplicándose el producto a la defensa de la causa de España.

Estos auxilios eran, sin embargo, insuficientes para cambiar el estado de las cosas en el Río de la Plata.

Las hostilidades de la marina de guerra contra Buenos Aires y las costas y puertos de los ríos, poco eficaces por sí mismas, eran contrariadas por la protección que la marina inglesa, bajo la inspiración de Lord Strangford, les daba a los buques que intentaban violar el bloqueo de las costas argentinas, al paso que el asedio de Montevideo, cuyos depósitos de víveres estaban agotados, privándola de toda provisión por tierra, la dejaba dependiente de lo que pudiera recibir por mar, siempre escaso e incierto.

Agravándose, por estas circunstancias, el con-

(1) Pereira da Silva. Nota de Lord Strangford, reclamando.

flicto y las penurias de la plaza sitiada, alarmado el Gabinete de Río Janeiro por las correrías de los orientales en los territorios fronterizos, y acusándolos de provocar la sublevación de los esclavos, propuso al Príncipe Regente, y obtuvo, la resolución de hacer pasar las fronteras al ejército de D. Diego de Souza, con los fines que ya quedan manifestados al comienzo de este capítulo.

Lord Strangford, que había ido reclamando contra todos los actos favorables a la resistencia de Montevideo, exasperado al último punto por la entrada del ejército portugués al territorio oriental, recurrió a los medios más audaces y decisivos, y los empleó con la mayor destreza.

Se dirigió al marqués de Casa Irujo, ministro de España, y lo dominó, alarmándolo sobre las intenciones del Gobierno Portugués que, aparentando socorrer a Montevideo, se apoderaría de esa plaza, anexando a sus dominios el territorio situado entre los ríos Uruguay y el Plata, satisfaciendo así el fin de la política tradicional de la casa de Braganza.

Entendiéndose en seguida con D. Manuel de Sarrautea, agente en Río de Janeiro de la Junta de Buenos Aires, y le demostró los peligros de la invasión portuguesa y la debilidad e inutilidad de los medios que pudiera emplear el gobierno revolucionario para resistirla.

Por último, dirigiéndose a D. Rodrigo de Souza Coutinho, Ministro de los Negocios Extranjeros de la Corte Portuguesa, le amenazó con que el Gobierno Británico le retiraría su protección al Príncipe Regente, cortaría con él sus relaciones diplomáticas, y emplearía fuerza británica contra todas las tentativas que hiciera en las Colonias Españolas.

En medio de tantas contrariedades y oposiciones, dice el historiador Brasileiro a quien vamos siguiendo, consiguió el espíritu perspicaz de Lord Strangford, aproximar a los disidentes y ponerlos de acuerdo sobre las bases de un acomodamiento mutuo. No accedió D. Rodrigo sin que se le hiciesen condiciones honrosas, para que se retirase el ejército portugués de los territorios de la Banda Oriental y se abandonase Montevideo a sus propias fuerzas. Se convino, entonces, en que la Junta de Buenos Aires aceptaría la mediación de los Gobiernos Portugués y Británico con el fin de que consiguiesen de la Regencia de España condiciones ventajosas a los pueblos del Plata, y particularmente la libertad de comercio con los extranjeros, “ para
“ lo que les daría plenos poderes para tratar con
“ la Metrópoli, depositando en sus manos y con-
“ fiándoles su futuro destino: “ que cesarian el
bloqueo y la guerra entre Buenos Aires y Montevideo, retirando la Junta sus tropas de la Banda Oriental y abandonando este territorio al General Elío; que el Río Paraná formaría el límite divisorio entre los Gobiernos de la Junta y de Montevideo; que se suspenderían, igualmente, las hostilidades entre Buenos Aires y Goyeneche; y que, finalmente, el Gobierno del Príncipe Regente mandaría a Buenos Aires un agente encargado de firmar con la Junta un armisticio en la forma de
“ las condiciones declaradas, y de recibir las con-
“ venientes garantías para el cumplimiento exacto
“ del acuerdo tomado, a fin de que el ejército portugués se pudiera retirar a la Capitanía del Río
“ Grande, mientras no decidía la Regencia de Es-

“ paña y las Cortes la suerte y gobierno de las Colonias del Río de la Plata ” (1).

Por este acuerdo se desvanecía el peligro en que colocaba al ejército sitiador de Montevideo la invasión portuguesa; pero a precio de que la revolución y el Río de la Plata le entregasen al Portugal y a la Inglaterra *su futuro destino*, como textualmente lo dicen.

Don Manuel de Sarratea, que había sido parte en la negociación, llegó a Buenos Aires en los últimos días de la Junta; y fué electo miembro del Triunvirato que la sustituyó el 23 de Septiembre de 1811.

Uno de los negocios que más inmediata y seriamente preocuparían al nuevo gobierno debió ser el acuerdo de Río de Janeiro, porque inmediato y serio era el peligro que estaba corriendo el ejército de la Banda Oriental.

Pero si se aceptaba la mediación portuguesa e inglesa en los términos del acuerdo, ese ejército sería salvado, pero la revolución del Río de la Plata estaba perdida.

El Portugal y la Inglaterra, con plenos poderes para decidir de su destino, habrían obtenido amplias franquicias comerciales, pero restableciendo en estos países la dominación de la Metrópoli. La mediación de esas dos naciones no podía dar, en aquellas circunstancias, ningún otro resultado.

Por fortuna, el General Elío había llegado a participar de las desconfianzas que inspiraban las intenciones de los portugueses; y en vista de las pruebas de su duplicidad y de su ambición que le presentó el Comisionado de Buenos Aires, pesando sobre él la responsabilidad de haber autorizado

(1) Pereira da Silva. Obra citada.

su invasión, desde que aceptó su concurso, se prestó a alejar el peligro que había atraído, negociando aislada y directamente con el Gobierno de Buenos Aires, que procedió en este asunto con extrema habilidad y suma diligencia.

Antes de cumplirse un mes de su instalación, el tratado con Elío estaba firmado, ratificado y en vía de ejecución.

Por ese tratado, de 20 de Octubre, el ejército de Buenos Aires evacuaría la Banda Oriental, que quedaba sujeta, con los tres pueblos de la margen derecha del Uruguay, a la autoridad de Elío; se levantaba el bloqueo y se restablecía el libre tráfico del río, percibiendo los impuestos cada una de las partes contratantes dentro de los territorios de su jurisdicción.

Por un artículo ofrecía Elío que las tropas portuguesas se retirarían a sus fronteras y dejarían libre el territorio español; y por otro se establecía que "en el caso de invasión por una potencia extranjera, se obligaban recíprocamente ambos Gobiernos a prestarse todos los auxilios necesarios para rechazar las fuerzas enemigas".

El ejército de Buenos Aires abandonó pronto y tranquilamente la posición en que asediaba a Montevideo, y en la cual había corrido el riesgo de verse estrechado entre los fuegos de la plaza y los del ejército portugués; y muy luego se trasladó a esta Capital, donde hizo su entrada, casi triunfal, el 1.º de Diciembre.

Al mismo tiempo que se desembarazaba de las graves atenciones de la Banda Oriental y adquiría la disponibilidad del ejército que allí tenía comprometido, el Gobierno de Buenos Aires mejoraba las condiciones de sus pueblos del litoral y aumen-

taba los ingresos de su tesoro por la actividad que recuperaba el tráfico mercantil, a consecuencia del levantamiento del bloqueo.

Estos resultados prácticos, y de la mayor importancia en la oportunidad en que los alcanzaba, no le imponían ninguna condición onerosa. Por el contrario, repelía, por el mismo acto que se los daba, las condiciones admitidas en Río de Janeiro.

En vez de entregar los destinos del país a las conveniencias del Portugal y de la Inglaterra, el tratado con Elío tenía por objeto confesado evitar la intervención extranjera; y sin esperar al Agente Portugués que debía venir a firmar el armisticio, después de recibir las garantías del cumplimiento de las condiciones impuestas en Río de Janeiro para el retiro del ejército portugués, se negoció y firmó el armisticio sin conocimiento de Portugal, y como un acto de desconfianza en las miras de su política, quedando don Javier Elío, que había llamado al ejército portugués, con el encargo de despedirlo, pura y simplemente, sin que tuviera nada que ver con eso el Gobierno de Buenos Aires.

Las otras condiciones pactadas con Elío podían ser impracticables y dar lugar, como dieron, a nuevas desinteligencias entre los Gobiernos de Buenos Aires y de Montevideo; pero lo más que de ello podía resultar era que el tratado de *paz* no fuera, de hecho, más que una *tregua*; siendo precisamente la tregua lo que estaba en la lógica y en las conveniencias de la revolución.

Este tratado desagradó a todos: al General Artigas y a los orientales, colocados en la disyuntiva de someterse a Elío o de emigrar de su país en presencia del ejército portugués, que ostensiblemente ha-

bía venido contra ellos; al Gobierno de Portugal, cuya acción y cuya influencia se repelía como un peligro; al ejército portugués, con el cual no se guardaba ninguna consideración; a la Princesa Doña Carlota Joaquina, cuya política se desairaba como la de Portugal; a Goyeneche y a los mandones del Perú, que alentados por los desastres de las armas de Buenos Aires, se intentaba detener en el camino de una victoria definitiva, con que ya se lisonjeaban; a los españoles de Buenos Aires, que ya creían posible una reacción, la meditaban y la preparaban; y a los mismos españoles de Montevideo que participaban de los propósitos y de las esperanzas de sus correligionarios del Perú y de Buenos Aires.

Las desaprobaciones, las resistencias y las complicaciones que ellas debían producir no se hicieron esperar.

Al abandonar el sitio de Montevideo el ejército de Buenos Aires, para trasladarse a esta Capital por agua, el General Artigas emprendió su retirada por tierra, en dirección al Uruguay.

No era ésta la retirada de un ejército; era la protesta de un pueblo.

Más de diez y seis mil personas, entre las que había ancianos, mujeres y niños, llegaron con el General a las márgenes del Uruguay.

No admitían la paz con los españoles, ni la tregua con los portugueses que se encontraban en armas en el territorio oriental, y respecto de los cuales se colocaron en abierta hostilidad de hecho.

En el tránsito, y luego en las costas del Uruguay, hubo varios encuentros sangrientos entre orientales y portugueses, y, entre ellos, algunos de mediana importancia, como el que tuvo lugar en el

paso de Yapeyú, en el Río Negro, donde el comandante oriental Ojeda derrotó a los portugueses, quedando prisionero su jefe, que lo era el río-grandense Benito Manuel Riveiro, tan conocido después por su valor personal y por el prestigio de que ha gozado entre sus comprovincianos, como por la batalla del *Sarandí* que perdió el 12 de octubre de 1825.

Artigas pasó el Uruguay y estableció en el Ayuí, provincia de Entre Ríos, el campamento de las tropas y del pueblo que le acompañaba, dejando en el Salto y en otros puntos de la costa oriental, partidas de caballería para seguir hostilizando a los portugueses, lo que nunca dejó de hacer.

Por su parte, el Gabinete Portugués recibió el tratado celebrado entre los Gobiernos de Montevideo y Buenos Aires, no sólo como un desastre de su política sino como una injuria; y bajo tan dolorosa impresión, resolvió que el ejército, que por aquel tratado debía evacuar el territorio oriental, permaneciese allí; encargando a su General de obtener la reparación condigna de la ofensa recibida y el ajuste de todas las dificultades que entonces existían, y han existido después, sobre límites, entrega de desertores, de esclavos, etc.

Luego que en este sentido se le dieron instrucciones y autorizaciones al General D. Diego de Souza, Doña Carlota Joaquina, que trataba de combinar la acción de Goyeneche, vencedor en el Alto Perú, y de Vigodet, que acababa de suceder a Elío en el Gobierno de Montevideo, con la de los reaccionarios de Buenos Aires y la del ejército portugués, para dominar pronto y sangrientamente el foco de la revolución (1), aprovechó la hora

(1) En carta de 23 de Noviembre le decía la Princesa

propicia y obtuvo una real orden reservada, del 1.º de Diciembre de 1817, por la que el Príncipe Regente autorizaba a Don Diego de Souza para que aun llegado el caso de evacuar el territorio a consecuencia de haber obtenido las reparaciones que demandaban al Gobierno de Buenos Aires, *no lo verificase, si esto le exigían los Generales Vigodet y Goyeneche.*

Esta real orden explica la complicidad del General a quien iba dirigida en las intrigas de Doña Carlota Joaquina y en los planes de los reaccionarios de Buenos Aires.

Cumpliendo las órdenes de su Gobierno, el expresado General dirigió al de Buenos Aires, el día 2 de Enero de 1812, una nota, que reviste el carácter de ultimátum, en la primera parte, de la conducta hostil del General Artigas, y formulando, en la segunda, las reparaciones que exigía Portugal.

Respecto al General Artigas, decía:

“ La demora y la conducta de D. José Artigas
“ en los territorios de esta campaña, que por el
“ convenio de pacificación celebrado entre V. E.
“ y el Excmo. Sr. Virrey D. F. Javier Elío, debía
“ haber evacuado hace mucho tiempo con las tropas de su mando, y los choques con que las dichas tropas usando de su mala fe, han trabado
“ con algunos destacamentos portugueses, desprevénidos en consecuencia de mis órdenes, para
“ observar en la parte respectiva lo estipulado por

a Goyeneche: “En tales circunstancias, creo de mi deber rogarte y encargarte que emplees todos tus esfuerzos en llegar cuanto antes a Buenos Aires y “acabes de una vez con aquellos pérfidos revolucionarios, con las mismas ejecuciones que practicastes en la ciudad de La Paz”.

“ el mismo convenio; y la dirección de sus mar-
“ chas sobre diversas vecindades de mi gobierno,
“ son objetos muy poderosos, que, en mi carácter
“ de general en jefe del ejército pacificador de la
“ campaña de Montevideo y de Capitán General
“ de la Capitanía de S. Pedro, me obligan a rogar
“ a V. E.; que si el dicho Artigas obra en virtud
“ de órdenes de ese Gobierno superior provisio-
“ nal, quiera expedirle inmediatamente otras, por
“ mi conducto o por el Excelentísimo Señor Capi-
“ tán General D. Gaspar Vigodet, para que den-
“ tro de un brevísimo plazo se traslade al interior
“ de los territorios de la jurisdicción de V. E.; y
“ si él procede por arbitrio propio, contra las de-
“ terminaciones de V. E., tenga a bien declararlo
“ *rebelde e infractor del convenio que queda men-*
“ *cionado.* Estimaré que V. E., accediendo a mi
“ proposición sin demora, restricción ni equívoco,
“ ratifique el concepto que formo de su integri-
“ dad; y sentiré la ocurrencia de alguno de estos
“ motivos, sin poder dejar de convencerme de que
“ V. E. al menos tolera, con desaire de su supe-
“ rioridad, tales procedimientos, a los que debo
“ obstar hasta por medio de la fuerza, si fuera in-
“ eficaz el recurso moderado que por la presente
“ solicito ”.

En la segunda parte, después de notar la cele-
ridad con que fué concluído el tratado de Octubre,
sin examinar las justas razones que tuvo el Prín-
cipe Regente para mandar entrar sus tropas al te-
rritorio de Montevideo, a cuya presencia se debió
la pacificación, y sin hacer mención de algunos
asuntos interesantes a las coronas de Portugal y
de España en esta parte de América, requería,
además de algunas estipulaciones relativas a lími-

tes, a las personas y bienes de los portugueses, y a la entrega de desertores y esclavos, que se le diesen las siguientes reparaciones:

“ 1.^a—Que los Gobiernos de Buenos Aires y
“ Montevideo reconozcan el desinterés, dignidad,
“ y justicia con que S. A. R. el Príncipe Regente
“ de Portugal mandó entrar sus tropas en esta
“ campaña, para el fin de conseguir una pacifica-
“ ción consolidada.

“ 2.^a—Que los mismos Gobiernos de Buenos
“ Aires y Montevideo se obliguen a no intentar
“ de hecho agresión alguna contra los dominios
“ de S. A. R. el Príncipe Regente de Portugal,
“ *salvo por orden expresa de la Regencia de Es-*
“ *paña.*

“ El general portugués declaraba que luego
“ que el Gobierno de Buenos Aires aceptase su
“ primera proposición (la relativa a Artigas) y
“ fuesen *sólidamente* (?) pactados los otros pun-
“ tos en ajuste solemne, sellado por él, en virtud
“ de los poderes que el Príncipe Regente, su au-
“ gusto soberano, le había dado, e igualmente por
“ el gobierno superior provisional de Buenos Aires
“ y por el capitán general D. Gaspar Vigodet, él se
“ retiraría inmediatamente a los dominios de su
“ su soberano, como se estipuló en el Convenio de
“ 24 de Octubre (el del Gobierno de Buenos Aires
“ con Elío): pero que si la resistencia a sus pro-
“ puestas “aumentaba sus fundadas desconfian-
“ zas a las otras que ya le causaran los movimien-
“ tos de Artigas, y la afectación del Gobierno an-
“ terior de Buenos Aires, que no dió respuesta
“ alguna directa a las propuestas y ofertas ami-
“ gables del Príncipe Regente, hechas de buena
“ fe, porque aun despreciando las *infames* pro-

“clamaciones publicadas contra su paternal administración, quiere que se consolide la futura tranquilidad de los Estados confinantes, y se establezca la perfecta armonía que debe existir entre los vasallos de dos potencias tan íntimamente aliadas, él—el General,—*tomaría las medidas que permite el derecho de gentes, para mantener en seguridad los dominios de S. A. R. en los términos que el mismo augusto señor le había ordenado, y de que no podía prescindir*”.

Y concluía estableciendo el plazo brevísimo de tres días para la respuesta.

Esto era buscar la guerra por el camino más corto.

En una forma provocativa, porque encerraba recriminaciones innecesarias y amenazas hechas con la mano en la empuñadura de la espada, se le exigía al Gobierno de Buenos Aires verdaderos imposibles, como, por ejemplo, el de que se obligase a respetar el territorio portugués aun en el caso de que en ese territorio no se respetase el derecho de gentes, permitiendo que los españoles, enemigos de la revolución, lo convirtieran en campo enemigo; pues a eso equivalía el obligarse a no hacer acto alguno, agresivo, por ningún motivo, ni aun en propia defensa, *sin orden expresa* del Gobierno Español.

Además, la realización de todo arreglo, cualesquiera que fuesen las concesiones del Gobierno de Buenos Aires, quedaba dependiente de la voluntad del General Vigodet, Gobernador de Montevideo, confabulado ya en aquella fecha con el General portugués, lo que lo hacía árbitro del éxito de la negociación.

Pero el Gobierno de Buenos Aires estaba bien

lejos de dejarse imponer ni de hacer concesión alguna.

Su contestación, que está firmada por D. Bernardino Rivadavia, como Secretario, es un documento serenamente firme, bien razonado, digno y hábil.

Principia por negar la personería del General portugués para exigir el cumplimiento de un convenio en que su nación no era parte, reservándose contestar al General Vigodet en orden a las dificultades que ofrezca el cumplimiento del tratado de 20 de Octubre.

Hace resaltar la buena fe del Gobierno de Buenos Aires, que ejecutó inmediatamente lo pactado, retirando su ejército por agua y emprendiendo su retirada por tierra la división de Artigas, cuya demora y demás actos explica como efecto de la necesidad en que lo constituyeran las circunstancias; al paso que el Gobierno de Montevideo no ha dado cumplimiento a ninguna de las partes del Tratado, *continuando el ejército portugués* en los mismos puntos que ocupaba en los momentos de la transacción, “ sin embargo, que su retirada constituyó la primera y la más importante de las obligaciones de Montevideo ”.

“ Querer que este Gobierno, dice, complete de su parte la ejecución de las condiciones, cuando Montevideo no da la menor demostración de realizar las que estipuló, sería comprometerlo a su degradación, faltando la reciprocidad esencial del convenio ”.

“ Respecto al 1er. artículo de las reparaciones exigidas por el Gobierno Portugués se manifestó que aunque el de Buenos Aires tuviera la “condescendencia” de reconocer, como se so-

“ licitaba, la dignidad, desinterés y justicia con
“ que S. A. R. el Príncipe Regente mandó entrar
“ sus tropas en nuestro territorio, el oficio del
“ General portugués de 6 de Septiembre de 1811
“ con el papel incluso, degradaría su concepto en
“ la estimación de los pueblos de las Provincias
“ Unidas, excitando sus justos resentimientos.
“ Además, agrega, el Gobierno no podía, sin ex-
“ ponerse a una contradicción real, hacer aquella
“ declaración “antes que el ejército portugués
“ evacue el territorio” en cuyo caso disipadas las
“ impresiones de una intimación que miraron los
“ pueblos con escándalo, como una violación de la
“ alianza entre España y Portugal, “como un
“ atentado contra sus derechos originarios”, no
“ debe dudar de todas las consideraciones debidas
“ a la buena fe de las intenciones de S. A. R. el
“ Príncipe Regente ”.

Y termina la contestación sobre este punto, di-
ciéndole al General portugués: “Hace muchos
“ días que reinaría la paz y el sosiego en la Ban-
“ da Oriental, si la invasión de las tropas de V. E.
“ no hubiera excitado en sus inocentes moradores
“ “fundados recelos de una conquista, que jamás
“ habrían consentido ”.

Respecto al 2.º artículo por el que se pretendía
que se obligase a no agredir el territorio portu-
gués “sin orden expresa” de la Regencia de Es-
paña, el Gobierno de Buenos Aires, le contestó:

“ Si el Gobierno no estuviera íntimamente con-
“ vencido de la circunspección de V. E. miraría
“ la proposición de este artículo como ofensiva a
“ su dignidad. El que no reconoce la autoridad
“ de la Regencia de España, no puede someter la
“ existencia de sus derechos a sus resoluciones.

“ V. E. debe vivir persuadido que este Gobierno
“ jamás cometerá ni permitirá que se cometa por
“ sus súbditos agresión alguna contra los domi-
“ nios de S. A. R. el Príncipe de Portugal, “si S.
“ A. R. observa una conducta recíproca. Pero si
“ se atacan nuestros derechos directa o indirecta-
“ mente, V. E. no dude que el Gobierno usará de
“ todos sus recursos para resistir la agresión, aun-
“ que se oponga el Gobernador de Montevideo y
“ la Regencia de Cádiz ”.

En cuanto a límites, declaró que no era oportuno tratar de las cuestiones de límites, mientras existieran en el territorio de Montevideo las tropas portuguesas; y que reservaba ese negocio para transarlo después de la evacuación, sin esperar las resoluciones de S. M. C., cuya autoridad, en medio de las dificultades que presentaba su redención de la cautividad en que vilmente lo tenía el usurpador de la Europa, “había retrovertido a los pueblos respectivamente”, y por consecuencia se hallaba refundida en el Gobierno respecto al territorio de su jurisdicción, como así lo había reconocido S. A. R. en contestaciones anteriores.

Todas las otras proposiciones, que eran de menor importancia, fueron contestadas en el mismo sentido y en el mismo tono.

La repulsa tan absoluta de todas las exigencias de la Corte de Portugal, era la aceptación de una ruptura.

III

El General Artigas solicita auxilios para continuar hostilizando a los portugueses.—El Gobierno resuelve dárseles y lo comunica al Gobernador Vigodet, reclamándole su concurso, en cumplimiento del tratado, para obligar a los portugueses a que evacuen el territorio.—Vigodet lo rehusa, declarando que estará con los portugueses contra Artigas.—Se hace evidente la coalición de los españoles y portugueses.—El Gobierno de Buenos Aires acepta la ruptura con los unos y con los otros, identificando la causa de la revolución con la defensa de la integridad territorial.—Esta política firme, era hábil.—Desconcierta al Gobierno Portugués, imponiéndole una guerra en favor del restablecimiento de la dominación española, a la cual no podría arrancarle la Banda Oriental, que era el objetivo secular de su política.—Cambio fundamental.—Anulación de la Carlota.—Restablecimiento de la influencia de Lord Strangford.—Resolución de ponerse en paz con Buenos Aires.—Misión de Rademaker con ese fin.—Se concluye un armisticio ilimitado.—Altivez del Gobierno de Buenos Aires.—Su superioridad moral.—Desagrado y dificultades que encuentra el armisticio.—Cómo desaparecen.—El armisticio ratificado tiene todos los efectos de un tratado.—Importa un gran triunfo.

Cuando el Gobierno de Buenos Aires repelía el ultimátum portugués, ya sus relaciones con el Gobernador de Montevideo se encaminaban también a una ruptura definitiva.

El general Artigas, por oficio firmado en su Cuartel general del Salto, el 24 de Diciembre de 1811, daba cuenta al Gobierno de las dificultades en que se había encontrado con los portugueses, de los combates que habían tenido lugar y del estado de guerra en que con ellos se encontraba.

“ Los orientales, le decía, tienen fijos los ojos
“ en la protección de V. E.; no son ya unos hom-
“ bres entusiasmados los que la imploran; yo pre-
“ sento ahora unos hombres comprometidos por la
“ necesidad: ellos son los hijos de la victoria: “pe-
“ ro se han visto precisados a tomar sus laureles
“ antes de recibir de V. E. la influencia que debe
“ hacerlos inmarcesibles.

El General Artigas anunciaba “ que la campa-
“ ña del año entrante iba a abrirse ” y pedía ser
socorrido para afirmar el triunfo.

“ Llegó el momento, exclamaba, Señor Exce-
“ lentísimo, y me veo precisado a poner a V. E.
“ en la invariable alternativa de ver a la Banda
“ Oriental cubierta de los cadáveres de sus dig-
“ nos hijos, arruinado el trono augusto de la li-
“ bertad y cubierto de la sangre vertida sin el
“ menor fruto, o de ver en los nuevos triunfos de
“ ellos unas glorias que, debidas al auxilio de V.
“ E., harán su más digno elogio, y marcarán una
“ época ”.

Para los orientales, la existencia de tropas por-
tuguesas en el territorio de su provincia, era la gue-
rra: la habían hecho e iban a continuarla, solos o
acompañados.

Al llegar a Buenos Aires el oficio del General
Artigas ya sabía el Gobierno que el General don
Diego de Souza había encaminado su ejército al
Uruguay para asentar sus reales en el Salto (como
lo hizo), a cuyo punto convergían diversas fuerzas
de la Provincia del Río Grande.

Esta concentración de fuerzas portuguesas sobre
el Uruguay, se explicaba por las hostilidades en
que se encontraban con Artigas; pero de hecho era,
con intención o sin ella, la ocupación de una posi-

ción estratégica que les permitiría trasladarse y estacionarse al otro lado del río a pretexto de las asechanzas de Artigas; o les serviría para oponerse a que lo vadeasen las tropas de Buenos Aires.

Este Gobierno no vaciló: resolvió socorrer a Artigas inmediatamente, y dispuso que el ejército, retirado de la Banda Oriental, reorganizado y aumentado, se transportase al Uruguay.

Al así disponerlo, dirigió al Gobernador de Montevideo la nota oficial de 1.º de Enero de 1812, en que después de comunicarle las noticias que había recibido del General Artigas sobre la conducta de los portugueses, que califica de escandalosa, le dice:

“ El Gobierno, convencido de la necesidad de
“ socorrerlo sin demora, ha dictado las providen-
“ cias correspondientes; porque no sería justo
“ abandonar aquellas familias que le siguen, a los
“ furores de un extranjero empeñado en realizar
“ sus conquistas sobre el territorio español, contra
“ todos los principios del derecho de gentes. Para
“ contener su orgullo, sólo resta que V. S., con
“ arreglo al artículo 17 del tratado de 20 de Oc-
“ tubre último, nos franquee los auxilios neces-
“ rios, “a no ser que el poder de su influjo pueda
“ conseguir del General portugués, que, suspen-
“ diendo toda hostilidad y retirando sus tropas de
“ aquellos puntos, deje a Artigas en libertad de
“ pasar al Uruguay y situarse en el territorio de
“ su jurisdicción, como estaba estipulado.”

“ *La agresión extranjera, agrega, es tan notoria*
“ *como la obligación de V. S. de concurrir a rechazarla*
“ *con todos los esfuerzos de su poder, poniendo*
“ *a disposición de este Gobierno las fuerzas*
“ *navales y cuanto necesita para la conducción de*

“ su ejército, en el caso que el General portugués
“ insista en ocupar nuestros campos, atacar nues-
“ tras divisiones y llevar adelante la hostilidad y
“ la *conquista*. ”

Cuando esta nota era enviada a Montevideo, el Gobierno de Buenos Aires conocía, porque eran notorias, las cordiales relaciones que existían entre el Gobernador Vigodet, a quien era dirigida, y el General portugués, contra el cual se requería su cooperación para obligarlo, por la fuerza, a evacuar el territorio que indebidamente ocupaba; y aquellas relaciones no podían dejar de haberle dado la presunción, si es que no tenía la certeza, de un acuerdo entre los portugueses y los españoles, a que no podía ser extraño el General Goyeneche, vencedor en el Alto Perú, cuyas fuerzas amenazaban la seguridad de las provincias libres del Virreynato.

La nota, pues, iba resueltamente, a colocar al Gobernador Vigodet en la necesidad ineludible de disipar por su propia mano las obscuridades en que se mantenían sus relaciones con los portugueses, aclarando y definiendo la situación.

Los siguientes § de la contestación de Vigodet, datada en Montevideo el 6 de Enero de 1812, satisficieron ese objeto.

“ Con estos y otros datos que no me dejan que
“ dudar de la criminal conducta del referido Ar-
“ tigas, ni de sus firmes ideas en sostenerse y con-
“ servarse en esta Banda con sus tropas, contra lo
“ estipulado en el art. 20, *en nada debo pensar que*
“ *en procurar la ejecución del art. 11* (la retirada
“ de los portugueses), hasta que V. E. no me acre-
“ dite haber cumplido por su parte, religiosamen-

“ te, los pactos con que se halla todavía ligado.
“ Por el contrario, estoy determinado, no sólo a
“ dejar obrar al ejército portugués contra el re-
“ belde Artigas y sus secuaces, para cortar el pro-
“ greso de los enormes perjuicios que ha ocasionado,
“ sino también a impedir, con todos mis
“ arbitrios, el paso a esta Banda de los auxilios
“ que V. E. ha acordado remitir con manifiesta
“ transgresión del art. 7. ”

“ Aun cuando no fueran fantásticas sino efectivas las quejas de Artigas contra los portugueses,” debería imputarse a sí mismo la culpa como origen y verdadero causante de ellas, y “no a estos aliados” que no hacen otra cosa que defenderse de sus insultos y atropellamientos “contra los derechos de su Gobierno y el mío. Ambos estamos conformes en la desconfianza y justos recelos de los movimientos de este insurgente, y de acuerdo caminaremos en rechazarle ofensivamente sus primeras tentativas hostiles, si V. E. no pone medios oportunos y eficaces para que se contenga. ”

Con esto estaba todo dicho, y las respectivas declaraciones eran un rompimiento consumado.

Las notas subsiguientes no contienen más que los motivos alegados por cada una de las partes para justificar aquel hecho, que no podía dejar de quedar y quedó subsistente.

Pero no debemos omitir los hechos con que el Gobierno de Buenos Aires justificó las justas desconfianzas que le inspiraba la política portuguesa y que determinaron su conducta en aquella grave emergencia.

En nota de 15 de Enero de 1812, dirigida al Go-

bernador Vigodet, decía el Gobierno de Buenos Aires:

“ Entremos por asentar que los portugueses han
“ avanzado nuestro territorio del mala fe, a pesar
“ del empeño que muestra V. S. en sostener lo
“ contrario en su último oficio. Es preciso que no
“ nos preocupemos en un negocio de tanta grave-
“ dad. V. S. sabe que el Diputado Dr. D. Juan
“ José Passo, que pasó a esa plaza en los primeros
“ momentos de nuestras desavenencias políticas,
“ manifestó por dos veces y con reiteradas protes-
“ tas al Gobernador Soria, a don Cristóbal Salva-
“ ñach y al comandante de Marina, los avisos ori-
“ ginales del Embajador Marqués de Casa Irujo
“ sobre las miras de conquista con que se prepara-
“ ban los portugueses a invadir nuestro territo-
“ rio, “cuya prevención hizo también a la provin-
“ cia del Paraguay.” Sabe V. S., también, las
“ gestiones que hizo la Infanta Doña Carlota para
“ que ese Cabildo le enviase Diputados, y venir
“ con ese pretexto, y el de sostener los dominios
“ del Rey su hermano, a ocupar esa plaza, cuya
“ propuesta fué altamente rechazada por el Go-
“ bierno de España: V. S. sabe y ha visto los ofi-
“ cios originales del General Souza, y del repre-
“ sentante de la Carlota don Felipe Contucci, en
“ que se exigió de esta capital el reconocimiento
“ de la Soberanía de aquella Señora en este conti-
“ nente,” ofreciendo unir sus fuerzas a las nues-
“ tras para rendir esa plaza en caso que manifes-
“ tase alguna oposición al proyecto, interceptando
“ la marcha del General Elío, para entregarlo en
“ nuestras manos. V. S. está fundamentalmente
“ instruido de las familias que vienen con el ejér-

“ cito portugués, del robo de nuestras caballadas
“ y haciendas, del empeño con que se hace correr
“ en Maldonado la moneda de aquella nación, de
“ los refuerzos que han recibido, del interés que
“ muestran en guarnecer nuestros pueblos, y la
“ eficacia que muestran en que todas nuestras
“ fuerzas pasen a esta capital. ¿Y V. S. puede
“ creer que esta conducta es compatible con la bue-
“ na fe? ¿Puede V. S. persuadirse que tanto in-
“ terés, tantos gastos invertidos en conducir y sos-
“ tener en nuestros campos un ejército respetable,
“ es sólo un obsequio a la plaza de Montevideo, o
“ un comedimiento desinteresado en favor de la
“ nación española, que, según sus mismos papeles,
“ está ya en su último período, asegurando la im-
“ posibilidad de que vuelva nuestro monarca a
“ España, y la “necesidad de desconocerlo aun
“ cuando se realizase este caso hipotético?” ¿Pue-
“ de V. S. imaginar que una potencia que ha sido
“ siempre rival de nuestro engrandecimiento;
“ que ha solicitado con el mayor ardor la posesión
“ de la Banda Oriental; que insensiblemente nos
“ ocupó en las guerras anteriores, y aun en plena
“ paz una porción la más preciosa”, ha de dejar
“ que se le escape la mejor oportunidad de satis-
“ facer sus deseos y sus miras ambiciosas? ¿Y es
“ posible que el temor de este suceso no se impon-
“ ga en el ánimo de V. S. cuando tanto se resiente
“ de la existencia en el Uruguay de una pequeña
“ división de españoles (la de Artigas)” acaso el
“ único respeto que contiene la ejecución de los
“ proyectos de los limítrofes? ¿Y quiere V. S. que
“ se la deje abandonada para que destruída por
“ los portugueses, no tengamos otro arbitrio que
“ sucumbir a la ley que tratan de imponernos? ”

Vigodet no desconocía ninguno de los hechos enunciados en esta nota, ni la existencia del peligro que con ellos se evidenciaba; pero, enegrecido por el odio y por las ilusiones de los reaccionarios españoles, comprometía a sabiendas la integridad territorial, aceptando de nuevo la cooperación de las armas portuguesas para combatir la revolución.

Por igual precio habría podido tenerla antes que Vigodet el Gobierno de Buenos Aires.

No la quiso; y esto honra la política de aquel Gobierno, que ante una coalición, relativamente poderosa, aceptó la guerra, identificando con la causa de la revolución la defensa de la integridad territorial.

Tenía que sostener esa guerra en las Provincias del Norte, con el ejército engreído que, desde el Alto Perú, avanzaba sobre ellas; en el Uruguay con los portugueses; en todo el litoral con los españoles de Montevideo, que dominaban el río; pero no vaciló, proveyendo a todo con escasos recursos, pero con reposada y viril resolución.

Esta política firme, era, precisamente por eso, hábil, pues que ponía al Príncipe Regente de Portugal y a Lord Strangford en un trance decisivo.

La Corte de Portugal residía temporalmente en América; pero Portugal estaba en Europa ligado y sometido a todas las combinaciones de la política europea; había podido y podría, sin mayor inconveniente, ocupar la Banda Oriental dominada por los revolucionarios, ostensiblemente contra éstos, y como medida de propia seguridad; pero aliado franco de la España para *sofocar la revolución en el Río de la Plata*, esa alianza no podía darle más que uno de estos dos resultados: o caer vencido

con España, si triunfaba la revolución, o si la revolución era vencida, dejar a la Banda Oriental en poder de España, a la cual no podría arrebatarla sin empeñarse en una guerra en Europa.

Las intrigas en que se había dejado comprometer, lo llevaban a donde no quería ni le convenía ir, imponiéndole todos los sacrificios de una guerra que, en definitiva, le haría imposible la adquisición de la Banda Oriental, que era el objetivo secular de su política.

Sólo podía conservar la esperanza y la posibilidad de anexionar aquel precioso territorio, que le daría por límite el Río de la Plata, dejándolo en poder de los revolucionarios.

Esto era lo que estaba en el interés de las ambiciones portuguesas; y como ese interés se combinaba de hecho, aunque con otro propósito, con la política inglesa, representada por Lord Strangford, este diplomático no necesitó hacer grandes esfuerzos para hacerla prevalecer, recuperando sobre el Príncipe Regente su dominante influencia, pasajeramente debilitada.

La de la Princesa Carlota, quedó más que vencida, anulada, porque el cambio fué radical y definitivo, resolviéndose la evacuación de la Banda Oriental, desligándose de todo compromiso con las fuerzas beligerantes de España en estos países, para poder observar en la guerra que ellas mantenían la más estricta neutralidad.

Como medio de llenar, por un solo acto, todos estos fines, se adoptó el de celebrar un *armisticio ilimitado* con el Gobierno de Buenos Aires.

La negociación de este arreglo se confió al Teniente Coronel D. Juan Rademaker.

Apenas tomadas estas resoluciones, los ingleses

se las hicieron saber confidencial y secretamente al Gobierno de Buenos Aires, de manera que cuando llegó el enviado portugués todo estaba dispuesto para concluir la negociación en breves horas.

El señor Rademaker desembarcó en Buenos Aires el 26 de Mayo de 1812, siendo recibido en el muelle con la mayor cortesía y conducido al Fuerte, que era la casa oficial del Gobierno, en la cual se le había preparado alojamiento. A las siete de la noche tuvo lugar la audiencia de recepción del enviado; y acto continuo, en la misma audiencia, principió y concluyó la negociación del armisticio ilimitado, quedando redactado y firmado el respectivo convenio.

Tan extraordinario como el suceso mismo, fué el documento con que el Gobierno lo puso inmediatamente en conocimiento del pueblo, por medio de la *Gaceta Extraordinaria Ministerial*, publicada en las primeras horas de la mañana del 27 de Mayo; y cuyo texto debemos reproducir íntegramente.

Dice así:

“ Ayer llegó a esta capital el Teniente Coronel D. Juan de Rademaker en clase de Enviado Extraordinario de S. A. R. el Príncipe Regente de Portugal. Fué recibido en el muelle por uno de los edecanes del Gobierno Superior, y conducido al palacio de la Fortaleza, en donde se le tenía ya preparado el correspondiente alojamiento. A las 7 de la noche pasó el Secretario de Estado a cumplimentarlo, y anunciarle la audiencia que le acordaba el Gobierno en la sala de su despacho. Pasó inmediatamente el Enviado y fué recibido por S. E. con las mayores demostraciones de estimación y de aprecio.

“ Reconocidos sus diplomas y abierta la sesión,
“ expuso que las miras de S. A. R. no tenían
“ otro objeto que restablecer sólidamente las re-
“ laciones de paz, amistad y buena armonía entre
“ ambos territorios; que a este fin se había anti-
“ cipado S. A. en comunicar sus órdenes al Ge-
“ neral D. Diego de Souza *para que con todo su*
“ *ejército y sin pérdida de instantes se retirase*
“ *a las fronteras portuguesas*; que lo suponía ya
“ en la marcha, mediante a que había remitido
“ los pliegos en la semana anterior; y que para
“ formar y sancionar los tratados de la negocia-
“ ción *pedía, a nombre de S. A. R. el Príncipe*
“ *Regente, que cesasen las hostilidades entre am-*
“ *bos ejércitos; y no se embarace la retirada del*
“ *portugués a su territorio*. Al mismo tiempo pre-
“ sentó un oficio del embajador de S. M. B., cer-
“ ca de S. A., en que interponía la mediación y la
“ garantía del Rey de la Gran Bretaña sobre la
“ firmeza y validación de los tratados que se ce-
“ lebren. El Gobierno, fiel a sus principios, y *pa-*
“ *ra dar una prueba positiva de que las armas*
“ *victoriosas de la patria no tienen otro objeto*
“ *que abatir el orgullo de los tiranos, y defender*
“ *con honor la libertad y la independencia civil*
“ *de las Provincias Unidas del Río de la Plata,*
“ *ha venido en conceder el armisticio y mandar*
“ *retirar nuestras tropas del territorio portugués,*
“ *ínterin se concluye la negociación y se ratifican*
“ *los tratados con intervención de las autoridades*
“ *respectivas, de que instruirá inmediatamente a*
“ *los pueblos para su inteligencia y satisfacción.*
“ Buenos Aires, 27 de Mayo de 1812.—“Feli-
“ ciano Chielana,—Juan Martín de Pueyrredón—

“ Bernardino Rivadavia—Nicolás de Herrera,
“ Secretario ”.

Según los términos de este documento, admitidos por el Enviado Portugués que en ninguna forma ni en ningún tiempo los desautorizó, el convenio de armisticio firmado el 26 de Mayo no fué el resultado de una negociación diplomática.

El Enviado Portugués, declarando que se había ordenado la evacuación de la Banda Oriental por el ejército de Portugal, al que ya suponía en marcha con ese objeto, se limitó a pedir “ que cesasen las hostilidades entre ambos ejércitos y “ que no se embarazase la retirada del portugués “ a su territorio ”; y el Gobierno que oía el pedido, fuerte en sus armas, puesto que las declara victoriosas, se limita, por su parte, a decir: vengo en conceder el armisticio.

El Senado de Roma, oyendo la petición del legado de un pueblo enemigo que se reconociera débil ante él, no habría procedido de otro modo, ni tenido otra fórmula: ¡vengo en conceder!

Esta fórmula, inadmisibile en las negociaciones diplomáticas, no correspondía tampoco a la verdad de las respectivas situaciones, bajo el aspecto de la fuerza material.

La del Gobierno de Buenos Aires estaba todavía bien lejos de ser preponderante. Había reorganizado y aumentado el ejército del Norte, que a las órdenes del General Belgrano marchaba en la dirección de Jujuy, y el de la Banda Oriental que se encaminaba al Uruguay; pero ni el uno ni otro se habían encontrado con el enemigo; y, por consiguiente, el resultado de las operaciones que iban a emprender, era todavía el secreto del porvenir. Después de levantado el sitio de Montevideo, el úni-

co que había tenido ocasión de ilustrar las armas patrias era el General Artigas, que, con ellas, mantuvo viva la protesta contra la ocupación portuguesa.

A pesar de esta protesta, el ejército portugués se conservaba entero, porque sus bajas eran reemplazadas por oportunos refuerzos; contaba asegurada su base de operaciones en la Provincia del Río Grande, y combinado con las fuerzas españolas de Montevideo, que tenían el dominio fluvial, podía oponer en la Banda Oriental una resistencia formidable.

Pero el Gobierno de Buenos Aires estaba, en esta emergencia, moralmente muy arriba del Gobierno Portugués; y de esto provenía la superioridad de que usó, y de que abusó, en la forma externa que le dió al armisticio.

El Gobierno Portugués había perdido su rumbo en el dedalo de intrigas en que se dejó comprometer; y para recuperarlo, le era forzoso ponerse en paz con el Gobierno de Buenos Aires, lo que le colocaba en la dependencia de este Gobierno, sin cuyo asentimiento no podía quedar restablecida.

El documento publicado por el Gobierno de Buenos Aires debía contrariar poderosamente al negociador portugués, que no podía dejar de prever el desagrado natural y justo de su Soberano; pero él había obtenido de hecho, todo lo que había venido a buscar, y era muy difícil que tomase la responsabilidad de comprometer este resultado, tan deseado por su Gobierno, por un acto de vanagloria que no se registraba en la convención del armisticio, que había autorizado con su firma.

A esta contrariedad se agregaron otras que le co-

locaron en una situación tan desagradable como difícil.

El General D. Diego de Souza había recibido las órdenes de retirada a que se refirió el Enviado Portugués en la audiencia del 26 de Mayo; pero aquel General resolvió ganar tiempo, esperando el resultado, que creía favorable y próximo, de las combinaciones en que estaba comprometido con las autoridades de Montevideo y con los reaccionarios de Buenos Aires.

Celebrado el armisticio, y al comunicárselo, el Enviado Portugués le apremió al pronto cumplimiento de las órdenes reales que anticipadamente tenía para evacuar el territorio español.

El General, que ya le había indicado al Enviado los compromisos contraídos *bona fide* y con autorización bastante, los que, en verdad, constituían un caso de honor no sólo para él sino para su mismo Gobierno, contestó a la comunicación del armisticio *que no lo ejecutaría antes de estar debidamente ratificado*.

En vista de estos retardos y del descubrimiento de la conjuración, en que aparecía iniciado el General portugués, el Enviado Rademaker, para hacer constar la lealtad con que procedía en la misión que se le había confiado, comunicó al Gobierno de Buenos Aires lo que oficialmente le decía el General D. Diego de Souza, respecto a la conducta que se proponía seguir mientras no le constase la ratificación del armisticio; y solicitó su pasaporte para ir a informar personalmente a su Corte.

Por el mismo buque en que seguía viaje Rademaker, el Gobierno de Buenos Aires, cuyas desconfianzas se habían despertado de nuevo, con fecha 26 de Agosto se dirigió al de Portugal, relatando lo

ocurrido y pidiendo lo que era del caso para aclarar y definir la situación.

Mientras navegaba en dirección a Río de Janeiro el buque en que iba esta nota y la persona del Enviado Portugués, el Gobierno del Príncipe Regente deliberaba y resolvía definitivamente el asunto.

El Príncipe Regente no había disimulado su desagrado por la forma en que había sido tratada y concluida la negociación; pero necesitaba tanto la paz para recuperar la libertad de su política tradicional, que mandó ejecutar fielmente el armisticio, y limitándose a retirar a su inhábil negociador, ratificó lo hecho y restableció sus buenas y amigables relaciones con el Gobierno de Buenos Aires, por la siguiente nota de su Ministro de Negocios Extranjeros:

“ Exemos. Señores:

“ Hace pocos días que por conducto de una embarcación inglesa recibí la respuesta de VV. EE., fecha 17 de Julio pasado, sobre el resultado de la Comisión del Teniente Coronel Juan de Rademaker; y habiendo, entonces, llevado a la presencia de S. A. R. el Príncipe Regente de Portugal, mi amo, la convención del armisticio, que allí se ajustó entre ese Gobierno y aquel negociador portugués en 26 de Mayo, se dignó S. A. R. aprobar los términos de aquella Convención, cuyos saludables efectos tuvieron luego su ejecución, pues que habiendo cesado las hostilidades entre los dos ejércitos, las tropas portuguesas comenzaron, sin pérdida de tiempo, su retirada para dentro de sus respectivos límites, del modo que el rigor de la estación y alguna falta de transporte se lo han podido permitir.

“ Esperando, pues, S. A. R. que a este paso se
“ sigan, por un efecto de la buena fe con que él se
“ dió, todas las ventajas que con este arbitrio se
“ procuraron a los dos países, renovándose aque-
“ llas relaciones de amistad y buena inteligencia
“ que tanto conviene a los recíprocos intereses de
“ dos naciones vecinas, y unidas por vínculos tan
“ sagrados, ha determinado que se retire el nego-
“ ciador portugués, como que no es ya necesaria
“ ahí su permanencia; y ordenándome que así lo
“ participe a VV. EE. tengo yo con esta gustosa
“ ocasión la de renovar a VV. EE. las protestas de
“ la más distinguida consideración con que tengo
“ el honor de ser de VV. EE. su mayor y más segu-
“ ro servidor.—“Conde das Galveas”.—Excmos.
“ Señores Presidente y Vocales de la Junta Gu-
“ bernativa de Buenos Aires.—Palacio del Río de
“ Janeiro, a 13 de Septiembre de 1812 ”.

El 1.º de Octubre desembarcaba Rademaker en Río de Janeiro, y el día 3 era contestada la nota del Gobierno de Buenos Aires, manifestando “que
“ no había podido dejar de merecer la mayor de
“ aprobación de S. A. R. la conducta de su nego-
“ ciador, tanto por haberse retirado antes de re-
“ cibir órdenes o permiso para hacerlo, cuanto
“ por haber dado motivos de inquietud a ese Go-
“ bierno por su prematura salida y por la sinies-
“ tra inteligencia que dió a los términos del Ge-
“ neral, a quien no podía censurar la expresión
“ de no juzgar obligatorias las estipulaciones del
“ armisticio antes que ellas recibiesen la real
“ aprobación; máxime cuando no por eso dejaba
“ de proseguir en su retirada para las fronteras
“ portuguesas, de conformidad con las reales ór-
“ denes que para esto había recibido ”.

Agrega, que todas las dudas habrían cesado, si el Gobierno de Buenos Aires hubiese recibido la nota de 13 de Septiembre (que es la que dejamos transcrita) enviada bajo la dirección de Rademaker con las órdenes correspondientes para el General portugués, por una fragata inglesa que zarpó de aquél para este puerto.

“ En tales circunstancias, concluye, resolvió S. A. R. que se enviase por un expreso a ese Gobierno el duplicado del oficio en que le comunicó la aprobación del armisticio, enviándole, también, el duplicado de las órdenes que, en conformidad con esa real resolución, se habían mandado al General del ejército portugués a fin de que desde allí se le remitiesen del modo más oportuno y breve que se le presente al Gobierno de Buenos Aires ”.

Esta nota venía acompañada de otra de Lord Strangford, de la misma fecha, dirigida al Gobierno de Buenos Aires, en que aseguraba igualmente haber sido inesperada en aquella Corte la vuelta del enviado de S. A. R. que sólo a ella se debía el que no hubiese llegado a las manos del gobierno la aprobación del tratado celebrado con Rademaker; que las medidas de pacificación adoptadas por ambos Gobiernos habían sido tan conformes a las intenciones y deseos de la Corte Británica, que le hubiera sido sobremanera sensible cualquiera desavenencia a que hubieran dado lugar las interpretaciones de un acontecimiento que nunca pudo perverse en la Corte del Brasil.

Estas palabras del Embajador de la Gran Bretaña desvanecieron todas las dudas y cerraron el proceso de aquella negociación.

No se dijo una palabra más; todas las condicio-

nes del armisticio se cumplieron por ambas partes, con entera lealtad; y como era ilimitado y produjo la renovación de las relaciones de amistad, buena inteligencia y comercio entre los países que lo celebraron, tuvo todos los efectos de un tratado de paz.

El armisticio fué para el Gobierno de Buenos Aires un triunfo que le dió los más importantes resultados.

— 1172 —

IV

Restablecimiento de la disciplina militar.—Sublevación del Regimiento de Patricios.—Represión severa.—Labor incesante del departamento de la guerra a cargo de D. Bernardino Rivadavia.—Enumeración de los trabajos más importantes.—Se levanta el espíritu público: donaciones populares para la adquisición de armamento.—Las señoras de Buenos Aires.—Cambio radical en la situación militar.

Entre los motivos alegados por el Triunvirato para concentrar la acción del Ejecutivo y libertarse de las trabas que podían entorpecerla o debilitarla, mencionaba la *relajación de la disciplina militar*; y para restablecerla en el Regimiento N.º 1, compuesto en una gran parte del Regimiento de Patricios (hijos de Buenos Aires) entregó su mando al entonces Coronel D. Manuel Belgrano.

Este jefe se propuso someter a los Patricios a la disciplina de los cuerpos veteranos; y ellos, que habían formado un cuerpo cívico, trabajado por influencias políticas, que se la habían dado en los sucesos, no podían acomodarse, de buen grado, al rigor de las ordenanzas militares, que, además, le era impuesto por un gobierno que no tenía sus simpatías, porque el mayor número de aquellos Patricios pertenecía al círculo desalojado del poder por la disolución de la *Junta Conservadora*.

Estaban, pues, los Patricios desagradados y mal dispuestos, cuando Belgrano resolvió que se corta-

sen las *trenzas* que usaban y los distinguían de los otros cuerpos del ejército. Esta medida, que juzgaron afrentosa, colmó su irritación, y se sublevaron en la noche del 6 de Diciembre de 1811 contra el Coronel y Oficiales, a los que arrojaron del cuartel.

Los sublevados eran, próximamente, 1.000 hombres; y al amanecer el día 7 estaban atrincherados en su cuartel, cerrando con artillería las bocacalles inmediatas, y en abierta rebelión contra el Gobierno.

Tenía éste a mano, por fortuna, al ejército de la Banda Oriental, que recientemente había regresado a Buenos Aires.

Cercados los sublevados por este Ejército, el Gobierno, por medio de una proclama que les leyó el Edecán Igarzábal, les intimó que depusieran las armas, confiando en la clemencia del gobierno, sin temor alguno, y bajo su palabra de honor, empeñada a nombre de la Patria, de que oiría sus peticiones deducidas con subordinación; advirtiéndoles que si, obstinados, pensaban sostener el desorden, el ejército y el pueblo irritado los harían entrar en sus deberes.

Los sublevados, sordos a la voz paternal del Gobierno, lo fueron asimismo a los razonamientos de los Obispos de Buenos Aires y de Córdoba, a todas las intimaciones verbales y a las advertencias que se les hicieron.

Agotados estos medios, el gobierno volvió a hablarles, por última vez, en los siguientes términos:

“ Soldados: sólo la seducción de los enemigos
“ de la patria ha podido conducirnos a la insurrección
“ contra el Gobierno y vuestros Jefes. Ceded
“ en obsequio de la causa sagrada que habéis sos-

“tenido con vuestra sangre: ceded por el amor de vuestros hijos y de vuestras familias, que serán con el pueblo envueltas en los horrores de la guerra civil: ceded, en fin, por obsequio a vuestros deberes, y un velo eterno cubrirá para siempre vuestra precipitación y el delito de sus autores. De lo contrario, “todo está pronto para reduciros a la fuerza y vosotros responderéis de tan funestos resultados”. Buenos Aires y Diciembre 7 de 1811.—Feliciano Antonio Chielana.—Manuel de Sarratea.—Juan José Passo.—Bernardino Rivadavia, Secretario;—Nicolás Herrera, Secretario”.

Desatendida también esta intimación, Rivadavia firmó la orden para que los sublevados fueran sometidos a la fuerza, asaltándolos a todo costo.

Recibida esta orden, el entonces Coronel D. José Rondeau, jefe del ejército de la Banda Oriental, al frente de 300 Dragones desmontados, se lanzó personalmente sobre una pieza de artillería, que tenía al frente en la bocacalle, y se apoderó de ella sufriendo un tiro a metralla. Simultáneamente, las tropas que ocupaban la torre de la Iglesia de San Ignacio (el Colegio), y las otras alturas que circunían la posesión de los sublevados, rompieron el fuego, secundando el ataque del Coronel Rondeau. Después de catorce minutos de un fuego vivo e incesante, los sublevados tuvieron que rendirse a discreción, entregándose a la clemencia del Gobierno.

“El Gobierno, dice el historiador de Belgrano, templado por la fibra de Rivadavia, estaba resuelto a hacer un severo escarmiento, y se mostró inflexible a los ruegos de las familias llorosas que pedían gracia. En menos de tres días sustanció la causa, aunque, según la expresión de un historia-

dor, no firmó la sentencia con ojo enjuto. El día 11 fueron pasados por las armas once de los amotinados: condenados a presidio los menos culpables, disueltas las tres compañías que habían encabezado la sedición, y despojado el Regimiento de su número de honor, de su antigüedad y de su uniforme.

“ Estas medidas de rigor fueron seguidas por un acto de violencia menos justificado. Apareciendo algunos leves indicios que la sublevación reciente había sido promovida por el partido del movimiento de 5 y 6 de Abril, y que el objeto era restablecer la Junta Conservadora, el Gobierno, apoyado en tan débiles fundamentos, ordenó que los antiguos Diputados de las Provincias salieran de la Capital en 24 horas ” (1).

Este escarmiento fué tan saludable como justificado, porque si, aflojados, cual estaban, los vínculos de la subordinación militar, entre tropas que ya habían intervenido en conspiraciones y vuelcos políticos, el Gobierno hubiera capitulado o dejado impune un Regimiento que se amotina y arroja sus jefes, que le desoye, desacata sus órdenes y hace fuego sobre los encargados de hacerlas cumplir, habría concluído con la disciplina del ejército entero, cuando ella le era imperiosamente exigida por los más altos intereses y por el honor del país.

D. Bernardino Rivadavia se recibió de la Secretaría de la guerra cuando los desastres de las armas patrias comprometían los destinos de la revolución; y, para salvarlos, consagró su inteligencia y su voluntad poderosa al restablecimiento de la disciplina y a la reorganización y el aumento de todos los elementos militares de que se pudiera

(1) Mitre. “Historia de Belgrano”.

disponer. La labor de este departamento de la administración pública, tan incesante como bien entendida, puede, todavía hoy, estudiarse con provecho.

El resumen de sus trabajos en seis meses, es el siguiente:

“ Se creó un Estado Mayor General para consultar la organización, uniformidad y disciplina del ejército, que se hallaba en un estado lamentable, a cuyo fin se formó la instrucción que debía regirlo.

Bajo la dirección del Estado Mayor general se hizo un plan metódico para la reforma del ejército, dando nueva planta a los regimientos, separando a los oficiales superfluos, quitando agregados, y restableciendo la subordinación, en cuya empresa se vencieron obstáculos de mucho bulto.

Se plantificaron fábricas para fundir cañones y hacer pólvora, mejorando la economía y dirección de las dos de fusiles que existían, una en la capital y la otra en Tucumán.

Se cuidó de cerrar el Paraná a los enemigos, por medio de fuertes baterías en el punto del Rosario y de una cadena que debía colocarse para ese objeto, dejando expedita la navegación y el comercio hasta el Paraguay, y las comunicaciones con la Banda Oriental.

Se formó un reglamento para el gobierno y administración de la marina en todos sus ramos; un plan de nueva forma militar y económico de todos los cuerpos del ejército; un plan económico del parque y almacenes de artillería; un plan de ataque de diversos puntos de la Banda Oriental; una instrucción para los Comisarios de Guerra evitando la dilapidación y el abandono en

que estaba este ramo importante del servicio militar; se decretó la creación de un regimiento de granaderos a caballo, de otro de infantería en la Banda Oriental con el N.º 7, y de otro de la misma arma para Corrientes y sus dependencias; se arreglaron las guardas cívicas de la Capital y de las Provincias y las milicias de Catamarca; se comunicaron Códigos de instrucción para la infantería y caballería, y para la artillería en campaña; se simplificó el manejo del arma; se aprobó un prontuario instructivo de Generales; se organizó un plan de defensa de la Capital y sus dependencias para el caso de ser invadida; se socorrió a los ejércitos del Perú y de la Banda Oriental con dinero efectivo y porción considerable de vestuarios, artillería, municiones y toda clase de armas, siendo, además, reforzados con divisiones relativamente fuertes.

Se levantó el espíritu público; y la evidencia del peligro y de los esfuerzos que hacía el Gobierno para desvanecerlo, restableciendo el poder y la fortuna de las armas de la patria, encontró en la opinión y en el sentimiento popular cooperación entusiasta y ejemplar.

Por ejemplo: Faltando fusiles se encargaron secretamente a los Estados Unidos, pero llegados al puerto en Mayo de 1812, el Gobierno carecía de todo el dinero necesario para pagarlos al contado. Conocida esta necesidad, los ciudadanos, que ya habían hecho otras erogaciones patrióticas, se presentaron al Gobierno haciendo donaciones de dinero, para "aliviar, decían, el fondo público en el pago de armamento que con tanta satisfacción acaba de recibirse; suplicando se mandase grabar en cada fusil el nombre del que satisfacía su valor; pa-

ra que al recibirlos en nuestras manos cuando la necesidad lo exija o el Gobierno lo ordene, recordemos el juramento de preferir la muerte a la humillación y esclavitud de la patria " (1).

Las Señoras de Buenos Aires, que, como las antiguas sacerdotisas, conservaban vivo el fuego sagrado, trasformaron este movimiento de opinión en un nuevo estímulo para los soldados de la independencia, pidiendo que se grabasen sus nombres en los fusiles que ellas iban a costear — " Si el amor de la Patria, le decían al Gobierno, deja algún vacío en el corazón de los guerreros, la consideración del sexo será un nuevo estímulo que les obligue a sostener con su arma una prenda del afecto de sus compatriotas, cuyo honor y libertad defiendan. Entonces tendrán ellas un derecho para reconvenir al cobarde que con las armas abandonó su nombre en el campo del enemigo, y coronarán con sus manos al joven que presentando en ella el instrumento del triunfo, dé una prueba de su gloriosa valentía. Y cuando el alborozo público lleve hasta el seno de las familias la nueva de la victoria, podrán decir en la exaltación de su entusiasmo: " Yo armé el brazo de ese valiente que aseguró su gloria y nuestra libertad " (2).

Merced a este espíritu y a la acción inteligente y vigorosa del Gobierno, la situación militar cambió radicalmente: al desaliento, sucedió la esperanza y

(1) Esta solicitud y los nombres distinguidos que la firmaron, se encuentra en la "Gaceta Ministerial" de 12 de Junio de 1812.

(2) La nota, fecha 30 de Mayo, que contiene estas palabras, con los nombres de las señoras que la firman, está publicada en la "Gaceta Ministerial" de 26 de Junio de 1812.

el entusiasmo; a la desorganización, el orden administrativo; al ejército desecho en el Desaguadero, y que retrocedía ante el enemigo victorioso, el ejército rehecho y aumentado, que se adelantaba a detener al enemigo; al ejército que levantaba el sitio de Montevideo y evacuaba la Banda Oriental, al ejército que se encaminaba al Uruguay para recuperar el dominio de la Banda Oriental y restablecer sólidamente el sitio abandonado.

V

Conjuración de los españoles encabezada por D. Martín de Alzaga.—Elementos de que podía disponer.—Las disidencias de Chiclana y Pueyrredón, miembros del Gobierno, retardan el descubrimiento.—Actitud de Rivadavia: serena e inteligente energía: él solo dispone las primeras prisiones y extiende la primera sentencia de muerte.—Con la ejecución del primer conjurado, los patriotas se ponen en acción, se arman y dominan las calles; la conjuración queda desconcertada y los conjurados aislados, aterrados e impotentes.—Ahogada la reacción en la sangre de Alzaga y de muchos de sus cómplices, Rivadavia impide que las ejecuciones y los procesos excedan el límite de la necesidad.—Identidad de propósito, de acción y de resultado.—Liniers y Alzaga.—Moreno y Rivadavia.—Dependencia en que se encuentran los sucesos, la gloria militar y el aparecimiento de los grandes Capitanes de la inteligencia, y de la acción de los hombres civiles.

No se hubieran alcanzado los resultados que debían esperarse del cambio de la situación militar, sino hubiérase descubierto a tiempo la grande conjuración que tramaban en Buenos Aires los españoles, y que ocultaba, entre las sombras del misterio, los destinos de esta Capital, y, quizá, los de la revolución que en ella había tenido su cuna.

Tenía por jefe a D. Martín de Alzaga, el famoso Alcalde de la defensa de 1807, hombre entero, altivo, acaudalado, y, en aquella época, el más audaz y prestigioso de los peninsulares.

Los elementos de que disponía eran relativamente poderosos; y, con razón, confiaba en el éxito.

En esta ciudad las tropas que la guarnecían

eran tan escasas (1), como crecido el número de los españoles europeos, fanatizados, y decididos, de que Alzaga podía disponer, y con los cuales, sobre todo cayendo de sorpresa sobre las tropas podría apoderarse, con la seguridad que es posible tener en este género de empresas, del gobierno y de la Ciudad, siendo inmediatamente auxiliado y reforzado por la escuadrilla sutil, que estaba fondeada en las balizas exteriores, al mando de los marinos españoles, con más de quinientos hombres de desembarco, que acudirían al primer golpe en sostén de los conjurados.

Apoderado Alzaga de Buenos Aires, trasladarían a esta ciudad las tropas españolas disponibles en Montevideo, y el ejército portugués del mando de D. Diego de Souza, que obedecía las inspiraciones de la Princesa Da. Carlota Joaquina y se encontraba acantonado en el Salto del Uruguay, teniendo allí a su disposición más de cincuenta buques del tráfico, que le servirían de trasportes.

Para estas operaciones, los españoles habían reunido entre sí cerca de medio millón de duros, enviándole las listas de los suscritores a D. Diego de Souza, como documento fehaciente de los medios de los conjurados (2).

(1) Según el Dr. D. P. J. Agrelo, actor de estos sucesos, la guarnición no pasaba de 300 hombres del Regimiento núm. 2 al mando de su coronel D. Francisco A. Ortiz Ocampo, y de los reclutas que había principiado a disciplinar el entonces Teniente Coronel D. José de San Martín. Las otras fuerzas organizadas habían sido destinadas a reforzar al ejército del Perú y al que volvía a operar en la Banda Oriental.

A estos ejércitos se había enviado también casi todo el armamento existente en la Capital.

(Dr. Agrelo. Auto Biog. Col. Lamas).

(2) Tomamos estos pormenores del "Auto-biografía", publicado en nuestra colección, y de los apuntes que tenemos de nuestras conversaciones con el Dr. Agrelo.

Todo estaba pronto a fines de Junio (1812) pero Alzaga deseaba que la restauración del dominio español en la capital revolucionaria, tuviera lugar el 5 de Julio, aniversario de la memorable defensa de 1807, cuya gloria se atribuía.

“Entretanto, dice el Dr. Agrelo, el gobierno no tenía más medio de conjurar esta terrible combinación que la decisión de los patriotas desarmados, y sin arbitrios para armarlos en una falta absoluta de armas de toda especie; y estaba también muy ajeno de que tal empresa fuese posible, cuando principiaron a sentirse los primeros pasos de los conjurados, por voces y traspiraciones que se oían en todas partes, conforme se acercaba el día deseado para realizarla, como debía ser naturalmente, pero todo se creía insignificante y aún acaso se tenía por una invención de los patriotas exaltados para indisponer más los ánimos contra los españoles” (1).

El 28 de Junio estaba sobre la mesa del Gobierno un pliego cerrado que contenía, según se supo cuatro días después, la declaración que le recibió el Alcalde de Barracas a un negro, noticias que daba de la conjuración que se tramaba; y este hecho sólo puede explicarse por la situación interior del Gobierno, que era deplorable.

Componían el Gobierno en esos días D. Juan Martín Pueyrredón, Don Feliciano Chiclana y Don Bernardino Rivadavia; y sus acuerdos eran perturbados, con retardo del servicio, por las desavenencias de los dos primeros, haciéndolo pesar, casi exclusivamente, sobre el tercero.

Para que se conozca esta situación y se pueda apreciar el rol que le cupo a Rivadavia en el des-

(1) “Auto-biografía del Dr. Agrelo”. Colección Lamas.

enlace de la conjuración, vamos a reproducir la narración que se encontró autógrafa entre los escritos del Dr. D. Florencio Varela.

“ Las rencillas de Pueyrredón y Chielana habían llegado a convertirlos en cabezas de dos partidos encarnizadísimos, que trabajaban activamente uno contra otro, y recíprocamente se echaban en rostro los males públicos.

“ Rivadavia, colocado, sin partido personal, en medio de aquellos dos enemigos, era el que recíprocamente los templaba, para que el servicio y despacho regular de los negocios no padeciese.

“ Diariamente, y cuando se hallaba sólo, ya con Pueyrredón, ya con Chielana, le daban éstos quejas recíprocas; le referían varias especies de conjuraciones que recíprocamente se atribuían uno al otro.

“ Rivadavia, sin la prevención del espíritu de partido, veía en esas especies, otros indicios de que los españoles conspiraban contra la revolución; que los hechos que Pueyrredón y Chielana recogían y le comunicaban eran ciertos; pero que no tenían su origen en los partidos de aquéllos, sino en los españoles; conocía que tanto Pueyrredón como Chielana conspiraban en realidad, pero que esas conspiraciones eran puramente de partido y personales, sin tendencia a la causa del país; mientras que contra ésta se dirigían las especies que diariamente recogía.

“ Los colegas de Rivadavia se negaban tenazmente a creer en conspiración de los españoles, y se oponían a toda medida contra éstos, instando cada cual a que se tomasen contra el partido que le era opuesto.

“ Así estaban los ánimos de los gobernantes,

cuando se recibió la primera denuncia formal relativa a conciliábulos de españoles.

“ Hízola un clérigo, por escrito, diciendo que en la panadería de Luque, español acomodado, se reunían todos los sábados, y aún algunas veces entre semana muchos españoles; que empezaban a entrar desde las 12 de la noche, y se retiraban desde las tres de la mañana; que él los observaba desde su ventana, que era enfrente, teniendo su cuarto a oscuras, y que aun cuando no conocía las personas, aquellas reuniones le eran muy sospechosas por su repetición, por su regularidad, y por ir los personajes embozados.

“ Halló en esto Rivadavia una confirmación a sus sospechas, pero sus colegas se obstinaban en que todo aquello era obra de los “Chielanistas”, según Pueyrredón; de los “Pueyrredonistas”, según Chielana.

“ Negáronse aun entonces, por este motivo, a tomar medida alguna.

“ Muy pocos días después, ocurrió otra denuncia completamente decisiva.

“ Una mujer, comadre de Don Martín de Alzaga, se hallaba instruída de la conjuración; fué a confesarse con un clérigo, que, siendo patriota, rehusó absolver a la penitente, imponiéndole el deber de delatar aquella conspiración a la autoridad, y amenazándola que él la delataría, si ella no lo verificaba. La mujer, no sabiendo como llegar al Gobierno, se valió de un procurador, amigo suyo, llamado Segovia, a quien dijo lo que pasaba. Este la presentó al Doctor Vieytes, partidario acérrimo de Chielana.

“ Halló Vieytes un medio de acreditar su celo, en aquella revelación: buscó a su amigo político

Don Nicolás Peña, y juntos se fueron al Fuerte, acompañados de la mujer.

“ Era entrada la noche, hora en que el Gobierno asistía siempre al despacho, pero aún no se hallaban en él Rivadavia ni Chiclana.

“ Presentáronse Vieytes y Peña a Pueyrredón, que estaba solo; instruyéronle de su objeto; y éste, no viendo más que una trama de Chiclanistas, a cuyo partido pertenecían aquellos dos, rehusó decidir cosa alguna, bajo pretexto de no ser él sólo Gobierno.

“ Al llegar Rivadavia, halló esperando, en la sala a Vieytes y Peña, quienes se quejaron de la indolencia del Gobierno, e introducidos al despacho, declararon su objeto.

“ Pueyrredón nada creía: pero Rivadavia hizo venir al Secretario Don Nicolás Herrera, e introduciendo a la mujer a una pieza interior, le tomaron su declaración jurada.

“ Dijo, en sustancia, que era comadre de Alzaga, que vivía cerca del Convento de Catalinas; que su compadre le había pedido su casa con gran secreto, para una reunión, ordenándole que preparase una gran cena; que así lo hizo ella, y empezaron a reunirse desde las doce de la noche; que la voz que daban al encargado de la puerta para que abriese era *¡Alzaga!*

“ Que éste llegó de los últimos acompañado de su hijo Cecilio, cada uno con un capote de barragán, llevando el padre dos pistolas y un puñal y el hijo dos pistolas. Cenaron, ordenando a la mujer que ella sola sirviese la mesa.

“ Que los oyó hablar de revolución, de matar a todo hijo del país sin excepción, enumerar sus recursos, hablar del jefe de la caballería, que era el

Padre Betlemita y que había un general de tierra, cuyo nombre nunca oyó. Después resultó ser Centenac.

“ Que no conocía, fuera de Alzaga y su hijo, sino a un tal Curromesa, a un Rioboo y a Bozo; que el agente que tenían para llevar órdenes y comunicaciones era el carretillero Francisco, que vivía hacia Barracas; y que un tendero D. Antonio era el encargado de distribuir el dinero. Las reuniones en casa de la mujer habían sido dos, la última dos días antes del en que Alzaga dejó su casa.

Presentada esta declaración ante el Gobierno, Pueyrredón y Chiclana se obstinaron en no creer, echándose siempre la culpa recíprocamente, y se negaron a tomar medidas.

Pasada media noche, del 2 de Julio, se retiraron, quedando Rivadavia sólo en el despacho. El ordenó, por sí, a Manterola que trajese preso al tendero Antonio y al carretillero Francisco.

Mientras se les buscaba, recibió el Gobierno un pliego que le dirigía una Señora, pidiendo gracia para un hermano suyo, que había desertado del Cuerpo de Granaderos de Terrada, al salir a campaña, y a quien ella tenía oculto, pues, como desertor, tenía pena capital, según los decretos del Gobierno. Fundaba la Señora su súplica en el servicio que el joven hacía, dando al Gobierno el aviso que contenía el papel que la misma acompañaba; y del que resultaba lo siguiente:

“ Tenía la Señora una quinta por Barracas, cuyo terreno había dividido en dos partes; la una estaba alquilada al carretillero Francisco, y la otra, que conservaba la Señora, tenía sólo un ranchito al cuidado de un negro, y en él estaba oculto el joven desertor. Como los sitios eran linderos, el ne-

gro conocía al carretillero, quien repetidas veces le habló de la revolución; el negro refería "a su amigo", como le llamaba, lo que oía al carretillero; el joven aleccionaba al negro para que arrancase del otro todos los datos que descaba, y, en efecto, logró saber muchos pormenores, que trazó en una relación escrita, y la elevó al Gobierno (1).

"Este era el pliego que la hermana acompañaba, y del que estaba ya impuesto Rivadavia, cuando llegó el carretillero preso, y con algún vino en la cabeza.

"Interrogado, por la clave que daban la primera mujer y el joven desertor, el carretillero confesó todo, paladinamente.

"Rivadavia entonces extendió, solo, la sentencia de muerte, y cuando vinieron, con el día, Chiclana y Pueyrredón, se la hizo firmar a ambos. Llegó poco después, preso, el tendero Antonio, quien, interrogado, negó absolutamente todo, pero convicto por los datos ya recogidos, fué también sentenciado por Rivadavia y Chiclana, solos.

"Los dos condenados fueron ejecutados inmediatamente, a pesar de muchos empeños que hubo por Antonio, casado con una mujer muy linda.

"Buscábase entretanto a Alzaga, que no pareció; condenósele a morir en rebeldía, y se promul-

(1) Este negro, que es el mismo que primero informó al Alcalde de Barracas, se llamaba Ventura, y era esclavo de doña Valentina Feijo. Por decreto de 22 de Julio de 1812 se le libertó, concediéndole el uso del uniforme del Regimiento núm. 2, con un escudo en el brazo izquierdo, con la inscripción: "Por fiel a la Patria" (que tenemos en nuestra colección), se le dieron cincuenta pesos fuertes como gratificación y un sable "para custodia", dice el Decreto, "de su benemérita persona", declarándosele con opción al sueldo de soldado de la patria, siendo de cuenta del Estado suministrarle el uniforme por todo el tiempo de su vida.

gó bando en el acto, imponiendo pena de la vida al que ocultase a aquél.

“ Promulgado el bando, se presentó al Gobierno el yerno de Alzaga, Cámara, presentando dos cartas de su suegro, preparadas con suma inhabilidad para hacer creer que la familia ignoraba el paradero de Alzaga.

“ Interrogado Cámara, declaró que había recibido las cartas del capataz de la quinta, lo que éste negó.

“ Cámara fué condenado a morir por los tres gobernantes de acuerdo.

“ Como, a pesar de esto, Pueyrredón se manifestó siempre dudoso, y atribuyendo todo lo que pasaba a manejos de Chiclana, propuso éste a sus colegas que se le permitiera no asistir al despacho y se le autorizara para consagrarse exclusivamente a buscar a Alzaga, tomando al efecto las necesarias declaraciones. Autorizósele. Chiclana en esa comisión, mostró actividad, celo, y sumo discernimiento y prudencia.

“ El juzgó y absolvió a D. Bernardo Las Heras y D. Lucas Fernández, calumniados de cómplices en el negocio.

“ Empezó por apoderarse del capataz de Alzaga, quien negó saber su paradero, hasta que Chiclana hizo venir tropa y el aparato de fusilarle; entonces confesó que sabía donde había estado Alzaga hasta el día en que fusilaron a su yerno, Cámara; que ese día le mandó Alzaga a llevar órdenes a Centenac, al Padre Betlemita y a Valdeparres, diciéndoles que aún era tiempo de triunfar, que inmediatamente se aprontase todo, y penetrasen los conjurados en la ciudad formando tres columnas; la primera por el *Retiro*, la segunda por

la calle hoy de la *Reconquista*, y la tercera, que sería la más fuerte, pasara por donde él se hallaba, que se pondría a su cabeza: ordenándole también que fuese ver al Padre D. Pablo Salas, confesor de Alzaga, que vivía en Santa Lucía, y le pidiera las pistolas que le había dejado.

“ Es curioso advertir que Alzaga, confesándose con el Padre Salas, le había confiado su proyecto de revolución y de sangre; y el buen confesor se contentó con exigirle las pistolas que llevaba, absolviéndole luego, aunque fuese a matar con otras armas.

“ Por eso estaban aquellas en su poder.

“ Añadió el capataz que ninguno había cumplido las órdenes de Alzaga, aterrados ya por lo que pasaba; que él no fué por eso a recoger las pistolas, y volvió con la respuesta a Alzaga; el cual, descontento con ella, dijo que ya no estaba bien en la casa donde se ocultaba, y mandó llamar al clérigo Paz, gallego, Cura de la Concepción, el cual lo ocultó donde el capataz no sabía.

“ El Padre Salas entregó al Gobierno las pistolas y el puñal, que se depositaron en la sala de armas.

“ Pero el cura Paz, negó todo; habló mucho a Chielana de Dios y de la Virgen María, de los pecados que se cometían, etc. etc. Chielana anunció al Padre que muy pronto iría a ver a Dios si no entregaba a Alzaga; y como el eclesiástico aún se negase, apelando a su conciencia, Chielana lo hizo hincar, formó delante sus granaderos, y mandó apuntarle.

“ El cura, rogando a Chielana que pidiese a Dios que le perdonase el pecado que iba a cometer, declaró donde había ocultado a D. Martín: pidiendo que

al ir a buscarle permitieran que Alzaga no le viese a él, pues sabiendo que le había descubierto, la cólera haría que se condenase el alma de Alzaga.

“ Chiclana mandó al Edecán del Gobierno D. Floro Zamudio, con el Escribano Núñez a la casa que el Cura designó, y allí fué preso efectivamente D. Martín de Alzaga, a la noche (4 de Julio).

“ Llamado por Zamudio, contestó — *aquí estoy*, pidió tiempo de vestirse; salió con serenidad, y fué por el camino conversando con Zamudio, preguntándole por su familia, etc.

“ Mientras esto pasaba en casa de Chiclana, y en los momentos en que se encontraba la persona del jefe de la conspiración, se representaba en el despacho del Gobierno la más singular escena, que prueba hasta qué punto ciega el odio de partido.

“ Pueyrredón, que había firmado las sentencias de Cámara y del carretillero, había sido de nuevo vencido por su partido, a términos que su espíritu cayó en las tinieblas que revela el hecho siguiente:

“Se hallaba Rivadavia solo en el despacho, ignorante, por supuesto, de lo que pasaba en el de Chiclana, cuando entra Pueyrredón, amigo de colegio de aquél, con su sombrero puesto, y ademán no común. Sentóse así, y sin otra ceremonia dijo a Rivadavia que ya no podía soportar su situación; que el Gobierno estaba siendo juguete de la facción de Chiclana; que era falso que hubiera conspiración de españoles; que las tres ejecuciones que se habían hecho eran tres asesinatos horribles, y que él estaba determinado a salir de semejante Gobierno; que tenía hecha su renuncia, y que al día siguiente iba a presentarla al Cabildo, para que

éste convocase al pueblo y nombrase otro en su lugar; que fundaba su renuncia en que no quería formar parte de un Gobierno que forjaba conspiraciones para matar inocentes. “No vengo, concluyó, a pedirte consejo, sino a comunicarte lo que tengo irrevocablemente determinado, porque te debo amistad y servicios.

“ Rivadavia, aunque sorprendido de semejante trastorno de ideas, aparentó no estarlo; procuró volver la reflexión a su colega, por palabras de persuasión; pero viendo la obstinación de éste, cambió su tono y su ademán, y tornándose muy severo, le dijo que pues que Pueyrredón se despojaba voluntariamente de su carácter de gobernante, puesto que ya en aquel momento no era más que un conspirador que preparaba un golpe de muerte al Gobierno, y a la causa de la revolución en los momentos de verse amagada por una conspiración terrible, él, Rivadavia, se consideraba único gobernante, “y en este carácter intimo a Vd., Sr. D. Juan Martín Pueyrredón, que Vd. no sale ya “ de aquí; que queda Vd. preso aquí mismo; que “ va Vd. a declarar ante el Secretario y el Escribano de Gobierno lo que Vd. acaba de decirme, “ y que sobre la declaración de Vd. voy yo a poner el decreto que la gravedad del caso demanda”. Rivadavia tocó la campana, y ordenó que se llamase al Secretario Herrera. Pueyrredón se desconcertó completamente; se quitó el sombrero, quedó caído y trémulo. Rivadavia aprovechó el momento para tomarle a la razón por persuasiones, y en eso estaba, cuando se sintió alto clamoreo en el patio del Fuerte, y luego inmenso tropel que entre vivas a la Patria invadió el despacho del Gobierno, abriendo las puertas de golpe.

“ Era el Edecán Zamudio, seguido de mucho pueblo, que venía a anunciar la prisión de Alzaga, y el nudo de la revolución descubierto en las averiguaciones de Chiclana. Pueyrredón se desconcertó, a punto que Rivadavia, en medio del gentío, se le acercó son sigilo, y le aseguró que nada de lo ocurrido saldría de aquel recinto.

“ Pueyrredón, curado de su error, ayudó desde entonces al Gobierno mientras se halló en él (1).

El buen sentido, la perspicacia y la serena energía de Rivadavia salvó a la revolución de uno de sus mayores peligros.

Cuando Rivadavia, después de interrogado el carretillero, resolvió, él sólo, y extendió la sentencia de muerte, para que su ejecución en el día que iba a amanecer, fuera el anuncio pavoroso para los patriotas de que existía una conjuración poderosa; para los conjurados de que había sido descubierta; y para todos, de que el Gobierno estaba de pie y resuelto a ahogarla en sangre, hizo lo más eficaz que podía hacerse para dominarla y para extirparla.

El cadáver del ajusticiado era para los patriotas la revelación de la naturaleza del peligro. Era un peligro de muerte, el que se les revelaba por aquella *muerte*.

El efecto fué instantáneo y decisivo. Los patriotas se armaron, cada uno como pudo, salieron a las calles para entenderse y ampararse recíproca-

(1) D. Bernardino Rivadavia le dió al Dr. don Florencio Varela en Río de Janeiro en 1842 los documentos que allí tenía, entre los cuales algunos sobre la conjuración de Alzaga. Sobre ellos, y oyendo al Sr. Rivadavia, escribió Varela la narración que copiamos, y que se había creído perdida con otros papeles en el naufragio del buque en que regresaba al Río de la Plata.

mente con el aliento y la garantía que les daba la tremenda energía del Gobierno. A la ejecución del carretillero, siguieron otras, y los conjurados sorprendidos, sobrecogidos, aterrados, aislados, sólo pudieron pensar en atender a su seguridad individual.

Refiriéndose a las ejecuciones de los dos primeros días, dice el Doctor Agrelo:

“ Este golpe rápido e inesperado por ellos(los conjurados) juntamente con la alarma general e interés que despertó en el común de los patriotas la resolución del Gobierno, *salvó sin duda el país en aquellos críticos momentos*: porque quedaron los conjurados desconcertados en sus planes y expuestos al furor de todo el populacho, armado cada uno como había podido hacerlo; a cuya vista no se atrevieron ya a dar paso alguno, ni podían combinarlo aislado cada uno en su casa, sin saber lo que pasaba en la ciudad ni poder salir sin exponerse a ser muertos o conducidos a las prisiones por las partidas voluntarias de patriotas que cruzaban en tumulto todas las calles (1).

Las pesquisas y las ejecuciones se prolongaron más de lo que Rivadavia las creía necesarias: los hombres importantes de la conjuración habían desaparecido para siempre, y con ellos todo peligro: se había derramado mucha sangre por necesidad inexorable; no debía derramarse una sola gota por venganza.

El 20 de Julio, — a los quince días de la ejecución de Alzaga — Rivadavia propuso que se sobreseyese en el proceso de la conjuración, devolviéndose la tranquilidad a las familias de los es-

(1) Dr. Agrelo, auto-biog. citada.

pañoles, ya inofensivos, porque estaban políticamente decapitados, impotentes y escarmentados.

El Ayuntamiento se interpuso en igual sentido; pero los patriotas más ardientes, a quienes representaba en el Gobierno el señor Chiclana, creían que todavía no había llegado el momento de la clemencia.

Al fin, el 24, encontrándose Rivadavia solo, de día, como lo había estado en la noche en que resolvió y redactó la primera sentencia de muerte, llamó al Secretario Dr. Herrera, y diciéndole: ¡basta de sangre! le encargó que extendiera una proclama en ese sentido, para la que creía poder contar con el asentimiento y la firma de Pueyrredón.

Este rehusó a darla sin que lo hiciera primero Chiclana, Presidente en turno; y Rivadavia, impaciente, mandóla imprimir con su solo nombre.

Impresa así, la presentó a sus colegas, diciéndoles: que si no la aceptaban como acto del Gobierno, sería acto personal del vocal Bernardino Rivadavia.

Chiclana y Pueyrredón la firmaron, inutilizándose la primera edición, y mandándose circular la segunda con todas las firmas del Gobierno (1).

La proclama es la siguiente:

“ El Gobierno al Pueblo — Ciudadanos, *basta de sangre!*: perecieron ya los principales autores de la conjuración, y es necesario que la clemencia sustituya a la justicia. Así lo exige vuestro carácter generoso, los sentimientos de vuestro Gobier-

(1) Tenemos en nuestra colección un ejemplar de la 1.ª edición que no trae más firma que la de Rivadavia, y hemos visto otro con anotaciones al pie, de letra del Dr. Varela, que son las que seguimos en la redacción de este último episodio.

no, y la respetable mediación del Ayuntamiento en favor de la vida de los cómplices. Que se vea que el influjo de las virtudes del pueblo americano se extiende a sus mismos enemigos. Ya se han dictado todas las medidas que demanda el orden y la seguridad interior, y sólo resta que acreditéis con el sosiego la confianza que os debe vuestro Gobierno. Recibid en vuestros brazos a los españoles que se suscriban de corazón a defender hondamente la causa de nuestra libertad; y no dudéis que la justicia será inexorable contra los obstinados que se atrevan de algún modo a atacar nuestros derechos. El Gobierno se halla altamente satisfecho de vuestra conducta, y la patria fija sus esperanzas sobre vuestras virtudes sin ejemplo.

Buenos Aires, 24 de Julio de 1812.

Feliciano Antonio Chiclana.—*Juan Martín Pueyrredón.* — *Bernardino Rivadavia.* — *Nicolás de Herrera, Secretario.*

Esta conjuración, encabezada por D. Martín de Alzaga, fué la segunda y la última manifestación importante del espíritu reaccionario de los españoles europeos avencidados en el Río de la Plata.

Ese espíritu se había condensado y personificado en las dos grandes figuras de la defensa gloriosa de 1807: *Liniers* y *Alzaga*.

Y esas dos grandes figuras desaparecieron de la tierra, abatidas por los dos grandes hombres civiles de la revolución de Mayo: *Moreno* y *Rivadavia*.

Estos dos hombres obraron con la misma fuerza, con la misma oportunidad y con los mismos resultados.

Moreno despejó en la Cruz Alta el camino de Suipacha: Rivadavia, en la Plaza de la Victoria, el de Tucumán y Salta.

Porque si los movimientos reaccionarios de Liniers y de Alzaga no hubieran sido decapitados y ahogados en sangre al nacer, Balcarce y Belgrano hubieran tenido que combatir con los reaccionarios, en defensa del centro y de la base de la revolución amenazada por ellos; y de combatir con inmensa desventaja, porque los ejércitos realistas del Alto Perú y de Montevideo habrían operado en favor de la reacción; y, en la mejor hipótesis, la guerra se habría localizado en el litoral, y en una sola batalla perdida, quizá se habría perdido la revolución.

¡Tanto depende la acción, la gloria militar y la escena en que aparecen los grandes Capitanes, de la inteligencia y de la acción de los hombres civiles!

Si el núcleo de la conjuración de Alzaga no hubiera sido roto y dispersado por un solo acto de inteligencia y de vigor cívico; si Alzaga y sus conjurados hubieran podido levantar en las calles de Buenos Aires el pendón real, sólo Dios sabe si nos hubieran quedado abiertos los pasos de los Andes y si no hubiera muerto en estas calles, como cualquiera de sus reclutas, el gran Capitán que los traspuso.

VI

Creación de la escarapela nacional.—Abolición del paseo del Estandarte Real.—Naturalización de extranjeros.—Primera carta de ciudadanía.—Fórmula de la que se concedía a los Españoles.—Se consideran como extranjeros el comercio y los puertos de España y sus dependencias.—Por estos actos queda declarada la independencia.—Aplicación práctica y gubernamental de los principios abstractos proclamados por la revolución.—Se reconocen como bases orgánicas las del sistema representativo.—El Doctor Moreno no establece la libertad de imprenta: sus motivos.—Rivadavia la proclama.—Decreto de 26 de Octubre de 1811.—Introduce el juicio por jurados.—Explicación de este decreto dada por Rivadavia en 1822.—Decreto reconociendo y garantiendo los derechos individuales.—Supresión de la Real Audiencia.

Rivadavia, como van a demostrarlo sus actos, no concurrió a concentrar y fortalecer autoritariamente la acción del Gobierno, que llamó *Superior*, con el solo objeto de dominar los peligros exteriores e interiores en que se encontraba la revolución, reparando sus desastres, reorganizando sus ejércitos, levantando el espíritu público e imposibilitando la reacción.

El se sirvió, simultáneamente, de esa misma acción, para iniciar la realización práctica de los dos grandes propósitos que llenaron toda su vida: “la independencia del país, y el establecimiento del Gobierno representativo”.

La acción y la doctrina del Dr. Moreno entrañaban, según lo dejamos indicado, la reivindicación

de la soberanía originaria del pueblo, rompiendo en esa forma, doctrinalmente, todos los vínculos que lo ligaban a la antigua Metrópoli y lo mantenían en su dependencia.

Reivindicar la soberanía para un pueblo, importa reivindicar el derecho de constituirse con entera independencia, determinando las bases de su organización, la forma de su gobierno y los medios de ejercerlo, según sus ideas propias, sus necesidades y sus recursos.

Y por eso dijimos que la doctrina del Dr. Moreno hacía "irreconciliable la guerra con España", porque la dominación española era inconciliable con el derecho que se reivindicaba.

Pero el Dr. Moreno, aceptando y haciendo la guerra, que, en el caso, era una de las manifestaciones del derecho mismo, porque era la expresión del poder de los elementos y de las fuerzas sociales que lo producían, no le dió su forma clara, oficial, tangible, definitiva.

Lo mantuvo en la esfera de la doctrina.

Si nos fuera permitido, diríamos que la idea estaba ya en el cielo de la patria, pero que todavía no era visible para el ojo desnudo del pueblo.

El acuerdo de 18 de Febrero de 1812, a cuyo pie se encuentra la firma de D. Bernardino Rivadavia, disipó todas las nebulosidades y reservas oficiales, creando la escarapela nacional.

Este documento, que es el primero que declaró alta y explícitamente que la revolución de Mayo era el advenimiento de una nueva nacionalidad, y que los colores de las cintas celestes y blancas con que se distinguían los revolucionarios de Mayo de 1810, serían los del pabellón con que se incorporaría a las otras naciones, dice así:

“ En acuerdo de hoy se ha resuelto que desde esta fecha en adelante se haya, reconozca y use por las tropas de la patria, la escarapela que se declara *Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata*, y deberá componerse de los dos colores *blanco y azul celeste*, quedando abolida *la roja*, con que antiguamente se distinguían. Se comunica a V. E. a los efectos consiguientes de esta resolución. Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, 18 de Febrero de 1812.— Feliciano Antonio Chiclana—Manuel de Sarra-
tea.—Juan José Passo.—Bernardino Rivadavia,
“ Secretario ”.

De acuerdo con este grande acto, al decretarse la festividad del 25 de Mayo, en su segundo aniversario, el Gobierno declaró abolido el tradicional paseo del Estandarte Real.

“ Considera este Gobierno, dice, que el paseo del Estandarte en los pueblos de la América española es una ceremonia humillante, introducida por la tiranía, e incompatible con la libertad que ha proclamado y defiende ”.

La separación que se establecía por medio de los colores nacionales, representaba la que existe entre los elementos que constituyen las nacionalidades y las diversifican.

Entre la España y el Río de la Plata no existía mancomunidad de intereses; porque todo el desarrollo social y económico de la colonia estaba perturbado, contrariado y oprimido por las voluntades y las conveniencias de la Metrópoli, como ella las entendía.

Existía un antagonismo radical entre dos organismos que tenían necesidades y aspiraciones distintas y encontradas.

La colonia, por ejemplo, necesitaba la libertad industrial y la libertad comercial; éstas eran, para ella, cuestiones de vida y de desarrollo.

Pero la Metrópoli le prohibía las industrias que podían hacerle concurrencia a las suyas, o que prefería en otros países para favorecer su intercambio mercantil; monopolizaba la navegación para su bandera y el comercio para sus puertos privilegiados.

Por ésta y otras diversidades de intereses vitales, las guerras entre las colonias y las Metrópolis, aunque hechas bajo el símbolo de una nacionalidad común, no son en su fondo, en su esencia, lo que, atendiendo sólo a la forma externa, llaman los tratadistas *guerra civil*.

La forma colonial puede compararse a una crisálida; dentro de ella hace su evolución creciendo y perfeccionándose un organismo completo, con sus instintos, con sus formas, con sus colores propios.

En la guerra civil es un organismo el que se dilacera a sí mismo.

Pero en la guerra de la colonia con la Metrópoli, la colonia, que es un organismo completo, es el que lucha por libertarse.

Esta es, rigurosamente, guerra de emancipación.

Distinguiéndose por signos exteriores, como la escarapela, lo que era esencialmente distinto, entraba el país en la posesión de la verdad. La guerra era, abiertamente, guerra de independencia.

La independencia quedaba, pues, declarada por el acto oficial que creó la escarapela nacional; se revestiría, más tarde y para los efectos exteriores, de las formas solemnes del ceremonial internacional; pero, para el país, era un acto inmanente; el

día en que se hizo, se hizo para siempre. El encerraba todas sus causas y todas sus consecuencias.

Habíanse ido rompiendo una a una todas las ligaduras coloniales, porque una vez en guerra con España, el país debía proveer, según lo dijo Rivadavia, a todo lo que demandase su defensa, su seguridad y su prosperidad.

Para llenar estos fines, el Gobierno se consideraba sin reato alguno.

La legislación española era tan poco favorable a la naturalización de los extranjeros, que los mismos Reyes se habían limitado el ejercicio de esa eminente prerogativa de la soberanía, estatuyendo expresamente en una ley "que *no puede el rey* " conceder naturaleza de estos reinos *sino en casos de precisa necesidad* ".

El Gobierno patrio, que ya había derogado las leyes de Indias, no sólo permitiendo, sino estimulando y favoreciendo la libre entrada de los extranjeros, llegó, en esta administración de Rivadavia, a asumir el alto ejercicio de la soberanía *para naturalizarlos* con la misma liberalidad.

La primera carta de ciudadanía, que era también un testimonio *de haber adquirido con sus acciones un derecho a la estimación y reconocimiento de la patria*, fué expedida el 29 de Noviembre de 1811 a favor de Don Roberto Billinghamurst, Ayudante Mayor de artillería, agregado al ejército de la Banda Oriental (1).

Creada la escarapela como *Nacional*, los mismos españoles se consideraron extranjeros en el país, y los que quisieron continuar perteneciéndole y ha-

(1) Este Sr. Billinghamurst, que recibió la primera carta de ciudadanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata, fué el fundador de la distinguida familia argentina que tan honradamente lleva su apellido.

bían abrazado la causa de la revolución, principiaron a solicitar cartas de ciudadanía, siendo los primeros que esto hicieron, en 17 y 22 de Julio de 1812, los Señores Don Francisco Mariano de Orma, Don Ramón y Don Bernabé Larrea, a quienes les fueron inmediatamente expedidas.

En esa última fecha el Gobierno acordó la fórmula de las cartas de ciudadanía que debían expedirse a los españoles que se naturalizasen:

Este documento, que es el primero en que las Provincias Unidas declararon que formaban un *Estado*, quedando obligados los que recibiesen su ciudadanía, a reconocer la *soberanía del pueblo*, y a resistir con las armas las agresiones que se intentasen contra el país por *los españoles* o cualquiera *otra nación extranjera*, no puede dejar de registrarse íntegro en estas páginas. Dice así:

“ POR CUANTO D..... *natural de los*
 “ *Reinos de España*, después de haber dado las
 “ pruebas más positivas de su adhesión a la causa
 “ santa de la libertad del pueblo americano, exponiendo la vida y su fortuna en defensa de los derechos de esta Capital y Provincias libres de la
 “ Unión, ha protestado de nuevo sus ardientes deseos de “formar una parte de la gran familia
 “ americana, reconocer la soberanía del pueblo,
 “ obedecer a su Gobierno, sostener la conservación
 “ del sistema y resistir con las armas cualesquiera
 “ agresiones que se intenten contra el país por los
 “ españoles o cualquiera otra nación extranjera:
 “ POR TANTO, y queriendo el Gobierno darle un testimonio del aprecio con que mira a los españoles
 “ ilustrados, generosos y amantes de la libertad
 “ y de la felicidad del país, y usando del poder que
 “ le ha confiado la voluntad soberana de los pue-

“blos; ha venido en declararle, como le declara,
 “*ciudadano americano del Estado*, y constituirlo
 “en posesión absoluta de todos los derechos que le
 “corresponden, del mismo modo que si hubiera
 “nacido en estos países y sin que le comprendan
 “las disposiciones y medidas que se adopten, o se
 “hayan adoptado con respecto a los españoles eu-
 “ropeos, mandando a los jefes civiles, militares y
 “eclesiásticos y a los habitantes de las Provincias
 “Unidas le guarden y cumplan, y le hagan guar-
 “dar y cumplir las distinciones y prerrogativas
 “que por este despacho le corresponden, del que
 “se dará cuenta a la primera *Asamblea Nacional*.
 “Para todo lo cual se hizo expedir este título fir-
 “mado de S. E. y refrendado por su Secretario de
 “Gobierno y sellado con el sello de que provisio-
 “nalmente usa el Estado, tomándose razón en el
 “archivo del Exmo. Cabildo de esta Capital para
 “su debida constancia.—Dado en Buenos Aires
 “a... de... de mil ochocientos doce.—FELICIANO
 “ANTONIO DE CHICLANA. — JUAN MARTIN DE
 “PUEYRREDÓN. — BERNARDINO RIVADAVIA. — *Ni-*
 “*colás Herrera*, Secretario.—V. E. confiere título
 “de ciudadano americano del Estado de las Pro-
 “vincias Unidas del Río de la Plata a Don.....

(Aquí las armas del Estado) ”.

Estos actos se complementaron por el decreto de
 11 de Septiembre de 1812—que fué uno de los úl-
 timos que firmó Rivadavia en aquel año,—en que
 se declaraban “extranjeros el comercio y los puer-
 tos españoles”, en los siguientes términos:

“Las expediciones procedentes de puertos de
 “España o sus dependientes se consideren “como
 “extranjeros” para la exacción de derechos ”.

El acto solemne del 9 de Julio de 1816, que nos declaró independientes de España y de su Rey Fernando VII, cuyo nombre sólo se había conservado en los actos oficiales de la emancipación para facilitar las relaciones exteriores, no hizo más que consagrar y promulgar para los efectos exteriores, el hecho consumado y declarado oficial y explícitamente para el interior en los años de 1811 y 1812.

Para organizar el gobierno de la nueva nacionalidad que se instituía, era necesario dar formas de aplicación práctica y gubernamental a las doctrinas filosóficas y a los principios abstractos proclamados por la revolución.

Esas doctrinas eran un arma poderosa contra la organización patrimonial del antiguo régimen; y por eso su difusión, oportunamente audaz, le dió a la revolución su carácter social, su fuerza popular y su acción atrayente y expansiva.

Todos supieron lo que debía destruir; pero en Rousseau nadie podía aprender cómo ejercería el pueblo su soberanía originaria, puesto que las funciones del gobierno propio no podían desempeñarse por la universalidad de los ciudadanos; ni cómo la delegación de esas funciones, sería conciliable con los derechos colectivos y con los derechos individuales (1).

El modo de resolver este problema era conocido de los iniciados en los progresos de las ciencias políticas y sociales, que entonces no eran muchos.

Y desde que la segunda Junta sintió la necesidad de crear un poder ejecutivo eficiente, las bases fundamentales del sistema representativo fueron

(1) Mirabeau decía en la Asamblea Constituyente de Francia: Chacun savait alors ce qu'il fallait renverser, nul ne savait ce qu'il fallait établir.

establecidas como doctrina, y ensayada su aplicación, en cuanto las circunstancias lo permitían.

La delegación del ejercicio de las funciones del gobierno hecha por el pueblo, que conserva el poder electoral; la amovilidad y la responsabilidad de los que ejercen los poderes delegados; la división y la recíproca independencia de estos poderes,—de los cuales el uno hace la ley, el otro la ejecuta y el otro la aplica—evitando así la omnipotencia inherente a la concentración de esas funciones; todo esto se encuentra enunciado, tanto en el “Reglamento” dictado por la Junta el 22 de Octubre de 1811, como en el “Estatuto provisional” promulgado por el Triunvirato el 22 de Noviembre del mismo año.

Pero las garantías que ofrecen estas bases orgánicas del sistema representativo serían completamente ilusorias sin el reconocimiento y la garantía plenísima de los derechos individuales. Sin el conocimiento y el ejercicio de esos derechos y la efectividad de esas garantías, el gobierno representativo no pasa de una ficción desmoralizadora.

Rivadavia ha sido el primero de los hombres de gobierno de la revolución que declaró los derechos y formuló las garantías individuales.

El Dr. Moreno había puesto la imprenta al servicio de la revolución, pero no la puso en manos del pueblo.

En éste, como en otros puntos, el Dr. Moreno se detuvo ante las consecuencias y las exigencias prácticas de la doctrina que había difundido.

Creó que no sería conveniente la “repentina abolición de las prohibiciones de escribir”, lo primero, “ porque una alteración de esta naturaleza “ habría hecho degenerar en licencia el uso libre

“ de la prensa, como podía verse en Cádiz, donde
“ el pueblo había pasado, de golpe, de una abso-
“ luta compresión a la más ilimitada libertad; y
“ lo segundo, porque la guerra que los enemigos
“ de la causa hacían violentamente exigía mucha
“ prudencia para entablar “reformas inesperadas,
“ y hacía necesario evitar el estruendo y aparato
“ de toda formal mutación ”.

Y él, que tan radicales mudanzas había promo-
vido, inoculando en la sociedad colonial las doctri-
nas de la revolución francesa, que había afrontado
todas las preocupaciones y abatido todas las resis-
tencias visibles, llegó hasta dudar de las facultades
del gobierno de la revolución, para proceder
de acuerdo con los principios que había proclama-
do y defendía, en una guerra hecha irreconcilia-
ble por sus propios actos.

“*Ni era propio*, dicen sus memorias, que el don
“ de la libertad de la prensa saliese de un gobier-
“ no reciente, y además provisional y no constitu-
“ tivo, ni hubiera dejado de sufrir graves inconve-
“ nientes *por la oposición de las preocupacio-*
“ *nes*” (1).

Rivadavia, dándole al gobierno las fuerzas de la
verdad y de la lógica, no vaciló ni en declarar que
la revolución era de independencia, ni en dar exis-
tencia práctica a los principios que ella había pro-
clamado.

Quiso, desde luego, que la imprenta fuese libre;
y en la *Gaceta* de 10 de Octubre manifestó sus
ideas y sus propósitos en los siguientes términos:

“ El actual gobierno, teniendo consideración a
“ las graves ventajas que saca el Estado de la

(1) “Vida y memorias del Dr. D. Mariano Moreno”.
Londres, 1812.

“ prensa, consecuente a los principios liberales
“ que adopta, ha resuelto quitar las *trabas* que te-
“ nía la imprenta libre, y esta orden se publicará
“ en la *Gaceta* siguiente. Entonces no será como
“ fué, libertad en palabras y tiranía en obras. Sin
“ libertad, las luces *se concentran en un corto nú-*
“ *mero de hombres*, y sin luces, la libertad no es
“ más que un fantasma; amenazada por todas par-
“ tes por el despotismo, por la anarquía, ella sucum-
“ birá muy pronto, después de una lucha débil
“ con los intrigantes o ambiciosos, o tendrá a la
“ sociedad en una continua guerra, más perjudi-
“ cial que la misma tiranía. Los que quieren *que*
“ *los paisanos no sepan ni leer ni escribir*, inten-
“ tan sin duda, hacer un patrimonio de su igno-
“ rancia; pero no advierten que luego que se for-
“ ma del hombre una *bestia bruta*, se exponen a
“ verle cada instante transformarse en una *bestia*
“ *feroz*”.

“ Hombres públicos, *hombres privados*, esfuer-
“ zaos, pues, para derramar en todas partes los
“ frutos de las ciencias. Creed que disipando un
“ error y propagando una idea sana, habréis he-
“ cho un gran servicio a la humanidad. La igno-
“ rancia hizo, y hará siempre, tiranos y esclavos.
“ Toda *administración misteriosa* fué y será igno-
“ rante, desgüeñada, corrompida y tirana. Todas
“ las verdades son necesarias y útiles a los hom-
“ bres; y todo error les es funesto”.

De acuerdo con estas ideas, se extendió el De-
creto de libertad de imprenta el día 26 de Octubre
de 1811.

“ Tan natural, dice, como el pensamiento, le es
“ al hombre la facultad de comunicar sus ideas.
“ Es ésta una de aquellas verdades que más se

“ siente, que se demuestra. Nada puede añadirse
“ a lo que se ha escrito para probar aquel dere-
“ cho, y las ventajas incalculables que resultan
“ a la humanidad de su libre ejercicio. El Gobier-
“ no, fiel a sus principios, quiere restituir a los
“ pueblos Americanos, por medio de la libertad
“ política de la imprenta, este precioso derecho de
“ la naturaleza, que le había usurpado un enveje-
“ cido abuso del poder, y en la firme persuasión
“ de que es el único camino de comunicar las lu-
“ ces, formar la opinión pública y consolidar la
“ unidad de sentimientos, que es la verdadera fuer-
“ za de los Estados, ha venido en decretar, etc ”

Por el art. 1o. — “ Todo hombre puede publi-
“ car sus ideas libremente, y sin previa censura.
“ Las disposiciones contrarias a esta libertad, que-
“ dan sin efecto.

El 2o. declaraba que el abuso de esa libertad era un crimen. Su acusación correspondía a los interesados, si ofendía derechos particulares, y a todos los ciudadanos, si comprometía la tranquilidad pública, la conservación de la religión católica, o la constitución del Estado. Las autoridades respectivas impondrían el castigo según las leyes.

Por el 3o., con el fin, expreso, de “evitar los efectos de la arbitrariedad en la calificación y graduación de estos delitos”, se creaba una Junta de nueve individuos con el título de “Protectora de la libertad de la imprenta”.

Estos individuos eran elegidos en una lista de cincuenta ciudadanos honrados, que no estuvieren empleados en la administración del gobierno, formada anualmente por el Cabildo; y esa elección se verificaba, en cada caso, a pluralidad de votos, por el Prelado eclesiástico, Alcalde de primer voto,

Síndico Procurador, Prior del consulado, Fiscal, y dos vecinos de consideración nombrados por el ayuntamiento.

El escribano del pueblo autorizaba este acto y los respectivos títulos debían librarse a los efectos sin pérdida de instantes.

Las atribuciones de esta autoridad protectora, se limitaban a declarar el hecho, si había o no crimen en el papel que daba mérito a la reclamación.

El castigo del delito, después de la declaración, correspondía a las justicias.

La *tercera parte* de los votos *en favor del acusado* hacían sentencia.

Apelando alguno de los interesados, la Junta Protectora sorteaba nueve individuos de los cuarenta restantes de la lista de presentación: se reveía el asunto, y sus resoluciones, con la misma calidad en favor del acusado, eran irrevocables. En caso de justa recusación, se sustituían los recusados por sorteo.

Este decreto debía subsistir hasta la resolución del Congreso.

Los jueces que debían calificar y graduar los delitos cometidos por medio de la imprenta, eran de origen popular, puesto que lo tenía el Cabildo que formaba la lista de ciudadanos, no empleados del Gobierno, de que aquéllos eran extraídos por elección o sorteo.

Por la forma del procedimiento, se introducía, por la vez primera en estos países, el juzgamiento por jurados, que ha prevalecido entre nosotros en los juicios excepcionales de imprenta, pero que es todavía un ideal para todos los ordinarios.

Pero la circunstancia de que entre *nueve* votos, *tres* hicieran sentencia *en favor del acusado*, es de

tal manera extraordinaria, que podía considerarse que, en la mayoría de los casos, debía producir la impunidad del abuso.

Sin embargo, este decreto fué respetado por la Asamblea del año de 1813 y por los Congresos de 1816 y 1819, rigiendo la materia por más de diez años.

Después de ese largo período, discutiéndose un proyecto de ley de imprenta en la Junta de Representantes de Buenos Aires, el Sr. Rivadavia dió sobre el Decreto del año 1811, las siguientes explicaciones.

“ Que el Gobierno de entonces no tuvo más que
“ un objeto político; que el decreto, todo él, era
“ para proteger e impulsar la libertad de la prensa,
“ con el fin de que este medio pudiese servir a
“ ilustrar la causa de la independendencia; y a que
“ hubiese con qué contrarrestar el despotismo doméstico. Que si se había acertado, o no, el tiempo lo decía; y el decreto venía a ser lo que al
“ exponente le dijo un sabio a quien consultó sobre el particular, “que él era una máquina
“ para hacer andar la libertad de la prensa.”. Que
“ había andado diez años y había sido respetado;
“ y en el día tenía una existencia real, y la tenía
“ tal, que había cesado la necesidad de él; porque
“ aquel fué un privilegio extraordinario para los
“ objetos que aquel Gobierno se propuso, y que en
“ el día no existían, tanto más cuanto se gozaba de
“ la garantía del poder representativo ” (1).

Como consecuencia de la libertad de imprenta, se publicó el 23 de Noviembre el siguiente decreto, que reconoce y garante los derechos individuales.

(1) Discurso del Sr. Rivadavia, en la sesión de la Junta de Buenos Aires el 8 de Octubre de 1822.

“ Si la existencia civil de los ciudadanos se
“ abandonase a los ataques de la arbitrariedad, la
“ libertad de la imprenta decretada en 26 de Oc-
“ tubre del presente año, no sería más que un lazo
“ contra los incautos y un medio indirecto para
“ consolidar las bases del despotismo. Todo ciuda-
“ dano tiene un derecho sagrado a la protección de
“ su vida, de su honor, de su libertad y de sus pro-
“ piedades. La posesión de este derecho, centro de la
“ libertad civil y principio de todas las institucio-
“ nes sociales, es lo que se llama *seguridad indivi-*
“ *dual*. Una vez que se haya violado esta posesión,
“ ya no hay seguridad, se adormecen los sentimien-
“ tos nobles del hombre libre y sucede la quietud fu-
“ nesta del egoísmo. Sólo la confianza pública es
“ capaz de curar esta enfermedad política, la más
“ peligrosa de los Estados, y sólo una garantía
“ afianzada en una ley fundamental es capaz de
“ restablecerla. Convenido el Gobierno de la ver-
“ dad de estos principios, y queriendo dar a los
“ pueblos americanos otra prueba positiva y real
“ de la liberalidad que preside a sus resoluciones
“ y de las ventajas que les prepara su indepen-
“ dencia civil, si saben sostenerla gloriosamente y con
“ honor contra los esfuerzos de la tiranía, ha ve-
“ nido a sancionar la *seguridad individual* por
“ medio del siguiente decreto:—Art. 1.º Ningún
“ ciudadano puede ser penado, ni expatriado sin
“ que preceda forma de proceso y sentencia legal.
“ —Art. 2.º Ningún ciudadano puede ser arresta-
“ do sin prueba, al menos semi-plena o indicios
“ vehementes de crimen, que se harán constar en
“ proceso informativo dentro de los tres días pe-
“ rentorios. En el mismo término se hará saber al
“ reo la causa de su detención, y se remitirá con

“ los antecedentes al juez respectivo.—Art. 3.º Pa-
“ ra decretar el arresto de un ciudadano, pesquisa
“ de sus papeles, o embargo de bienes, se indivi-
“ dualizará en el decreto u orden que se expida el
“ nombre o señales que distingan su persona y ob-
“ jetos sobre que deben ejecutarse las diligencias,
“ tomando inventario que firmará el reo y deján-
“ dole copia autorizada para su resguardo.—Art.
“ 4.º La casa de un ciudadano es un sagrado cuya
“ violación es un crimen; sólo en el caso de resis-
“ tirse el reo refugiado a la convocación del Juez
“ podrá allanarse; su allanamiento se hará con la
“ moderación debida y personalmente por el Juez
“ de la causa. Si algún motivo urgente impide su
“ asistencia, dará al delegado una orden por es-
“ crito y con la especificación que contiene el an-
“ tecedente artículo, dando copia de ella al apre-
“ hendido y al dueño de la casa si la pide.—Art.
“ 5.º Ningún reo estará incomunicado después de
“ su confesión; y nunca podrá ésta dilatarse más
“ allá del término de diez días.—Art. 6.º Siendo
“ las cárceles para seguridad y no para castigo de
“ los reos, toda medida que a pretexto de precau-
“ ción sólo sirva para mortificarlos, será castiga-
“ da rigurosamente.—Art. 7.º Todo hombre tiene
“ libertad para permanecer en el territorio del Es-
“ tado o abandonar cuando guste su residencia.—
“ Art. 8.º Los ciudadanos habitantes del distrito
“ de la jurisdicción del Gobierno y los que en ade-
“ lante se establezcan, están inmediatamente bajo
“ su protección en todos sus derechos.—Art. 9.º
“ Sólo en el remoto y extraordinario caso de com-
“ prometerse la tranquilidad pública o la seguri-
“ dad de la patria, podrá el Gobierno suspender
“ este decreto, mientras dure la necesidad, dando

“ cuenta inmediatamente a la Asamblea General
“ con justificación de los motivos, y quedando res-
“ ponsable, en todos tiempos, de esta medida.—
“ Buenos Aires, 23 de Noviembre de 1811.—FELI-
“ CIANO ANTONIO CHICLANA. — MANUEL DE SA-
“ RRATEA. — JUAN JOSE PASSO. — *Bernardino Ri-*
“ *vadavia*, Secretario ”.

Por estos actos quedó establecida la libertad de la imprenta; introducido en nuestra legislación, el juicio por jurados; reconocidos los derechos individuales y determinadas las formalidades legales que los garanten.

Todas estas grandes innovaciones que independizaban al país y asentaban las bases de su nueva organización civil y política, fueron coronadas por el Decreto de 23 de Enero de 1812, que suprimió la Audiencia, organizando la administración de la Justicia, de acuerdo con los principios liberales.

Algunos Oidores habían sido expulsados con el Virrey en Junio de 1810, pero había quedado de pie la Real Audiencia, alto tribunal que, con arreglo a las leyes de Indias, debía asumir en la vacante del Virrey la gobernación del Virreynato; y con ese tribunal, se había conservado toda la organización judicial de la colonia.

Políticamente, con la Audiencia desaparecía la última representación de la autoridad real y del regimen colonial, y por los tribunales civiles que la sustituían, la justicia distributiva se descentralizaba, poniéndose más en contacto y más al alcance del pueblo.

En el preámbulo del decreto, el Gobierno manifestó, en los términos que vamos a copiar, los propósitos de la reforma.

“ Tribunales numerosos, dijo, complicados e

“ instituídos para colocar y sostener en la mayor
“ elevación a los agentes del despotismo, y a las
“ Provincias en una gravosa dependencia, no son
“ ya los que convienen a unos pueblos libres y vir-
“ tuosos. No hay felicidad pública sin una buena
“ y sencilla administración de Justicia, ni ésta
“ puede conciliarse sino por medio de magistrados
“ sabios, que merezcan la confianza de sus conci-
“ dadanos. Sobre la evidencia de estos principios,
“ ha determinado el Gobierno suprimir la Real
“ Audiencia, sustituir una Cámara de Apelacio-
“ nes para los negocios de grave importancia, de-
“ jar a los pueblos la decisión de sus diferencias
“ domésticas, restablecer la deprimida autoridad
“ de los jueces ordinarios, prevenir sus contiendas
“ por el arbitramiento de un Tribunal de Concor-
“ dia compuesto de hombres buenos, sofocar las
“ cábalas de los curiales, y prevenir la ruina de
“ tantas familias honradas, restableciendo el sosie-
“ go interior, que es uno de los mayores bienes de
“ la sociedad.

VII

Libertad del comercio de los extranjeros.—Inmigración.—Supresión del tráfico de esclavos.—Estímulos para la inmigración y colonización.—Reforma fundamental de la legislación aduanera.—Abolición de los estancos.—Impuesto sobre los artículos desestancados.—Primera disposición argentina sobre moneda.—Impuesto sobre herencias y legados.—Reforma rentística.—Economías.—Aduanas terrestres.—Mejora de la hacienda pública.—Publicación de cuentas.—Iniciación del Banco de Descuentos, de una compañía de seguros y de asociaciones particulares, de nacionales y extranjeros, para objetos de utilidad nacional.—Plano topográfico y sistema agrario.—Fusiones del Estado.—El hombre y la producción.—Solicitud de profesores europeos.—Establecimiento literario.—Enseñanza de la economía política.—Suscripción pública para el Establecimiento literario.—Primeros suscriptores.

Cuando Rivadavia entró a la administración, todavía estaban sometidos los extranjeros a las restricciones que se habían impuesto a su comercio dentro del país, en el interés y por las sugerencias de los monopolistas de Cádiz.

La primera Junta mantuvo la disposición establecida en el acta del 6 de Noviembre de 1809, que hacía forzosa la consignación de los extranjeros a los comerciantes nacionales; y la segunda Junta, por resolución de 11 de Junio de 1811, mandó impedir “la introducción de efectos al interior del reino por los extranjeros inmediatamente, como también sus ventas por menudeo, de acuerdo con la resolución general”.

Todas estas trabas fueron suprimidas por Rivadavia el 11 de Septiembre de 1811, declarándose libre el derecho de los extranjeros para vender sus cargamentos, cobrar los retornos y correr con las diligencias del desembarco y embargo.

Esta medida, a la vez que debía ensanchar el comercio extranjero, facilitándolo, concurría al propósito ya manifestado por otros actos, de atraer la inmigración extranjera.

Rivadavia quería la inmigración, no como simple aumento de brazos, sino como elemento de trabajo y de civilización.

Por eso, al ocuparse de esa materia, apartándose del ejemplo que le ofrecían los Estados Unidos y las colonias europeas en América, principió *por prohibir la introducción de esclavos*, por el Decreto de 14 de Mayo de 1812.

En seguida, para estimular la inmigración de los hombres libres, se dictó el siguiente:

“ Buenos Aires, Septiembre 4 de 1812. Siendo
“ la población el principio de la industria y el
“ fundamento de la felicidad de los Estados, y con-
“ viniendo promoverla en estos países por todos
“ los medios posibles, ha acordado al Gobierno ex-
“ pedir y publicar el siguiente decreto: Art. 1.º El
“ Gobierno ofrece su inmediata protección a los
“ individuos de todas las naciones, y a sus familias
“ que quieran fijar su domicilio en el territorio
“ del Estado, asegurándoles el pleno goce de los
“ derechos del hombre en sociedad, con tal que no
“ perturben la tranquilidad pública, y respeten
“ las leyes del país. Art. 2.º A los extranjeros que
“ se dediquen a la cultura de los campos se les da-
“ rá terreno suficiente; se les auxiliará para sus
“ primeros establecimientos rurales, y en el comer-

“cio de sus producciones gozarán de los mismos
“privilegios que los naturales del país. Art. 3.º A
“los que se apliquen por sí solos, o en compañías
“al beneficio de minas de oro, plata y otros meta-
“les, se les repartirán gratuitamente las suertes
“baldías que puedan cultivar en los minerales que
“elijan; se le permitirá la introducción de los ins-
“trumentos necesarios para la explotación de mi-
“nas, libre de todo derecho, conforme a lo preve-
“nido en decreto de 26 Febrero del presente año,
“y podrán extraer los productos de su industria
“del mismo modo que los naturales del país ”.

Este decreto, que derogaba toda la legislación española sobre extranjeros, es la primera iniciativa hecha en la América del Sur para estimular la inmigración; y ella sola bastaría para demostrar la maravillosa claridad con que veía D. Bernardino Rivadavia las necesidades del porvenir de estos países.

Nuestra legislación actual sobre esa importante materia, tiene por bases cardinales las que le dió Rivadavia hace setenta años.

En la legislación aduanera introdujo reformas fundamentales.

Declaró libre la venta de los minerales de Uspallata y su exportación pagando derechos; permitió, en general, la exportación del oro y de la plata en pasta, bien sea en piñas o barras, o en chafalonía, pagando derechos; y libres de todo derecho de exportación “las carnes saladas, mantas, lenguas,
“atocinados y todos los productos de esta especie ”.

Libre de derechos de importación, el carbón de piedra, la duelería y la arquería de todas las procedencias.

“ Y, agrega, con el objeto de fomentar por to-
“ dos los medios las artes, la agricultura, la indus-
“ tria y la comodidad en el territorio de las Pro-
“ vincias Unidas, sea libre de derecho general y
“ municipal la introducción de azogues en nues-
“ tros puertos, de las maderas sin labrar, de las ma-
“ bradas con destino a edificios, como tablas, ti-
“ rantes y cuarterones; casas completas de made-
“ ra, rústicas o urbanas; gozando de igual excep-
“ ción los instrumentos de agricultura y explota-
“ ción de minas, las semillas, los libros, máquinas
“ e instrumentos de ciencias y artes.

Por estas disposiciones trataba de fomentar directamente la producción, sin recurrir a los derechos altos o prohibitivos, que importan, en muchos casos, un sobrecargo para el consumidor, que no se justifica por beneficio alguno general.

Se fomentaba por la exoneración de derechos de entrada o de salida, la principal industria existente; las artes y los oficios, permitiendo la importación, libre de derechos, de varias materias primas esenciales a algunas industrias, y a la par de las máquinas más poderosas las herramientas más usuales.

La importación de los libros se grava hoy con fuertes derechos, así como se gravan con un 40 por ciento los objetos de arte, considerados como artículo de lujo.

De acuerdo con el propósito de favorecer el desarrollo de la producción suprimiendo las más odiosas trabas fiscales que la oprimían, por decreto de 22 de Agosto de 1812 se restituyeron al libre comercio el tabaco y demás artículos estancados.

La publicación de este decreto fué encabezada con las siguientes verdades:

“ Al paso que el monopolio es un delito severamente castigado por las leyes, fueron nuestros gobiernos los más escandalosos monopolizadores de la nación. Nada importaba esta ridícula contradicción, si en ella encontraba la corte un recurso abundante para sostener el lujo y la corrupción de los favoritos. No es otro el objeto de los estancos, cuyas consecuencias no pueden recordarse sin indignación. El cultivador del tabaco recibía de la arbitrariedad de los publicanos la ley del precio en que debía vender a la renta el fruto de sus sudores.

“ Felizmente hemos salido de tan miserable situación. El monopolio es incompatible con la libertad de los pueblos. En donde no puede el ciudadano cultivar lo que quiera y vender sin trabas sus productos, la libertad es una fantasma y una vez hueca con que se insulta la razón y la humanidad ”.

Para llenar el déficit que se producía en las rentas públicas por la supresión de los estancos, se establecieron algunos derechos moderados, y distribuidos de manera que pudiera favorecer la producción local.

Dentro de los partidos donde se cosechaban o elaboraban, los tabacos estaban libres de derechos; y los que pagaban al salir de su partido eran la mitad de los que se establecían sobre los tabacos extranjeros.

Luego que lo permitieran las circunstancias, los derechos sobre los tabacos nacionales debían suprimirse.

Se estableció también un derecho sobre las barajas extranjeras o de provincias que no estuvieren sujetas al Gobierno patrio, exonerándose de todo

derecho, por espacio de diez años, a las de fabricación nacional, tanto para el giro interior como para la exportación, con el objeto de facilitar el establecimiento de fábricas de papel en el país.

Complementando esta clase de reformas, se suprimió el premio arbitrario de 3 por ciento establecido en Buenos Aires sobre la plata, uniformándose, así, la circulación en todo el territorio de las Provincias Unidas.

Este decreto, de 18 de Septiembre de 1812, es la primera disposición argentina sobre moneda.

Como uno de los medios—"más equitativo y menos oneroso a los mismos pueblos"—para satisfacer las grandes necesidades públicas, se determinó, por decreto de 30 de Septiembre de 1812, mandar observar en todo el territorio de las Provincias Unidas, la Cédula de 11 de Junio de 1801, ampliando el 2 por ciento que establece sobre las herencias y legados transversales, ex-testamento y abintestato entre parientes al 10 por ciento; y entre herederos y legatarios extraños al 20 por ciento, revocando lo que se imponía sobre las herencias y legados entre marido y mujer, que se dejaban libres de toda contribución, como quedaban las mandas a favor del alma del testador, en los términos que expresa el art. 2.º de dicha Cédula.

El derecho de sucesión, que filósofos como Kant, Fichte y otros han pretendido que era un derecho natural, es universalmente admitido aun en el caso de sucesión intestada, como consecuencia de la personalidad y de considerar a la familia como una entidad moral que, como dice Ahrens, comprende a todos sus miembros, formando los bienes de la familia un todo en el cual cada uno de sus

miembros tiene una parte ideal, lo que establece entre ellos una verdadera copropiedad.

Pero el Estado limita, según sus necesidades y según las conveniencias sociales, todo derecho de propiedad gravándolo con impuestos o reglamentándolo; y esa facultad del Estado no podía dejar de ser extensiva a las sucesiones.

Por eso todas las legislaciones y los tratadistas que admiten el derecho de testar, establecen limitaciones a su ejercicio, llegando a sostenerse por el mismo Ahrens la conveniencia del impuesto progresivo sobre las herencias, con el fin de evitar una concentración excesiva de fortunas.

El impuesto sobre las sucesiones puede ser, como lo dice Rivadavia, el más equitativo y el menos oneroso, sobre todo en la forma en que él lo establece.

El individuo es no sólo miembro de una familia, sino también de una sociedad a la que debe presumirse que lo ligan altos vínculos de afecto, además de los deberes que ella naturalmente le impone; y desde que al establecerse la gradación del impuesto sobre las herencias se llevaba en cuenta la presunción del mayor afecto, como lo hizo Rivadavia, la sociedad podía llegar hasta ser contada entre los herederos naturales en las sucesiones ab-intestato.

Rivadavia, adelantándose a la legislación del porvenir, reconoció los vínculos que se presumen entre los cónyuges, y exoneró del impuesto las herencias y legados entre marido y mujer; y procediendo lógicamente, el impuesto, que era de 10 por ciento en las herencias ab-intestato entre parientes, lo elevó al 20 por ciento cuando recaían en extraño.

Para atender a servicios vitales que las penurias del erario dejaban en descubierto, se inició la re-

forma del sistema de impuesto; se estableció, para evitar las exacciones y derramas a que se recurría, la lotería nacional, y se creó un plan de contribución extraordinaria que afectaba las industrias, los capitales y el consumo de las harinas.

A la vez que se reformaba el sistema rentístico, se procedió con energía a la supresión de los empleos inútiles y a las economías que demandaba el estado del erario.

Según la enumeración de los trabajos del Gobierno en los primeros seis meses de su administración, el ahorro conseguido por la supresión de las contadurías de provincia y de retasas, de empleos inútiles, descuentos temporales en los sueldos, etc., alcanzó a la suma de \$ fts. 170.000 anuales, lo que en relación con los gastos de entonces, era una cantidad considerable.

Para favorecer los intereses fiscales se crearon dos aduanas terrestres, una en Mendoza y otra en Corrientes.

Por estos medios, el gobierno, que se recibió de un erario que no tenía un sólo peso, hizo frente a todos los gastos ordinarios y a los extraordinarios, que eran muy crecidos, para atender, como se ha visto que lo hizo, a todas las necesidades de la guerra.

Se restableció la publicación (Gaceta de 1.º de Mayo de 1812) de los pagos que se efectuaban con fondos del erario, observándose, así, el sistema de publicidad de las cuentas del Estado, que es una de las bases más esenciales del crédito público.

En esta administración promovió Rivadavia, por nota dirigida al Tribunal del Consulado el 21 de Octubre de 1811, la creación de un Banco de Descuentos, lo que no se realizó por entonces; pero la

idea reapareció con su promotor en 1822, fundándose el Banco en la misma forma y con los mismos propósitos indicados once años antes.

Esa nota contenía, además, la iniciación de una compañía de seguros marítimos, y de las asociaciones de los particulares para realizar prácticamente instituciones de utilidad nacional, y con la circunstancia de llamar a los extranjeros a tomar parte en ellas a par de los nacionales.

La creación de un Departamento Topográfico, y las consideraciones que le inspiraron a Rivadavia su célebre decreto del 1.º de Julio de 1822, por el cual quedó suprimida la venta de las tierras públicas, mandándolas dar en enfiteusis, estaban en germen en sus actos de 1812.

En Septiembre de 1812 se dispuso “levantar el
“ plano topográfico del territorio de la provincia
“ con inspección de la naturaleza de los diferen-
“ tes terrenos que comprende y que dará una idea
“ de este precioso suelo, desconocido hasta de sus
“ mismos habitantes. A este fin ha nombrado
“ una comisión de personas inteligentes. Tiene por
“ objeto esta medida repartir gratuitamente a los
“ hijos del país suertes de estancia proporcionadas y chacras para la siembra de granos, *bajo un*
“ *sistema político* que asegure el establecimiento
“ de poblaciones y la facilidad de tantas familias
“ patricias, *que siendo víctimas de la codicia de*
“ *los poderosos, viven en la indigencia y en el abatimiento con escándalo de la razón y en perjuicio de los verdaderos intereses del Estado.*

Rivadavia ha demostrado que comprendía bien que la acción oficial para promover o estimular el progreso no debe limitarse a facilitar por la supre-

sión de las trabas artificiales los esfuerzos individuales.

Tiene que ser creadora; y, sobre todo, en un estado general de atraso, como el que era consecuencia del régimen colonial, debe tender a dotar a las individualidades de las aptitudes y de los elementos necesarios para que sea fecunda la libertad que se les proporciona y garante.

Uno de los biógrafos de D. Bernardino Rivadavia, que le había conocido y cooperado a su política, ha recordado, como uno de sus rasgos más distintivos, la inmensa importancia que le daba " al hombre moral como el verdadero instrumento de la " riqueza pública, y no el hombre y los instrumentos materiales de la naturaleza " (1).

En efecto, anticipándose en esto a Ganilh y a Dunoyer, Rivadavia consideraba que el progreso de las ciencias y la difusión de sus luces era la base, a la vez, de la mejora social y del desarrollo de la riqueza pública.

Con esta convicción solicitó la venida al país (en 1812) de profesores europeos, y promovió, por un anuncio oficial publicado en la Gaceta de 9 de Agosto de 1812, la erección popular de un *Establecimiento literario*.

Los siguientes párrafos de ese documento, demuestran la vastísima importancia que le daba Rivadavia a la difusión de la enseñanza superior para la consolidación de la libertad individual, y el desarrollo de la riqueza pública; para el aprovechamiento de las condiciones geográficas y de las riquezas naturales; y, por fin, como medio esencial de hacer fecundas las aptitudes intelectuales que la naturaleza distribuye.

(1) El Dr. D. Dalmacio Vélez-Sársfield.

ANUNCIO OFICIAL

“ Basta ser hombre para amar la libertad, basta un momento de coraje para sacudir la esclavitud, basta que un pueblo se arme de cólera para derribar a los tiranos; pero la fuerza, la intrepidez, y el mismo amor de la independencia no bastan para asegurarla, mientras el error y la ignorancia presidan al destino de los pueblos, y mientras se descuida el fomento de las ciencias, por entregarse a los desvelos que exige el arte necesario de la guerra. La América del Sud ha dicho que quiere ser libre, y lo será sin duda; el esfuerzo universal de un pueblo numeroso, la energía de sus habitantes y el estado político de la Europa fundan la necesidad de este suceso. Triunfaremos del último resto de opresores, sí, triunfaremos, pero después de haberlos vencido, aún nos resta triunfar de nosotros mismos. Nos resta destruir las tinieblas en que hemos estado envueltos por más de tres siglos; nos resta conocer lo que somos, lo que poseemos y lo que debemos adquirir; nos resta, en fin, sacudir el fardo de las preocupaciones y absurdos que hemos recibido en patrimonio.

“ De poco podría lisonjearse el celo del gobierno, si no previnióse con sus esfuerzos esta saludable regeneración, proporcionando a los pueblos un nuevo establecimiento por cuyo medio se difundan las luces y se propague la ilustración en todos los ramos concernientes a la prosperidad pública. Este es el único medio de realizar las ventajas que se han anunciado tan repetidas veces: sin él, las más sublimes teorías no pasan

“ de la esfera de bellas quimeras, y nuestro in-
“ menso territorio permanecerá, como hasta aquí,
“ reducido a una estéril soledad, propia sólo para
“ excitar la compasión de un filósofo contempla-
“ tivo.

“ Nada importaría que nuestro fértil suelo en-
“ cerrase tesoros inapreciables en los tres reinos
“ de la naturaleza, si privados del auxilio de las
“ ciencias naturales ignorásemos lo mismo que po-
“ seemos.

“ Nada importaría que por nuestra posición
“ geográfica pudiésemos emular a las potencias
“ más respetables del globo, así para nuestras re-
“ laciones mercantiles, como para la defensa de
“ nuestras costas, si no cultivásemos los conoci-
“ mientos que apoyan la perfección de ambos ra-
“ mos. Nada importaría, en fin, que un genio pri-
“ vilegiado, y un espíritu fecundo predispusiesen
“ a los americanos a investigar los misterios de la
“ naturaleza, los oráculos de la moral y los pro-
“ fundos dogmas de la política, si la juventud no
“ empezase a ensayar esta brillante disposición
“ por medio de un instituto literario en el que,
“ concurriendo el genio con las ventajas de nues-
“ tra edad, despliegue la razón toda su fuerza; y
“ rompa el espíritu humano las cadenas que ha
“ arrastrado hasta hoy en este suelo.

“ Al fin, ha llegado esa época tan suspirada por
“ la filosofía; los pueblos bendecirán su destino,
“ y el tierno padre que propenda a hacer felices
“ los renuevos de su ser no necesitará ya despen-
“ derse de ellos, ni afligir su ternura para ver
“ perfeccionado su espíritu en las ciencias y artes,
“ que sean propias de su genio. Cerca de sí, a su
“ propio lado, verá formarse al químico, al natu-

“ralista, al geómetra, al militar, al político, en
“fin, a todos los que deben ser con el tiempo la co-
“lumna de la sociedad y el honor de su familia.
“Este doble objeto en que tanto se interesa la hu-
“manidad, la patria y el destino de todo habitan-
“te de la América ha decidido al gobierno a pro-
“mover, en medio de sus graves y notorias aten-
“ciones, un establecimiento literario en que ense-
“ñe *el derecho público, la economía política, la*
“*agricultura, las ciencias exactas, la geografía, la*
“*minerología, el dibujo, lenguas, etc.* Con este
“objeto ha determinado abrir una suscripción en
“todas las provincias unidas, para cimentar el
“instituto sobre el pie más benéfico y estable,
“*luego que lleguen los profesores de Europa, que*
“*se han mandado venir con este intento*”.

Belgrano ya había promovido en el Consulado el establecimiento de una Academia de Dibujo y de una Escuela de Náutica, que fueron suprimidas por órdenes terminantes de la Corte de España.

La enseñanza de la *Economía Política*, que se ha denominado, con razón, la ciencia general de la administración, cuyos auxilios son esenciales para la buena política internacional y para el acierto de los que legislan y de los que administran, era entonces, en aquel año de 1812, una verdadera novedad entre pueblos muy adelantados.

El gobierno de Nápoles fué el primero que creó, en 1754, una cátedra, que puso a cargo del sabio Genovesi, para la enseñanza de la *Economía Política*. Este ejemplo fué seguido por María Teresa en 1769, estableciendo esa asignatura en la Universidad de Milán, y encomendándosela al marqués Beccaria. Pero esas dos cátedras desaparecieron con sus profesores.

El Príncipe Regente, después D. Juan VI, al llegar a Bahía en 1808, trasladando al Brasil la Corte de Portugal, se encontró allí con el eminente economista brasileño José da Silva Lisboa, después Vizeconde de Cayrú, a quien se debieron las franquicias aduaneras que entonces se decretaron para los puertos de esa Colonia, y con el fin de aprovechar sus conocimientos y de premiar sus servicios creó en Río de Janeiro la primera cátedra americana de Economía Política.

Pero en Francia sólo se estableció esa asignatura por Luis XVIII, y en Inglaterra la creó, en conmemoración de Daniel Ricardo, fallecido en 1823, una asociación de amigos de ese afamado economista.

La suscripción pública para crear el Establecimiento Literario se abrió, desde luego, en esta Capital, al cargo del Sr. D. Antonio José de Escalada; siendo los primeros suscritores tres extranjeros, cuyos nombres no pueden dejar de recordarse: Mr. Juan Thwaites por 5.000 pesos; Mr. Roberto Orr, por 1.000 pesos; y Mr. Federico Heathfield, por otros 1000.

La separación de Rivadavia del Gobierno, verificada poco después, malogró el proyecto del Establecimiento Científico, que se encontraba tan bien encaminado, como malogró el del Banco de Descuentos y otras iniciativas que dejamos recordadas. La Economía Política no principió a enseñarse en Buenos Aires hasta el año de 1823, por haberla incluido Rivadavia en el plan de estudios de la Universidad.

D. Bernardino Rivadavia y su tiempo

(FRAGMENTOS)

1826 — 1827

I

Discusión en el Congreso sobre régimen de Gobierno.—No se debaten principios ni sistemas.—Fraccionamiento, despoblación, pobreza y atraso de las provincias.—El Diputado Dorrego, para hacer posible la organización federal que sostiene, propone varias agrupaciones de provincias para que cada grupo forme un Estado.—D. Valentín Gómez, órgano de la mayoría, acepta esta indicación, pero los diputados de la minoría la repelen.—Ante esta repulsa, Dorrego abandona su indicación, y se adhiere a los que pretendían la organización federal de las provincias en la situación en que se encontraban.—Discusión sobre los elementos que tenían las provincias para constituirse en Estados federales.—Apreciaciones sobre este debate.—Resultados posteriores que las comprueban.

“ Entre las circunstancias físicas de nuestro país — había dicho la Comisión del Congreso, — la más notable es la que ofrece la despoblación de sus provincias. Muchas de las que llevan ese nombre, o no tienen, o apenas tienen quince mil habitantes, esparcidos en distancias enormes. Las más son pobres, y algunas en extremo. Si todas tienen en la feracidad respectiva de sus territorios los principios de una futura riqueza, hoy no gozan sino de escasas producciones que no pueden proporcionarles un fondo de rentas públicas capaz de subvenir a las primeras necesidades de la comunidad. ¿Y sería prudente despedazar la nación en mínimas fracciones, con el nombre de Estados, cuando de todas ellas apenas puede formarse una pequeña república de quinientos mil habitantes?

“ En el día, agregaba el miembro informante de la Comisión, hay tantas provincias como ciudades: todas las ciudades se han dividido de sus antiguas capitales; y por las observaciones que hemos hecho sobre los poderes de algunos diputados, las más tienen una *resolución irrevocable de no pertenecer a otra capital de provincia y de permanecer ellas en capitales* ”.

Con esta resolución quedaban las más de las provincias en la imposibilidad evidente de organizarse como Estados Federales: no tenían elementos para ello.

El Sr. Dorrego, jefe de la oposición en el Congreso, rindiéndose a la evidencia y queriendo hacer posible razonadamente la organización federal manifestó que la provincia de Santiago del Estero, que él representaba, era cabalmente la que en su instrucción había puesto como condición *sine qua non* que no se le sujetaría a otra: *pero que no había dicho que concurriría de un modo tal que ella no formaría parte con otra*. Esta es, agregó, la gran equivocación notable.

En seguida, dijo el Sr. Dorrego:

“ A juicio del que habla, persuadido con conocimientos prácticos, la nación puede constituirse en este orden u otro semejante; y hago esta indicación, no porque sea preciso y necesario que se constituya así, sino como para desvanecer la base en que la Comisión ha fundado su dictamen. Por ejemplo, la Banda Oriental podría formar un Estado; Entre Ríos, Corrientes y Misiones otro, de lo que ya hay un ejemplo, en que mandando el Coronel Ramírez formaron una provincia; otro la provincia de Santa Fe con

“ Buenos Aires, bajo tal organización que su
“ capital se fijase en San Nicolás, o en el Ro-
“ sario, o en el punto que se considerase más cén-
“ trico; la de Córdoba tiene todas las aptitudes por
“ su riqueza y todo lo necesario para ser sola. Río-
“ ja y Catamarca otro Estado; la de Santiago del
“ Estero y Tucumán otro; la de Salta se halla en el
“ mismo caso que Córdoba; las de Cuyo otro; y he
“ aquí vencidas todas las dificultades. ¿Se teme una
“ resistencia de las provincias en este caso? No, se-
“ ñor, porque en este caso ni una tiene dependencia
“ de otra ni se sujeta a otra, sino que entran en
“ igualdad de derechos a formar un Estado, y se-
“ ría consumir en ellas el “ultimátum” del capri-
“ cho y de la tenacidad el “creer que no se sujeta-
“ sen a tal organización”. Dígase ahora si en estas
“ provincias, en este estado hay población y rique-
“ za e instrucción necesaria. Yo digo que sí. Se me
“ había olvidado indicar que el Paraguay se halla
“ en el mismo caso que las de Salta y Córdoba.
“ ¿Cuál es, pues, la gran dificultad? ¿Hay alguna?
“ Han dicho las provincias por medio de sus
“ Representantes, de algún periódico, o por otro
“ medio “que quieren constituirse del modo que
“ se hallan en la actualidad formando un Esta-
“ do?” No señor; lo que han dicho es base de un
“ sistema federal, que sea compatible con su ins-
“ trucción, población y demás circunstancias, y
“ esta indicación precisamente lo manifiesta. Cuan-
“ do se hubiese satisfecho este reparo y se hubiese
“ demostrado que estas provincias no están por
“ esta división u otra semejante, entonces se ha-
“ bría demostrado la incapacidad en que se hallan

“ de constituirse bajo la forma federal, y de llevarlo a efecto (1).

El Sr. Dorrego daba, en estos términos, una nueva base, sobre la cual era posible entenderse y llegar a acuerdo, puesto que, como se ha visto, no se trataba de una divergencia de principios.

Admitido, como quedaba por parte del Sr. Dorrego, que muchas de las provincias no tenían los elementos más esenciales para constituirse aisladamente en Estados federales, y propuesta la idea de agrupar alguna de ellas para que adquiriesen, reuniéndose, mayor suma de población, de riqueza y de personal idóneo si las provincias aceptaban este medio, la cuestión quedaría reducida a determinar, como la geografía lo permitiera, el número de las provincias que debían componer cada uno de los Estados que resultasen posibles.

D. Valentín Gómez, órgano de la Comisión de Negocios Constitucionales, y que ya había declarado que sólo repelía el regimen federal por impracticable, acogió la idea propuesta, diciendo que si los Diputados de las respectivas provincias declaraban que tal organización era posible, ése sería un gran antecedente que debía ocupar mucho la atención del Congreso.

Pero ninguno de los diputados de las provincias indicadas por el Sr. Dorrego aceptó su pensamiento; ninguna provincia admitía dependencia de género alguno; ninguna ciudad de las que habían asumido el rango de capital quería abandonarlo. Toda agrupación resultaba imposible, y por esta imposibilidad, según lo había dicho el señor Dorrego,

(1) Sesión del Congreso núm. 202, Septiembre 29, de 1826.

quedaba demostrada la incapacidad en que estaban para constituirse bajo la forma federal.

Y sólo por esto, ella era combatida, como impracticable, por la Comisión de Negocios Constitucionales.

D. Valentín Gómez lo manifestó muy explícitamente:

“ Yo, Señores, dijo, en virtud de una indicación
“ que se hizo en la discusión de ayer, me permití
“ interpelar a los señores Representantes para que
“ declarasen ante el Congreso si era posible que
“ esos pueblos, que se encuentran hoy en una dis-
“ solución, o si parece fuerte esta expresión, en un
“ aislamiento, rotos los vínculos que anteriormente
“ los unían a su antigua capital, estuviesen dis-
“ puestos a mudar de posición, o “a avenirse para
“ adquirir de nuevo una asociación parcial de la
“ cual pudieran resultar las provincias o los Es-
“ tados o no”; porque si realmente el Congreso
“ sintiese por la exposición de sus respectivos Di-
“ putados que era posible alguna reunión de estos
“ pueblos entre sí, y el que reconociesen una ciu-
“ dad principal o capital en que estuviese el asien-
“ to de su Gobierno, o de su Legislatura, o de sus
“ primeras autoridades; “la cuestión había cam-
“ biado enormemente de aspecto y había caído a
“ tierra uno de los principales fundamentos prác-
“ ticos” que ha tenido la Comisión para apoyar su
“ dictamen.

Después de indicar, que con excepción del Señor Dorrego, que había hecho la indicación, ningún otro Diputado había creído probable que cada uno de esos pueblos que tenían el carácter de capital de provincia, se sometería a otra capital, agregaba el Señor Gómez:

“ Resulta, pues, que no está en el arbitrio del
“ Congreso alterar el *statu quo* de separación de
“ esas provincias o de cada uno de esos pueblos.
“ Y si el Congreso procede a sancionar la federa-
“ ción en ese estado, ¿qué habrá hecho? No habrá
“ hecho más que sancionar la disolución y el esta-
“ do de desgracia política en que realmente se en-
“ cuentra cada uno de ellos, por no contar en sí
“ los recursos, no digo abundantes, pero ni aun
“ suficientes para poderlos constituir, para poder
“ marchar y mejorar su situación por el arreglo y
“ mejora de sus instituciones, por el arreglo de la
“ hacienda, y por todos los demás ramos de orga-
“ nización que corresponden a cada Estado.

“ Yo al menos, añadía, no me encuentro con va-
“ lor bastante para opinar en el día por la federa-
“ ción bajo esta condición precisa del estado de
“ los pueblos; y no tendría dificultad en estar por
“ ella en la otra hipótesis que se ha indicado, (en
“ la del Sr. Dorrego) y en aquella en que, real-
“ mente, hemos visto que se han constituido otros
“ pueblos, y señaladamente el de los Estados Uni-
“ dos (1).

No había, pues, en este célebre debate, “unitarios” doctrinarios ni sistematizados: al contrario, los que sostenían la unidad de régimen, eran, doctrinariamente, federales, y por eso aceptaban cualquiera combinación que pudiera darles a las provincias los medios que, aisladamente, no tenían para constituir verdaderos Estados, esto es, autónomos.

Resistida por todos sus correligionarios la com-

(1) Sesión del Congreso núm. 203.—Septiembre 30 de 1826.

binación propuesta por el Señor Dorrego, y abandonada por él mismo, a causa, sin duda, de esa resistencia, la discusión se encerró en los límites de los elementos que tenía cada una de las provincias para proveer, por sí mismas, a todas las necesidades de su existencia como Estado federal.

Oigamos este debate y apreciamos ligeramente su resultado:

“ Volvamos, dice el Señor Dorrego, a la disposición en que se hallan las provincias para gobernarse por un régimen federal. La que represento (Santiago del Estero) tiene tales aptitudes para constituirse en federación, que la cuestión que propuse en la anterior vez que tomé la palabra, fué solamente como una cosa que podía haberse pedido como perfección. La provincia de Santiago tiene una extensión de cerca de cien leguas, entre la jurisdicción de Córdoba y Tucumán, y buscando al Norte hasta el Bermejo desde los confines de Catamarca, de ciento sesenta leguas; tiene una población que pasa de sesenta mil almas; pero se quiere tomar la ciudad por lo que es la provincia, y de ahí se deduce que la ciudad es muy triste y pequeña, luego no puede organizarse en Estado federal. La provincia, Señores, posee un territorio ya templado, ya cálido, de tal naturaleza, que los frutos más ricos de la tierra se dan allí. La grana, que es la que hace la riqueza de Guatemala, se da en excesiva abundancia y podría ser un ramo principal de la riqueza de la provincia. El añil, que es otro ramo que hace la riqueza de un país, se da allí hasta silvestre, la caña también se produce. Le es fácil el transporte de sus frutos, pues tiene tres ríos grandes, que cuando me-

“ nos el Salado y Bermejo desde la jurisdicción de
“ Santiago son navegables; en cuanto a maderas
“ son las más selectas; y sobre todo yo me veo for-
“ zado a indicar, entre otras obras, la famosa des-
“ cripción del Chaco por el P. Lozano. El confir-
“ ma la existencia de un metal, que unos han lla-
“ mado platina, equivocadamente, y otros lo con-
“ sideraron exclusivo de la provincia de Santiago,
“ a términos de mandar una carabina y pistolas
“ construídas de ól al Presidente de los Estados
“ Unidos, cuando no es más que fierro descom-
“ puesto por los fuegos subterráneos. Igual hay en
“ la isla de Elba, en la Siberia; y el que habla tie-
“ ne una mina del mismo metal en Atacama. Ac-
“ tualmente se están haciendo ensayos de la caña
“ de azucar. El algodón lo produce también hasta
“ silvestre; ¿qué le falta a Santiago? Un “Go-
“ bierno paternal”, que tome el mayor interés en
“ hacer su felicidad, se dedique a fomentarlo; así es
“ que si el gobierno de Santiago hubiera estado or-
“ ganizado bajo un orden regular, la provincia
“ hubiera buscado hombres científicos que vinie-
“ sen de Europa a dirigir todo esto. Más es tal
“ que, pisando todas esas riquezas, vienen sus hi-
“ jos a esta provincia a buscar el pan; de modo de
“ que son como los gallegos en Europa. Me olvi-
“ daba de otra riqueza de aquella provincia, que
“ es el salitre, que llega a términos de ser perju-
“ dicial a los edificios; así es que el salitre que se
“ consumía en la fábrica de pólvora de Córdoba
“ todo se elaboraba en Santiago, sin más que sa-
“ carlo de algún hueco o corral de la ciudad. ¿Po-
“ drá negarse tener tal provincia sobrados medios
“ de organizarse con todo lo expuesto, cuando esos
“ miserables pastores suizos, sobre breñas incul-

“ tas, con poca ilustración y con miseria se orga-
“ nizaron? ¿Por qué presentan al país en un esta-
“ do tal de pobreza que se diga que no se organi-
“ za en sistema federal porque no tiene medios pa-
“ ra mantener los empleados? ¿Y cómo el que pro-
“ dujo este argumento podría pensar en un mo-
“ narca? ”

Respecto a otras provincias, decía el Señor Do-
rrego:

“ El Señor Diputado, que ha sido minero, ¿no
“ sabe lo qué es la Rioja? ¿Y el cerro de Famati-
“ na, dónde está? ¿y no es mayor su riqueza que
“ la del cerro de Potosí? ¿Con que trasladó a la
“ Rioja? ¿Y no sabe el Señor Diputado que habló
“ de tierra donde han encontrado metales de mil y
“ quinientos marcos por cajón, que es un mineral
“ que si se trabaja hará tal vez bajar el precio de
“ la plata? Si esos minerales se fomentan, el Do-
“ rado de Voltaire se halla en la Rioja. Esto es, en
“ sus cerros; pues sus valles de Chilecito no sólo
“ son aptos para el pastoreo, sino que producen las
“ viñas y abundan en granos. En Catamarca los
“ cerros de Santa María, el de Aconquija. En Tu-
“ cumán sucede lo mismo: el cerro Vallo de Tucumán
“ es capaz de ser comparado con el cerro de
“ Potosí. En la parte de Salta igualmente hay una
“ riqueza incomparable. Volviendo sobre la Rio-
“ ja ¿podrá negarse que ella tiene la capacidad y
“ elementos para ser federal? Ella lo que necesita
“ es un gobierno paternal, que cuanto más antes
“ haga salir de las entrañas de la tierra esa rique-
“ za, y sobre todo, desde el principio no puede ser
“ todo prosperidad (1).

(1) Sesión del Congreso núm. 204.—Octubre 2 de 1826.

En cuanto a este punto, contestó D. Valentín Gómez:

“ Sea enhorabuena que la provincia de Santiago y otras que se han mencionado, tengan tales elementos de riqueza y de prosperidad; ¿quién no ve que esto mismo demanda una acción más vigorosa y más consolidada para que en estos momentos y en las circunstancias en que se encuentran hoy los pueblos todo eso pueda producir? ¿Las luces necesarias a este efecto están tan generalmente repartidas para que todos los pueblos se encuentren con ese principio vital de la prosperidad y felicidad nacional? Un gobierno concentrado, que respete los derechos de los ciudadanos y esencialmente la libertad, “que extienda por esa misma superficie una acción poderosa y fuerte, hábil e inteligente podrá hacer que se ilustren y produzcan esos frutos que cada uno de esos pueblos no pueden conseguir reducidos a sí mismos”; a la manera que un inmenso capital empleado respecto de grandes objetos puede producir un resultado, que jamás produciría en manos de un individuo de escasa fortuna. ¿Qué harían con poseer su riqueza? Pero pueden establecerse contribuciones. ¿Cómo pueden establecerse? ¿Cuántos tiempos han de pasar para que puedan establecerse?

“ A la primera vez que se hizo sentir esta voz se han estremecido los Diputados. ¡Contribución directa! cuando por la guerra civil, o por el estado del país, o la prevención misma que hay contra ella apenas permite que podamos lisonjearnos que en muchos años esté generalmente establecida de manera que baste a esas mismas provincias a ponerse en disposición de promover

“ su prosperidad y de acudir con ella a la defensa
“ del estado!

Más adelante, agregaba el Sr. Gómez:

“ Por muchos años, y dígame lo que se quiera, no
“ pueden establecerse las rentas al menos en una
“ tercera parte de nuestras provincias, o sea por-
“ que no se conocen suficientes los medios de rea-
“ lizarlas, que no son tan generales en nuestro
“ país, o sea porque su situación en otros respectos
“ no permite que ellas sean realizadas. “El hecho
“ es que en muchos años habrá muchas provincias
“ que no puedan bastarse a sí mismas; y entonces
“ ¿dónde se encuentra este remedio? En un régi-
“ men de unidad; porque como entonces el interés
“ de conservarse es de todos “in sólídum” se
“ emplean estos beneficios en favor de todas
“ ellas ” (1).

Estos discursos establecen la cuestión bajo su aspecto más práctico.

El Señor Dorrego enumera las riquezas naturales que poseían las provincias que nombra, y que, según él, les daban los elementos y la capacidad necesaria para constituirse dentro de sí mismas y darse un gobierno propio; pero no concluye que ellas puedan establecer el “self-government”: concluye precisamente todo lo contrario, puesto que dice, y repite, que lo que necesitan son gobiernos “paternales”, vale decir, de *tutela* en su esfera más amplia, en esa esfera en que se ejerce la acción del padre, preparando, educando, encaminando a sus hijos para que lleguen a bastarse a sí mismos y a saber gobernarse.

En agrupaciones de hombres atrasados, no cabe, en efecto, el *self-government*, porque el gobierno

(1) Sesión del Congreso núm. 204.—Octubre 2 de 1826.

exige condiciones naturales y adquiridas que no poseen los pueblos, sino después de haber alcanzado cierto grado, y muy elevado, de desarrollo intelectual y moral que les permite apreciar sus verdaderas necesidades y conveniencias, dándoles el conocimiento y haciéndoles familiar el uso de los medios de atenderlas y de satisfacerlas.

El progreso es innato en el hombre; pero su desarrollo está sometido a diversas condiciones que le son naturalmente extrañas.

Entregado a sí sólo en su lucha con la naturaleza, el progreso del hombre es lento, muy lento, porque tiene que ir descubriendo y conquistando, por sí mismo, y uno a uno, los medios de dominarla y de ponerla a su servicio; pero si viene un hombre que posee el conocimiento de esos medios y el hábito de usarlos, ese hombre, que es superior por lo que ya posee, y como superior impone su dirección, acelera el progreso y hace en breve tiempo la obra que para el otro habría sido obra secular.

En América, tenemos ejemplarizada esta verdad.

En Méjico y en el Perú encontramos la tradición de hombres blancos y barbados, representantes de un estado social adelantado.

Esos hombres aceleraron el progreso de las agrupaciones sobre que ejercieron la acción benéfica, la acción de las conquistas hechas y de la ciencia adquirida por la sucesión de muchas generaciones de hombres.

Nuestras tribus, a las que no alcanzó aquella acción, entregadas a sí solas, poco habían mejorado su estado primitivo.

Ahí están todavía: han pasado tres siglos, y bien lejos se encuentran del estado social de los quichuas en la época de la conquista.

No les faltaba gobierno, porque los hombres lo tienen desde que se agrupan: tenían el gobierno paternal de los caciques; pero ningún hombre puede dar más que lo que posee.

Por eso los Caciques no les pudieron dar a sus querandíes, a sus guaraníes, a sus tobas, a sus abipones, lo que les dieron a las tribus peruanas y mejicanas los hombres blancos y barbados que arribaron a sus tierras y en ellas se deificaron.

El primer instrumento del progreso humano, es el hombre mismo.

La vara de Moisés, que al tocar la roca seca inerte hace brotar de ella corrientes de agua fecundante, de aguas vivas, que son un don natural inapreciable, es el símbolo de la acción del hombre inteligente y civilizado sobre la naturaleza.

La naturaleza sólo abre sus veneros y derrama los tesoros que encierra, al contacto y por el contacto del hombre que sabe interrogarla y dominarla.

Para los que esto no saben, para las inteligencias que no han despertado, para las que están todavía en el limbo y en las tinieblas de la ignorancia, las riquezas naturales son riqueza muerta.

Por ejemplo, en las tierras auríferas de California han vegetado secularmente en la ignorancia y en la miseria muchas generaciones de hombres. Pero un día llegaron a esas tierras hombres que traían la ciencia, la experiencia, las ambiciones, las energías y las audacias de otro pueblo mucho más civilizado, y aquellas camadas auríferas que habían sido tierra estéril, sobre la cual morían desnudos y hambrientos sus antiguos poseedores, se convirtió en un raudal de oro que inundó al universo civilizado, que lo perturbó por la inundación, y que ha

dejado huella imborrable en la historia del padrón monetario de las naciones modernas.

No tenía razón el Sr. Dorrego al enumerar las riquezas naturales en su estado inerte, como elementos bastantes para la constitución y el mecanismo de un estado federal.

Déjesele solo, que se maneje él solo, decía, porque él tiene, en sí solo, todo lo que necesita para organizarse y para progresar.

Somos posteridad para el debate en que este fué dicho: podemos juzgarlo a *posteriori*.

El Sr. Dorrego venció en el hecho. Santiago del Estero quedó entregado a sí mismo.

Ibarra, su caudillo, continuó gobernándolo, como Bustos a Córdoba, como López a Santa Fe; mientras Quiroga dominaba a la Rioja y extendía su influencia a otras provincias por su fiereza y por su espada.

Ibarra gobernó más de treinta años.

Después de la desaparición de Rosas, la Constitución le dió a Santiago del Estero el gobierno propio institucional.

¿Qué han producido en medio siglo sus riquezas naturales enumeradas en los debates de 1826? ¿Qué es lo que han dado? ¿Qué progreso ha realizado?

El primer censo argentino, nos da en 1869, (49 años después del descenso de Rivadavia, y 16 años después de la constitución actual) los siguientes datos:

“ La reproducción en aquel territorio es fácil y activa, y rápido el crecimiento, a punto de haberse calculado que los nacimientos son siempre el doble de las defunciones ”.

Pero este hecho aceptado tiene su compensación en las emigraciones periódicas, constantes, de la

población santiagueña a todas las provincias limítrofes, y especialmente a las litorales, y entre éstas a Buenos Aires; este hecho se encuentra comprobado por la composición de la población bonacrense de todas épocas.

No pueden haber influido en Santiago las convulsiones políticas del resto de la república, pues éstas no la han comprometido de lleno, ni por mucho tiempo; y su acción siempre se hallaría compensada por otros hechos.

El crecimiento de la población de esa Provincia está calculado en un 3 por ciento acumulativo, pero el censo toma por base sólo el 2 por ciento, porque ella pierde, por las corrientes constantes de la emigración de sus hijos, el 1 y hasta el 1 1/2 por ciento.

El Señor Dorrego decía que los hijos de Santiago, pisando todas las riquezas que enumeraba, venían a la provincia de Buenos Aires a *buscar el pan*, de modo que eran como los gallegos en Europa.

Este hecho era originado, según la ilación de su discurso, por falta de gobierno propio; sin embargo, teniéndolo, como lo ha querido, la corriente de la emigración no se ha interrumpido, ni debilitado nunca: y esa corriente representa el 50 por ciento del crecimiento natural de la población de la provincia.

El hecho no proviene, pues, de la causa que le atribuía el Señor Dorrego.

Emigran en busca de pan, porque no lo tienen, o lo tienen muy escaso, en la tierra natal. Esta es la verdad.

Y esta verdad, es la demostración más concluyen-

te de que la provincia, si no ha retrocedido, se ha conservado estacionaria.

El aumento de las subsistencias indica el crecimiento de la población civilizada y productora, así como la emigración de los trabajadores revela la falta de ocupación productiva y la escasez de la subsistencia.

De esto, que creemos correcto, se deduce que Santiago no había aumentado la producción de su suelo ni aun en lo necesario para la holgada subsistencia de sus habitantes, lo que equivale a decir que no había progresado ni en civilización ni en riquezas.

Y eso era lo cierto, porque las riquezas naturales señaladas por el Sr. Dorrego no han sido tocadas: ahí están como estaban; y de algunas de ellas, si lo era, se había perdido hasta el rumbo. No hace muchos años que el Gobierno de Santiago buscaba el derrotero que debía conducirlo al sitio en que se encontraba ese trozo metálico, que hemos llamado aerolito, pero que el señor Dorrego, contándolo entre los tesoros naturales de la provincia, aseguraba que no era más que hierro descompuesto por los fuegos subterráneos. No sabían, y suponemos que todavía no saben, dónde está.

Los ríos navegables desde la jurisdicción de Santiago, el Salado y el Bermejo, quedaron también como estaban. Le fueron inútiles, puesto que no fueron vías de comunicación ni de transporte. Ni aun pudo resguardarse la provincia de los desbordamientos del río que se avecina a su Capital.

De Europa no vinieron los hombres de ciencia, que se harían venir desde que Santiago tuviese su propio gobierno. No pensó, ni pudo pensar en tal adquisición.

No vinieron tampoco industriales ni trabajadores extranjeros. Según el censo de 1869 los extranjeros estaban en Santiago en la proporción "de uno por mil".

En consecuencia de todo esto, no hubo aumento de materia imponible; y sus rentas continuaron siendo insuficientes para atender a los servicios públicos más primordiales.

Esta triste historia es la de muchas otras provincias.

En ellas, constituidas en Estados federales, todos los progresos, todas las mejoras (y entre éstas algunas no sólo locales, sino elementalmente "municipales") han sido impulsadas o realizadas por el concurso de la acción central del Gobierno Nacional que tiene su asiento en esta ciudad de Buenos Aires; y esto ha sucedido, y sucede todavía, porque está realizado el vaticinio de 1826, de que no tendrían en muchos años, que aun siguen corriendo, rentas suficientes para bastarse a sí mismas.

Las provincias van teniendo ya no sólo la intuición, sino el conocimiento práctico de que su progreso sólo puede acelerarse por la acción común, por la acción nacional.

El señor Dorrego medía la extensión territorial para demostrar cuánta tela tenían las provincias para constituirse y gobernarse, desde luego, como Estados federales; sin advertir que tener diseminada una población escasa y atrasada en un territorio vasto, es desheredarla de todos los bienes y ventajas sociales; y que esa misma extensión territorial, lejos de facilitar y robustecer la acción eficiente del gobierno propio, la dificulta, la debilita y hasta la anula.

Esos grandes territorios despoblados, de que todavía son condóminos los salvajes, han sido, para varias provincias, un peligro, una rémora.

Esta verdad que, entre otras, estaba oscurecida por el espíritu localista, ambicioso de poseer dilatados territorios en que no le era dado ejercer jurisdicción efectiva; que no tenía medios para poblar, civilizar, ni explotar alejando el contacto de los salvajes, que desmoraliza y embrutece, ya va siendo comprendida. Ya se comprende que valen más cien leguas linderas con centros de cultura, de industria y de comercio, que cuatrocientas despobladas o mal pobladas, fronterizas con la barbarie y la holgazamería.

El Gobierno de la provincia de Salta, que según lo decía el Sr. Dorrego, posee una riqueza incomparable, cree ahora que lo conviene entregar una porción de su territorio al dominio y a la acción nacional, y lo propone a la legislatura provincial en los siguientes términos:

“ Ambas márgenes del Bermejo hasta el Pilcomayo, y desde la colonia Rivadavia hasta las fronteras de Anta y Metán, colindantes con la provincia Tucumana, son principalmente la zona que constituye las tierras públicas de la Provincia.

“ ¿No sería acto de cordura y verdadero patriotismo que V. H., prestando oídos a opiniones ya emitidas por la prensa, haga cesión a la autoridad nacional de esos terrenos improductivos para esta Provincia?

“ La distancia enorme que separa aquellas regiones de la acción eficaz del Gobierno provincial, y la exigüidad de sus recursos, imposibilitándole por muchos años de poder fomentar, pe-

“ ro ni aun iniciar, el desarrollo de colonias indus-
“ triales en aquel territorio, librado a las depreda-
“ ciones de los salvajes, parecen motivos dignos de
“ consideración para que V. H. resolviera la medi-
“ da indicada.

“ Ni debe creerse que la cesión de aquellos terre-
“ nos lejanos, valdicos y solitarios llegare a men-
“ guar el rango que esta provincia ocupa entre el
“ coro de sus hermanas argentinas, pues de la ve-
“ cindad de poblaciones florecientes y ricas, cons-
“ tituidas en un próspero Estado federal, sólo ven-
“ tajas obtendría, que no de la ocupación devasta-
“ dora e infocunda de hordas bárbaras que hoy
“ los pueblan.

“ La importancia de una provincia no puede
“ estar vinculada a la posesión de vastas tierras
“ muertas para la civilización y el porvenir, sino
“ al desenvolvimiento del trabajo y el progreso
“ ejercitados ampliamente, aunque sea en menor
“ espacio.

“ ¿Qué importancia tienen ante el mundo civi-
“ lizado, los dilatados imperios Asiáticos en pa-
“ rangón a la pequeña y laboriosa Bélgica? (1).

Como consecuencia del estado de su población y de la escasez de sus recursos faltábales a las provincias el personal requerido para los servicios más esenciales.

No tenían—y no podían adquirir,—el necesario para organizar la administración de la justicia.

En los debates del Congreso quedó establecida esta dolorosa verdad.

La Provincia de Salta, que había llegado a tener

(1) Memoria del Ministerio de Hacienda de la provin-
cia de Salta, correspondiente a los años 1879-1880.—Salta,
1881.

un ejecutivo regular, no había podido conseguir, a pesar de los mayores esfuerzos, dotar y reglar su administración de justicia.

La de Tucumán había hecho solicitudes para que en la Cámara de Justicia de Buenos Aires se admitieran las apelaciones en los pleitos de aquella provincia.

La de Catamarca, tiempo hacía que trataba de verificar la división de los poderes, particularmente para separar la administración de la justicia, y no lo había logrado.

La de Córdoba, antigua capital, con Universidad y letrados, no tenía deslindados los poderes y especialmente el poder judicial, que estaba sometido a la influencia del Ejecutivo, porque no había podido dotarse una Cámara de apelaciones, y el Gobernador se veía en la necesidad de nombrar jueces para cada causa apelada: necesidad funesta, porque el Gobernador los elegía a vista de cada causa, por su voluntad sola, sin ninguna garantía de imparcialidad, ni aun aparente.

En Santiago del Estero, el Gobernador tenía de hecho el poderío judicial.

Las provincias de Santa Fe, de Entre Ríos y Misiones no tenían un sólo letrado: la de Corrientes, tenía uno, el Dr. Cosío, y éste dispuesto a venirse a Buenos Aires donde había estrados de justicia.

En cuatro provincias, entre 80.000 habitantes, un sólo letrado que no tenía ante quien ejercer decorosamente su profesión.

En Santa Fe, el Gobernador conocía de las apelaciones de justicia. Cuando lo tenía a bien remitía algunas causas en asesoría a Buenos Aires.

En Entre Ríos un fraile franciscano había esta-

do administrando la justicia civil y la criminal, pronunciando hasta sentencias de pena capital.

En Corrientes, dos Alcaldes Ordinarios desempeñaban todas las funciones del poder judicial.

De los dos Alcaldes, ambos legos, leguísimos, según se dijo en el Congreso, uno conocía en primera y el otro en segunda instancia; pero los dos tenían un mismo Asesor, que lo era un Clérigo de pocas letras, sin escrúpulos para firmar sentencias de muerte, como no los tenía para asesorar al juez de la apelación en la misma causa en que había asesorado al juez apelado.

La carencia de recursos no les permitía la adquisición del personal idóneo que les era indispensable para tener administración de justicia.

El Gobierno de Corrientes, sintiendo la necesidad de un hombre instruido que le sirviese de Secretario y Asesor, lo solicitó en Buenos Aires, y no lo pudo lograr sin hacer una contrata especial de darle 2000 pesos de sueldo anual, cuando el Gobernador sólo tenía 1500.

Como dotación de un juez de primera instancia se habían asignado 200 pesos, porque la renta no soportaba más. ¿Qué abogado iría a desempeñar esos cargos en las provincias por el doble, por el triple de ese sueldo anual?

Estos hechos, que demostraban ante el Congreso la imposibilidad en que se encontraba la mayoría de las provincias para organizar el poder judicial con sus propios recursos, no fueron impugnados por la oposición.

Su jefe, el Señor Dorrego, se limitó a pronunciar las palabras que vamos a reproducir en seguida:

“ Señores, — dijo el Señor Dorrego, — el gran argumento es que no hay abogados. Como se sue-

“ le decir, en el pueblo donde hay menos médicos
“ hay más salud, y donde hay menos abogados se
“ pletea menos. Yo respeto las dos profesiones, pe-
“ ro no creo que sean de absoluta necesidad; lo po-
“ co y bueno creo que es lo esencial de estas dos
“ clases ” (1).

Los derechos civiles del hombre son anteriores y superiores a todos los otros, porque sin que estén garantidos el honor, la vida, la familia y la propiedad individual, no pueden existir las libertades y los derechos políticos de los ciudadanos.

Pueden existir, y existen bajo algunas formas de gobierno, los derechos del hombre sin los del ciudadano; pero nunca los de éste sin los de aquél.

De ahí ha venido, en las sociedades civilizadas, la necesidad y el hecho legal de la división de los poderes públicos; dándole al judicial, además de su independencia como poder, condiciones de duración que independizan las personas de los jueces, que los colocan en una atmósfera serena, como custodios de los derechos inmutables de las personas civiles, y como encargados de la aplicación, en los casos ocurrentes, de los principios eternos e invariantes de la justicia.

Todo esto, que distingue y caracteriza al poder judicial, lo separa, fundamentalmente, de los otros poderes que viven y se mueven en una atmósfera algunas veces tormentosa, siempre agitada, en que todo es movable y cambiante como la opinión, mudable como los intereses y las conveniencias, candeante como las pasiones y las ambiciones de poder y de renombre.

La distribución de la justicia es una ciencia; y como las otras ciencias, tiene sus profesores.

(1) Sesión del Congreso núm. 294.—Octubre 2 de 1826.

El abogado, como el juez, necesita tener, además de la equidad natural, cuya fuente es el buen sentido, el conocimiento de las leyes, que se adquiere por el estudio, y el discernimiento del bien y del mal, al que la escritura llama la luz de la sabiduría (1).

Sin la independencia del poder judicial, no existe, como dejamos indicado, la libertad política; y sin hombres preparados para ejercerlo con ciencia y conciencia ese poder desaparece o se anula.

Esta es la consecuencia de la falta de personal idóneo.

Y de esa consecuencia fluye necesariamente la absorción, más o menos desembozada, del poder judicial por el poder ejecutivo, como ya hemos visto que sucedía en 1826 en varias de las provincias argentinas.

Tal absorción inevitable desde que las provincias no tuvieran verdadera, esto es, *independiente* administración de justicia, montada por ellas, o dada y costeada por el poder central, era, y es incompatible con todo gobierno libre, cualquiera que su forma sea.

“ En los gobiernos libres, dice Kent's, la independencia del poder judicial se hace mucho más importante para la garantía de los derechos de los ciudadanos que en una monarquía, desde que ésta es la única barrera opuesta a la opresión de una facción dominante, armada por el momento del poder y abusando de la influencia adquirida bajo agitaciones accidentales, para aniquilar las instituciones y la libertad ” (2).

(1) Diligete lumen sapientiae omnes qui praesistis populis. Sap. 6. 23.

(2) Kent's, comm. Lect. 14.

Con menos abogados habrá menos pleitos, pero suprimido, por la falta de abogado, el poder judicial independiente, habrá también menos libertad, y la causa en cuya defensa se pronunciaron aquellas palabras será una causa perdida ante la razón y la ciencia.

Se invoca en favor de la federación la opinión de los pueblos.—Atribúyese a la Constitución de 1819, que la contrariaba, la anarquía y la disolución del año 20.—Páginas históricas que restablecen la verdad.—Los pueblos no pueden expresar su opinión.—Los caudillos constituidos en órganos de los pueblos inconsultos y anulados por la violencia y el fraude oficial.—Aunque los pueblos pudieran expresar su voluntad, les faltaba preparación para apreciar la diferencia de régimen.—Estado de los pueblos.—Distinción entre las poblaciones urbanas y rurales.—Fuentes del poder de los caudillos.—Origen y significado de la federación que proclamaban.—La Federación era la disgregación favorecida por el odio a Buenos Aires.—Solidaridad entre los centros y clases cultas de las provincias y su Capital tradicional.—Opinión del General San Martín.—La Federación representada por los caudillos y por las desgracias nacionales, les inspira terror y odio.—La misma oposición federal, lo reconoce en el Congreso.

Siendo imposible demostrar que las provincias tenían los elementos morales y materiales más indispensables para organizarse regularmente como Estados federales, se invocó, como razón suprema, *la opinión de los pueblos*.

“ Los pueblos, se dijo, están abocidos por el sistema federal; no admitirán otro.

“ La constitución unitaria de 1819, contrariando esa opinión, produjo el caos del año 20 y de la disolución nacional.

“ La reincidencia en el mismo error, producirá el mismo resultado ”.

Pero no es de ninguna manera cierto que la constitución del año 19 fuera rechazada por los pueblos y produjera el caos del año 20.

Los autores únicos de tan inmenso desastre fueron los que, disolviendo el ejército de Belgrano en Arequito, desarmaron a la autoridad nacional en presencia del caudillaje.

Por fortuna, la historia de aquellos sucesos está escrita por un hombre político contemporáneo, enemigo de Rivadavia y de los llamados *unitarios*, diputado de la oposición en el Congreso de 1826, amigo íntimo, personal y político del Sr. Dorrego y compañero suyo en la redacción del *Tribuno*, que fué el órgano más caracterizado del llamado *partido federal* en la época de la Presidencia.

Abramos y leamos las páginas históricas escritas por Don Pedro Feliciano Cavia.

Dice así:

“ Cuando en 1810 se dió en Buenos Aires el primer grito de libertad, esta capital, que hasta entonces era la mansión del Gobierno virreinal, quedó transformada en residencia del poder general, que se puso a la cabeza del movimiento revolucionario. Por un instinto de seguridad, las provincias del antiguo Virreinato, que pudieron uniformar sus deseos, y echar por el suelo el influjo y el despotismo español, reconocieron en el nuevo gobierno establecido en la Capital, el poder general que debía dirigir la empresa de la emancipación, y llevarla hasta un término feliz. Buenos Aires, pues, quedó convertida, de hecho y de derecho, en residencia del Gobierno General, que había de salvar al país, como antes lo había sido para mantener el estado de cosas que subsistía, como resultado del sistema colonial. A proporción que los pueblos interiores iban

rompiendo las cadenas con que los tenía aprisionados el feroz peninsular, fueron incorporándose a las demás provincias, en que se había logrado ya extinguir la dominación española.

“ Con algunas cortas alteraciones, este orden de cosas subsistía cuando se sancionó la constitución del año 19. Es verdad que ya entonces había sido pérfidamente ocupada por el potentado vecino la preciosa provincia Oriental. También es positivo, que el caudillo Artigas había extendido su maléfica influencia al territorio de Entre Ríos, e igualmente de Santa Fe: pero también es cierto que, a excepción de estas dos provincias, las demás de la Unión estaban sometidas de hecho y de derecho a la autoridad del poder central establecido en Buenos Aires.

“ Cualesquiera que fuesen las pretensiones o deseos de los demás pueblos por sacudir el yugo de la Capital, ellos prestaban en lo público la debida obediencia a las autoridades generales, y de consiguiente la armonía social estaba sin alteración. Los legisladores de aquel tiempo pudieron esperar racionalmente que la carta política que presentaban a los pueblos, como fruto de sus meditaciones, quedase plantificada en ellos, y contase con la estabilidad que, moralmente hablando, podemos prometernos en los sucesos humanos. Por una parte, las provincias no habían manifestado una decidida aversión al regimen de unidad; pues exceptuando el círculo a que llegaba la influencia del odioso Artigas, los demás pueblos no daban señales de alarma, porque no se diese preferencia a la forma federal. Por otro, la guerra activa que en el riñón de nuestras provincias nos continuaba haciendo el obstinado español, envolvía una circunstancia agravante

que recomendaba más el régimen de unidad. Esa contienda era entonces y será siempre de un carácter peculiar, que no reviste ninguna otra guerra con cualquiera otra potencia que no sea la España. El gabinete de esta nación no puede tener por objeto la ocupación aislada de cualquiera punto de América. Si hace la guerra en uno, es, para después de ocupado, hacerlo servir a la empresa de ocupar otro. En esa parte, sus planes tienen analogía con los nuestros. Unos y otros son universales. Los de España, recolonizar; los de América, emancipar. Cualquiera otra nación que nos hostilice, no puede tener en vista intereses tan generales. Así es, que nunca puede ni podrá tener ninguna guerra exterior la trascendencia e importancia que la contienda con la España. De consiguiente, ninguna lucha como ésta exige tantos cuidados y sacrificios para cantar la victoria. Por estas circunstancias se modelaron sin duda los legisladores del año 19, para montar la Constitución sobre la base de unidad; pues por un lado no se veía precipitarse contra ella un torrente impetuoso de opinión pública, y por otro la seguridad general del Estado Argentino, y aun también la de los otros Estados Americanos, exigía imperiosamente (ya que el país iba a constituirse en semejantes momentos) se diese la preferencia a la forma gubernativa en que aquélla quedase consultada del modo más sólido.

“ Ello es cierto, “que la Constitución fué solamente jurada y puesta en planta en las provincias que habían concurrido al Congreso general.” Aca-so no será muy avanzado el indicar, que ella habría subsistido hasta hoy, si dos provincias, apoyadas en sus recursos, y, a más de ellos, en las ardientes combinaciones, talentos notorios, carácter empresario,

pasiones fogosas, y demás calidades extraordinarias que reunía un extranjero ilustre y desgraciado (1), no hubieran apelado a las vías de hecho, invadido a la provincia de Buenos Aires, disuelto el Gobierno General, y dejado al Estado en acefalía, como medio el más oportuno para llevar a ejecución sus planes ulteriores, que acaso no eran los de la Federación, por más que se vociferase lo contrario.

“ Estas eran rigurosamente las circunstancias más remarcables que rodearon a los legisladores del año 19, al tiempo de sancionar la Constitución, en que debían quedar consignados los derechos políticos de los pueblos Argentinos”.

El Señor Cavia complementa esta narración con la siguiente interesantísima nota:

“ Ninguno de los que habitaban el país a fines del año 19, puede ignorar que el desventurado D. José Miguel Carreras fué el que tuvo la principal parte, y toda la dirección en aquella empresa. No pudiendo sacar partido en favor de sus designios de la universal suspicacia de Artigas, que en todo hombre de talento creía ver (y con razón) un enemigo mortal de sus torpezas y política antisocial, Carreras tuvo la singular habilidad, después de haber estudiado el carácter del caudillo Ramírez, de inspirarle sentimientos de elevación, y hacer que se sublevase contra el sordo protector, de quien era favorecido. Todos saben el éxito que tuvo este manejo. Artigas fué derrotado por una de sus criaturas y desde entonces toda la influencia de que él había gozado pasó a su vencedor. “ Carreras llevó adelante sus planes, apoyado en la fuerza moral y física, con que de sus results contó desde

(1) D. José Miguel Carreras.

entonces el supremo del Entre Ríos. Estos elementos y los de Santa Fe, que obraron en combinación, echaron por tierra al gobierno directorial y produjeron la disolución del Estado. Téngase presente que ninguna de las demás provincias hizo valer pretensiones algunas y que el Cabildo, gobernador de Buenos Aires en aquellos momentos, emancipó oficiosamente a los pueblos, indicándoles quedaban en toda libertad para consultar por sí mismos a su seguridad y a la defensa y conservación de sus derechos " (1).

Sin entrar en discusión de hechos y apreciaciones de detalle, que no caben en el cuadro de este trabajo, podemos afirmar que las conclusiones de la narración del Señor Cavia son exactas.

La disolución del país, el caótico año 20, no fué obra de los pueblos: ella pertenece por entero, como va dicho, a los autores de la sublevación militar de Arequito y a los caudillos a quienes inspiraba y dirigía Don José Miguel Carreras, emigrado chileno, que no retrocedía ni ante la alianza con los salvajes, para volcar a las autoridades nacionales argentinas, y adquirir en medio y por medio de la anarquía los elementos que le eran necesarios para trasponer en armas la Cordillera y llevar la guerra civil a su país, aunque esto comprometiese la causa de la independencia americana. Pero los mismos que reconocieron que la Constitución de 1819 no había sido derogada por la voluntad ni por la fuerza de los pueblos que la aceptaron y juraron, pretendían que las situaciones eran diversas: que en seis años de aislamiento los pueblos se habían ha-

(1) "El Tribuno", núm. 7, publicado el 12 de Mayo de 1827. Este periódico era, como se sabe, órgano del señor Dorrego, uno de sus redactores.

bituado al gobierno propio, y tenían opinión hecha, decidida y uniforme en favor del régimen federal.

Buscando, con sincero deseo de encontrar la verdad, las manifestaciones de la opinión popular, expresadas por el pueblo mismo, no las hemos encontrado.

Hemos hallado pueblos obedientes o sojuzgados: en parte alguna pueblos deliberantes, dueños de sí mismos, que emiten y hacen resonar su voz.

Habla por ellos Bustos en Córdoba, López en Santa Fe, Ibarra en Santiago, Quiroga en la Rioja.

Estos Señores habían subido al gobierno por los peldaños de la anarquía y como representantes de la fuerza que en ella había preponderado. Habían reunido *Juntas de Representantes* encargados de dar formas externas de legalidad a su título y a sus voluntades.

La reelección era de regla. Pero se dió el caso de que habiendo terminado uno de los períodos del Gobierno de Córdoba, de que se había apoderado Bustos por resultas de la sublevación de Arequito, la Junta de Representantes, por un acto inesperado, no lo reeligió, nombrando a otro ciudadano para la gobernación de la provincia.

Ante tamaño *desacato*, se reunieron varios ciudadanos, amparados por la fuerza pública, en los portales del antiguo Cabildo, que era la casa de la representación provincial, y tomó la presidencia de la tumultuaria Asamblea el mismo Señor Bustos, gobernador saliente, no reelecto, y ya sustituido por una ley que se le había comunicado.

De todo lo que en esa Asamblea ocurriera se labró un acta que firma el propio Bustos, dando fe de su fiel contenido les Escribanos públicos de la

ciudad; y de ella tomamos lo que basta para establecer el hecho como el hecho fué. Dice así:

“ En la Ciudad de Córdoba, a veinte y seis días del mes de Febrero de mil ochociento veinte y cinco. Hallándose reunidos en estas casas que fueron de Cabildo y en el día de la representación provincial, los abajo suscriptos, que a una proclamaban por la continuación del Señor Coronel Mayor D. Juan Bautista Bustos en el Gobierno de la Provincia “en cuyo lugar por haber concluído éste el término legal”, había sido elegido el día “anterior por la sala, contra las esperanzas y voto público, el Coronel D. José Julián Martínez”, comisionó por ante nos los escribanos que abajo firmamos, etc.

Los Representantes que habían sido convocados para instruirles de un pliego del Señor Bustos que traía la calidad de *urgente* no habían comparecido, y con este motivo la Asamblea que presidía al aire libre el mismo Señor Bustos, tomó las siguientes resoluciones:

“ Art. 1.º A consecuencia de no *comparecer* íntegra la sala que componía el Congreso de la Provincia y haber dado mérito a esta disolución de hecho la elección *desgraciable* del Gobierno en la persona del Coronel D. José Julián Martínez se declara Córdoba sin representación.

“ Art. 2.º Siendo impracticables otras medidas, “ por el conflicto de las circunstancias, para “diseccionar la administración, calmar ejecutivamente las zozobras que ocupan al público, y reducir “ a equilibrio todas las relaciones que se sienten “ alteradas; se encarga al Exmo. señor don Juan “ Bautista Bustos, el ejercicio de los tres poderes “ provisoriamente hasta la reunión de la provincia, que con el objeto de dividirlos, y reponerlos,

“ se citará, girando prontas circulares a sus varios departamentos.

Agrega el acta:

“ Ultimamente S. E. el Sr. Gobernador, después de haber dado al pueblo las debidas gracias por las distinciones con que había querido honrarle, aceptó la continuación de presidir la provincia en los términos que aparece de esta acta y la firmó, por ante nos, de que damos fe. Juan Bautista Bustos. (siguen las firmas).

El Sr. Bustos reorganizó la provincia: fué electo Gobernador, y no volvió a ocurrir novedad, continuando a ser reelecto.

Ibarra, en Santiago, tuvo desagrados con la *Junta* por haber electo los Diputados nacionales entre las personas distinguidas de la provincia; y éstos no seguían las corrientes de la voluntad y de los intereses u opiniones del Gobernador, cuya representación fué al fin confiada al Sr. Dorrego, porteño, que no estaba ni aun domiciliado en la provincia, en cuyo nombre tomó asiento en el Congreso.

Las dificultades con la *Junta* desaparecieron; el poder personal del Gobernador bastaba para allanarlas; pero para no obrar siempre por sí sólo, hizo intervenir alguna vez la autoridad de sus comandantes, y todo lo arregló de la manera más satisfactoria, como lo prueba el hecho de que el Gobierno del Sr. Ibarra duró más de treinta años, y sólo terminó cuando Dios se sirvió llamarlo a mejor vida.

El Sr. López en Santa Fe, gobernó también hasta el fin de sus días.

Quiroga era el órgano de la Rioja, por la autoridad de su brazo, que era vigoroso; su sable uniformó la opinión en las provincias de Cuyo y en algunas de las del Norte, propagando su sistema como

Mahoma propagaba el Alcorán: con la cimitarra en la mano.

Uno de los Diputados al Congreso, el señor Portillo, al oír que la opinión de los pueblos estaba pronunciada por la federación, exclamaba: “Si algunos están por la federación son los Gobernadores que los tiranizan. Si soltaran el bastón por un poco de tiempo, mientras se pronunciaban los pueblos en lo tocante a sus actuales gobernadores, ahí está el modo de probarse y averiguar la verdad; que suelten el bastón mientras dejan a los pueblos expedirse libremente. Yo quisiera que vinieran los Señores Diputados para observar conmigo, y veríamos entonces si querían federación, o si son los que dominan a los pueblos los que la quieren. ¿Cómo no han de querer federación bajo el yugo en que están?... Los vitalicios, que dejen los gobiernos por un instante para que se expliquen los pueblos.

El señor Cavia, contestando por la oposición, dijo:

“ Yo creo que el señor Diputado no llevará lo peregrino de esa idea hasta el caso de desear que en el tiempo necesario para la reconsideración del asunto quedasen esas provincias en acefalía. Esto es, que habría algunos otros gobernadores que subrogasen a los primeros aunque provisoriamente. Pero bien; o estos gobernadores estaban vacunados igualmente por el sistema de federación, o tenían un deseo de que prevaleciese el sistema de unidad. En uno y otro caso es muy probable que, ejerciendo entonces la influencia que les daba su posición sobre las provincias que presidían, pusiesen todos los medios que estaban a su alcance para hacer triunfar su opinión par-

“ ticular, y lo mismo vendría a suceder y nada se
“ habría adelantado: siempre existiría la causa de
“ este mal (1).

De este incidente del debate brota la luz y se ve claro. No se trataba de pueblos, sino de gobernadores.

Por regla general, sería la opinión de los gobernadores, y no la de los pueblos, la que saldría de las urnas.

Esa era la verdad entonces; lo ha sido después; quizá lo sería hoy, sino en todas, en muchas provincias.

Eran, pues, inconsistentes, no tenían valor alguno, porque les faltaba base de verdad, los argumentos de los que invocaban la voluntad del pueblo inconsulto o amordazado por la violencia o el fraude oficial.

Pero aun realizado el imposible de colocar a los pueblos en plenísima libertad para manifestar opinión sobre la cuestión que se debatía en el Congreso, no habrían podido emitirla.

El Sr. Gorriti, que era uno de los hombres mejor preparados, y que procedía con entera independencia, después de presentar la situación de las provincias tal cual la veía, agregaba:

“ Pero si después de todos estos datos que nos
“ muestra la experiencia nos empeñamos en creer
“ que hay esa tendencia a la federación, también
“ podremos persuadirnos y creer que un grave
“ tiene tendencia a volar y no a caer; que un cuer-
“ po sólido tiene más tendencia al movimiento que
“ a la inacción. No hay tal tendencia ni la ha habi-
“ do, y me atrevo a asegurar que fuera de Buenos

(1) Sesión del Congreso núm. 203.—Septiembre 30 de 1826.

“ Aires no hay dos docenas de hombres que la quieren efectivamente.

...“ Pero, sobre todo, ¿cómo podemos imaginar que haya en la masa de la población esa tendencia a la federación si no la conocen, si no saben lo que es? Este es el fenómeno más extraordinario del universo: suponerse desear de una cosa de que no se tiene la menor idea.

...“ Tampoco presumo yo que los pueblos tienen ese conocimiento y discernimiento claro de lo que es unidad, y por eso yo no diré que es esto lo que quieren las masas, lo que quieren es lo que haga su felicidad; pues siempre propenden a vivir en paz, en tranquilidad y seguridad, y por lo mismo, a las masas les es indiferente conseguir estos bienes por un sistema o por otro. Es pues del resorte del Congreso el juzgar esto y calcular las cosas (1) ”.

Los pueblos no podían, en efecto, tener opinión sobre la cuestión teórica, y no la tenían. Ellos no habían conocido, jamás, el gobierno propio, y por consiguiente era cierto que no podían desear un régimen de que no tenían la menor idea, como decía el Sr. Gorriti.

Tampoco podían tener un discernimiento claro de lo que entendían los constituyentes, por “unidad de régimen”; porque la centralización o descentralización administrativa, que era de lo que se trataba, es una cuestión complexa, difícil aún para los hombres más competentes, y para cuya acertada solución es indispensable consultar todas las condiciones físicas y morales del país: la extensión territorial y las divisiones que en ella hubieren hecho, la topografía, la dispersión o la concentración de

(1) Sesión del Congreso núm. 206.—Octubre 4 de 1826.

las poblaciones; sus tradiciones y sus costumbres; el mayor o menor número de hombres preparados para la administración local, y la mayor o menor confianza que pudieran inspirar; la facilidad o dificultad de las comunicaciones, y, por último, la mayor o menor armonía entre los intereses económicos de las diversas porciones del territorio.

Basta enumerar así, como lo hacen los publicistas, los elementos que deben entrar en el estudio de esta cuestión, para que quede demostrado que los pueblos no podían tener ni dar opinión alguna en esta materia.

Ni aun los anismos caudillos, que hablaban en su nombre, podían tenerla.

Veamos cuál era el estado de esos pueblos, cuya opinión se invocaba; cuál la fuente del poder de los caudillos; y cuál el origen y significado de la *federación* que proclamaban.

La población de la colonia no era homogénea.

En las ciudades o villas existía la vida social, con la mancomunidad de sentimientos y de intereses, con los vínculos que ella produce.

No tenían el Gobierno propio, porque nuestros antiguos cabildos no eran más que vástagos endebles y enfermizos del tronco, en otra hora tan robusto, de las libertades comunales, que había sido tronchado en España por la mano del absolutismo monárquico.

Esos cabildos eran corporaciones oligárquicas; pero ni aun con este carácter tenían resguardada su autonomía, porque arriba de ellos, como arriba de todo y de todos, estaba la omnipotencia real, que no raras veces decidía los negocios de justicia y de edilidad.

Obraban los cabildos en nombre del *común*; pero

el *común*, esto es, el pueblo, no entraba en ellos. Para ser elector de los miembros del cabildo lo menos que se necesitaba era tener *casa poblada*; pero *elegibles* sólo eran los más acaudalados, los que estaban en la cúspide de la jerarquía social. Los elegibles quedaban tan arriba del pueblo, que ni aun los comerciantes e industriales podían ser regidores (1) al paso que llegaron a serlo, y a perpetuidad, los que compraban ese oficio por dinero, porque se hizo venal.

En las provincias de que vamos ocupándonos, el número de los señores que podían ser electos era limitadísimo; y quedándoles subordinados los mismos que poseían casa poblada, ya se alcanza cuán lejos estaba la masa de la población de los negocios de que la tenían excluída.

El tan pequeño como privilegiado grupo de que salían los ediles, era el que tenía parte en el manejo de los intereses municipales.

Este es el hecho real; y no el que puede presuponerse de los documentos emanados de los cabildos, que hablaban a nombre del pueblo, como lo hacía el rey al de sus vasallos.

Pero si no en el hecho, existía como noción legal la intervención que le correspondía al vecindario en los negocios peculiares de su localidad, puesto que los que la ejercían invocaban su nombre y su delegación.

(1) Decía la ley:—"Los Regidores no han de poder tratar, ni contratar en las Ciudades, Villas o Lugares donde lo fueren, en mercaderías ni otras cosas, ni tener tiendas, ni tabernas de vino, ni mantenimientos por menor, aunque sea de los frutos de sus cosechas, ni aun por interpósitas personas, ni han de ser regatones, ni usar oficios viles". (Ley XII. Tit. X. Lib. IV. Recop. de Indias). Muchos de nuestros muy honrados trabajos industriales eran tenidos por viles.

El reconocimiento del derecho del pueblo, por nominal que sea, les da a los que lo representan, cuando menos, un poder latente; y en hora oportuna, un poder visible, como lo tuvieron los cabildos en la época de la revolución en la que ensancharon, fuera de los límites municipales, la esfera de su acción, llegando hasta hacerla inconveniente y peligrosa.

Según hemos demostrado, los centros poblados, residencia de los cabildos, no tenían el gobierno propio, porque el régimen de las colonias españolas era concentrado y absorbente; pero existía en ellos la noción del derecho, una sociedad regular y una civilización ya adelantada.

Pero la mayoría de la población, compuesta de españoles o criollos pobres, de mestizos, de indígenas reducidos, que estaba diseminada en los campos de las provincias, tenía otra situación, porque vivía desagregada de los núcleos de la población urbana, no sólo por las distancias materiales que los separaban, sino por las ideas, las tendencias y las costumbres que engendra el aislamiento.

En las ciudades, la independencia y la acción individual se restringen y modifican por las limitaciones que imponen las necesidades y las conveniencias comunes: el derecho de cada uno se limita por el de su asociado; y son estas limitaciones recíprocas las que garanten todo lo que a la colectividad y a cada individuo les corresponden legítimamente.

Así, en las ciudades el derecho natural sufre las transformaciones a que en ellas se somete la naturaleza misma: la selva desaparece, y las habitaciones de la familia, la iglesia, la escuela, la casa de Justicia, la reemplazan: el derecho natural se va con la selva; y el hombre, para quien se suprimen o se

templan los rigores de las leyes naturales, queda dominado por la legislación de esa segunda naturaleza llamada sociabilidad.

Lo contrario sucede con el hombre que, alejándose del centro social, se va aislando en el despoblado: a medida que va saliendo de la órbita artificial del derecho social, va entrando en los dominios de la naturaleza y el derecho natural recupera su imperio.

Y esto es tan verdadero, que los europeos que salieron de la atmósfera de los centros en que se ejercía la acción directa y continua de la civilización a que pertenecían, continuando la fusión de las razas que principiaron los conquistadores, lejos de imponer los hábitos de su país tomaron los de los indígenas; ahí está el *rancho* de paja sin puertas, que es el toldo: el *poncho* de los quichuas; las *boleadoras*; el idioma mismo, de que no sólo admitieron voces aisladas, sino que lo dejaron preponderante entre sus mismos descendientes en muchas localidades: el guaraní, era el general en el Paraguay y en Corrientes; el quichúa en Santiago y en los valles de Salta; el chiriguano (dialecto guaraní) y el aimará en los confines de este Virreinato con el del Perú, etc.

Donde estaban los idiomas, estaban las ideas y las costumbres de las tribus originarias a que pertenecían; de ahí, la falta de respeto a la propiedad; de ahí la crueldad: de ahí la felonía, a que los mestizos llamaron *viveza*; de ahí, la antipatía a la sociedad culta en que todo eso era condenado y castigado; de ahí, en fin, el anhelo, por otra parte natural, de sacudir el yugo que, desde las ciudades, les imponían las fuerzas organizadas del poder real, que los mantenían en la abyección.

Buenos Aires era, a la vez, el centro más civilizado y la metrópoli del poder opresor; por consiguiente, sobre ella recaían las antipatías de los atrasados y los odios de los oprimidos.

Es éste uno de los surcos más profundos que hemos encontrado en el camino de los sucesos que vamos estudiando.

Aquellos hombres que, como queda indicado, se encontraban en un grado de civilización inferior, fueron llamados a la escena por la revolución de la independencia.

Al llamarlos, sirviéndose hasta de los idiomas indígenas (1) para ser por todos oída y por todos oadyuvada, como lo fué, los levantó de la abyección en que su aislamiento, su atraso moral y las jerarquías coloniales les habían mantenido; les puso las armas en la mano en nombre de la independencia y de los derechos colectivos e individuales del hombre; y los llevó a los campos de batalla, en los que se impone la igualdad humana por la igualdad del sacrificio y por la igualdad de la muerte.

Entonces, cuando ellos, peleando y muriendo, se reconocieron realmente hombres, idénticos a los otros hombres que los habían menospreciado; cuando vieron por sí mismos que en esa arena sangrienta era la fuerza bruta, la fuerza numérica, la que prevalecía y decidía; y, por último, cuando sintiéndose vigorosos, ágiles, valientes y con menos necesidades para hacer la guerra que los hombres de las ciudades, se contaron y se encontraron bastantes para no resignarse a ajenas voluntades, y para imponer las suyas en aquellos días de conflicto y de peligro, la revolución, que los había sacado del ais-

(1) Varias proclamas de las primeras Juntas fueron publicadas en las lenguas indígenas.

lamiento y de la oscuridad, se hizo también, esencialmente, revolución social. El antagonismo, inevitable desde que se ponían en contacto dos grados de civilización, cuyos ideales y cuyos medios eran tan distintos, salió a la superficie, y el dualismo de la lucha quedó establecido.

La estructura y las funciones del gobierno son determinadas para el estado social.

En las sociedades civilizadas, cuya base es el cambio y la diversidad de los trabajos, el gobierno es un mecanismo y una ciencia.

En las agrupaciones de hombres atrasados, el gobierno es simple: es el gobierno unipersonal de los patriarcas o de los caciques.

El cacique debe su poder a ser, entre los suyos, el más bravo, el más despierto, el más audaz, el más astuto, el que mejor personifica, o mejor se asimila, los intereses y las pasiones de la tribu.

Estando el poder del cacique tan vinculado a sus dotes personales y a la atracción inmediata que ellas ejercían sobre los que lo rodeaban, con dificultad podía irradiarse a grandes extensiones de territorio y a crecido número de hombres; y es por eso que nuestros indígenas, que no eran muchos, estaban divididos en tantas tribus, que aun perteneciendo a una misma nación, se localizaban y hacían vida separada, en lo que estaba muy interesado el cacique para conservar su poder personal íntegro, aunque reducido a pequeño espacio. Esta tendencia localista, así entendida, es la que nos explica cómo, aislándose, se fueron alejando, favorecidos por el despoblado, del tronco común y de la lengua madre, creando la multitud de dialectos de que nos dan noticia los historiadores de la conquista.

La debilidad relativa que de este aislamiento y

del espíritu local les provenía, la suplían por medio de alianzas, así para la agresión como para la defensa.

Ha sido en este molde indígena donde se ha vaciado el poder, el espíritu y la acción de nuestros caudillos populares; y esto no ha acontecido sólo entre nosotros, porque el hombre se parece a sí mismo en todas partes y en todos los tiempos. Las idiosinercias son poco frecuentes.

Tanto en cuanto al origen del poder del caudillo, como al espíritu local y a las alianzas como medio de adquirir ocasionalmente la fuerza necesaria para defender o para agredir, las tradiciones indígenas se armonizaban con las de los españoles.

Esta es la filiación histórica de los caudillos provinciales, cuyos títulos sólo derivaban de sus dotes e influencia personal, o de la fuerza armada de que habían logrado apoderarse.

Estos caudillos, cuya acción estaba limitada al radio local a que alcanzaba su influencia, necesitaban la independencia de la localidad para tener la de su poder personal. Por eso, eran lógicamente adversos a todo vínculo nacional, a todo gobierno general, cualquiera que su forma fuera.

Aceptaron la bandera de la *federación* porque ella, con el significado práctico que tuvo desde que apareció en el Río de la Plata, satisfacía su aspiración verdadera y única.

Federación era, para ellos, sinónimo de disgregación.

Ese significado le dió el tratado celebrado el 12 de Octubre de 1811 entre las Juntas gubernativas de Buenos Aires y del Paraguay.

Con ese significado aceptaron la bandera del General D. José Artigas; con él se la hizo cruzar el

Uruguay y el Paraná, venir a Corrientes, a Entre Ríos, a Santa Fe, a Córdoba, que, segregada, le enviaba a Artigas un sable de honor como testimonio de su gratitud al *protector de los pueblos libres* (1).

Pero la palabra, aun con esa significación, no tenía eco en la multitud, que no la conocía; y la propaganda separatista se hizo avivando las antipatías que ya hemos indicado, avivando y derramando desconfianzas y odios contra Buenos Aires, el centro más civilizado del país, la metrópoli de su poder, la residencia tradicional de su Gobierno Nacional.

Esta propaganda fué eficaz; y hasta qué grado, lo manifestó el mismo Sr. Dorrego, cuando al enumerar los motivos por que suponía que la provincia de Buenos Aires estaba decidida por el sistema federal, decía:

“ Primero; por rechazar ese reproche contra los
“ abusos de autoridad que se le atribuían, y de
“ querer hacerse exclusivos los empleos los hijos
“ de Buenos Aires; a *términos que para transitar*
“ *tenía uno que negar su patria*, y no iba con se-
“ guridad, si no lo hacía, o cuando menos había que
“ guardar silencio a los epítetos degradantes con
“ que se les trataba (2).

La propaganda, no era, como se vé, contra los unitarios sino contra los porteños.

Los caudillos no condenaban ni difamaban al gobierno de Rivadavia, o a algún otro: difamaban a todos los gobiernos, principiando por la Junta de

(1) Creemos que este sable se encuentra actualmente en el Museo de Montevideo.

(2) Sesión del Congreso núm. 204.—Octubre 2 de 1826.

25 de Mayo de 1810, del mismo modo que trataban de hacer odiosos a todos los porteños.

Oigamos al Gobernador Bustos, jefe de la liga de los caudillos, entre los que era el más culto por la educación que recibió de su familia y por la que tuvo en el ejército de Belgrano.

En carta al Gobernador Lavalleja, escrita en Córdoba el 1.º de Septiembre de 1826, le decía:

“ Compañero y amigo: a mí nada me toma de nuevo de la conducta de los Gobernantes de Buenos Aires porque *desde el principio de la revolución no han tenido un pensamiento bueno, pues no han pensado en más que hacer tráfico y bolsa con los fondos del país, y su patriotismo reducido o sujeto a dominar a todos los pueblos, de suerte que aun a los hombres más decididos los han retraído de tan justa causa por no contribuir a las perversas ideas de los mandones* ” (1).

Abondando el abismo que abrían entre Buenos Aires y las provincias, Bustos, que era muy avisado, sabía bien lo que hacía, porque sólo sobre la base de Buenos Aires podía reorganizarse y consolidarse la Nación. Apartada esa base, las provincias quedarían enfeudadas a sus caudillos, por más o por menos tiempo.

Pero si los caudillos habían asumido el Gobierno de algunas provincias, no habían podido conciliarse la opinión de sus clases cultas y acomodadas.

La fuerza material podía dominar los centros sociales de las provincias; pero no le era dado aniquilar de pronto, de un sólo golpe, todas las fuerzas morales y todos los intereses que ellos encerraban; intereses homogéneos y solidarios en todo el país, y

(1) Autógrafo en nuestro archivo.

que, reunidos, constituían la civilización argentina.

En todas las provincias existía, pues, una opinión contraria a los caudillos, representada por los hombres más distinguidos, por su ilustración, por su riqueza o por sus servicios cívicos.

Hombres importantes de las provincias, entre ellos algunos que habían pertenecido, a la Asamblea de 1813 y al Congreso de Tucumán, en años anteriores, habían creído conveniente una descentralización amplia; pero en presencia de la federación de los caudillos, que era la disolución, retrocedían hasta opinar por la centralización absoluta.

Sin que nadie lo contradijera, y estando presentes algunas de las personas a quienes se refería, el Diputado Gorriti ha dejado consignado ese hecho en las actas del Congreso.

“Aun cuando haya habido, dijo, personas que el año 14 opinaron por la federación, en el día están tan decididas en contra de ella que la consideran el mayor de los delirios y la mayor de las desgracias que puede suceder al país. He vivido entre muchos de aquellos, he procurado saber el modo de pensar actual de otros con quienes no he vivido, y en ninguna parte, señores, he oído expresarse con más vehemencia que en Córdoba y por personas las más respetables. Ya hemos oído cómo se explica Tucumán (1).”

Estas aseveraciones del Sr. Gorriti, que nadie contestó, estaban, además, comprobadas por el número y por las cualidades personales de los representantes de las provincias que votaron la unidad de régimen (2).

(1) Sesión del Congreso núm. 206.—Octubre 4 de 1826.

(2) Entre 54 Diputados, 45 votaron por la unidad de régimen.

La de estos Diputados era la misma opinión que emitían los hombres más importantes que habían gobernado o conocían el estado de las provincias. El General San Martín manifestó la suya, en la proclama que desde Valparaíso dirigió a los habitantes de las provincias argentinas, al emprender la campaña del Perú.

“ El genio del mal, les decía, os ha inspirado el
“ delirio de la federación: esta palabra está llena
“ de muerte, y no significa sino ruina y devastación. Yo apelo sobre esto a vuestra experiencia,
“ y os ruego que escuchéis con franqueza de ánimo
“ la opinión de un general que os ama, y que nada espera de vosotros. Yo tengo motivos para
“ conocer vuestra situación, porque en los dos ejércitos que he mandado, me ha sido preciso averiguar el estado político de las provincias que dependían de mí. Pensar establecer el Gobierno
“ federativo en un país casi desierto, lleno de celos y de antipatías locales, escaso de saber y de
“ experiencia en los negocios públicos, desprovisto de rentas para hacer frente a los gastos del
“ gobierno general, fuera de los que demanda la
“ lista civil de cada estado, es un plan cuyos peligros no permiten infatuarse, ni aún con el placer
“ efímero que causan siempre las ilusiones de la
“ novedad.

“ Compatriotas: yo os hablo con la franqueza
“ de un soldado: si dóciles a la experiencia de diez
“ años de conflictos, no dais a vuestros descos una
“ dirección más prudente, temo que, cansados de
“ la anarquía, suspiréis al fin por la opresión, y
“ recibais el yugo del primer aventurero feliz que
“ se presente, quien lejos de fijar vuestro destino,

“ no hará más que prolongar vuestra incertidumbre.—JOSE DE SAN MARTIN.

La bandera federal, que había sido la de Ramírez y Carreras, el aliado de Pincheira, y que era la de Bustos, López, Ibarra y Quiroga, aterraba a las clases conservadoras, porque estaba asociada a las depredaciones y a las crueldades de la guerra civil; y de era odiosa al patriotismo porque con ella se habían disuelto los ejércitos de la patria; abandonando a los libertadores de Chile y del Perú, arrebatándoles la gloria, que era suya, de concluir allí la guerra de la independencia; y se había impedido, y se impedía, la concentración de fuerzas de las Provincias Unidas para recuperar una de las márgenes del Río de la Plata, que las manos del caudillaje dejaron caer en las de una ambición secular.

La existencia de esos sentimientos era innegable; y en la imposibilidad de negarla, la oposición se limitaba a explicar la causa que los había producido.

En ese intento, el Diputado Cavia, colega del señor Dorrego en la oposición del Congreso y en la redacción del *Tribuno*, decía:

“ La Comisión dice también que hasta el tiempo de la anarquía no se despertó entre nosotros la idea de la federación. Aquí es preciso recordar que ésta tiene tal vez en su contra la opinión de muchas personas respetables, por haber aparecido en un tiempo funesto en que la aclamó un caudillo sin talentos y sin ninguna virtud: hablo del patriarca de la anarquía”, de ese hombre que está sepultado en los montes del Paraguay. Esta es una de las causas por que se oye con horror el nombre de federación. Si se hubiese dado ese grito por otra persona, que no hubiese merecido

“ por tantos títulos la execración pública, la federación hubiera sido mejor recibida.” (1).

El Sr. Cavia confesaba que se oía con horror el nombre de la federación, y ni el señor Dorrego, que estaba presente, ni ninguno de sus colegas de la oposición lo contradijo, porque ese sentimiento habían inspirado en las clases cultas y conservadoras de las provincias los caudillos, representantes de un grado de civilización inferior, en lucha con los centros sociales, cuyos vínculos disolvían, cuyas ideas y cuyos hábitos contrariaban, cuyos intereses sacrificaban.

Era, pues, cierto que la opinión que se invocaba era puramente la de los caudillos.

(1) Sesión del Congreso núm. 202.—Septiembre 29 de 1826.

III

La Constitución de los Estados Unidos transportada a la América Española, no había podido funcionar, conservando el orden y la libertad.—¿Por qué?—Opiniones de Tocqueville y de Webster.—Razonamientos de los escritores de la época de Rivadavia.—Cómo llegaron los Norteamericanos a la unidad del régimen nacional.—Los federales argentinos confundían el vínculo federal de 1778, que puso en peligro de disolución a los Estados Unidos, con la Constitución de 1787, que los salvó y consolidó.—La opinión del Doctor Alberdi.—La oposición argentina no imita el patriótico ejemplo de los constituyentes Norteamericanos.—Al contrario, es sistemática y personal: autoriza y sostiene cuanto hacen los Gobernadores, hasta la denegación de los contingentes para la guerra nacional.—Enaltece al General Bolívar.—Se solicita su intervención en la cuestión interna, a pesar de que Bolívar era ultra-unitario, y constituía, por su doctrina y por sus actos, un peligro para la integridad territorial y las libertades argentinas.—Alucinación de las oposiciones que se adhieren al poder personal.

Se invocaba, también, en favor del sistema que llamaban federal, la opinión de los otros Estados de la América española, designándose a Méjico y a Venezuela.

Era verdad que Méjico había ensayado constituirse adoptando la organización Norte-Americana; pero también lo era que el árbol frondoso de las libertades inglesas, trasplantado a terreno mal preparado para recibirlo, no había podido aclimatarse.

Tocqueville ha historiado ese ensayo en breves palabras:

“ La Constitución de los Estados Unidos se ase-
“ meja a esas bellas creaciones de la industria hu-
“ mana que colman de gloria y de bienes a los que
“ las inventan, pero que se hacen estériles en otras
“ manos.

“ Esto es lo que Méjico nos ha hecho ver en
“ nuestros días.

“ Los habitantes de Méjico, queriendo estable-
“ cer el sistema federal, tomaron por modelo y co-
“ piaron casi enteramente la Constitución federal
“ de los Anglo-Americanos, sus vecinos (1), pero
“ al trasportar a su país la letra de la ley no pu-
“ dieron trasportar al mismo tiempo el espíritu
“ que la vivifica. Se les ha visto constantemente
“ encerrados entre las ruedas de su doble gobier-
“ no. La soberanía de los Estados y la de la Unión,
“ saliendo del círculo que la Constitución les ha-
“ bía trazado, se invaden recíprocamente todos los
“ días. Todavía, actualmente, Méjico sigue sin ce-
“ sar arrastrado de la anarquía al despotismo mi-
“ litar y del despotismo militar a la anarquía (2).

No sucedido en Méjico se repitió en todos los
otros pueblos Hispano-Americanos que hicieron la
misma tentativa.

Era natural que las instituciones que en la Amé-
rica del Norte habían hermanado el orden con la
libertad y la libertad con los más rápidos progre-
sos de la civilización, de la población y de la rique-
za, fueran un ideal en la América del Sud, como
realmente lo era y lo fué para los mismos que vota-
ban la unidad de régimen en el Congreso de 1826:
pero todos los organismos, así los superiores como
los inferiores, están sometidos a condiciones de cli-

(1) Constitución Mexicana de 1824.

(2) Tocqueville.—“De la Democratie en Amérique”.

ma, de estación y de tiempo que no pueden suprimirse ni alterarse sin imposibilitar o trastornar su desarrollo y su perfeccionamiento, que es siempre gradual.

El hombre está contenido en el niño: pero el niño no es el hombre; y el hombre sólo va adquiriendo el gobierno de sí mismo a medida que su desarrollo físico y moral lo va dotando de las cualidades que para ese gobierno le son necesarias. Con el arma con que un hombre salva conscientemente su vida o la de su prójimo, el niño, inconsciente, rasga sus carnes o se quita la vida.

Uno de los más elocuentes oradores de Norte-América, Mr. Webster, en un discurso, impregnado de cariñosa benevolencia hacia la América del Sud, y en el mismo año de 1826 en que se discutía la Constitución Argentina, decía:

“ No quiero hacerme ilusión sobre los progresos
“ de los nuevos Estados, en la grande obra de es-
“ tablecer una libertad popular sobre bases sólidas.
“ Sé que ésa es obra larga y que en esa parte son
“ *niños de escuela*. Pero, gracias a Dios, ya están
“ en la escuela. Han tenido que luchar con difi-
“ cultades que ni nosotros ni nuestros padres en-
“ contramos nunca, y debemos ser muy indulgen-
“ tes con ellos. ¿Qué conocimos jamás nosotros que
“ sea semejante a la servidumbre colonial de aque-
“ llos Estados? ¿Cuándo nuestros padres ni nos-
“ otros, hemos sentido como ellos el peso del des-
“ potismo que encorva al hombre hasta el suelo, o
“ el de la intolerancia religiosa que va hasta cerrar
“ las puertas del Cielo a toda otra creencia? Se-
“ ñor, *nosotros pertenecemos a otra sociedad, tene-*
“ *mos otros antecedentes*. Nosotros no hemos pro-
“ bado ni sufrido nada del despotismo político de

“ España, ni sentido el calor de las hogueras de la inquisición ”.

Escuchemos a un publicista americano sobre las condiciones en que se encontraba su país al hacerse independiente.

“ Entonces estábamos amoldados para recibir la libertad que después gozamos. En punto a riqueza, a población y a costumbres públicas, los Estados Unidos no podían estar más felizmente situados. Sus conocimientos, sus hábitos, sus modales, los principios que habían heredado de sus abuelos, la subsistencia y las formas de las instituciones políticas y sociales a que desde tanto tiempo se habían acostumbrado, todo esto se hallaba en armonía con el genio del republicanismo. Carecían de todas aquellas corrupciones y abusos, de aquellas desigualdades accidentales y distinciones ofensivas que afligen y obstruyen el cuerpo político en otros países: *no había escombros que barrer*; no había nada que les impidiese aspirar al mejor régimen posible. El espíritu inglés que habían heredado, y la constitución inglesa, bajo la cual habían vivido, y que era el mejor medio de gobierno conocido hasta entonces, ofrecían admirables apoyos para el carácter republicano, y para una república durable. Ultimamente, la división del país en cierto número de *soberanías distintas*, cada una de las cuales gozaba ya de un gobierno aparte, era una circunstancia que, aunque retardaba la época del establecimiento de una constitución general, favorecía en alto grado la perfección de su estructura (1).

(1) “The American Review”, núm. 1.

Presentando este cuadro norte-americano, uno de los escritores de Rivadavia, preguntaba:

“ ¿ En qué se parecía nuestra situación, antes de la independencia, al cuadro que acabamos de ofrecer? ¿ Cuáles son los sentimientos, los hábitos, los principios que hemos heredado de nuestros abuelos? ¿ Cuáles las instituciones políticas y sociales, que desde tanto tiempo nos han regido? ¿ No había corrupciones y abusos entre nosotros? *¿ No había escombros que barrer? ¿ Estaba ya todo preparado y dispuesto, todo maduro y aperebido para recibir la mejor forma de gobierno posible? “ En nuestra América del Norte, dice el ilustre Adams “ el pueblo ha sido siempre el que ha gobernado, jamás ha cedido el pueblo americano a gobernadores, ni a los consejos nombrados por el rey, aunque se sostuviesen con ejército y escuadras. El pueblo ha contado siempre con su Cámara de Representantes; en ella ha triunfado de lo que ha querido; ningún gobernador ha podido luchar con una Asamblea representativa. Cuando ha gobernado en armonía con ella, ha sido feliz: cuando no, le ha sido preciso retirarse (1).*

“ ¿ Es ésta acaso la historia de nuestros Virreyes, de nuestras Audiencias, de nuestro sistema colonial? ¿ Son éstas las prerrogativas de que gozábamos, cuando pesaba sobre nuestros cuellos el yugo más duro y vergonzoso que abatió jamás a una sociedad humana.

“ Los Americanos del Norte, colonos ingleses, conocían doctrinalmente, y practicaban por hábito, la condición que más difícilmente adquieren las

(1) Adams, “Defence of American Constitutions”.

naciones nuevas, sobre todo, las que pasan de la esclavitud a la libertad; la condición de que todavía no gozamos nosotros en toda su plenitud, y de que no gozaremos interin las instituciones judiciales no progresen de frente con las legislativas y gubernativas; a saber: el exacto equilibrio entre las garantías públicas y las individuales. En nuestra dependencia antigua no existían; en nuestra situación presente no existen, sino de un modo precario y confuso; querer dar el mismo régimen a dos pueblos tan diversamente combinados, es navegar con las mismas velas cuando sopla viento manso y favorable, y cuando es contrario y fuerte; o hablando con más exactitud, es querer que nazcan los frutos sin preparación, que los hombres lleguen a la sabiduría sin pasar por la enseñanza ”.

Eran estos los razonamientos de la escuela de Rivadavia; y con ellos quedaban aclaradas las causas que habían malogrado los ensayos de sistema federal en la América española.

Y aquí nos cabe deplorar que la oposición, cuyas referencias a tales ensayos le resultaban contraproducentes, no se hubiera detenido en el estudio de la historia de la organización que debía servirle de modelo y que encerraba para ella, como para todos, tantas enseñanzas útiles, tantas inspiraciones sanas y patrióticas.

Cada una de las colonias norte-americanas tenía vida y gobierno propio, el hábito de gobernarse, la población, la educación y la riqueza bastante para atender con independencia a todos los servicios públicos y a las exigencias de su progreso moral y material.

La declaración de 4 de Julio de 1776, que les dió la independencia en común, rompiendo el lazo que

las ligaba a la Inglaterra, las reconoció soberanas entre sí; y son estos trece estados, respectivamente independientes, los que para su representación y demás efectos exteriores tomaron el nombre de "Estados Unidos".

Apenas reunido el Congreso, que hizo la declaración de la independencia, le preocupó la cuestión gubernamental. ¿Se constituiría una confederación o una unión? ¿Se refundirían todos los Estados en un sólo cuerpo y se someterían a un gobierno nacional, o conservando los trece Estados su respectiva soberanía y sus intereses separados, sólo los ligaría para los negocios externos un vínculo federal?

Esto último fué lo que preponderó, ardientemente sostenido por los hombres del Sur, que mantenían, con su independencia y sus exageraciones un hecho inhumano, que la organización nacional haría desaparecer, más o menos tarde, por la lógica y por la fuerza de los principios que constituían aquella nacionalidad.

Los negocios diplomáticos y la guerra de la defensa común, quedaron a cargo de un Congreso compuesto de los Representantes de los Estados confederados; en algo semejante a aquel *Consejo de los Anfictions*, constituido por los helénicos, y que si tuvo acción en las guerras externas, careció de ella para evitar entre los federados las guerras civiles, y se encontró postrado por la impotencia y la esterilidad interna cuando las águilas Romanas extendieron su vuelo y su sombra sobre la tierra y los portentos del arte griego.

La acción del Congreso Norte-Americano resultó deficiente, porque la guerra la requería tan concentrada y vigorosa, tan unitaria en el pensamien-

to y en la dirección, como debe serlo el mando militar.

La Convención Francesa lo pudo todo, porque tuvo la omnipotencia; el Congreso Americano no podía ni aun lo indispensable, porque las distintas soberanías que representaba, lo encerraban en estrechos y a veces inciertos límites.

Los Norte-Americanos habían heredado la repulsión que tenían los ingleses a los ejércitos permanentes y a los soldados de línea, que consideraban un peligro para la libertad: querían defenderse con milicias cívicas; los milicianos deseaban conservarse dentro del Estado a que pertenecían; y los Estados querían conservarlos y defenderse dentro de sus respectivos territorios. Era difícil obtener los contingentes que se decretaban y se les pedían para remontar el Ejército Confederado.

Estas resistencias, la mala organización de las milicias y la falta de un poder eficiente que, dominándolas, aumentase el personal del ejército, le diera cohesión, disciplina y unidad de mando, habían producido los desastres consiguientes. Washington, batido en Long-Island, tuvo que abandonar el Estado de Nueva-York, retirándose hasta Filadelfia, y siguiéndole el Congreso que había perdido el seguro de su residencia.

Tan desastrosa como la militar era la situación financiera.

Al Congreso no le habían dejado más recurso que la emisión de papel, cuyo valor sería proporcionalmente reembolsado por los Estados, que al principio cumplieron esa obligación, aunque de mala voluntad, y que luego dejaron de llenarla, quedando la emisión del Congreso como papel moneda,

por lo pronto inconvertible, sujeto a grande agio y continua depreciación.

La descentralización absoluta del poder gubernamental había dado tan funestos resultados, que el remedio más a mano era la concentración, absoluta también; y el mismo Congreso concentró en un sólo hombre todos los poderes, probándose así, una vez más, que el vacío que deja la carencia del verdadero Gobierno, al fin siempre lo ocupa la dictadura.

Por dicha para la América y para la humanidad, el dictador era Wáshington.

Pero la dictadura no le allanaba del todo el camino, porque Wáshington no era capaz de despejarlo abatiendo las soberanías de los Estados que se lo dificultaban, lo que lo hizo pasar entre muchas amarguras, por la más amarga de todas, solicitando más tropas extranjeras, que eran para él, más que fuerza material, ejemplo de organización y disciplina militar, y más dinero extranjero, para salvar la independencia y la libertad de su país.

Al llegar a la paz, el vicio orgánico que había aquejado a la Confederación durante la guerra, se hizo más tangible, porque desaparecido el peligro común, cada Estado se concentró más en sí mismo, prestando menos atención y menos concurso a los negocios y a las necesidades generales.

Las decisiones del Congreso no tenían autoridad propia, directa, porque sólo eran ejecutables por los gobiernos de los Estados, que tenían jurisdicción privativa dentro de sus respectivos territorios.

El Congreso, que tenía autoridad para declarar la guerra y decretar el número de tropas, pedía a cada Estado el contingente que le correspondía; pero quedaba dependiente de que se lo dieran, o no.

Podía acuñar moneda, pero no tenía metales ni con qué adquirirlos. Emitía papel, reembolsable por los Estados, que dejaron de hacerlo, como ya lo hemos dicho.

Mantenía las relaciones exteriores, podía hacer tratados con las naciones extranjeras, como los había hecho con la Francia y con la Holanda; pero si algún Estado no quería cumplirlos, no había medio legal para compelerlo.

Los Estados conservaban derechos de aduanas y establecían aranceles suyos: y en esta materia tan importante eran frecuentes las perturbaciones y los conflictos.

Había rivalidades entre los Estados, que paralizaban la acción del Congreso en los mismos asuntos que le estaban deferidos; y había entre ellos cuestiones de comercio y de límites territoriales que podían producir hasta la guerra interior, porque no había una autoridad superior, por todos acatada, que las resolviese en nombre de la razón y de la ley.

Con la paz, llegaba el momento de liquidar las deudas federales proveviendo a su servicio; de licenciar las tropas y de recompensarlas, y la confederación estaba en bancarrota.

El Congreso, sin autoridad efectiva en el interior, ni aun para desempeñar las obligaciones internacionales, había necesariamente de perderla y la perdió en el exterior.

Con motivo de la ejecución del tratado con Inglaterra, de cuyo cumplimiento por parte de los americanos dependía la evacuación del territorio que todavía ocupaban los ingleses, fué enviado a Londres John Adams, y pidiéndole a S. M. Británica que acreditase un enviado diplomático cerca

del Congreso, recibió esta contestación: «Para qué? ¡Cerca de los Estados es donde debíamos acreditar Ministros, y necesitaríamos trece!»

Mientras así se abatía en el exterior, a consecuencia de su debilidad interior, la autoridad del Congreso, que sólo representaba el vínculo federal, atado por el peligro común, y que con este peligro se aflojaba y desaparecía, los Estados, sin preocuparse mucho de la situación del Congreso ni de la Confederación, se entregaban con ahínco a mejorar sus instituciones propias y a fomentar todos los elementos de su progreso. Los hombres más importantes abandonaban la escena de la Confederación y se iban a los Estados a que pertenecían; lo que disminuía el personal del Congreso y le privaba también de la autoridad moral de las ilustraciones individuales que se alejaban.

Este movimiento no comprometía socialmente a los Estados, porque cada uno de ellos tenía enanto se requería para hacer vida independiente; pero los separaba, y la Confederación se disolvía.

Disolución tan prevista como deplorada por sus grandes hombres.

Washington en carta de 18 de Diciembre de 1778, le decía a Harrison:

“...en ninguna época ha necesitado más la
“ América de la prudencia y del patriotismo de
“ sus hijos; y si no es un motivo de aflicción general, yo de mí sé decir que estoy viva y dolorosamente preocupado al ver que los Estados se manifiestan demasiado celosos de sus intereses locales y que los hombres más hábiles se han retirado del Congreso, con gran perjuicio del bien público.

“ Se puede comparar nuestro sistema al meca-

“ nismo de un reloj, y debiéramos sacar de aquí
“ una enseñanza. ¿De qué sirve mantener las rue-
“ das pequeñas en buen estado, si se descuida la
“ rueda principal, que es el punto de apoyo y el
“ primer motor de la máquina?

“ No me corresponde decir hasta qué punto ha
“ llegado este descuido, pero como no hay peligro
“ en formar votos para el bien de la patria, emi-
“ tiré el siguiente. Que cada Estado, no sólo elija
“ sus hombres los más capaces, sino que los obli-
“ gue a ir al Congreso, recomendándoles el bus-
“ car las causas de todo cuanto ha sufrido el ejér-
“ cito y el país. En una palabra, quisiera que se
“ reformasen los abusos públicos. Si esto no tiene
“ lugar, no hay necesidad de ser profeta para de-
“ ducir el resultado que tendrá el régimen actual,
“ y para anunciar que todo el trabajo que empleen
“ los Estados en redactar constituciones particu-
“ lares, en hacer leyes para ellos y en confiar sus
“ empleos a los más hábiles ciudadanos, no condu-
“ cirá a nada. Si el gran conjunto va mal dirigi-
“ do, todos los detalles serán arrebatados por el
“ naufragio general: tendremos el pesar de haber-
“ nos perdidos por nuestra propia locura y por
“ nuestra negligencia ”.

Ya tocando al resultado, tan anticipadamente previsto, entre desórdenes y sufrimientos, se reunió la Convención en Annapólis, que tenía por objeto especial reglamentar el comercio interior; pero siendo difícil armonizar las pretensiones de aquellas soberanías de los Estados, que sólo consultaban sus intereses locales, la Convención estaba en trance de esterilizarse, como se había esterilizado el Congreso, cuando resonó en su recinto el pensamiento de Hamilton, que en aquel día inmor-

talizó su nombre, proponiendo que se pidiese "al país todo entero" que nombrase una Convención que se reuniría en Filadelfia con el objeto único de salvar a la Confederación.

Hamilton redactó el mensaje, quedando establecido que la nueva Constitución sería sometida a la discusión popular, de manera que fuera el mismo pueblo americano el que se la diera.

El "pueblo americano" era, para Hamilton, el conjunto de todos los ciudadanos de los Estados, reunidos en una sola agrupación legal para constituir una nación, la patria común.

La Convención se reunió en Filadelfia en Mayo de 1787, bajo la Presidencia de Wáshington; y ocupándose, desde luego, de dar remedios prácticos a los males que habían puesto en tan inminente peligro la existencia de la Confederación, se libertaron de las obstinaciones de escuela y de teoría; viniendo, insensiblemente, a hacer una constitución ecléctica, que no satisfacía completamente a ninguno de sus autores.

Hamilton la califica en estos términos.

" No es un sistema completamente nacional, ni completamente federal, sino composición de ambos. En sus fundamentos, federal y no nacional; en los manantiales de que emanan los poderes del gobierno, parte nacional y parte federal; en la extensión de ellos, federal y no nacional; finalmente, en el modo de mejorar la constitución, ni totalmente lo uno ni totalmente lo otro ".

La evolución fundamental, que la nueva constitución realizaba, estaba, entera, en el preámbulo, y ésta era nacional, unitaria, y no federal.

La fórmula "Nos los Estados", que pueden usar las naciones independientes para contratar una

“alianza”, que otra cosa no es el vínculo federal, puro y simple, fué sustituida por esta otra: “Nos el pueblo de los Estados Unidos”.

“ ¡Cómo, exclamaba Patrik Henry, desde las bancas de la Convención, empezáis diciendo— Nos el “pueblo” de los Estados Unidos, hemos acordado tal cosa! Debieráis decir: Nos los “Estados”, porque no hay pueblo americano, sino trece Estados soberanos. Usurpáis la soberanía al hablar en nombre del pueblo ”.

Nunca fueron más grandes los grandes hombres de Norte-América, ni nunca han dado ejemplo más digno de ser imitado que en aquellos momentos en que, para evitar la disolución y la guerra civil que sería la consecuencia, aceptaron y se consagraron a promover la aceptación por el pueblo, de una Constitución que estaba en oposición con sus opiniones personales.

A Wáshington, Franklin, Hamilton, Madison, a casi todos, a unos por un motivo a otros por el otro, les disgustaba la Constitución, y así lo declaraban, agregando, que, sin embargo, la aceptaban para salvar la unión, porque para ello se necesitaba un gobierno general, y dudaban que en aquellas circunstancias pudiera hacerse otra mejor. Y no sólo la aceptaron, sino que se consagraron sinceramente a hacerla aceptable por el pueblo (1).

El pueblo estuvo a la altura de sus grandes hombres. Las colonias, después Estados, habían nacido, vivido y organizándose aisladamente, en independencia recíproca. Este era el hecho y el derecho

(1) Con este fin escribieron Hamilton, Madison y Jay una serie de artículos, después reunidos en un volumen con el título “The Federalist”, que es todavía hoy una fuente preciosa para el estudio de la Constitución de los Estados Unidos.

histórico. Al federarse, cada uno conservó íntegramente todo lo suyo. La nueva Constitución, que hacía de todos un sólo pueblo, limitaba la soberanía de los Estados en cuanto era necesario para establecer un Gobierno Nacional, fortificado por una verdadera centralización gubernamental. Y los Estados, como sus grandes hombres, aunque les desagradaba, la aceptaron.

Estos eran los ejemplos que existían en América, y que debió tomar por guía la oposición del Congreso Argentino de 1826.

¿Por qué no los tomó? ¿Por qué no buscó en ellos ni la luz de la experiencia, ni la alta inspiración del patriotismo?

El doctor Alberdi nos da la siguiente explicación:

“ Dorrego, el jefe del partido federal de entonces, trajo de los Estados Unidos su devoción entusiasta al sistema de gobierno federativo. Pero Dorrego, *aunque militar* como Hamilton, el autor de la Constitución Norteamericana, *no era publicista*, y a pesar de su talento indisputable, conocía *imperfectamente* el Gobierno de los Estados Unidos, donde sólo estuvo los cuatro días de su proscripción. Su partido estaba *menos bien informado que él en doctrina federalista*.

“ Ellos confundían *la confederación de los Estados Unidos* de 9 de julio de 1778 con la *Constitución de los Estados Unidos de América*, promulgada por Wáshington el 17 de septiembre de 1787. Entre estos dos sistemas hay, sin embargo, esta diferencia: “que el primero arruinó los Estados Unidos en ocho años y el otro los restituyó a la vida y los condujo a la opulencia de que hoy disfrutan.” El primero era una simple federa-

“ ción; el segundo es un sistema mixto de federal y unitario (1).

La Constitución norteamericana estaba en vigor hacía más de 38 años cuando se discutía la Argentina de 1826; en este año ya Méjico había ensayado adaptársela, y la oposición presentaba este ensayo, según va dicho, como prueba de la tendencia de la América en favor de aquel sistema federal: ¿cómo no conocer ni el original ni la copia?

Si incurrían, bona-fide, en la confusión que supone el doctor Alberdi, entonces, forzoso es convenir en que no conocían la historia ni el texto de la Constitución norteamericana, y, por consiguiente, que no estaban preparados para el rol que desempeñaban; pero si tenían aquel conocimiento que, por imperfecto que fuera, no les permitiría equivocar la federación simple, que era la ruina y la disolución, con la constitución, que era la libertad y el progreso, eligiendo la federación pura imposibilitaban a sabiendas toda organización que aquí, más que en los Estados Unidos, necesitaba un gobierno central fuertemente constituido; y en el uno como en el otro caso resulta evidente que aquella oposición no ha iniciado el sistema federal norteamericano ni ningún otro régimen de gobierno regular y libre.

Entre la Constitución Argentina de 1853 y la federación de 1826 existe mayor distancia que la que existía entre la Confederación de los Estados Unidos de 1778, que fué la ruina y la disolución latente, y la Constitución de los Estados Unidos de 1787, que impidió la disolución, que consolidó aque-

(1) Dr. Alberdi. Bases y puntos de partida, etc.

lla nacionalidad y la puso en posesión de sus portentosos destinos.

El hecho visible e irrevocablemente establecido en el Diario de Sesiones del Congreso, es que los hombres políticos que compusieron la oposición en Buenos Aires, desde que Rivadavia sustituyó al General Las Heras en el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, hacían una oposición sistemática, y, por ese carácter, encaminada a derribarlo; y que esa oposición tenía por aliados en el interior a los caudillos provinciales, cuyos actos justificaba, sin excepción alguna, y en el exterior al General Bolívar, cuya persona enaltecía, sin haber encontrado en él, nunca, nada censurable.

La oposición en el Congreso no tuvo iniciativa: no propuso nada. Se limitó a ser agresiva. Combatiendo cuanto allí se proponía, sosteniendo cuanto hacían los caudillos provinciales, daba forma parlamentaria a la oposición de hecho de los caudillos y concurría, por ese medio, a entorpecer la misión constituyente del Congreso y a hacer imposible la del Ejecutivo Nacional.

Sostener la federación pura entre pequeñas poblaciones atrasadas (1), sin industrias, aisladas por el desierto, sin hábitos de gobierno propio, sin personal ni rentas para ensayarlo, cuando los dictados de la razón estaban corroborados por el ejemplo de los Estados Unidos que tenían delante de los ojos y que les decía que aquel simple vínculo los había conducido a la ruina a pesar de ser verdaderos Estados, con todas las condiciones de existencia y de gobierno que les era tradicional, era sostener en

(1) Había provincia de las que querían convertir en Estados federales que contaba poco más de 15.000 habitantes.

el hecho, si no en la intención, que siempre respetamos, la conservación del *statu quo*, la disolución de la nación, el aislamiento de las provincias bajo el gobierno de sus respectivos caudillos.

Reconocer en los gobernadores de las provincias el derecho de revisar, de vetar, de desobedecer las leyes generales que dictaba el Congreso en ejercicio de las facultades generales inherentes a su elevado carácter nacional, y para los objetos que especialmente declaraba de su resorte la ley de 23 de enero de 1825, aceptada por todas las provincias y por todas invocada, era pretender anular en el hecho la autoridad nacional y legal del Congreso, sometién-dolo a la voluntad de los caudillos locales o de cualquiera de las Juntas Provinciales.

Darles a los mismos gobernadores la facultad de destituir a los diputados, que aunque electos por las provincias son nacionales desde que se incorporan al Congreso y sobre los cuales ya sólo el Congreso tenía jurisdicción con arreglo a su reglamento, era no sólo una violación de los principios que rigen la materia y un atentado contra la independencia del cuerpo soberano, en cuyos debates y votaciones se intervenía emitiendo juicios y aplicando penas, sino también investir a los caudillos del poder de disolver de hecho al Congreso, puesto que bastaba que algunos de ellos se pusieran de acuerdo para dejarlo sin *quórum*.

Alegar en favor del sistema federal el hecho de que algunas provincias estaban resueltas a no permitir la tolerancia religiosa, era abjurar la primera y más sagrada libertad del hombre, que es la de la conciencia, para ponerse en camino de agravar el desquicio interno, que de tantos modos se alentaba, con un conflicto internacional, porque el respe-

to de la libertad de la conciencia estaba garantido por el tratado con la Inglaterra.

Autorizar — simplemente tolerar —, que los gobernadores rehusasen los contingentes designados para remontar el ejército, cuando la nación estaba comprometida en una guerra exterior, era algo mucho más grave que impedir la organización del país fomentando desacatos y desobediencias a la Ley.

Sobre este punto dejamos la palabra al ilustre colega del doctor Moreno en la Junta del 25 de Mayo de 1810.

Decía el doctor Passo:

“ ... Me parece que no puede llegar la libertad
“ de opinar hasta este extremo; es increíble el daño que nos hace. Si hubiéramos tenido pronta a
“ contribuir con gente la provincia de Santiago
“ del Estero, habiendo tanta y tan buena gente
“ para soldados, recomendada desde el tiempo de
“ don Pedro Ceballos; si no sólo hubiera llenado el
“ contingente que le hubiera cabido de 500 ó 600
“ hombres, sino que lo hubiera hecho ascender a
“ 1.000, como podía, tal vez nos hubiera puesto en
“ disposición de dar un golpe en la Banda Oriental contra el Emperador del Brasil. Si alguno
“ fuera a Santiago del Estero, y allí negociara y
“ maniobrara por encargo del Gobierno del Brasil, y pusiera dificultades para que vinieran reclutas, ¿no sería mirado como espía? y aprehendido y justificado el hecho, ¿no se le fusilaría
“ en el momento? y la oposición de los que aquí
“ tienen un carácter público, personas estimables,
“ hablo cordialmente por el grande interés que
“ tengo en una cosa y una grande persuasión que
“ tengo en la otra: “como veo que se está fomentando esa resistencia de Santiago del Estero”,

“ que hasta ahora no ha contribuído con un hom-
“ bre, debiendo contribuir en toda federación.
“ ... Yo bien creo que esto es por la libertad que
“ hay de opinar; pero no creo que deba este prin-
“ cipio llevarse hasta el extremo, para que la voz
“ sostenida de una porción de hombres respec-
“ tables, aunque no fuese la mayoría, pero que pu-
“ diera ser tal que obrase un efecto si no mayor,
“ al menos igual que el que pudiera causar un
“ agente enemigo, impidiendo o imposibilitando
“ con su intriga que esa provincia cumpliese con
“ su deber. Quédese esto dicho, y vamos al caso,
“ ¿pero así es como quieren los señores la federa-
“ ción? Si aun en ese estado quieren esos señores
“ que haya federación, yo por mi parte, o renun-
“ cio el cargo, o me retiro, o aconsejo a los señores
“ Representantes que dejen la obra de formar una
“ nación que se ligue por vínculos que no hayan de
“ cumplirse (1).

El doctor Passo, que en aquellos debates estaba muy cerca de la oposición, y no sólo desligado, sino en desacuerdo con la mayoría, pronunció esas fulminantes acusaciones en presencia del señor Dorrego, diputado por Santiago del Estero, y de sus compañeros de oposición, que las oyeron y las dejaron pasar.

Lo que en Santiago del Estero, sucedía en las otras provincias dominadas por los caudillos: en todas ellas, con uno o con otro pretexto, con pretextos especiosos como los de Bustos, o con ruda franqueza como la de Ibarra, que llegó a decir “no doy contingente *porque no quiero*”, el hecho fué que, como medio de oposición a los poderes nacionales.

(1) Sesión del Congreso núm. 293.—Septiembre 30 de 1826.

esas provincias le rehusaron su concurso al país, cuya seguridad y cuya honra estaban seriamente comprometidas en la guerra del Brasil (1).

Mucho era privarle al país de los soldados que necesitaba su ejército para abrir operaciones en el territorio enemigo; pero más llevarle a ese ejército sugestiones que podían quebrantar su disciplina. Sin embargo, se hizo. Conocemos, por documento escrito, los consejos dados al General Lavalleja, jefe de las tropas orientales en el ejército nacional, para que, desde aquellas filas, recurriera al Congreso en queja contra el Ejecutivo de la Nación; y esto nos autoriza a creer todo lo que nos han referido dos de los jefes orientales que hicieron la campaña del Brasil, y que tuvieron el buen sentido patriótico de negarse a firmar una representación, redactada aquí en Buenos Aires, contra el General en Jefe Nacional, de que fué conductor, hasta el Durazno, don José Vidal (2).

Pero lo que acaba de disipar toda duda sobre los móviles de la oposición y los extremos a que su pasión personal o de partido la conducía, es el siguiente hecho:

(1) En carta al General Lavalleja, escrita en Córdoba el 1.º de Septiembre de 1826, le decía:—"Esta Provincia y yo no hemos hecho otra cosa que cumplir con los deberes de unos verdaderos Americanos, y ojalá que los tiranos de Buenos Aires no hubieran adoptado la misma marcha que han puesto en planta, para que esta Provincia, cumpliendo con sus votos, le hubiera remitido más brazos; pero ahora estamos desengañados que quieren brazos de los pueblos para subyugarlos y "si acaso vender el país".

(2) En la carta dirigida al General Lavalleja por un Diputado al Congreso, fecha en Buenos Aires a 12 de Junio de 1836, se leen estas palabras:—"Esto no es anarquía, sino tratar de curar males extremos por medios extraordinarios; y la ocasión de los premios concedidos (según algunos, de muy mala voluntad) a la distinguida persona de V., podría hacerse jugar con mucha ventaja".

A consecuencia de haber desconocido el Congreso el derecho con que se mandaba cesar en sus funciones a los diputados nacionales, electos por la provincia de Córdoba, el Gobernador Bustos hizo presentar en la Junta un Decreto en que, ratificando la remoción de los diputados y declarándose fuera del Congreso, resuelve: "1.º, que la provincia de Córdoba, empeñada en sostener su libertad y proteger la oprimida en las demás provincias, ordena al P. E. "levantar las tropas que crea necesarias a ese objeto", con arreglo al capítulo 28 del reglamento, y queda autorizado para sus gastos; 2.º, que para el caso del artículo anterior se "encarga con preferencia y muy especialmente al P. E. se ponga de acuerdo con el libertador Simón Bolívar", o la República que trae su nombre, remitiendo al efecto un enviado, debiendo ser ratificados los tratados que éste celebre con previa autorización de la Provincia." (1).

No se limita Bustos a separar a su provincia de la asociación nacional; manda levantar tropas para desasir a las que permanecieren asociadas; y a desasirlas por las armas, esto es, por la guerra civil; y para esto, resuelve ponerse de acuerdo con un gobierno extranjero.

Si este plan se realizaba, ¿cuál habría sido la situación de las Provincias Unidas del Río de la Plata?

Estaban en guerra con el Imperio del Brasil; todo su ejército y su material de guerra se encontraba comprometido en operaciones sobre la frontera de la provincia de Río Grande del Sud; privado el Gobierno Nacional del concurso de las provin-

(1) "El Tribuno", núm. 2.—15 de Octubre de 1826.

cias, por la separación de unas y la guerra civil de otras, no podía contar con más recursos para la guerra exterior de la Nación y para la guarda y defensa de las fronteras interiores de Buenos Aires, que los que pudiera proporcionar esta misma provincia y la capital, cuyos puertos y costas estaban bloqueados por la Escuadra Imperial; para transportar al teatro de la guerra los recursos de que dispusiera, violando el bloqueo fluvial, necesitaba tener expedita su acción en las costas del Uruguay y del Paraná, y esas costas no dependían de hecho de la autoridad nacional: y, por último, el jefe local del territorio Oriental, General Lavalleja, cultivaba estrechas relaciones con los caudillos de las provincias interiores...

En esta situación era llamado el General Bolívar. ¡Bolívar, que ya se había llevado un jirón del territorio argentino! ¡Bolívar, que creando y libertando a Bolivia, la había sometido a su mando! ¡Bolívar, que libertando al Perú, se había investido del mando supremo! ¡Bolívar, libertador de Colombia, unificada por él, pero gobernada por él! ¡Bolívar, el soñador de la Confederación Continental; el convocador de los Anfictiones del Istmo de Panamá, entre los cuales se había deslizado como un augurio la idea de crear una autoridad "sublime" (es la palabra), para presidir, sin duda, al continente confederado! ¡Bolívar, cuya ambición era más grande que su gloria, que era muy grande, y que no había recatado en las conversaciones de Chuquisaca ni sus malquerencias argentinas, ni su voluntad de hacer y de deshacer desde los Andes hasta el Plata, desde el Plata hasta el Amazonas!

El cuadro está completo: y a cualquiera luz se mide la profundidad del abismo que se abría y en

que podían precipitar la integridad y las libertades argentinas.

¿Por qué se corría este riesgo desdoroso?

¿Qué significaba, qué traería Bolívar en alas de su ambición y de su gloria?

¿Con qué principios, con qué instituciones estaba vinculado?

El señor Dorrego lo definía en estas palabras:

“ Mi sentir respecto de él (Bolívar), es que si la libertad hubiera de bajar y personificarse, no buscaría otro templo que el corazón de él”.

Pero Bolívar era *unitario*: luego, la libertad cabía en la forma unitaria; luego, la forma federal no era la única en que fuera posible la libertad.

Bolívar había legislado, motu proprio, como, invitados, lo hicieron Solón en Atenas, Licurgo en Esparta.

La Constitución Boliviana centralizaba el poder en la persona del Presidente, que, según la metáfora del mismo legislador, “*venía a ser el sol que, firme en el centro, da vida al universo*”.

Para darle esa firmeza lo hacía inviolable y vitalicio y le daba la facultad de *elegir sucesor*.

Era una magistratura regia, trasmisible por fideicomiso, en vez de serlo por herencia, legítima.

En ese molde se vaciaban las instituciones de los países caídos bajo la influencia de Bolívar.

La confederación que con ellos formase, sería una federación germánica.

Porque en cuanto a la federación, como régimen de gobierno interno, Bolívar la condenaba, la detestaba, al menos en América.

Aquí están sus palabras:

“ Semejante forma de gobierno, decía Bolívar, “ es una anarquía regular, o más bien la ley que

“ prescribe desasociarse y arruinar el Estado. Pienso “que sería mejor para la América adoptar el Korán, que el Gobierno de los Estados Unidos” aunque es el mejor del mundo. ”

Ya era tan conocida esta opinión de Bolívar, como la Constitución regiamente unitaria de que era autor y propagador, cuando se personificaba la libertad en su persona y se llamaba a cooperar a la resistencia armada de las provincias argentinas contra la “unidad de régimen”, adoptada por el Congreso como base de su obra constitucional.

A primera vista, resalta, desde luego, cuanto había de ilógico, de incoherente y contradictorio en este proceder; y aunque el fanatismo por la forma *federal* pudiera explicar ciertos actos patrióticamente injustificables, ese mismo fanatismo hacía más incomprensible que se quisiera dar ingerencia en la cuestión doméstica al más ambicioso, absorbente y declarado enemigo de aquel régimen de gobierno.

El Congreso Argentino no condenaba la forma federal; al contrario, la disidencia se encerraba en una cuestión secundaria de oportunidad y de modo de aplicación. Bolívar la condenaba en absoluto, y, para nuestra América, prefería el Korán al sistema de los Estados Unidos.

¡Y se aproximaba a Bolívar, alejándose del Congreso Argentino, para constituirse sobre el modelo de los Estados Unidos!

Esta antinomia, sin embargo, lo aclara todo a nuestra vista, confirmando lo que llevamos dicho. Era cierto que la oposición en Buenos Aires tenía por objetivo derribar la Presidencia y el Congreso,

(1) Sesión del Congreso núm. 204.—Octubre 2 de 1827.

substituyendo el personal de la administración que derrocarse, y en ese propósito ella estaba de acuerdo con los caudillos, cuya alianza y patrocinio había aceptado.

Esa alianza la obligaba, para mantener su propia fuerza y poder, a llevar adelante su propósito, a explicar, a defender, a descolorar, todas las pretensiones y todos los actos de los caudillos, presentándolos decididos por la forma federal, de que ellos eran la negación más absoluta porque eran la negación del gobierno propio; atribuyendo a los pueblos elementos que no tenían y voluntades que no habían manifestado; invocando los ejemplos de la América latina y de la América inglesa sin detenerse a demostrar lo que de ellos resultaba; poniendo en tela de juicio la legalidad de las leyes desobedecidas, y las intenciones de los altos poderes nacionales desacatados.

Estas formas parlamentarias no alteraban ni la naturaleza ni las consecuencias del hecho existente: el predominio de los caudillos que imposibilitaban la organización del país.

Entre ellos—que eran lo real,—y el General Bolívar, no existía la autonomía, porque ellos en su obscuridad estaban tan distantes del gobierno de los Estados Unidos, como el General Bolívar en su gloria.

La oposición parlamentaria se hacía, sin duda, y nos complacemos en pensarlo así, la ilusión de que, ascendida al poder, tendría el bastante para rescatar todas las concesiones hechas a los caudillos; para disponer de todos los recursos del país para su defensa; y para llegar a organizarlo bajo el sistema federal.

Casi todas las oposiciones que se han adherido o han servido al poder personal de los caudillos, han padecido esa alucinación, que las ha fortalecido y disculpado a sus propios ojos; pero en el momento en que han querido reaccionar se han encontrado en la misma situación en que habían colocado a sus adversarios.

—

IV

Abstención del Presidente Rivadavia durante los debates de la Constitución.—Sus Ministros no intervienen en ellos.—Sancionada la unidad de régimen. Rivadavia manifiesta su opinión.—Según ella, debía dárseles a las provincias, además de la administración de sus rentas peculiares y de la provisión de los empleos locales, la facultad de elegir o de intervenir en la elección de sus Gobernadores.—Mensaje, de acuerdo con esa opinión, acompañando el proyecto de la Ley Orgánica.—Explicaciones dadas por la prensa.—Rivadavia no era hombre de partido.—Introducidas en la Constitución las bases del régimen federal, ella toma el carácter de mixta o de transacción que tiene la de los Estados Unidos.—Estudio comparativo de las Constituciones Argentinas de 1826 y 1853.

El Presidente don Bernardino Rivadavia se abstuvo de tomar parte en el debate, cuyos principales tópicos acabamos de estudiar y apreciar.

Sus ministros se conservaron alejados del salón del Congreso mientras ese debate tenía lugar.

Sancionada la unidad de régimen, y cuando con arreglo a esa base iban a organizarse las administraciones provinciales, el señor Rivadavia, abandonando la reserva en que se había mantenido sobre ese punto, declaró a su ministro el doctor Agüero: “que había meditado con la detención debida la grave cuestión que iba a resolverse en el Congreso, y juzgaba conducente al bien general, que era lo que debía consultarse, darles a las provincias, además de la administración de sus rentas peculiares

y de la provisión de sus empleos, la facultad de elegir o intervenir en la elección de gobernadores satisfaciendo lo que hubiere de razonable en lo que se pretendía a nombre de ellas. El ministro, un tanto sorprendido, le manifestó que su propio pensamiento lo inducía a ensanchar las atribuciones de los Consejos de Administración; pero que le parecía que la idea del presidente contrariaba el sistema adoptado y traía un peligro, porque ceder en cuanto al nombramiento de los gobernadores era lo mismo que dejar a las provincias entregadas a los caudillos que serían seguramente los electos, con lo cual poco se habría adelantado; pero Rivadavia insistió diciendo: que todos los sistemas debían aplicarse según el tiempo y las circunstancias, porque tenían por fin hacer lo mejor, y era lo mejor lo que era posible y más que todo justo; que lo era que cada provincia atendiese a lo suyo en cuanto le fuese posible, porque lo haría mejor que el gobierno general, que no podía atender bien a minucias locales; que era natural que cada provincia deseara emplear con preferencia a sus hijos y sólo tomara fuera de ella los hombres que no tuviese: que también era justo que la nación supliera el déficit, pero con la intervención que correspondía al que suplía, lo que venía a ser excelente, porque así se le daría a las provincias una escuela práctica de administración haciéndose preceptivos los consejos que les había dado en su ministerio; y que por lo que tocaba a los gobernadores desde que no pudiesen ser reelectos, y en último caso, desde que las provincias los eligiesen en terna, ya no habría peligro de que se perpetuasen”.

Concluía la carta de que tomamos este importante extracto, diciendo que la conversación se prolon-

gó mucho, acabando por quedar de acuerdo aquellos dos hombres superiores en darles a las provincias una organización que debía satisfacerlas y desarmar a la oposición, lo que esperaba Rivadavia y dudaba Agüero (1).

Pocos días después, Rivadavia presentaba esas sus ideas al Congreso en un Mensaje que vamos a reproducir íntegro, como uno de los más preciosos documentos de su anhelo por el bien público.

Buenos Aires, 14 octubre de 1826.

“ El Presidente de la República, consiguiente a lo que ofreció, cuando en 12 de septiembre próximo pasado presentó al Congreso General Constituyente el proyecto de ley para el establecimiento de dos provincias en el territorio pertenecientes antes a la de Buenos Aires, tiene hoy el honor de someter a su deliberación el adjunto proyecto de ley orgánica para el régimen y administración interior de cada una de las provincias del Estado. En él “se ha procurado combinar las justas pretensiones y los deseos de los pueblos”, con lo que reclaman el interés general y la mejor organización de los pueblos mismos. Todo cuanto tiene relación con el régimen económico de las provincias, su política interior, la educación, obras públicas y cuanto puede conducir a su prosperidad y adelantamiento, se deja, por el proyecto, en sus propias manos. A ellas se encarga el arreglo de sus gastos, el esta-

(1) Carta de D. Santiago Vázquez (diputado al Congreso y Oficial Mayor del Ministerio de la Guerra en la Presidencia Rivadavia) a D. Juan Francisco Giró, Ministro del Gobierno de la Provincia Oriental, fecha en Buenos Aires a 15 de Octubre de 1826.

“blecimiento de sus rentas, su recaudación y el
“cuidado de su inversión. Y, por cuanto en el
“estado en que ellas se hallan, sus rentas difícil-
“mente podrían, por ahora, cubrir los gastos del
“servicio ordinario, se establece que sean auxilia-
“das del tesoro nacional; con cargo de que estas
“anticipaciones sean reintegradas según vayan
“mejorando sus recursos. Luego que empiecen a
“ponerse en práctica estas medidas, las provin-
“cias sentirán sin duda todas las ventajas de esta
“nueva organización.

“Es justo, sin embargo, que la legislatura na-
“cional tenga en todo esto la parte que le corres-
“ponde, y que las deliberaciones de los pueblos se
“sometan a su examen y aprobación. Así habrá
“la uniformidad que es tan necesaria en la orga-
“nización de pueblos que componen un solo Es-
“tado, se irán estrechando los vínculos de unión
“y desaparecerán del todo los funestos males que
“una experiencia costosa les ha hecho sentir en
“el tiempo de su separación y aislamiento.

“El Presidente de la República excusa detener-
“se en mayores explicaciones, sobre los principios
“que lo han dirigido en la combinación del pro-
“yecto. El Congreso General Constituyente lo
“examinará con la atención que demanda un
“asunto tan grave, y resolverá lo que considere
“más ventajoso, para afianzar la libertad y la
“prosperidad de los pueblos que representa.

“Entretanto, etc. — *Bernardino Rivadavia.* —
“*Julián Segundo de Agüero.*”

Las ideas de Rivadavia tuvieron eco simpático en la mayoría del Congreso; y con arreglo a ellas fué substituído el artículo de la Comisión de Ne-

gocios Constitucionales que establecía la forma en que serían nombrados los Gobernadores.

El Mensajero, órgano caracterizado de la situación, dando noticia de esta alteración fundamental, decía:

“ Pero es de llamarse principalmente la atención
“ a un punto que se dice ser el que más ha cau-
“ sado hasta aquí las desavenencias de los pueblos
“ con los anteriores gobiernos generales: este pun-
“ to es el relativo a los gobernadores de provin-
“ cia; y creemos que sobre este particular, más
“ que sobre otro ninguno, el Congreso se ha exten-
“ dido más allá de los deseos de los pueblos. El
“ artículo del proyecto de Constitución estaba con-
“ cebido, a este respecto, en los términos siguien-
“ tes:

“ El Presidente nombra los Gobernadores con
“ noticia y consentimiento del Senado.”

“ Parecía que habiéndose sancionado el régimen
“ de unidad, y siendo el Presidente de la Repúbli-
“ ca responsable de su administración en toda ella,
“ no podía hacerse la elección de Gobernadores si-
“ no en la forma que aquel artículo prescribía;
“ pero en la sesión del 10 del corriente ha mani-
“ festado el Congreso que no hay inconveniente
“ porque no pase, obstáculo que no supere ni oca-
“ sión que no aproveche, cuando se trata de dar
“ todo el ensanche posible a la libertad de los pue-
“ blos. En lugar, pues, del artículo que acaba de
“ leerse, se ha subrogado el que sigue:

“ El Presidente nombra los Gobernadores “a
“ propuesta en terna de los Consejos de Adminis-
“ tración.”

“ Estos Consejos, compuestos de ciudadanos que
“ el pueblo elige directamente en cada provincia,

“ y que entienden en todo lo relativo a la administración interior de cada una de ellas, nombra tres individuos para el destino de Gobernador, y al Presidente no le queda otra facultad más que la de elegir uno de ellos. Nos parece poder asegurar que los pueblos no habían concebido la idea de una liberalidad igual en esta materia; y que si es cierto que la elección de sus gobernadores ha sido siempre uno de sus principales motivos de queja y desavenencias, hoy no les queda ni un pretexto remoto en qué fundarlas (1).

Hemos estado en error respecto a Rivadavia; una de esas corrientes de opinión inconsciente que se forma en las luchas de los partidos, nos ha arrastrado a considerarlo rigurosamente unitario, y hasta “intransigentemente unitario”, porque hemos vivido y nos hemos connaturalizado con una atmósfera cargada de intransigencias políticas; y unitario de *escuela francesa*, rigorista en materia de centralización.

Nosotros mismos lo hemos apreciado mal, como hoy lo reconocemos.

Pero Rivadavia, ni en la política ni en la ciencia fué hombre de partido.

Con mucha más razón que Jefferson ha podido decir que jamás sometió sus opiniones al símbolo de un partido, cualquiera que fuera (2).

(1) “Mensajero Argentino”. Núm. 121. Noviembre 13 de 1826.

(2) Jamás, decía Jefferson, he sometido el conjunto de mis opiniones, sean religiosas, sean políticas o filosóficas, al símbolo de un partido, cualquiera que él sea. Semejante sumisión es un envilecimiento para un agente moral y libre. Si yo no pudiera ir al cielo sin un partido, yo no iría de ninguna manera. (Jefferson a F. Hopkinson. “Works of Jefferson”, t. 2.º).

Y esto es evidente en el grande acto de que ahora nos ocupamos.

El Gobernador, o Prefecto, como le llaman en Francia, en el sistema unitario es el representante, el mandatario, el agente inmediato y directo del Jefe del Estado; éste le nombra y le remueve a su arbitrio. No puede ser de otra manera.

Desde que intervenga en la elección el elemento popular, desde que el electo lo es por tiempo prefijo y no puede ser removido y reemplazado ad libitum por el Jefe del Estado, ya ese nombramiento está fuera del sistema unitario.

Y esto era lo que sucedía con los Gobernadores electos en terna popular; de manera que si Rivadavia era *unitario*, lo era como fueron *federales* los autores de la Constitución norteamericana de 1787.

Como ellos, quería la centralización en lo que es indispensable para constituir y gobernar una nación.

Hay ciertas cosas en que la unidad es condición de existencia.

Tocqueville la llama centralización *gubernamental*; (1) y ella está establecida lo mismo en la Constitución de los Estados Unidos que en la Constitución Argentina de 1853.

A esas dos Constituciones se les llama *federales*, pero las dos son *mixtas*, porque admiten el principio unitario en toda la amplia esfera de los intereses generales.

Respecto a los intereses especialmente locales, y dentro de la esfera de esos intereses, es aplicable, y con mucha amplitud el sistema federal.

Pero no es aplicable en la misma extensión en

(1) Tocqueville. "Démocratie en Amérique".

todos los países, ni en todas las circunstancias, ni en todos los tiempos.

Esta es verdad de simple intuición, pero tan desconocida por los que, prescindiendo del estudio y de la comparación de las circunstancias, toman por base de criterio las teorías puras y las declamaciones de los teóricos, que es necesario recordarla y autorizarla a cada paso.

Después del estudio que ahora hemos hecho, creemos que lo que correspondía al estado de este país en 1826, lo más prácticamente benéfico, habría sido el régimen unitario, porque es cierto, como dice un publicista americano, que el poder central administra mejor las localidades, cuando éstas son ignorantes o semibárbaras y aquél ilustrado; cuando aquél es activo y éstas inertes; y cuando las mismas localidades se hallan divididas por pasiones y parcialidades odiosas, que hacen imposible una administración justa y regular. Entonces la acción del poder central, que está más alto y más lejos, que tiene más respeto propio y es más imparcial, ofrece más garantías.

Se subentiende que nos referimos a un poder central, no sólo ilustrado, sino discreto y bien intencionado; un poder que supiera que su acción en los negocios locales sólo es supletoria y para hacer el servicio o el bien que la localidad no pueda todavía hacer por sí misma; y que, por consiguiente, debe irla retirando a medida que la localidad va adquiriendo la capacidad que le faltaba; y que sabiendo esto lo practicara de manera que la descentralización acompañara, *pari-passu*, el adelantamiento social, como lo habría hecho, sin duda, don Bernardino Rivadavia.

El señor Rivadavia tuvo la tan difícil como pa-

tríotica flexibilidad de separarse de la opinión de la mayoría de sus sostenedores, cambiando, como hemos visto, la base de la organización de las administraciones provinciales, sustituyendo en ellas la base unitaria pura por las bases del sistema federal.

Porque federal es la ley orgánica de Rivadavia, aunque en algunos puntos parezca, comparándola con las instituciones actuales, que hacía restricciones que en éstas no se encuentran, porque ellas no perjudican la esencia del sistema.

En la elección del gobernador, por ejemplo, el Presidente elige, pero no libremente, como es de esencia en el sistema unitario; elige sólo entre tres candidatos que salen de la urna popular; designa uno de los elegidos por el pueblo para aquel cargo, de manera que la elección es de origen popular, y este origen es lo sustancial.

Más que eso creían permitido los autores de la Constitución de Estados Unidos.

“ Poco importa, dice Hamilton, que el gobierno nacional intervenga o no en los objetos de la administración interior; poco importa la igualdad o desigualdad de votos entre las diferentes provincias; todo esto es arbitrario y no puede decirse que haya principios, antecedentes, ni regla absoluta sobre el asunto.”

Comparando lo que tienen hoy las provincias en cuanto a gobierno propio y lo que les daba Rivadavia, y apreciando las diferencias, la obra de Rivadavia podrá ser mejor juzgada en el conjunto y en los detalles.

La Constitución de 1826 no era gubernamentalmente más centralista que la actual; no les imponía a las provincias más limitaciones que las que

hoy tienen; no les daba a los poderes nacionales más facultades que las que hoy ejercen; y entre las cuales las del Ejecutivo Argentino son más extensas que las del Ejecutivo norteamericano.

La Constitución de 1826 ponía a cargo de la Nación la administración superior de la justicia y la instrucción científica. La falta de personal competente no les permitía entonces a las provincias organizar tribunales de segunda instancia.

Los derechos civiles y políticos del hombre y del ciudadano tenían la extensión y las garantías que hoy tienen.

Las provincias elegían en terna, por medio de sus Consejos de Administración, a los respectivos gobernadores. Ahora los eligen directamente las Juntas Provinciales.

En 1826 los caudillos se perpetuaban en el gobierno de algunas provincias; la elección en terna iba directamente a evitar la perpetuidad, creando en ellas el gobierno representativo-republicano, cuya base es la renovación.

La oposición de entonces observó, que desde que el Presidente elegía en la terna, podía propiciarse al electo; eso pudiera ser cierto, pero el Presidente, reducido a ese medio, sólo podía darse una influencia momentánea, porque el electo no quedaba bajo su dependencia ni en cuanto a las funciones ni en cuanto al tiempo, porque tenía período prefijo.

Si el Jefe del Estado precisa o quiere influir en la elección de los Gobernadores, no necesitará que la ley le abra la puerta: él sabrá cerrarla y abrirla; pero en este género de influencias son menos malas las que se ven que las que no se ven; las que pueden resultar de actos legítimos, ejercidos con derecho a la luz del día, que las que puedan adqui-

rirse en las oscuridades de que se rodean los medios ilícitos, las confabulaciones culpables y los manejos y seducciones personales.

Los *Consejos de Administración* de Rivadavia eran verdaderos cuerpos legislativos.

Había uno en cada capital de provincia que, velando por su prosperidad, debía promover sus particulares intereses. (Art. 140 de la Constitución.)

Se compondrían de un número de personas que no podía ser menor de siete ni mayor de quince. La legislatura lo fijaría, habida consideración a la población y demás circunstancias políticas de la provincia. (Art. 141.)

Los miembros de los Consejos de Administración serían elegidos “popularmente, por nombramiento directo”, en los mismos términos y bajo las mismas formas que los representantes nacionales. (Artículo 142.)

Sería regido por esos Consejos “todo lo concerniente a promover la prosperidad y el adelantamiento de las provincias, su policía interior, la educación primaria, obras públicas y cualesquiera establecimientos costeados y sostenidos por sus propias rentas.” (Art. 143.)

Por ellos mismos “se establecerían los empleos que fueran necesarios para el buen régimen de cada provincia” y se reglarían las formalidades que debían observarse en su provisión. (Art. 144.)

Ellos también acordarían anualmente “el presupuesto de los gastos que demandasen el servicio interior de la provincia”. (Art. 145.)

Para cubrir los gastos del servicio interior de las provincias, los Consejos de Administración “establecerían en ellas sus rentas particulares y reglarían su recaudación”. (Art. 147.) Esas rentas con-

sistirían en impuestos directos, pues los indirectos estaban adscriptos al tesoro común de la Nación. (Art. 148.)

Mientras las rentas establecidas, atendido el estado en que se encontraban las provincias, no alcanzaran a cubrir sus gastos ordinarios, "se les supliría del tesoro nacional lo que faltare", llevando a cada provincia una cuenta particular de estos suplementos, que serían reintegrados en proporción que sus rentas mejorasen. (Art. 150.)

Si después de cubiertos los gastos de la provincia, sus rentas "dejaren algún sobrante, éste sería invertido precisamente en la provincia misma; y en aquellas obras o establecimientos que el Consejo de Administración acordase, previa la aprobación de la legislatura nacional". (Art. 151.)

En las provincias no podría exigirse de los ciudadanos servicio alguno, ni imponerse multas, o cualquiera otra exacción, fuera de las establecidas por las leyes generales, "sin especial autorización de los Consejos de Administración". (Art. 152.)

Los Consejos de Administración tenían el derecho de petición directamente a la legislatura nacional o al Presidente de la República, o para reclamar cuanto juzgaren conveniente a su propia prosperidad, o para exigir la reforma de los abusos que se introduzcan en su régimen y administración. (Art. 154.)

Los individuos que compusieran el Consejo de Administración, "no tendrían, en caso alguno, que responder por sus opiniones, ni estarían sujetos por ellas a otro juicio que al de la censura pública". (Art. 155.)

Durarían en el ejercicio de sus funciones por dos

años, y serían reemplazados cada año por mitad. (Art. 156.)

“Los Consejos de Administración” eran, pues, verdaderas legislaturas provinciales, electas popularmente en la misma forma que los diputados nacionales, y como éstos, sus miembros no eran responsables, en ningún caso, por las opiniones que emitieran en el ejercicio de su cargo.

No tienen los actuales representantes provinciales carácter más directamente popular ni independencia más garantida.

Los artículos que dejamos mencionados contenían una organización federal completa. En *el hecho* la Constitución actual no les da a las provincias más que lo que les daba la de 1826.

Pero como la casi totalidad de las provincias no tenían renta, personal idóneo ni hábitos administrativos, no podían desatenderse estos hechos, ni dejarse de providenciar lo que ellos reclamaban, supliendo lo que les faltaba y en la forma que mejor las habilitase para adquirirlo por sí mismas.

La Constitución de 1826 estableció que el déficit de las rentas provinciales fuese suplido por el tesoro nacional.

Este suplemento era hecho con sujeción a los principios del sistema representativo, esto es, votándose por el Congreso anualmente, previa justificación de la cantidad realmente necesaria, con cargo de comprobar su inversión en la forma en que se comprueban las inversiones nacionales. En consecuencia, los presupuestos y las cuentas de inversión debían ser sometidos al Congreso cada año.

Esta obligación, que resultaba de las deficiencias de los elementos provinciales, era, por fortuna, el medio más directo y eficaz de darles a las provin-

cias lo que les faltaba, imponiéndoles los hábitos de una buena administración.

La administración regular, ejemplar por su moralidad, es una de las fuentes de la prosperidad pública, porque así como el hombre moral es el primer agente del progreso, el gobierno que moraliza multiplica los hombres preparados para extenderlo y fecundizarlo. Rivadavia comprendió y manifestó, como hemos visto, que llamado el pueblo al manejo de los intereses peculiares de cada provincia, la obligación de someter anualmente al Congreso los presupuestos y las cuentas provinciales sería *una escuela práctica de administración*; y nosotros agregaremos, que sería en esa escuela donde se formaría "la base real del self government" de que carecía la Constitución de 1826 y de que todavía carece — ¿por qué no decirlo? — la Constitución actual.

La base del self government es la ciudad o el municipio, que forma una unidad, un grupo que hace parte de la provincia, como la provincia la hace de la nación, que tiene sus vínculos, sus hábitos e intereses particularmente suyos.

Si el municipio no tiene el gobierno de sus peculiares intereses, si no tiene los hábitos de ese gobierno, las provincias, que no son más que la agrupación de los municipios, no podrán tener lo que ellos no le llevan; así como tampoco podrá tenerlo la nación, que no es más que la asociación de las provincias.

Por eso decimos que les faltaba antes, como les falta todavía, la base sólida y ancha del gobierno propio.

La libertad está más en los hábitos del pueblo

que no en la forma del gobierno, que es nuestra constante preocupación.

“ La libertad municipal, dice Tocqueville, se escapa, por así decirlo, a los esfuerzos del hombre. Es raro que sea creada por las leyes: nace en alguna manera por sí misma. Son la acción continua de las leyes y de las costumbres, las circunstancias y, sobre todo, el *tiempo* los que consiguen consolidarla. Es, con todo, en la municipalidad, donde reside la fuerza de los pueblos libres. Las instituciones municipales son para la libertad lo que las escuelas primarias para la ciencia: ponen la libertad al alcance del pueblo, le hacen apreciar su goce tranquilo y lo habitúan a servirse de ella. Sin instituciones municipales, puede una nación darse un Gobierno libre, pero no tendrá el espíritu de la libertad. ”

La libertad existe en los Estados Unidos de América bajo la forma republicana federal, como existe en Inglaterra bajo la forma unitaria monárquica, porque está en los hábitos del pueblo, porque las libertades inglesas tienen en el uno como en el otro hemisferio, la misma base: el gobierno municipal.

La ley puede poner a un pueblo en el camino de adquirir el espíritu y los hábitos que le son necesarios para tener el gobierno propio, pero sólo el tiempo puede darle ese gobierno, cuya cuna está en el municipio.

Si no lo tiene y no lo practica allí, no lo tendrá ni como provincia ni como nación, cualquiera que sea la forma institucional de su Gobierno.

Rivadavia, imponiéndoles a las provincias, en provecho de ellas y de toda la Nación, las prácticas moralizadoras de la administración regular, no sólo les dió el medio de llegar a bastarse a sí mismas,

como lo exige el régimen federal, sino que consultó sus susceptibilidades y su decoro, evitándoles las mortificaciones y los peligros de los necesitados, respetándolas y dándoles la satisfacción del respeto propio.

El déficit no las colocaba en dependencia del Poder Ejecutivo, porque el suplemento les estaba acordado por la Constitución.

Los presupuestos y las cuentas anuales pasaban de manos de los diputados del pueblo de la provincia a las de los diputados de ella misma y de otras provincias que formaban el pueblo de la nación. El Presidente de la República no era más que el intermediario entre las dos legislaturas.

Las provincias sometían así sus presupuestos y sus cuentas a los mismos a quienes se sometían los presupuestos y las cuentas de la nación, por el mismo conducto y en la misma forma.

No tendrían que frecuentar, como solicitantes ni pretendientes, las antesalas de la presidencia ni de los ministerios.

La Contaduría Nacional no podía llamarlas a rendir cuentas, porque sus cuentas eran de la alzada del Congreso.

Tampoco estaban en la dependencia de la voluntad o de los intereses de los Gobernadores, porque éstos, según la Constitución de 1826, eran simples ejecutores de las leyes generales, de los decretos del Presidente y *de las resoluciones de los Consejos de Administración*.

No eran colegisladores.

Los Gobernadores nombraban los empleados provinciales, pero con las formalidades que los Consejos de Administración establecieran.

Nada más; y este nada más quiere decir que los

Gobernadores no podían ser negociadores de dinero con los Poderes Nacionales; y que tampoco podían crear conflictos con los Consejos de Administración, imponerles voluntades, vetarles resoluciones, y mucho menos disolverlos.

La Constitución de 1853, reconociendo, como la de 1826, la necesidad de atender a la deficiencia de las rentas provinciales, facultó al Congreso para que les acordase subsidios a las provincias, pero por leyes especiales y sin imponerles, como lo hacía Rivadavia, condiciones de buena administración.

Aparentemente, estos subsidios incondicionales, consultan mejor las autonomías provinciales; pero lo que en la realidad les es más favorable es lo que mejor las encamine a emanciparse de la dependencia en que las coloca la insuficiencia de sus rentas.

Las condiciones que les imponía Rivadavia contribuirían a crear las buenas prácticas administrativas, que infundirían directamente en la mejora de su situación financiera y le darían los hábitos del gobierno propio; de manera que si las subvenciones incondicionales no dieran esos resultados, muy lejos de concurrir al establecimiento real del régimen federal, no sólo mantendrían, sino que prolongarían la anormalidad en que se encuentran las provincias que no se bastan a sí mismas.

Había otra dificultad de mucha monta. Ninguna máquina es buena para los que no la entienden ni saben manejarla; y algunas en manos ignorantes pueden crear peligros y producir catástrofes.

Convenía que el sistema representativo que iba a funcionar en la esfera provincial, lo hiciera regularmente, para evitar que fuera ocasión de discordias, perturbaciones y conflictos que lo desacre-

ditarían o inutilizarían como medio de ejercer el gobierno propio.

Era muy de temer que esto sucediese en algunas, si no en todas las provincias, y, para evitarlo, se estableció lo siguiente:

“ Para que los Consejos de Administración se
“ expidan uniformemente en el ejercicio de sus
“ importantes funciones, el Presidente de la Re-
“ pública formará, desde luego, “un reglamento
“ en que se establezca la policía interior de estos
“ cuerpos, los períodos de su reunión y el orden
“ que deben observar en sus debates y resolucio-
“ nes. Este reglamento irá mejorando según lo
“ aconseje la experiencia, y lo representen los mis-
“ mos Consejos”. (Const. art. 158).

Esta función que se cometía al Presidente, encargado de reglamentar la ejecución de las leyes y de conservar el orden público, tenía por objeto y por límite darles a las nuevas legislaturas un simple reglamento para que pudieran funcionar con regularidad y con libertad.

Por suerte, el Presidente a quien cabía darles el primer reglamento, era el autor de el de la legislatura de Buenos Aires, cuyos buenos efectos lo recomendaban como modelo.

Si era, o no, necesario y útil prestar este concurso al ensayo del sistema representativo en provincias atrasadas, y evitar, por ese medio, que la falta de hábitos, o los malos hábitos, lo hicieran bastardear hasta comprometer sus principios esenciales, nos parece la única cuestión pertinente.

Las legislaturas provinciales, reglamentadas por sí mismas, y sin que nadie pudiera hacerles observación alguna que las contuviese dentro de los lí-

mites legales, han funcionado mal, produciendo, en varios casos, los más serios conflictos, a que no han podido ser indiferentes los Poderes Nacionales porque han llegado a comprometer la paz pública.

La legislación de Rivadavia tendía a prevenir estas perturbaciones, velando por la observancia y el perfeccionamiento de la reglamentación.

Sin duda se creyó que esto era incoherente o lastimaba las autonomías provinciales; pero anarquizadas las legislaturas, trastornado en ellas, o por ellas, el orden legal, los Poderes Nacionales, para hacer cesar ese estado de cosas, o con ese pretexto, han intervenido en las provincias cuando les ha parecido, y las intervenciones han hecho o deshecho Legislaturas o Ejecutivos, para restablecer, según la terminología oficial, la forma republicana del gobierno.

La reglamentación parlamentaria, simplemente preventiva, era el medio de Rivadavia: la intervención autoritaria vino a ser después el medio de corregir el mal no prevenido.

Las diferencias entre la Constitución de 1826 y la de 1853 son de aplicación, porque en cuanto al derecho, las dos le han dado la misma inteligencia y la misma extensión.

El principio es que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al Gobierno Nacional.

Y al gobierno general debe dársele, además de todo el poder necesario para constituir la unidad nacional y para conservarla, todos los otros poderes que las provincias no están todavía preparadas para ejercer por sí mismas.

En consecuencia, la Constitución Nacional de 1853 establecía que las Constituciones provinciales

“serían revisadas por el Congreso antes de su promulgación”; y la nación se ha reservado hasta ahora, y probablemente para largo tiempo, la facultad de dictar, ella, los Códigos civil, comercial, penal y minería.

En esta materia no hay regla absoluta, como dice Hamilton; y la partición de las facultades soberanas entre la nación y las provincias se determina por las circunstancias y las conveniencias.

Por esto, el Congreso Constituyente de 1853, dijo, con razón:

“ Si la marcha del Congreso parece incoherente,
“ y su obra original, es precisamente porque es
“ idónea, es porque “debiendo ser la expresión de
“ una combinación de circunstancias, de hechos,
“ de hombres y de cosas, debe ella reflexionar la
“ fisonomía que todas estas especialidades tienen
“ en el país ”.

V

La Constitución era sensata, y patrocinaba la paz—Así lo entendía Rivadavia y el Congreso.—La Constitución sometida al examen y decisión de los pueblos; no se le impone a ninguno, ni aún aceptada por dos terceras partes; la aceptación sería llana o condicional, y en cualquier caso, los pueblos podían quedar en paz y buenas relaciones.—No se dejaba pretexto para mantener la disidencia y mucho menos la guerra civil.—Nuevos peligros de la guerra exterior.—Para conjurarlos, el Presidente y el Congreso hacen un llamamiento al patriotismo argentino.—Es desoído.—Debates en el Congreso.—Combaten como afrentosas las leyes de olvido.—Mantienen la oposición intransigente y la guerra civil.—Impiden todo avenimiento y toda organización nacional.

Sancionada la Constitución en los términos en que lo fué, la oposición estaba lealmente desarmada.

Rivadavia había hecho una obra de razón, de patriotismo y de conciliación, y no una obra de partido, ni político, ni doctrinario, ni menos personal.

Se había levantado contra él, para combatirlo y para derrocarlo, la bandera federal; y él, desentendiéndose del significado y de los propósitos con que esa bandera se le oponía, tomó del sistema federal todo cuanto podía conciliarse con la organización de la nacionalidad argentina.

E hizo más que eso, declarando por sus órganos oficiales y por los sostenedores de sus ideas en la prensa, que no era doctrinalmente opuesto a ese

sistema, y si no lo aplicaba con mayor amplitud era porque el estado del país no lo permitía.

Las declaraciones que se hicieron bajo su inspiración son explícitas.

“Estas breves indicaciones, decía “El Mensajero”, bastarán para advertir que la constitución “si no ha establecido del todo las formas federales”, por inaplicables, “al menos se ha aproximado a ellas lo más que ha sido posible, conciliando los intereses generales de la nación con los particulares de los pueblos”, y siendo, considerada bajo este punto de vista, la obra más bien meditada y completa “que ha sido posible hacer, atendidas todas las circunstancias del país a que debe regir” (1).

El régimen federal iba a ser ensayado, puesto que federales eran las bases de la organización provincial; y su desenvolvimiento lógico lo iría haciendo preponderar en los tiempos a medida que el pueblo fuera adquiriendo, como se ha repetido, los hábitos del gobierno propio, que no pueden improvisarse ni decretarse.

La Constitución les daba, además, a los partidarios del régimen federal, si éste era más ampliamente practicable, y si la opinión de las provincias lo favorecía, los medios legales para ensanchar su aplicación.

Porque Rivadavia, con una buena fe patriótica, muy rara en todos los países, en todos los tiempos, y para nuestros hombres de partido absolutamente inconcebible, había puesto legalmente el gobierno en manos de la mayoría, lo había entregado a la opinión que preponderase en la nación, porque él

(1) “Mensajero Argentino”, núm. 154. Enero 9 de 1827.

procedía siempre *sans-arriere-pensée*, con sujeción a los principios, y, por consiguiente, sin cálculo ni reserva alguna personal o de partido.

Buenos Aires era una fuerza relativamente inmensa, que podía imponerse a las otras provincias, o vivir de su propia vida, emancipada de todas las otras.

Rivadavia nacionalizó y, en el hecho, hizo propiedad de todas las provincias, las fuerzas morales y materiales que había acumulado en su seno la antigua capital del virreinato y de la revolución.

Nacionalizadas esas fuerzas, constituída la nación, dentro de la legalidad, los votos de la mayoría nacional harían efectivamente la ley, y depositarían el poder en los hombres que alcanzasen su confianza.

En el Congreso que se reuniese, aceptada la Constitución de 1826, la capital tendría dos votos en el Senado y cinco en la Cámara de diputados; y la provincia de Buenos Aires, dos en el Senado y cuatro entre los diputados; reunidas las dos fracciones tendrían en el Congreso 13 votos.

Las otras quince provincias, (1) reunidas, tendrían en el Congreso 70 votos.

Con simple mayoría se derogaban las leyes nacionales; por dos terceras partes de votos en cada una de las salas, si no había oposición fundada del poder ejecutivo, y con tres cuartas partes, *si la había*, la Constitución podía ser reformada en cualquier tiempo (2).

La opinión que predominase en las provincias, predominaría en el Congreso; y si esa opinión era

(1) La Constitución incluía las provincias de Montevideo, Misiones y Tarija.

(2) Artículos 183, 184 y 185 de la Constitución de 1826.

tan unánime como lo afirmaba el señor Dorrego y sus amigos políticos, la oposición, aceptando la Constitución tenía asegurado su triunfo dentro de la misma Constitución y por los medios que ella le daba.

Por eso dijimos—y repetimos aquí,—que la oposición estaba lealmente desarmada; lo que vale decir, sin justificación alguna ante sus contemporáneos ni ante la historia, para mantener al país por un solo día más entregado a las depredaciones y a los horrores de la guerra civil; para continuar un solo día más la disolución de la nación, comprometida en una guerra exterior que ponía en peligro su honra, su gloria y su integridad territorial.

Pero aunque tuviera razón o pretexto plausible para repeler la Constitución, no lo tendría, jamás, para conservar al país en guerra civil, exacerbando las pasiones y despedazando, de nuevo, todos los vínculos nacionales.

La Constitución no se imponía.

Había tanta libertad para aceptarla como para rechazarla.

La Constitución, según ella misma lo disponía, “sería presentada a examen y libre aceptación de la capital y provincias, por el órgano de las Juntas que en ellas existen de presente, o que se formen al efecto”. (Art. 187).

La aceptación de las dos terceras partes de las provincias, inclusa la capital, sería suficiente para que se pusiera en práctica “entre ellas” conservando relaciones de buena inteligencia con las que retarden su consentimiento (art. 188).

Si no era aceptada la Constitución por las dos

terceras partes de las provincias, la Constitución no se pondría en práctica.

Si la aceptaban las dos terceras partes, la pondrían en práctica *entre ellas*; pero aunque formarían una gran mayoría, no exigirían que la minoría se sometiese a su voto. Al contrario, le reconocían derecho para quedar separadas, y declaraban que, lejos de hostilizarlas, conservarían con ellas relaciones de buena inteligencia.

Las provincias, o la provincia que no aceptase la Constitución, quedaban, o quedaba, tranquilamente separada y en amistad con las que la habían aceptado.

Rivadavia no admitía ni coacción, ni violencia; y así lo declaró explícitamente.

La reconstrucción de la nación, decía, es una necesidad de todos, y ella se hará por la razón o por la fuerza: la fuerza, si es necesaria, la emplearán otros; en este asunto ni quiero ni tengo más armas que las de la razón, del convencimiento y del patriotismo.

Colocada la cuestión en estos términos de paz y de conciliación; siendo la Constitución misma una transacción que podía ser aceptada decorosamente por todos; y agravándose el estado de la guerra en que estaba empeñado el país, Rivadavia y la mayoría del Congreso creyeron que el acto que sometía la Constitución al fallo de los pueblos, en la forma en que iba a hacerse, los satisfaría y los tranquilizaría.

Para facilitar este resultado, tan deseado como necesario, el Congreso, desechando todo lo que podía quebrantar su fuerza moral, porque todo error anterior era subsanable dentro de la Constitución, decretó una ley de olvido y comisionó a varios de

sus miembros para que fueran a presentarla, explicándola a los pueblos, y promoviendo por la persuasión el restablecimiento de la concordia, la cesación de toda lucha armada.

Cuando esto se hacía, el emperador del Brasil descendía de su trono, y se trasladaba al teatro de la guerra, para impulsarla enérgicamente.

En esta grave emergencia el congreso y el presidente se dirigieron también a los pueblos y al patriotismo argentino.

El Congreso les decía:

“ Vuestros representantes *están dispuestos a todo sacrificio* antes que consentir en vuestro oprobio.

... “ Triunfasteis de los españoles: ¿os dejaréis subyugar de los portugueses? ¡Pueblos argentinos!, si hay honor nacional, si hay virtud patriótica, si hay dignidad republicana, es llegado el caso de acreditarlo”. (1)

“ ¡Ciudadanos!, había dicho Rivadavia: “El emperador del Brasil ha dejado su capital el 23 del mes de noviembre, trayendo consigo y haciendo venir en pos de él todo lo que sus recursos han podido darle. Su designio es forzar a la República a la última degradación, esto es, al abandono de una parte de su territorio que importa la vanguardia de sus seguridades y riqueza, invadiendo para ello a la misma capital. ”

... “ Los valientes del ejército marchan al encuentro del enemigo, y los bravos orientales han clavado ya su divisa de libertad o muerte. El presidente llenará su deber, y él empieza a desempeñarlo con toda la decisión que le ins-

(1) Proclama del Congreso.—21 de Diciembre de 1826.

“ pira “la seguridad de que todo argentino cumplirá con el suyo”. (1)

Y los valientes del ejército, como lo anunciaba el presidente, se adelantaban a encontrarse con el emperador en el territorio del Brasil.

El general Alvear, exclamaba:

“ Soldados: un nuevo momento de gloria se aproxima: vais a combatir contra todos los esclavos del emperador. Aterrado al saber que las legiones de la república se dirigen al imperio, abandonó el trono y ha venido a ponerse al frente de sus tropas.

... “ Soldados: La más justa de las causas es la que ha puesto en armas a las provincias de la Unión; el honor nacional fué insultado por el enemigo que van buscando: “toda la república está en pie para defender sus derechos y vosotros no sois sino la vanguardia del gran pueblo argentino”. (2)

Si el ejército en operaciones en el territorio enemigo sufría un desastre, ¿cómo se había detenido el vuelo de las águilas imperiales, si a su espalda no estaba efectivamente de pie la república entera?

Rivadavia, por su parte, estuvo a la altura del peligro.

En los territorios en que era completamente obedecido, en la capital, en la provincia de Buenos Aires y en la provincia Oriental, donde la acción del gobierno nacional fué lealmente secundada por el gobernador don Joaquín Suárez, el después ilus-

(1) Proclama del Presidente Rivadavia.—16 de Diciembre de 1826.

(2) Proclama del General D. Carlos M. Alvear de 26 de Diciembre de 1826.

tre presidente de la defensa de Montevideo (1) se movilizó el mayor número de tropas que fué posible levantar, y todo se preparó para reforzar al ejército en operaciones y para defender eficaz y dignamente el territorio nacional.

Impuso a los gobernadores de las otras provincias de la verdad y de la gravedad de la situación; y haciéndoles sentir el deber de devolver al país todas sus fuerzas, que lo harían invencible, devolviéndole la concordia, los invitaba a que concurriesen a su defensa con los contingentes y los recursos de que pudieran disponer.

Se rodeó, para esa defensa, de los veteranos de la independencia, sin reparar, como no debía repararse, en la posición que tuvieran en la política interna.

En el consejo militar, encargado de proponer al ministerio todos los planes y medidas conducentes a la dirección de la guerra en todo el territorio de la república, y el plan de la defensa de la capital, encontramos a los generales don José Ron-

(1) El Gobernador D. Joaquín Suárez, decía:—"Habitantes de la Banda Oriental:—El ejército de la República, a cuyo esfuerzo ha librado la patria su honor y su salvación, marcha ya al territorio enemigo, para no volver a pisar el suelo patrio, sin dejar antes asegurada su independencia, y garantido el reposo y la libertad de nuestros venideros."

..... "Anteponed a todo interés el de la salvación pública; prescindid de todo lo que no diga relación con el odio a nuestros enemigos, persecución a sus agentes, exterminio a la anarquía y gratitud eterna a los guerreros de la República. Sus virtudes, su ardor marcial, la conciencia de la justicia de la causa, todo, en fin, lo que constituye un ejército fuerte, casi invencible, presagia el triunfo. El día está cercano, y entonces, ¿quién no se avergonzará de haber sido frío espectador de los sucesos?, ¿quién no querrá tener derecho a decir ¡viva la patria?—Canelones, 20 de Diciembre de 1826.—Joaquín Suárez.—Juan Francisco Giró."

deau, don Juan Martín Pueyrredón, don Márcos Balcaree, don Matías Irigoyen, don Juan José Via-mont.

El general don Tomás Guido fué nombrado ins-pector general de armas interino, y al general don Enrique Martínez se le confió el mando de las tro-pas de nueva creación.

Algunos de esos señores generales no eran ami-gos políticos de Rivadavia; pero eran argentinos, y él y ellos merecieron bien ese título en aquel mo-mento solemne.

El general don Enrique Martínez, dirigiéndose a las tropas que se habían puesto a sus órdenes, les decía:

“ El Congreso de la República y el gobierno os
“ han anunciado ya que la patria peligra; vues-
“ tros sentimientos no necesitan de otro estímulo
“ que esta voz. Vosotros os prestaréis a salvarla,
“ y nuestros enemigos serán escarmentados: No
“ hay sacrificio mayor que la ignominia que cu-
“ brirá nuestro nombre, si esta vez no desplegáis
“ la heroicidad y constancia con que habéis asom-
“ brado al mundo en los grandes conflictos.

“ Conciudadanos:... ¡Que la esperanza de la
“ América no sea burlada *por la tibieza, indigna*
“ *del pueblo argentino!* ¡Y que los escombros de
“ la capital cubran nuestras cenizas antes que
“ presenciar el triunfo de la tiranía y la esclavi-
“ tud de nuestra patria!”

Este peligro del territorio y de la capital de la república, de que pocos se han dado cuenta, que ha quedado casi obscurecido e inapreciado, porque cruzó el cielo de la patria como una nube pasaje-
ra y pronto disipada por el viento argentino de la

victoria, era, en el momento en que se expedían los documentos que memoramos, un peligro real e inminente.

El señor Rivadavia estaba bien informado, cuando dijo, oficialmente, que el emperador meditaba trasladar la guerra a este territorio, a esta capital misma, de la que creía posible apoderarse.

Hemos conocido y examinado atentamente varios documentos brasileiros de aquella época, y podemos asegurar que el emperador don Pedro I creyó posible imponer la paz por un golpe de mano sobre esta capital.

Los informes que recibía de sus agentes en el Río de la Plata se la presentaban desgarnecida, sin material de guerra, agotada de hombres por la recluta y las levass con que se habían llenado los cuadros del ejército de operaciones, amenazada en las fronteras de Buenos Aires por los salvajes, que distraían las pocas fuerzas organizadas que tenía, y completamente aislada y desamparada, pues le pintaban a las provincias como territorio enemigo para ella.

Estos informes, en los que había muchas verdades exageradas, y muchas verdades omitidas, que no habrían permitido ciertas ilusiones, inspiraron el plan de cuya ejecución vino a ocuparse personalmente el Emperador, trasladándose al Río Grande del Sud.

El plan era el siguiente:

Levantar el espíritu de la viril población del Río Grande y restablecer, por el ascendiente personal del Emperador, la armonía entre los jefes riograndenses entre sí y con los de las otras provincias que estaban en el ejército. Remontar este ejército con las

tropas de que podía disponer el Imperio, dotándolo con todos sus recursos. Hacer esto con la mayor brevedad, y hecho caer rápidamente sobre el ejército republicano, con cuya destrucción contaban por la superioridad del poder con que iban a acometerlo.

Destruído, las caballerías riograndenses serían bastante para mantener ventajosamente la guerra en el territorio Oriental. La infantería (1) y la artillería se embarcarían inmediata y sigilosamente, y al tocar en el puerto de Montevideo tomarían allí alguna infantería más y un pequeño cuerpo de caballería; después de lo cual se dirigirían a Buenos Aires, donde intentarían desembarcar protegidos por los fuegos de la escuadra.

Esperaban que al producirse ese conflicto, la diplomacia inglesa, que trabajaba por un arreglo, se presentaría en el teatro de estos sucesos, y se negociaría; estando dispuesto el emperador a firmar la paz, por ventajosa que fuese su posición, bajo la base de que quedase por suya la provincia Oriental con la isla de Martín García.

El emperador no pudo dar ejecución a lo que se proponía: no tuvo tiempo para hacer nada en Río Grande, porque la muerte de la emperatriz y otras dificultades lo obligaron a regresar apresuradamente a Río de Janeiro; y el marqués de Barbacena, aventurándose a dar la batalla que perdió en Ituzaingó el 20 de Febrero de 1827, arruinó la base de aquel plan.

Si ese plan hubiera tenido ejecución, habría podido traerle al imperio, un desastre tan completo co-

(1) Entre esta infantería, estaban los batallones alemanes, que eran excelentes soldados.

mo el que sufrieron los ingleses en 1807; pero *lo seguro era el peligro*, porque nadie tiene la seguridad ni el secreto de la victoria.

Y era la *existencia real del peligro* lo único que podían tomar en cuenta Rivadavia y el patriotismo argentino, en el momento histórico de que nos ocupamos.

Que a ese peligro lo había atraído la situación descompuesta del país, también era sabido; y al comunicárselo a los gobernadores así se lo manifestaba el ministro doctor Agüero.

“ Bastará recordar, les decía, que la república
“ se presenta hoy en un aspecto capaz de mover
“ las aspiraciones de todo poder extraño: muy es-
“ pecialmente las de un poder que tiene el pre-
“ texto de la guerra existente para justificar sus
“ operaciones, y capaz también de lisonjearse an-
“ ticipadamente en un éxito *que sólo bajo tales cir-*
“ *cunstancias se podría prometer* ” (1)

Cambiar esas circunstancias para el bienestar interior y para la seguridad exterior del país, era la misión de los miembros del Congreso que salieron de esta capital el 1.º de enero de 1827; don Manuel Antonio Castro, para Mendoza; don Dalmacio Vélez, para San Juan; don Juan Ignacio Gorriti, para Córdoba; don Miguel de Tezanos Pinto, para Santiago del Estero.

Sucesivamente, partieron don Francisco Remigio Castellanos, para La Rioja; don Diego Estanislao Zavaleta, para Entre Ríos, y don Mariano Andrade, para Santa Fe.

Razonable, honesta, patrióticamente, la misión de

(1) Circular del Ministro Dr. Agüero, de 16 de Diciembre de 1826.

eso: señores no podía ser desairada; ellos iban a explicar, no a imponer; a calmar, no a irritar; a asegurar la paz en todos los casos, a no provocar la guerra civil en ninguno.

Después de oírlos, las Juntas Provinciales resolverían; y aceptasen o no la Constitución, subsistirían las buenas relaciones aun con las que quedasen segregadas por el rechazo absoluto.

Había llegado el momento de prueba para los hombres políticos de la oposición en el Congreso.

Ellos, que invocaban a los Estados Unidos, tenían allí un grande ejemplo que imitar, que ya dejamos recordado, pero que conviene colocar en toda su luz reproduciendo las palabras de los grandes republicanos que han fundado y honrado la república en América.

Antes de firmarse la Constitución, Franklín, dijo:

“ Señor presidente: Confieso que hay ciertas partes en esta Constitución que no apruebo por el momento; pero no estoy seguro si las desaprobare siempre. He vivido mucho tiempo, y la experiencia me ha obligado muchas veces a cambiar de opinión sobre asuntos importantes. Creía tener razón, pero mejores informes y estudios más profundos, me probaban que estuve equivocado.

....“ En la situación en que me encuentro, acepto esta Constitución con todos sus defectos, si los tiene, porque creo que necesitamos un gobierno general, y que no hay forma de gobierno que no pueda ser una bendición para el pueblo, si está bien administrado.

.....“ Acepto, pues, esta Constitución, porque no espero otra mejor, y porque no estoy seguro

“ que no lo sea. Sacrifico al bien público la idea
“ que he tenido de sus defectos, de los cuales no
“ he murmurado una palabra fuera de aquí.

.....“ Si al regresar al lado de nuestros man-
“ datarios, cada uno de nosotros debiera llevar sus
“ objeciones y tratara de grangearles partidarios,
“ pondríamos obstáculos a que la Constitución fue-
“ se generalmente recibida, y perderíamos todos
“ los saludables efectos y las grandes ventajas
“ que la unidad real o aparente nos proporcionaría dentro y fuera del país.

.....“ Deseo que en nuestro propio interés,
“ como miembros de la nación, y en el interés de
“ la posteridad, obremos cordial y unánimemente
“ para recomendar esta Constitución en todas partes
“ donde alcance nuestra influencia; y que en-
“ derecemos nuestros pensamientos y esfuerzos a
“ buscar los medios para que esta Constitución sea
“ bien administrada.

“ En suma, no puedo menos de expresar el voto
“ que, si se encuentra en esta Convención algún
“ miembro que no esté enteramente conforme con
“ esta Constitución, este miembro haga lo que yo
“ hago en tal momento; es decir, dudar un poco
“ de su propia infalibilidad.... ” (1)

En presencia de estos ejemplos, se comprende como se ha consolidado en los Estados Unidos el único gobierno verdaderamente libre, republicano y eficiente para todos los progresos humanos, que ha existido en nuestro siglo.

La oposición argentina en el Congreso y en la prensa no tuvo ninguna flexibilidad patriótica; al

(1) El “Mensajero Argentino” de la época publicó este discurso, llamando sobre él la atención de los opositores.

contrario, se mantuvo inexorable en su propósito de derrocar a los poderes nacionales; y esta actitud que alentaba y azuzaba a los caudillos, sin lástima por las desgracias de la guerra civil, sin miramiento por los peligros que amenazaban al país en la guerra exterior, imposibilitaba todo avenimiento, cerrando el camino a toda transacción razonable y fraternal.

Nos vemos obligados a repetirnos para aclarar los tópicos que tocamos sucesivamente.

La constitución argentina, no era completamente unitaria, puesto que las bases de la organización provincial pertenecían al sistema federal. Era mixta o ecléctica como la de los Estados Unidos.

No quisieron darse cuenta de esta diferencia, que podía considerarse y tomarse como la base de una transacción legítima, honorable y para todos satisfactoria.

Tampoco quisieron darse cuenta de que, si eran mayoría, aceptada la Constitución, tenían dentro de ella el poder de derogar las leyes generales y aun el de reformar la misma constitución, que no prefijaba tiempo para su reforma.

Sobre esos puntos capitales, decían, a libro cerrado, que la Constitución era unitaria porque tenía por base *la unidad de régimen*, sin querer advertir que la unidad gubernamental era el vínculo que reunía a las provincias, constituía la nación y creaba su gobierno. Washington y los constituyentes de 1787 le llamaron al suyo *consolidado*, vale decir, *centralizado*; y la verdad es que no puede haber gobierno general de una nación, llámase enhorabuena simplemente *consolidado*, como el de los *Estados Unidos*, sin *unidad de régimen nacional*.

Pero forzados a salir por un momento de ese te-

reno, dijeron en la prensa, sin entrar en la apreciación franca de la ley orgánica, “queremos su-
 “ poner, que la ley sea tan liberal; y que asegure
 “ tanto a las provincias sus goces domésticos “que
 “ en el mismo régimen federal” no pudieran obte-
 “ ner ni disfrutar más. Si ello es así, ¿cuál es la
 “ causa, por que la política ha ido tan adelante en
 “ las cosas, y sólo ha retrogradado delante de la
 “ *palabra?* ” (1)

Sin embargo, unían ellos la disensión de las cosas, que eran en las que estaba la conciliación, para mantenerse en la disidencia sobre una *palabra*, ya sancionada antes de la constitución y que representaba un sentido recto, como lo llevamos explicado, la unidad del régimen nacional.

¿Por qué, les contestaban, retroceden ante el examen de las cosas, y subordinan la aceptación de las mismas cosas que desean, a la acepción o al acomodo de una *palabra?* ¿Por qué disputar como los sofistas griegos cuando el extranjero enemigo batía las puertas del hogar argentino? ¿Por qué alimentar el fuego de la guerra civil disputando una *palabra?*

Pero llegó un momento en que, escapándoseles la verdad, dijeron: “—Desengañémonos de una vez:
 “ el *principal objeto* que los pueblos se proponen
 “ llenar bajo el régimen de federación, “es el nom-
 “ brar por sí mismos sus mandatarios ” (2).

Según la Constitución, los pueblos debían nombrar, *por sí mismos*, directamente, sus Consejos de Administración, y en *terna* sus gobernadores; pero los gobernadores electos en terna difícilmente se-

(1) “Tribuno”. Núm. 17, Diciembre 6 de 1826.

(2) Sesión del Congreso de 20 de Noviembre de 1826.

rían *reelectos*, y, de seguro, no podrían perpetuarse ni hacerse vitalicios.

Y que pudieran ser reelectos hasta hacerse vitalicios, como sucedía entonces, como continuó sucediendo después, en el régimen federal de hecho, era lo *principal*, lo que estaba arriba del Gobierno del pueblo por el pueblo que se iba a ensayar en los Consejos de Administración. Ellos lo dijeron; y los caudillos oyeron que lo principal era la reelección sin trabas y sin limitaciones.

Se preocupaba el Congreso de los medios de hacer cesar la guerra civil y se propuso acompañar la Constitución, que debía concurrir a aquel fin, con una ley que pusiera en perpetuo olvido todos los extravíos que las pasiones hubieran producido desde la instalación de aquel cuerpo constituyente.

El diputado Dorrego consideraba que ésa y cualquiera otra medida sería ineficaz, si el Congreso no revisaba, derogaba, las leyes que Bustos y con él los otros caudillos habían desobedecido; y señalaba, pidiendo la revisión, cuatro leyes—1.ª la de la capital; 2.ª la del Banco Nacional; 3.ª la del nombramiento del presidente; 4.ª la que desconocía en las provincias facultad para remover a los diputados nacionales (1).

Esas leyes no podían haber encendido la guerra civil, según lo afirmaba el señor Dorrego, porque los poderes nacionales no habían dado providencia alguna para hacerlas obedecer por la fuerza.

El diputado don Valentín Gómez declaró, en pleno Congreso, “que la provincia que no había querido admitir el Banco, no lo había admitido; que “la que no quiso reconocer al presidente, no lo ha-

(1) Sesión del Congreso de 20 de Noviembre de 1826.

“ bía reconocido, sin que por eso nadie la inquietase; que a la que no había querido reconocer tal o cual ley, no se le había dicho nada ” (1).

¿Cómo, pues, estas leyes inermes, para cuya imposición nadie había hecho ni hacía armas, pudieron o podían provocar la resistencia armada?

Si los caudillos recurrieron a las armas para uniformar con la suya la opinión de varias provincias que prestaron, o temieron que prestaran obediencia a aquellas leyes, será esa política de los caudillos, que no respetaba la libertad de las otras provincias, la causa del conflicto armado.

No era necesario que el Congreso, desconociéndose a sí propio, diera razón a los caudillos en lo que no la tenían, justificando en el hecho sus desacatos y sus violencias, porque si sólo pretendía el señor Dorrego que aquellas leyes fueran revisadas, ya iban a serlo por el pueblo entero de la nación, a cuyo fallo eran sometidas con la Constitución.

Sus colegas se lo recordaron.

El señor Acosta, diputado por Corrientes, refiriéndose a la revisión que se proponía, decía:

“ Sólo se han hecho explanaciones relativas a la adición propuesta por un señor diputado de Santiago (Dorrego); mas yo creo que sería redundante tomar una resolución sobre lo que está fijado, y dispuesto en la Constitución misma, según la cual, “ no sólo las leyes orgánicas, sino los mismos artículos constitucionales, pueden ser revisados y aceptados, o no, por esos mismos pueblos”. Si esta Constitución se les va a ofrecer como un medio que calme sus inquietudes, si ella misma ofrece esos árbitros, no tiene necesidad el

(1) En la sesión del día 21 siguiente.

“ Congreso de adoptarlos por una especialísima resolución. Creo que con esto se llenan los deseos del señor diputado que ha hecho la indicación ”.

El diputado don Valentín Gómez hizo notar que la Constitución podía ser aceptada condicionalmente, y las leyes indicadas ser objeto de condiciones.

“ ¿Por qué, dijo, no puede ser esto como una condición al aceptar la Constitución? ¿Por qué no podrían decir esos pueblos: la aceptamos pero no ha de estar la capital en Buenos Aires? ¿Este medio, no es el más racional y surtiría el mismo efecto que el señor diputado se propone? ¿Para qué exigir que el Congreso dé una prueba anticipada de nulidad e inconsecuencia? Para que todo venga abajo, aun al mismo tiempo para que caiga el Congreso que sostiene el orden, se paralicen las operaciones del gobierno nacional, y triunfe la anarquía. Yo no digo que estas sean las intenciones del señor diputado: pero éstas son las consecuencias ”.

La ley de la presidencia estaba en el mismo caso que la de la capital, aunque las provincias que estaban en oposición eran las menos y no podían sobreponer legalmente su opinión a la mayoría que la había aceptado.

Deteniéndose esta ley que, por ser personal, era la que más exasperaba a la oposición, el doctor Gómez hizo revelaciones y alusiones que debieron quemar como un hierro candente.

“ Señores representantes, exclamó: yo llamo en este momento a un hecho la atención de la sala.

“ La idea que ahora se apunta (la de separar a Rivadavia), la hemos visto descender, antes de esta época, de las alturas de Bolivia, en los mo-

“ mentos mismos en que atravesó nuestras provin-
“ cias un jefe militar de aquella república, que se
“ fué de esta capital sin pasaporte, y que hoy tiene
“ mando en las fuerzas que nos han ocupado a Ta-
“ rija. ¿Podrá decirse que esto no es verdad? Yo
“ no diré que tenga conexión con esto lo que pro-
“ pone el señor diputado (Dorrego); pero sí que su
“ proposición a este respecto es un trasunto de
“ aquello. Estos y otros antecedentes inducen a
“ creer que se trata de llegar, en ruina de nuestra
“ patria, al ultimátum de un plan, que ha sido
“ bien conocido, y sobre el que hace tiempo que se
“ está en Buenos Aires inculcando. Entretanto, se-
“ ñores, esta Constitución va a los pueblos, ¿quién
“ les quita que ellos pongan como condición *sine*
“ *qua non*, para admitirla, la revocación de la ley
“ indicada? (la de la presidencia) ”

Cuando el señor Gómez afirmaba que había descendido de las alturas de Bolivia la exigencia que se trasuntaba en la proposición del diputado Dorrego, y preguntaba *¿podrá decirse que esto no es verdad?*, el señor Dorrego estaba presente y lo oía: pero ni entonces, ni después cuando contestó el discurso en que tal revelación se hacía, pronunció una sola palabra que la contradijera. Quedó incontestada.

Si las provincias hubieran hecho depender la aceptación de la Constitución, o la pacificación del país, de la revocación de la ley que nombró el presidente, del descenso del señor Rivadavia, toda la vida de este argentino nos autoriza para afirmar que a esa condición, la república habría quedado, sin pérdida de un solo instante, constituida o pacificada.

La ambición de Rivadavia era más alta que una

presidencia. A él no podían seducirle las sensu-
lidades del poder transitorio, porque él sabía que
el poder eterno, la verdadera gloria, a la que en el
tiempo se llama inmortalidad, sólo se alcanza por
los actos benéficos que hacen época en los desti-
nos de las naciones, o por las ideas que se dilatan
y se irradian, como la luz, en las edades venideras.
¡Qué más habría podido ambicionar él, que identi-
ficar con su persona la paz y la organización de su
país!

Si el señor Dorrego no le pedía al Congreso otra
cosa que la promesa de que revisaría las leyes in-
dicadas, ¿cómo no se satisfacía con la declaración
explícita que le hacían en el mismo Congreso, de
que ellas, como la Constitución, estaban sometidas
a la revisión de los pueblos, y que éstos podían ha-
cer depender de la derogación de esas leyes la acep-
tación del Código Constitucional?

¿Por qué, para qué exigía que el Congreso hicie-
ra una *contra-marcha* (estas son sus palabras) si te-
nía lo que descaba en forma eficaz y decorosa?

Pero lo más cruel es, que, ni aun haciendo la
contra-marcha, podía adquirir el Congreso la espe-
ranza de pacificar el país con ese acto.

El propio señor Dorrego se la quitaba en los si-
guientes términos:

“ El Congreso se ha ocupado en la sanción de
“ una Constitución, la cual desde que apareció su
“ base, presentó un nuevo motivo de alarma en los
“ pueblos. Los que la han resistido, la han resis-
“ tido de un modo tal, que *aseguran no la variarán*
“ JAMAS: tales son los pronunciamientos que se
“ han hecho por leyes positivas ”.

“ Yo l amo la atención del Congreso a lo que ha
“ dicho en otra vez en esta sala un diputado por

“ Santa Fe; a saber, que su provincia *no admitía transacción* que no tuviese por *base la forma federal*.—La provincia de Córdoba, todos saben la decisión y fuerza con que se ha pronunciado; y esta provincia, si se separa de la asociación, nos corta el territorio de la república y nos divide del interior ”. (1)

No se arribaba, pues, a un avenimiento con la revisión o derogación de las leyes orgánicas: quedaba en pie la disidencia fundamental, acerba, enconada, y que sería tanto más tirante cuanto más quebrantado y vacilante el Congreso.

Pero aun realizado el imposible y eliminada, de algun modo, esa grave disidencia, todavía no estaba apurado el cáliz; aún quedaría en su fondo Quiroga, que se había declarado *defensor de la Fe* y a sus enemigos *jateos, enemigos de Dios!*

¿Cómo satisfacerlo, si el respeto a la libertad de la conciencia era una obligación internacional? ¿Se podía ir hasta rasgar el tratado con la Inglaterra....?

Creaban el infierno del Dante: *¡Lasciate ogni speranza voi che entrate!*

Al dejar la palabra en uno de estos desesperantes debates, decía don Valentín Gómez, recordando su honorable carrera y sus años.—Ya que he llegado a *este horroroso día*.....

Entretanto, la verdad, tantas veces repetida, era que todo cuanto pedía la oposición se ponía en manos de los mismos pueblos. En el Congreso estaba agotada la discusión de cuanto se había cuestionado, y la Constitución, como las leyes, iban a ser revisadas por las Juntas Provinciales.

(1) Sesión del 21 de Noviembre de 1826.

Todas las soluciones posibles quedaban dentro de la legalidad y de la paz. ¿Por qué no buscarlas en ese terreno? ¿Por qué renovar, incesantemente, debates innecesarios, inoportunos; debates ardorosos, cuyas chispas iban a avivar los fuegos de la guerra civil? ¿Por qué, en suma, hacer la guerra, cuando el Congreso y la presidencia hacían la paz!

En este sano propósito de hacer la paz, se había resuelto que la Constitución fuese acompañada por una *ley de olvido* de los extravíos producidos por las pasiones políticas “desde la instalación del Congreso”.

Comunicada esta ley al Poder Ejecutivo, Rivadavia observó esta cláusula que limitaba “el olvido” al tiempo en que había funcionado el Congreso que la daba.

“ Esta última cláusula, dijo, ha llamado la atención del presidente, y lo obliga a llamar sobre ella la de los señores representantes. ¿Importa acaso una limitación o excepción respecto de extravíos que hayan podido tener lugar en una época anterior? El presidente no cree que este haya sido el concepto del Congreso General Constituyente; entretanto, esto es lo que en rigor importa la letra de la ley. Sería sensible que por una equivocada inteligencia a que podía dar lugar la referida cláusula, viniesen a malograrse los saludables efectos que se ha propuesto sin duda la representación nacional en la sanción de esta ley, que, echando un velo sobre todo lo pasado, debe calmar todas las pasiones, e inspirar una seguridad completa, sobre los extravíos que ellas pueden haber producido hasta esta fecha. El presidente se toma la libertad de representar al Congreso Constituyente, que, en leyes de

“ esta clase, toda excepción o limitación, sea de tiempo, de sucesos o de personas, abre un campo vasto a las desconfianzas o temores, que sabrá fomentar el espíritu de partido ”. (1)

El Congreso hizo lugar a estas observaciones, y la ley fué definitivamente sancionada y promulgada en los siguientes términos:

“ La actual Constitución, sancionada por el presente Congreso, “ importa un olvido absoluto ” de todos los extravíos que la diferencia de opiniones políticas haya podido producir entre los ciudadanos de la República Argentina; y nadie podrá ser molestado por ellos en ningún tiempo ”.

Así quedó amplísima la ley: comprendía todos los tiempos, todos los sucesos y todos los hombres. Los alcanzaba a todos, sin ver ni aludir particularmente a ninguno.

Era, por esas circunstancias, “ el olvido recíproco ”.

Estas leyes de olvido han sido siempre, desde lejana antigüedad, el medio más eficaz para establecer la paz de los espíritus, que es la verdadera paz.

Trasíbulo la hizo decretar en Atenas después del derrocamiento de los treinta tiranos, para restablecer la tranquilidad de los vencidos, y con la mira de evitar que las persecuciones acerbadas y perseverantes fueran las semillas eternas de división y de odio, que debilitarían, por las disensiones domésticas, las fuerzas de la república, que él deseaba concentrar contra el enemigo común, dándoles también a todos los ciudadanos la posibilidad de rescatar grandes faltas con grandes servicios.

(1) Mensaje del Presidente Rivadavia, de 1.º de Diciembre de 1826.

Esta amnistía fué un saludable ejemplo y una lección útil que se ha transmitido de siglo en siglo. Cuando Roma, dividida en fracciones que la dilaceraban con motivo de la muerte de Julio César, se precipitaba en los oscuros abismos de la guerra civil, Cicerón avivaba, como una luz, el recuerdo de aquella célebre amnistía de Atenas, y proponía que, a ejemplo de los atenienses, se enterrase todo lo que había ocurrido en Roma, en un olvido eterno.

Después, en la historia, como en la ciencia política, las amnistías han sido consideradas como un medio de restablecer la paz, como un recurso en las épocas de desórdenes públicos, como el último remedio a los males de las guerras civiles; y a ellas han recurrido todos los pueblos cristianos y civilizados.

Fué la ley de olvido de Rivadavia la que volvió a su quicio esta sociedad, dislocada por el caos del año 20; fué con esa base que pudo fundar Rivadavia en Buenos Aires el gobierno representativo-republicano, que sirvió de modelo en la América del Sud, sobreviviendo en el Río de la Plata a la anarquía y a la tiranía; fué por ese medio que Rivadavia pudo terminar el ostracismo de muchos argentinos distinguidos en la lucha por la independencia, entre los que se encontraba el Coronel Dorrego, diputado al Congreso en 1826, y el General Alvear, vencedor en Ituzaingó en 1827.

La ley de olvido podía ser desagradable para los que esperaban, y deseaban que la conjunción de la guerra interna con la guerra exterior postraría, al fin, a los poderes nacionales; pero parecía imposible que para impedir la pacificación se llegase hasta tomar la responsabilidad moral de adulterar radicalmente el carácter y los fines de las amnistías,

con el intento de formar con esa adulteración una opinión popular que las repeliese como una afrenta; lo que si lo conseguían privaría al país de un medio eficazmente benéfico. Y parecía imposible, porque los que aspiran a gobernar, si no están ciegos, deben tratar de conservarle al gobierno, como institución, lo que puede serle esencialmente necesario.

Sin embargo, se llegó hasta ahí.

Dejamos la palabra sobre la ley de olvido al "Tribuno", órgano reconocido del señor Dorrego:

" En aquellas provincias, que con las armas en la mano defienden los derechos que creen haberles arrebatado sus mismos mandatarios, al dolor de verse defraudados en aquéllos, debe agregarse "el encono" que es consiguiente al "insulto", que precisamente han de creer se les hace " con la sanción de esa ley" (la de olvido) como " que tiene su tendencia directa, o más determinada a esas provincias que a las demás que se han " declarado por el federalismo.

" Toda amnistía, o ley de olvido, supone errores o crímenes preexistentes, que se perdonan por ella. Aunque respecto a los delitos comunes se llama indulto lo que con relación a los crímenes o extravíos políticos se denomina amnistía, "la diferencia consiste sólo en el nombre"; pero en la realidad de las cosas los efectos son los mismos. En uno y otro caso los delitos que se indultan, y los errores o extravíos que se olvidan no tienen seriedad o trascendencia alguna legal en perjuicio de aquel, o aquellos, que los habían cometido. La amnistía y el perdón tienen también una calidad distintiva que les es común, tal es esa especie de "manchilla, degra-

“ dación o afrenta, que preparan a los individuos
“ a quienes se conceden ”, por lo mismo que los
“ supone criminales o delincuentes. “ Eso nunca
“ se borra de la memoria de los hombres ”, y aun-
“ que en lo legal no tengan seriedad alguna los
“ delitos indultados o dados al olvido, no por eso
“ deja de tenerla en lo moral.

“ Estas y otras consideraciones semejantes no
“ pueden sustraerse a la previsión y perspicacia
“ de los hombres pensadores que haya en las pro-
“ vincias que están con las armas en la mano; y
“ como naturalmente los hombres que piensan y
“ que tienen influjo son los que dirigen las masas
“ y dan el tono a los negocios, se sigue forzosa-
“ mente, que haciendo circular estas ideas e im-
“ poniendo en los ánimos ya exaltados las desagra-
“ dables sensaciones, “que no puede menos de pro-
“ ducir, se aumentarán las resistencias como cua-
“ tro, si antes estaban sólo como dos ”.

.....“ Es natural *que los jefes que las dirigen,*
y demás hombres de opinión que haya en ellas,
valoren por esa *fanfarronada del Congreso*, dada
a luz en momentos en que las provincias tenían el
ascendiente, la diversa dirección que pudiera dar a
su política, caso que dichas provincias fuesen con-
trariadas en su marcha por otras que pensasen y
obrasen en sentido inverso. *Esto también debe au-*
mentar las resistencias.

“ Por último, las provincias de Córdoba, Santia-
“ go, La Rioja y Catamarca, que han manifestado
“ tantos motivos de queja contra el Congreso, se
“ creerán tan insultadas por la ley de olvido, co-
“ mo el Congreso se creería, si dichas provincias se
“ la hubiesen otorgado a él. La medida, pues, ha
“ sido la más impolítica, y ella debe indisponer más

“ los ánimos en perjuicio de la aceptación de la “ carta ”. (1)

Estas tergiversaciones para convertir la ley de olvido en una nueva tea incendiaria, eran hechas contra ciencia y conciencia.

Los que las hacían manejaban libros y el primer publicista que habían leído, les había dicho, sin duda alguna:

“ Que la amnistía es esencialmente y ante todo un acto de alta política, que se realiza fuera del curso ordinario de las leyes y de la justicia, y bien arriba de toda consideración personal, y sólo inspirado por las necesidades y los intereses de la sociedad entera.

“ Que a consecuencia de los revoluciones o de las perturbaciones políticas, la amnistía es un medio poderoso de pacificación, un remedio benéfico para los males causados por las guerras civiles y las discusiones interiores, garantiendo la tranquilidad de todos.

“ Por último, que llegadas las luchas e irritaciones políticas a cierto grado de intensidad, cuando ya el combate y la victoria son ineficaces para desarmar los partidos que se dilaceran recíprocamente, la amnistía se interpone entre ellos, y los desarma, borrando los agravios y desarmando la venganza ”.

Si entre nosotros, no todas las leyes de olvido han producido la paz de los espíritus, débese eso a que la prensa intransigente no ha olvidado, siquiera temporariamente, como olvida la ley; y ha mantenido vivas todas las disidencias, todos los rencores, todos los reproches, produciendo, en esa for-

(1) “Tribuno”, núm. 27, Enero 10 de 1837.

ma, discordias inextinguibles que dispersan las fuerzas sociales y perpetúan las desgracias del presente por las oscuridades del porvenir.

Pero aun en este caso, en que la amnistía puede no alcanzar todos sus fines, ella no es, ni en ése, ni en ningún otro, un acto reprobable ni agresivo.

Y la prueba de que no lo es, la tenía la oposición de 1826 en la misma persona de su jefe el señor Dorrego, comprendido *nominalmente* en la ley de olvido.

¿Se habría acogido a ella el señor Dorrego, la habría admitido, si, como les decía su *Tribuno* a los caudillos ignorantes del interior, las leyes de olvido fueran un *insulto* y le produjeran a los individuos *una especie de mancha, degradación o ofrenda, que nunca se borra de la memoria de los hombres?*”

Además, la ley de 1826, no era una amnistía para épocas o actos determinados: ella abarcaba, como va dicho, todos los tiempos y todos los sucesos, y ante esa extensión, ante esa generalidad, desaparecían todas las individualidades.

Era, pues, una ley que alcanzaba a todos; una ley *de olvido recíproco*.

Pero los caudillos creyeron, o aparentaron creer, que esa ley era un insulto; y todo pasó como dijo el *Tribuno* que pasaría: “se aumentaron las resistencias como cuatro, si antes estaban solo como dos; y se indispusieron más los ánimos en perjuicio de la aceptación de la carta”.

Bajo estos auspicios, dieron principio a su misión los diputados encargados de someter la Constitución nacional al examen y al voto de las provincias.

VI

El éxito de la misión de los Diputados del Congreso dependía de que los caudillos les permitieran someter la Constitución al examen de las Juntas Provinciales.—Interés que debía tener la oposición en que las Juntas lo verificasen con la mayor apariencia de libertad.—El Diputado Gorriti en Córdoba.—La Junta, que estaba en receso, es representada por una Comisión, con la cual discute los puntos esenciales de su misión, solicitando la convocatoria de la Junta.—La Comisión Legislativa y el Gobernador Bustos declaran que Córdoba, desligada del pacto nacional, no entra en el examen de la Constitución, y ordena que el Comisionado del Congreso regrese en el término de 48 horas.—La opinión de Córdoba es favorable a la organización nacional.—El Diputado Tezanos Pinto en Santiago del Estero: Ibarra lo recibe en camisa y calzoncillos.—Conferencia del Comisionado con Ibarra.—Este le devuelve la Constitución, ordenándole que regrese en 24 horas.—El Diputado D. Dalmacio Vélez se dirige a Quiroga.—Este devuelve cerrada la comunicación en la forma y en los términos más inconvenientes.—Los caudillos se sustituyen a las Juntas y resuelven—ellos solos—por sí, y ante sí, la cuestión orgánica.—Hostilidades para imposibilitarle al Ejecutivo Nacional la guerra y la paz exterior.

Todo el éxito de la misión pacificadora de los diputados representantes del Congreso y la aceptación o repulsa de la Constitución, dependía de los caudillos que se habían apoderado de las gobernaciones provinciales, especialmente de Bustos, Ibarra y Quiroga.

Si ellos dejaban que fueran las juntas provinciales, deliberando con seguridad y tranquilidad, las

que decidieran, probablemente la Constitución habría sido aceptada por más de dos tercios, cuando menos; porque, como ya lo hemos dicho tratando de la opinión de los pueblos, todas las clases ilustradas y acomodadas de las provincias eran favorables a la organización de la república bajo un régimen de gobierno libre.

Si la opinión de las provincias estaba tan decididamente pronunciada por la federación pura; si rechazaba la Constitución y las leyes generales sancionadas por el Congreso; si, por cualesquier otros motivos deseaban un cambio en el gobierno general, personal y político; en fin, si la opinión adversa a la Constitución, a las leyes y a los poderes nacionales, era, no ya casi unanimidad como decían, sino *simplemente mayoría*, el más evidente de los intereses de la oposición, era la reunión de las juntas, para que expresasen serena y solemnemente la opinión de sus respectivas provincias.

El triunfo que en esa forma obtuviese la oposición, sería tanto mayor cuanto mayor fuera la aureola de libertad que rodease a las juntas convocadas para examinar la Constitución que les enviaba el Congreso.

No dar a las deliberaciones de las juntas las apariencias de la libertad; suprimir las juntas, y sustituirlas por la personalidad voluntariosa de los caudillos, equivalía a confesarse impotentes, dándoles a sus adversarios la fuerza de la opinión, la de la legalidad y la de la razón.

Estas fuerzas podrían ser avasalladas por la de los caudillos, sofocadas, reducidas al silencio y a la inacción; pero ellas quedarían latentes, porque son inmortales; al paso que la oposición civil, di-

voreciándose de esos elementos sólo podría concurrir a crear una situación de fuerza, que es la negación de toda organización, de todo gobierno regular.

El diputado Gorriti, al poner en manos del gobierno de Córdoba, Bustos, el pliego y el ejemplar de la Constitución que le estaba destinado, le expresó los ardientes deseos que animaban al Congreso de dar a los pueblos días de paz y tranquilidad, bajo la égida de una Constitución, sin disputa la más liberal que se ha conocido, en la que los diputados de las provincias habían procurado todo lo que había de apreciable en los diferentes regímenes republicanos.

Bustos, al contestar, se quejó de las leyes del Congreso, de las censuras que le hacía la prensa de Buenos Aires y del avance de un coronel Bedoya sobre Santiago; a lo que repuso el señor Gorriti, que la Constitución ofrecía todo lo que podría desearse, ya sea para reformar esas leyes, si se juzgaba oportuno, o para anonadar los inconvenientes que ellas hubiesen podido ofrecer al tiempo de su sanción, como se vería prácticamente si se accedía a su solicitud; y, por último, que cuando se trataba de subrogar un orden de cosas nuevo, para enjugar las lágrimas que le hacía derramar al país el desorden en que estaba, era inoportuno inculcar sobre errores precedentes, pues que todo lo que había que hacer era examinar si las leyes que se ofrecían eran o no capaces de evitarlos en lo sucesivo.

Admitido el señor Gorriti a desempeñar su encargo, se encontró con que tenía que hacerlo ante

una comisión de la legislatura, por hallarse ésta en receso, o como allá decían, vacacionada.

Reunida esa comisión en la sala de la legislatura, el señor Gorriti expuso “ que estando discorde la
“ opinión de las provincias sobre la forma de go-
“ bierno, el Congreso no había podido conformar-
“ se con la opinión de todos al adoptar la base
“ de la Constitución; entonces se había contraído
“ a medir la extensión de sus obligaciones, y de
“ los votos de los pueblos al ocurrir al Congreso,
“ y halló que no podía llenar estos objetos adop-
“ tando una simple federación, tal cual había
“ opinado Córdoba y algunas otras provincias;
“ porque los pueblos, al reunirse en Congreso, no
“ sólo desearon reunir sus esfuerzos para defen-
“ der su libertad contra las agresiones de enemi-
“ gos externos, sino formar leyes tutelares de las
“ garantías individuales, que, asegurando a los
“ ciudadanos de los gozes que hacen apreciable la
“ sociedad, los pusiese a cubierto de las arbitrarie-
“ dades con que los jefes particulares habían opri-
“ mido y vejado a los pueblos en los tiempos del
“ desorden. *Una simple federación*, dijo, sólo pue-
“ de obtener lo primero; pero de ningún modo lo
“ segundo; porque sería muy torpe que el Con-
“ greso general dictase leyes, sobre cuya observan-
“ cia no podría velar en razón de que, en una simple
“ federación, el Congreso no puede mezclarse en
“ la administración interior de las provincias. Ade-
“ más de que una federación supone estados or-
“ ganizados y constituidos ya; y en el Congreso
“ sólo estaban representadas provincias informes,
“ sin organización alguna interior, que no se bas-
“ taban a sí mismas, y por consiguiente destitui-

“ das de medios, casi en su mayor parte, para
“ llenar los empeños de una federación”.

“ Que el Congreso, oprimido de estas y otras po-
“ derosísimas razones (que se proponía analizar si
“ se entraba en materia) habiéndose visto obliga-
“ do a adoptar diferente base, había llevado su
“ respeto por la opinión de las provincias hasta
“ enviar un comisionado de su mismo seno que sa-
“ tisfaciese a las de diversa opinión de los moti-
“ vos que había tenido para ello, siempre en vista
“ de la mayor felicidad de los pueblos”.

En seguida, entrando el señor Gorriti en el análisis de la Constitución, trató de demostrar con claridad la sabiduría con que el Congreso había sabido descartar de la Constitución “ todos los defectos que podían hacer temible un gobierno de unidad, adaptándole diestramente las ventajas reales que puede ofrecer la federación”; y concluyó pidiendo que se entrase en el examen de la Constitución; y respecto a que la gravedad del asunto no podía ser mayor, era un interés de la provincia y un deber de los representantes del pueblo, reunir cuantas precauciones fuesen posibles para asegurar el acierto; por lo que era indispensable que se reuniese la legislatura provincial.

El presidente de la comisión legislativa, después de manifestar que estaba autorizado para contestar y sostener el debate, empezó, según lo dice el señor Gorriti, por confesar de plano que el análisis de la Constitución, que acababa de hacerse, “ presentaba el prospecto de leyes muy sabias y capaces, si se observasen, de hacer dichosos a los pueblos gobernados por un tal régimen”; pero no era posible imaginar que un Congreso como el presen-

te hubiera sinceramente deseado el establecimiento de semejante orden de cosas.

Se refirió a la creación de un presidente permanente, a la elección del señor Rivadavia, a la ley de capitalización y a la que declaró la inamovilidad de los diputados nacionales, y abundando en expresiones descomedidas, dice el señor Gorriti, que marcaban el desprecio con que la administración de Córdoba miraba a las autoridades nacionales, cerró su discurso diciendo “que la provincia de Córdoba no estaba en el caso de examinar una Constitución, en que se había adoptado base diferente a la propuesta por la misma provincia, y sin la concurrencia de sus representantes; pues que los firmados como representantes de Córdoba, no lo eran por estar ya removidos”.

En esta y en la sesión siguiente la discusión tuvo siempre los mismos aspectos.

Fácil le fué al representante del Congreso desvanecer las objeciones con que se pretendía justificar la resolución de no entrar en el examen de la Constitución; pero es imposible convencer al que tiene el propósito preconcebido de no darse por convencido.

A los hombres, les decía el señor Gorriti, no les es dado hacer leyes que tengan privilegio de ser inviolables; indudablemente las mejores leyes son inútiles, si dejan de observarse; pero ese no es el defecto de la ley, sino de los guardianes de ella; y desde que se confesaba que las leyes constitucionales que descaba someter a su examen eran buenas, ellas debían adoptarse sin que obste la posibilidad de la infracción. Los temores que se manifestaban respecto al Congreso Constituyente eran infunda-

dios; porque ese Congreso, ni es, ni será el guardián de esas leyes: será otro Congreso, compuesto de otros representantes, electos por los pueblos, y a su satisfacción. No dependerá sino de los mismos pueblos el poner al frente de sus negocios sujetos de probidad y confianza, que velen sobre la observancia de la Constitución.

Si los diputados del Congreso constituyente son malvados, si ellos han perdido la confianza de sus comitentes, tanto más importante era aceptar la Constitución, supuesto que ella sea en sí misma buena; porque es el medio legal de que ese Congreso termine sus funciones, haciendo lugar al Congreso Constitucional; y los malos diputados irán a sufrir el oprobio de su mala comportación, recibiendo el desprecio que de sus ciudadanos hubieren merecido.

Respecto a las leyes generales con que le reprimaba, ellas eran impertinentes en la cuestión de aquel momento; aun suponiendo que ellas fueran malas, perjudiciales, y que debería el Congreso no haberlas sancionado, ¿qué consecuencia se pretendía sacar de ellas contra la Constitución que se le ofrecía a los pueblos?

La oposición en Buenos Aires había pronosticado muy anticipadamente que Córdoba repelería la Constitución, sin examinarla, desde que no tuviera por base la que ella había dado; lo que equivalía a decir, que si la Nación no pensaba como Córdoba, Córdoba no entraría en la organización nacional; de lo que deducía la oposición que debía adoptarse el sistema federal puro, porque separada Córdoba, ella, por su colocación territorial, dividiría materialmente las provincias litorales de las de tierra

adentro y haría imposible que se constituyeran en cuerpo de nación, lo que equivalía a someter a la voluntad de una sola provincia, reunida en Congreso, la opinión de la mayoría del mismo Congreso y la de la mayoría de las provincias que representaba.

No era necesario tanto para que Bustos hiciera depender la organización nacional de la sumisión más absoluta a sus imposiciones.

El diputado señor Gorriti, contestó victoriosamente apenas le fué hecha la pronosticada declaración, diciendo "que si la legislatura de Córdoba no había tenido la loca pretensión de dictar ella sola la ley a toda la nación, cuando emitió su opinión sobre la forma de gobierno, no pudo imaginarse que le imponía al Congreso la obligación de suscribirse a ella; al contrario, habiendo la provincia de Córdoba consentido en concurrir a Congreso, para constituir el país; habiendo reconocido la autoridad del Congreso general constituyente, para dictar la gran carta, y dar una forma estable a la nación, la provincia de Córdoba se sometió a la deliberación de la mayoría; pues bien sabía que en el Congreso todo se decidiría a pluralidad de sufragios; y por lo mismo había derecho a juzgar que la comisión legislativa obraba en oposición a la voluntad de la provincia, que racionalmente no podía presumirse haya querido variarla, "adoptando un principio que obsta a toda clase de organización nacional. Porque si la provincia de Córdoba, tenía fundamento para rehusarse a la revisión de la Constitución, porque no se había hecho sobre la base que ella había dado, cuando el Congreso prefiriese esa base, las provincias que hu-

bieren dado otra, estarían autorizadas para rehusarse a la revisión de la Constitución por la misma razón: de lo que resultaría que la nación jamás pudiese organizarse, si no se encontraba una uniformidad de opinión; lo que es de todo punto imposible”.

Esto era concluyente; pero el señor Gorriti agregó que la Constitución que había tenido el honor de presentar, y se sujetaba a su examen, no había perdido de vista la base adoptada por la legislatura de Córdoba; pues que de la forma federal había adoptado todas las disposiciones que pueden asegurar a las provincias de que no serían oprimidas por el poder supremo de la nación; que es esto lo que interesa a los ciudadanos, cuando se cuestiona sobre la forma de gobierno.

Respecto a que la Constitución no estaba firmada por los diputados de Córdoba, porque no lo eran los que lo hacían porque estaban removidos, el representante del Congreso, después de demostrar que el proceder de la legislatura de Córdoba en la remoción de los diputados había sido abusivo y atentatorio contra la autoridad y la dignidad del Congreso, exclamó: “pero ésta no es una cuestión
“ en que deba por ahora empeñarme. Yo estoy
“ dispuesto a complacer a los señores representantes en todo lo que no perjudique al objeto de mi
“ misión; sea enhorabuena que la provincia de
“ Córdoba haya carecido de representación, y no
“ tenido parte en la confección de la Constitu-
“ ción; pero la provincia de Córdoba siente la ne-
“ cesidad, y ha expresado la voluntad de formarse
“ en cuerpo de nación. Para ello necesita una
“ constitución; su falta la expone a mil vicisitu-

“ des y convulsiones en que pelagra su libertad. En
“ ese estado aparece una que se dice Constitución.
“ ¿No es prudencia examinarla, a ver si ella lle-
“ na, o remedia, en todo, o en algo, esa urgente
“ necesidad? En examinarla nada se pierde: en
“ despreciarla sin examen mucho se aventura. Si
“ examinada no se encuentra satisfactoria, y se
“ desecha, los representantes del pueblo tienen al
“ menos la satisfacción de haber hecho esa diligen-
“ cia en obsequio de sus representados. Pero si el
“ público padece porque los encargados de su suer-
“ te han desdeñado un bien que se les ofrecía, la
“ responsabilidad de éstos es inmensa, y el reproche
“ íntimo de su conciencia los perseguirá por todas
“ partes. Luego, los señores representantes de esta
“ provincia no pueden dispensarse del deber de su-
“ jetar a examen la Constitución que el Congreso
“ general ofrece a los pueblos.

Concluyó el señor Gorriti insistiendo en que así lo hicieran; y que para ello se convocase la junta general, pues todo otro procedimiento sería eminentemente perjudicial a la provincia.

El presidente de la comisión legislativa, desentendiéndose de estas contestaciones y alejándose de los tópicos sobre que habían recaído, se contrajo a ponderar las excelencias de la federación.

El señor Gorriti le replicó: La cuestión en abstracto sobre si la forma federal es, o no mejor que la de unidad para regir un estado, es lo más “im-
“ pertinente del mundo en nuestro caso; ella pue-
“ de relegarse a las aulas para que se ejerciten los
“ estudiantes, o, lo más acertado, arrancarla de
“ los libros, y desterrarla para siempre de la so-
“ ciedad; porque cada forma de gobierno tiene sus
“ respectivas excelencias, y la ciencia de los políti-

“cos consiste en adoptar la que sea más acomodada a las necesidades del estado que se intenta constituir; todo en esta cuestión debe ser práctico y propio de un caso dado, y nada más.

....“ Cuando el Congreso pospuso la base de la federación, no fué porque reprobese esta forma como mala, sino porque la consideró inadaptable a nuestras circunstancias. Cien veces se nos ha puesto por modelo la Confederación de los Estados Unidos, “pero no se hacen cargo que nada hay entre nosotros comparable con aquellos Estados. Ellos, cuando se federaron, eran todos Estados completamente organizados: su posición feliz los ponía en estado de manejarse cada uno con independencia de los otros; nosotros no tenemos sino provincias informes, de las que casi ninguna se basta a sí misma; no podemos dar un paso para exportar nuestros frutos e importar los artículos necesarios, sino por el centro de las provincias, que pondrían mil trabas a nuestro comercio, y suscitarían quejas que producirían frecuentes rompimientos. Una triste experiencia nos ha manifestado ya esta impracticabilidad”. Los que desorganizaron la nación el año 20, gritaron *federación*: nadie les opuso un obstáculo; y ¿por qué no se federaron? En vez de federarse, se armaron unos pueblos contra otros; y a los obstáculos naturales que existían para federarse, se añadieron odios y rivalidades de pueblo a pueblo, que no se han podido extinguir. ¿Cómo es posible imaginar una federación de provincias inconstituídas ellas mismas? Yo no puedo concebir que haya sujeto que entienda lo que es federación, que de buena

“ fe pueda creer que ella es posible en nuestro estado actual.

“ Fuera de que—continuó el señor Gorriti,— cuando se clama por federación, la cuestión es de voces, o se disputa por las cosas. Si la cuestión es de voces, debe despreciarse; si se disputa por las cosas, yo me lisongeo que en la Constitución que hoy ofrece el Congreso al examen de los pueblos se encontrará todo lo que la federación puede tener de interesante para la prosperidad de ellos ”.

“ De todo lo que constituye la federación, sólo se echa de menos la independencia (absoluta) de los gobernadores de la autoridad suprema; y yo pregunto: ¿interesa esto a los pueblos? ¿Conviene a la felicidad de las provincias que los gobernadores vivan en ellas como moros sin señor, disponiendo a su grado de la hacienda pública, de la fortuna de los particulares, de la libertad, del honor, y aun de la vida de los ciudadanos, desmoralizando al país, sembrando odios y rencores entre las familias, autorizando el chisme, el espionaje, la delación y la calumnia, protegiendo el crimen para formarse prosélitos y perpetuarse en el mando, contra el voto de todos los buenos ciudadanos? Y por desgracia, ¿no ha sido fecundo en ejemplos de esta clase, el triste período de la independencia de los gobiernos? ¿Puede nadie imaginar que los pueblos quieren conservarse ese pomo envenenado, que los ha cubierto de luto, e inundado de lágrimas? Señores: los pueblos no desean esto: los pueblos desean ser bien gobernados, desean que sus magistrados tengan un freno que los contenga, leyes que respetar, y tribunales que los juzguen y cas-

“ tiquen cuando falten a sus deberes. Esto es lo
“ que desea el pueblo. Sólo los demagogos, los as-
“ pirantes ambiciosos, enemigos naturales de la li-
“ bertad, tiranos de profesión, pueden opinar en
“ contra de esta verdad. El Congreso general la
“ ha tenido presente: ella ha sido su norte en la
“ composición de la Constitución; entremos, pues,
“ en el examen de ella; no nos cuidemos de los vi-
“ cios que pueden afectar al régimen de unidad,
“ vamos a la práctica, veamos si la Constitución
“ adolece de ellos, o los ha precavido con sabidu-
“ ría. Si se encontrase viciosa, justo será que la
“ deseche la provincia de Córdoba; pero si en ella
“ se encuentra lo que puede hacer el bien de la
“ provincia, a ella le conviene adoptarla ”.

Después de haber agotado inútilmente, en este debate, en formas suaves y hasta humildes, los razonamientos más convincentes y conciliatorios, para que, al menos por respeto a la idea de organizar al país, se reuniese la Legislatura Provincial y procediese al examen de la Constitución, que el Congreso Nacional le sometía, perdida toda esperanza, el señor Gorriti, elevando la voz y dando mayor relieve a la dignidad de su actitud, abordó, resueltamente, la verdadera dificultad, como acabamos de verlo, haciendo la distinción que existía entre los oprimidos y los opresores, entre los gobernadores que, para conservar su omnipotencia local, eran adversos a toda organización nacional, y los pueblos, víctimas de aquella omnipotencia, que aceptarían la Constitución, aun sin examinarla, desde que ella no podía dejar de garantizarles los derechos más esenciales del hombre social y del ciudadano.

Si, como lo repetía la oposición en el Congreso,

la opinión manifestada por el gobernador Bustos era la del pueblo de Córdoba, habría rayado en temeraria la conducta del diputado nacional, que aislado en aquel centro, solo, sin más armas que su inteligencia y su palabra, desafiaba aquella opinión, calificándola, allí mismo, en el recinto de su legislatura, como demagógica, liberticida, tiránica.

Pero era que el verdadero pueblo de Córdoba, como sucedía en otros pueblos, no opinaba ni sentía como los caudillos que los oprimían; y esto era tan cierto que, cuando el presidente de la comisión legislativa invocó la constante opinión de la provincia de Córdoba, el señor Gorriti le contestó, sin vacilar: “ Que en cuanto a la opinión constante de “ la provincia de Córdoba, en alguna época podía “ haberla tenido por la federación; pero que en “ aquella época, en el momento de aquel debate, “ la provincia de Córdoba no pensaba así, y anhela “ laba por la aceptación de la Constitución, en la “ que veía el *paladium* de su prosperidad ”.

El señor Gorriti, informando al Congreso, le decía después, que al hacer esa afirmación no se equivocaba, porque una multitud de vecinos de la primera respetabilidad, se le habían acercado a expresarle su opinión por la aceptación de la Constitución, asegurándole uniformemente que ése era el voto de los ciudadanos y de la provincia toda; y que varios de los que esto le decían, eran los mismos cuyos nombres se encontraban en las actas firmadas para adoptar la federación.

Traída la discusión a este terreno, el presidente, resolviendo levantar la sesión, hizo entender al comisionado del Congreso, que ya la comisión lo había oído, que ella tomaría en consideración el asunto, y le comunicaría el resultado.

Esa comunicación fué hecha en los siguientes términos:

“ Córdoba, 17 de enero de 1827.

“ La honorable comisión general permanente de la provincia ha pasado a este gobierno, con fecha de ayer, la nota del tenor siguiente: — Exemo señor: Convencida la comisión general permanente de la legislatura de la provincia de Córdoba, de la justicia de la causa que sostiene y de la que justamente ha aparecido “ de los debates que se han tenido por ella con el señor diputado en comisión del Congreso, doctor don Juan Ignacio Gorriti, ” sobre los vicios que envuelve la Constitución dada por el expresado Congreso, ya por haberse sancionado sin el concurso de los diputados por ésta, ya por estar montada sobre la base del sistema de unidad, que está en abierta oposición con la forma federal, por la que se han pronunciado decididamente la mayoría de las provincias, con especialidad la de Córdoba, según aparece de las actas de 18 de marzo de 1820, 13 y 14 de enero de 1826; y persuadida igualmente de la ilegalidad remarcable de los procedimientos del Congreso, en la sanción de las leyes de 6, 7 y 8 de febrero, 4 de marzo y 15 de abril del año anterior, por la violenta infracción de la ley fundamental de 23 de enero; es por estas razones que ha venido a sancionar, en sesión de anoche, el siguiente decreto:

“ Art. 1.º La provincia de Córdoba, desligada del pacto nacional, según la sanción de 2 de octubre del año anterior, no está en el caso del art. 6 de la ley fundamental de 23 de enero.—

“ Art. 2.º En consecuencia, no entra en el examen
“ de la Constitución sancionada por el Congreso
“ en 24 de diciembre próximo pasado, presentada
“ por el comisionado don Juan Ignacio Gorriti.—
“ Art. 3.º Devuélvase la expresada Constitución.
“ —Art. 4.º Comuníquese al supremo Poder Ejecutivo,
“ para que, mandándole expedir su correspondiente
“ pasaporte, le intime su regreso en el
“ término de 48 horas. — Y el infrascripto, al
“ transcribirlo al señor diputado comisionado, a
“ quien se dirige, le acompaña el correspondiente
“ pasaporte, que expresa el art. 4.º del inserto decreto;
“ debiendo entenderse que el término de las
“ 48 horas, que prefija el mismo artículo, para el
“ regreso del señor diputado, deberá contarse desde
“ la hora en que reciba esta comunicación. Con
“ este motivo, etc.—*Juan Bautista Bustos.*—*Dionisio Senteno*, secretario interino.

El señor Gorriti, al dar cuenta al Congreso de su misión, después de informarle de la situación de Córdoba, reasume y aprecia los motivos alegados para rehusarse al examen de la Constitución, manifiesta el sentimiento del pueblo de aquella provincia y formula su juicio definitivo sobre el gobierno.

Respecto de la situación de Córdoba, dice:

“ Según supe después de un modo muy positivo,
“ muchos vecinos de conocida moderación, sabiendo
“ que la comisión de la provincia se opondría obstinada
“ y antinacionalmente al examen de la Constitución,
“ se disponían a concurrir al debate, con el designio de
“ hacer una petición formal del examen y aceptación
“ de la Constitución; pero se retrajeron porque se
“ habían tomado al-

“gunas medidas militares de precaución, y yo vi
“centinelas dentro de la misma sala.

“Agréguese a esto, hechos públicos de toda notoriedad y leyes dictadas por la legislatura de la provincia; una revolución sofocada, en que parecen complicados “una gran parte de los principales vecinos, reos que, estando en prisiones, dicen con firmeza al tribunal que los juzga que estuvieron autorizados para proceder por las vías de hecho para derribar una tiranía que no podía remediarse por las vías legales”; leyes que suspenden la seguridad individual, que prohíben “la reunión de los ciudadanos”, que establecen un sistema inquisitorial de proceder, y que autorizan la delación y el espionaje; la correspondencia pública “sometida a la inspección de la policía”, y se sentirá de un modo irrefragable que la marcha del gobierno de Córdoba no está apoyada en la opinión pública, sino en la fuerza militar, y que la provincia es tratada como podía serlo una plaza conquistada a viva fuerza. No trepido, pues, en decir que si la comisión rehusaba el examen, contrariaba la voluntad de la provincia, y le hacía un daño incalculable.

“Creo de mi deber informar al Congreso general, que, por dos sujetos muy fidedignos y de la mayor respetabilidad, fui informado que, cuando el mismo Congreso al principiar la Constitución, nuevamente sujetó a una discusión tan seria y circunspecta la base sobre que debía elevarse, las actuales autoridades de Córdoba sospecharon que tal vez se reformaría la que proponía el proyecto de la comisión, y se adoptaría un sistema federal, y se “separaban a resistirlo,

“ como resisten hoy el de unidad ”. “ El Federal ”, en uno de sus números, indicó una especie análoga; y este periódico ministerial, es costeado por el gobierno de Córdoba, para que sirva de precursor a las medidas que prepara en su gabinete. Este hecho lo que prueba es que la actual administración de Córdoba resistirá cualquiera Constitución, sea cual fuese la base sobre que esté montada; porque naturalmente traerá algún cambio, o alguna restricción al poder ilimitado que hoy ejerce.

“ Esto se confirmará, si fijamos nuestra atención en las objeciones que se han hecho a la Constitución, para repulsarla sin examen. 1.º que puede ser quebrantada; 2.º que no está según la base dada por la provincia; 3.º que el Congreso ha creado un ejecutivo permanente, capitalizado esta ciudad, y ha hecho inamovibles a los diputados en Congreso. Sea cual fuere el sistema que se adopte, la Constitución podrá ser violada; ella puede oponer precauciones, pero no libertarse enteramente. Cuando el Congreso adopte la base dada por la provincia de Córdoba, postergará la dada por otras provincias, que, a su vez, no querrán recibir la ley de Córdoba, rechazarán la Constitución dada por esta base, y las cosas quedarán en el mismo caos. Sea cual fuere el sistema que adopte la Constitución, habrá un gobierno nacional, residirá en alguna parte, y ésa será la capital. Si motivos particularísimos movieron al Congreso a anticipar estas providencias a la Constitución, en primer lugar, ellas no han inferido el más leve perjuicio a la provincia de Córdoba, que aparenta mirarlas con execración; y en segundo lugar, la Cons-

“ titución lleva el remedio legal para evitar los
“ malos efectos que hayan podido causar. Si la
“ provincia de Córdoba tiene tanto interés en re-
“ mover a los diputados que hoy la representan en
“ el Congreso, la Constitución ofrece el remedio
“ suave y legal de hacerlo, sin necesidad de tocar
“ extremos siempre perniciosos.

“ Luego, las autoridades de Córdoba resisten la
“ Constitución, no por la forma de gobierno adop-
“ tada, no por las leyes de que, sin fundamento,
“ se quejan, sino porque es *Constitución*; y del
“ mismo modo resistirán otra cualquiera que im-
“ ponga un orden que sea necesario respetar; por-
“ que ellas no quieren otro orden que el actual
“ desorden con que hacen gemir a los ciudadanos
“ más respetables, y en que pretenden envolver
“ a toda la nación.

“ En honor de la provincia de Córdoba, es mi
“ obligación manifestar al Congreso las particula-
“ res consideraciones que me ha dispensado lo se-
“ lecto del vecindario de aquella ciudad. Ellos han
“ venido a derramar en mi pecho la efusión de su
“ respeto al cuerpo nacional, su gratitud por los
“ asiduos trabajos empleados en beneficio de los
“ pueblos, su contento y satisfacción por la Cons-
“ titución.

“ Ellos esperan que, a pesar de la resistencia que
“ hoy experimenta por parte de las autoridades,
“ que sacrifican la causa pública a sus miras pri-
“ vadas, algún día hará la prosperidad de esa des-
“ graciada provincia. Me han asegurado contestes
“ *que éste es el sentimiento* de la provincia toda;

“ me han suplicado *que así lo exponga al Congreso*, y me es muy grato llenar este deber”. (1)

Hemos extractado in extenso este importante documento del señor Gorriti, cuya independencia personal ya habíamos recordado, y que, como los patriotas norteamericanos, para salvar la organización de su país, sostenía las leyes a que se había opuesto en el Congreso, porque fué Córdoba la única provincia en que se manifestaron y se discutieron las causas porque era repelida la Constitución, y el único pueblo también que, con esa ocasión, que los otros no tuvieron, pudo hacer sentir que las autoridades que tal repulsa hicieron no representaban ni sus sentimientos ni sus voluntades.

El diputado señor Tezanos Pinto, comisionado del Congreso en Santiago del Estero, después de haber anunciado su arribo y su misión al gobernador Ibarra, fué recibido por éste el día 29 de enero de 1827.

Ibarra recibió al representante del Congreso en camisa y calzoncillos, despechugado y dejando ver la desnudez de los pies. Ceñíase la cabeza a la manera de los quichuas, con un pañuelo colorado y amarillo.

Este traje semisalvaje sorprendió al señor Tezanos Pinto; creyó que el gobernador lo había tomado de propósito para menospreciar al Congreso en la persona de su representante; y según lo dice, aquel grosero insulto, “lo apercibió de lo que podía esperar de un jefe cuya torpeza llegaba al extremo de renunciar al vestido del hombre civiliza-

(1) Informe que da el señor Gorriti al Congreso General Constituyente sobre el resultado de su comisión cerca de las autoridades de Córdoba.—(Buenos Aires.—Imprenta Argentina, 1827).

do, prefiriendo otro que chocaba con el pudor y la decencia”.

Pero, reprimiéndose, no se dió por entendido, y procediendo como si todo pasara en las formas más convenientes, manifestó “al señor gobernador los
“ sinceros deseos que animaban al soberano Con-
“ greso por la felicidad y el bienestar de los pue-
“ blos todos de la república; a cuyo fin había con-
“ sagrado todos sus conatos, ofreciéndoles, por re-
“ sultado de las más arduas tareas, la Constitu-
“ ción que había sancionado, para su examen y
“ aceptación; y en la que sin duda había consul-
“ tado de tal manera los intereses de los pueblos
“ y de cada uno de los ciudadanos, que su adop-
“ ción era capaz de fijar de un modo permanente
“ su dicha y prosperidad, poniendo un término
“ honorable a la guerra interior, que desgraciada-
“ mente se había suscitado entre pueblos herma-
“ nos.

“ El gobernador Ibarra le hizo entonces al co-
“ misionado una narración de la conducta que ha-
“ bía observado desde que Quiroga había invadido
“ a Tucumán, dando por principales motivos del
“ compromiso en que estaban de hacer la guerra
“ a Tucumán y Salta, *hasta cambiar los gobiernos*
“ *que existen en una y otra provincia, primero,*
“ que La Madrid había desairado la insinuación
“ que le hizo para que suspendiera sus marchas,
“ cuando se dirigía al punto en que se hallaba
“ Quiroga; y el segundo, que el general Arenales,
“ en una comunicación dirigida al gobernador de
“ Tucumán, *se había expresado de un modo que*
“ *ofendía su delicadeza.*

“ El comisionado representó al gobernador de
“ Santiago que si era sensible que por motivos pe-

“ queños se hubiese empeñado en una guerra que
“ llenaba al país de oprobio y desgracias al mis-
“ mo tiempo, no era menos el que, por resentimien-
“ tos personales, se hubiese comprometido la
“ suerte de un pueblo inmenso, que sentía las fun-
“ nestas consecuencias de ella, y que, sea cual fue-
“ re el éxito que tenga, su preciso resultado sería
“ la ruina completa de todo el país; expresándose
“ al mismo tiempo el deber que pesaba sobre todo
“ argentino de conspirar con todo su poder a la
“ terminación de unas diferencias que compromete-
“ rían la existencia de toda la república.

El señor Tezanos Pinto, “con ese noble fin, ya
“ en cumplimiento de su deber, ya por la fuerte
“ impresión que le causó la vista de la provincia
“ de Santiago del Estero, entregada a una cons-
“ ternación inexplicable, tanto por los males que
“ experimentaba, como por los que racionalmente
“ temía, pues que el gobernador de ella, para lle-
“ var adelante una guerra inmoral e injusta, no
“ reparaba en los medios, y había buscado auxi-
“ liares entre los *bárbaros del Chaco*, que en un
“ número considerable, ocupaban un punto de su
“ campaña, habiéndola precorrido toda en su mar-
“ cha hasta el pueblo, cometiendo toda clase de
“ desórdenes y en una insubordinación comple-
“ ta; abundó en reflexiones de todo género, para
“ decidir al gobernador de Santiago a una tran-
“ sacción que consultase los intereses generales del
“ estado, el clamor de aquella provincia y el bien
“ particular de los individuos, que, acaudillándola,
“ cargaban sobre sí con un compromiso insos-
“ tenible. No excusó tampoco decirle que, si al-
“ gunos recelos o quejas contra las autoridades na-
“ cionales, inspiradas con intenciones siniestras

“ desde Buenos Aires por algunos hombres empe-
“ ñados en sumir la república en un abismo, sino
“ satisfacían las pasiones de que estaban animados
“ habían hecho alguna impresión en el ánimo del
“ señor gobernador, las expresase con franqueza;
“ pues el comisionado estaba dispuesto a satisfa-
“ cerlo, presentándole en claro la justicia, el pa-
“ triotismo y el sumo interés por la pública feli-
“ cidad con que las autoridades nacionales habían
“ marchado en la difícil posición en que, por des-
“ gracia, se encontraban colocadas.

“ El gobernador de Santiago le hizo entonces al
“ comisionado la sincera confesión *de que nada te-
“ nía que reprochar a las leyes sancionadas por
“ el Congreso, y decretos expedidos por el presi-
“ dente; pero que se legislaba, dijo, de un modo y
“ se obraba de otro*; pues el presidente de la re-
“ pública era el que hacía la guerra a las provin-
“ cias disidentes, *con la idea, que muy de antema-
“ no habían tenido los hijos de Buenos Aires, de
“ esclavizarlas*”.

La conferencia continuó sobre estos tópicos, sin resultado, porque Ibarra estaba ligado con compromisos personales que no se atrevía a quebrantar.

En el empeño de inducirlo a que concurriese a la terminación de aquella guerra de exterminio, el señor Tezanos Pinto le decía que “si en la exal-
“ tación de las pasiones y de los resentimientos
“ personales había podido concebirse un plan tan
“ horrible, ya era tiempo de que todos se dolie-
“ sen de las desgracias que sentían los dignos ha-
“ bitantes de aquellas provincias, de la sangre que
“ se había derramado, de la pérdida de tantos hom-
“ bres beneméritos, cuya cooperación reclamaba

“ clamorosamente una patria que era el objeto de
“ la ambición de un conquistador extranjero.

Y recordando la Constitución, añadía que él no podía creer que, insensibles a las consideraciones que dejaba hechas, “ quisiesen por más tiempo prolongar la amarga situación en que aquellos pueblos se encontraban; y que todas estas diferencias debían terminar desde que el Congreso nacional, haciendo un tan respetuoso homenaje a los pueblos, presentaba a su examen la Constitución que había sancionado, la que, si era aprobada, establecería en el estado un régimen constitucional que garantizase a los pueblos sus derechos, y los más caros goces a los ciudadanos; y si era rechazada, dejaba a cada uno de ellos en la libertad de gobernarse del modo que creyese convenir más a sus propios intereses, respetándoseles recíprocamente, sin alterar las relaciones que era necesario existiesen entre ellos para poder consultar su conveniencia y felicidad”.

El gobernador, herido sin duda en el momento de tan tocantes consideraciones, contestó “que él no quería la guerra; pero que estaba comprometido, y no podía separarse ya de los aliados”; lo que, dice el señor Tezanos Pinto, lo ratificó en la idea que poco antes había formado, de la grave influencia que sobre él ejercía Quiroga, a quien el gobernador de Santiago no podía nombrar, sin patentizar de un modo inequívoco, todo el respeto y terror que le había inspirado desde que por primera vez lo vió (según se expresó) en los campos del Tala.

Concretándose al examen de la Constitución, el comisionado “preguntó al gobernador, si se hallaba reunida la sala de la provincia; y contestado

“ por éste “que no habiéndose querido reunir mu-
“ cho tiempo había sus individuos, los comandantes
“ militares eran los legisladores; como que habían
“ dictado algunas resoluciones, entre otras, la se-
“ paración de los diputados de Santiago, del
“ Congreso, si no eran admitidos en su seno
“ todos los que habían sido nombrados por aque-
“ lla provincia; el señor Tezanos Pinto le ma-
“ nifestó que si los representantes provinciales
“ habían rehusado reunirse en tan largo tiempo,
“ por motivos puramente particulares, o diferen-
“ cias con el gobierno, no era de esperar que cuan-
“ do eran llamados por la gravedad de un negocio
“ tan importante, y que tanto interesaba a la pro-
“ vincia, a llenar el primero de los deberes que
“ ella les había impuesto, no quisiesen verificarlo;
“ pero que aun cuando así fuera, “el gobierno es-
“ taba en la obligación de convocarlos, al menos
“ para testificar de un modo solemne que, por su
“ parte, no había dejado de tener efecto el exa-
“ men de la Constitución, que el comisionado había
“ tenido la honra de ser encargado de presentar-
“ les” y que por lo mismo exigía del señor go-
“ bernador, que así lo hiciese; pues en esto se in-
“ teresaba el bien de la provincia, y el crédito del
“ jefe que estaba puesto a su frente”.

“ El gobernador de Santiago, contestó como de-
“ jando entrever que lo haría; y el comisionado
“ entonces se despidió de él, para volverlo a ver
“ muy luego.

Pero apenas había llegado a su casa el señor Te-
zanos Pinto, cuando se le presentó un *soldado*, de-
volviéndole, de parte del gobernador, el ejemplar
de la Constitución, que el comisionado acababa de
poner en sus manos, y el despacho del Presidente

de la República, con un decreto al pie, en el que ordenaba al comisionado saliera de aquella ciudad en el término de 24 horas; lo que verificó antes que él fuera cumplido.

El decreto, puesto en la misma nota dirigida por el Presidente de la República al gobernador de Santiago, y que éste devolvió sin más contestación ni explicación alguna, es el siguiente:

“ Santiago del Estero, enero 29 de 1827. — No pudiendo la legislatura de la provincia entrar a examinar la Constitución presentada por el comisionado del Congreso, por hallarse en actual guerra, decretada por el presidente *de Buenos Aires*; regrese con la Constitución que se le devuelve el expresado comisionado, en el término de 24 horas, reservando su comisión para tiempos de quietud, calma y paz, que es aparente para entrar a examen.—IBARRA.—*José María Romero*, secretario ”.

El señor Tezanos Pinto era un hombre respetable y respetado, cuya veracidad era tan reconocida como la rectitud de sus intenciones; vió y estudió de cerca la situación de las provincias; y al informar al Congreso, le manifestó, que la razón y todos los estímulos del patriotismo eran impotentes ante los caudillos provinciales coligados para mantenerse y perpetuarse, impidiendo toda organización regular.

“ El gobernador de Santiago,—decía el señor Tezanos Pinto,—y sus aliados, dispuestos muy de antemano a no permitir que se ponga traba alguna a la ilimitada autoridad que ejercen, no sólo estaban resueltos a resistir todo orden constitucional, redoblando la opresión en que gimen los habitantes, para que se abstengan de mani-

“ festar el ardiente deseo que tienen de ver establecida una Constitución la más liberal, sino que han formado una liga abominable, para destruir a todos y cada uno de los gobiernos regulares que, por fortuna, se habían establecido en otras provincias; para sistemar el despotismo, generalizándolo de manera que no exista un solo pueblo que, marchando en conformidad con los principios de la civilización, les haga un reproche constante a ese modo de ser bárbaro y tiránico que han elegido, para conservarse a perpetuidad en el mando absoluto y arbitrario de las provincias, a cuya cabeza se han colocado por la fuerza; convirtiendo todo el Estado en un desierto, antes que prestarse a alguna transacción que no arranque de aquel principio detestable ”. (1)

Llegamos a Quiroga, y con Quiroga al desenlace final de la tentativa de pacificación hecha por el Congreso al someter al examen de las provincias la Constitución que había sancionado.

En este momento decisivo, debemos dejar la palabra a los documentos en que los actores consignan sus actos, asumen su responsabilidad, se caracterizan a sí propios y revelan la índole y los medios de la política que representan.

El diputado don Dalmacio Vélez, comisionado para presentar la Constitución al examen de la provincia de San Juan, al llegar a la ciudad de Mendoza, se encontró con que aquella provincia

(1) Informe que da el señor Tezanos Pinto al Congreso General Constituyente, sobre el resultado de su comisión, cerca de las autoridades de Santiago del Estero.—(Buenos Aires.—Imprenta Argentina, 1827).

había sido ocupada por las armas de Quiroga, emigrando sus autoridades.

En esta emergencia, el doctor Vélez, atendiendo el encargo de promover la pacificación, creyó de su deber dirigirse al general Quiroga, invitándolo a una paz honrosa y proponiéndole una entrevista, al solo objeto de cortar la guerra encendida en varias provincias.

Con este fin le dirigió a Quiroga la siguiente nota:

“ El que suscribe, diputado al Congreso Nacional, tiene el honor de saludar, por la primera vez, al señor general don Facundo Quiroga, y de poner en su conocimiento, que el Cuerpo Nacional lo había encargado de presentar al pueblo de San Juan en su junta de representantes, la Constitución que ha sancionado para el régimen de la república ”.

“ Cuando iba a desempeñar los objetos de su comisión pacífica y conciliadora, ha sabido que las tropas del mando del señor general Quiroga han ocupado aquel'a provincia, y que sus autoridades han emigrado para esta de Mendoza. Estos momentos de agitación y de tumulto no son aquellos en que debe examinarse la obra de la razón y de la prudencia; ni ha podido ser la intención del Congreso que la Constitución formada en el silencio de las pasiones fuese examinada cuando el ruido de las armas se hace sentir en toda la provincia. Estas consideraciones, y la de los imponderables males que trae al país una guerra civil tan destructora, ponen al diputado suscribiente en el noble y justo empeño de dirigirse al señor general don Facundo Quiroga, a nombre del Congreso General y de

“ toda la nación, a quien él representa, invitándolo
“ a una transacción, honrosa para el señor general y para las tropas que manda, y al mismo
“ tiempo gloriosa para la nación entera en sus
“ actuales circunstancias.

“ Sea cual haya sido la causa de la guerra ” en
“ que se hallan envueltas varias provincias importantes de la república; sean cuales fuesen los
“ resultados que ella tenga, la patria en todo caso sufrirá los males consiguientes a un incendio general, males incalculables, cuyo término nadie puede señalar: y esto en circunstancias
“ en que su misma existencia se ve amenazada por un enemigo encarnizado cual es el emperador del Brasil; en circunstancias las más apuradas, cuando necesita el apoyo y la cooperación
“ más fervorosa de cada uno de sus hijos, para salvar su independencia, obtenida a costa de
“ diez y seis años de trabajos, de privaciones, de sangre, y de todo género de sacrificios. El diputado que suscribe, al hablar de esta manera
“ ingenua al señor general Quiroga, se hace cargo que ha palpado ya, por una experiencia dolorosa, las desolaciones que de suyo causa una
“ guerra civil entre pueblos y ciudadanos ligados por los vínculos más fuertes de la naturaleza
“ y de la sociedad, interesados en una misma causa, y destinados a formar una nación; y se
“ atreve a esperar que al escuchar el señor general estas graves y sinceras razones, arderá en su corazón el fuego de su constante patriotismo,
“ y los elevados sentimientos que él inspira extinguirá todo otro sentimiento y toda otra pasión menos generosa.

“ Si el general Quiroga, no desconociendo las

“ calamidades que pesan sobre el país, cree que
“ aun son menos que las que puede causar a la
“ provincia a que pertenece el obediencia a las
“ autoridades nacionales, “ el remedio de estos
“ males no es ciertamente el de las armas”. Hoy
“ el Congreso ha concluido la más angusta de sus
“ funciones: ha sancionado el Código Constitu-
“ cional, y lo presenta a los pueblos para su acep-
“ tación, poniendo en manos de ellos mismos su
“ destino; sin que tengan necesidad de guerra y
“ de discordia para vivir del modo que juzguen
“ más ventajoso a su bienestar, y sin que la suer-
“ te que cada una de las provincias eligiere, de-
“ ba serle disputada por otra provincia.

“ Ha formado el Congreso una Constitución
“ digna del siglo en que vivimos: en ella están
“ garantidos todos los derechos públicos y parti-
“ culares, y “ conciliados los intereses nacionales
“ con los intereses locales”. Si las dos tercias
“ partes de las provincias libremente la aceptaren,
“ será puesta en ejecución entre ellas, “ guardan-
“ do con las demás todas las relaciones de paz
“ y fraternidad, como lo previene el artículo 188.
“ Las provincias que la resistieren no serán por
“ esto incomodadas por autoridad alguna; y man-
“ tendrán su gobierno hasta que quieran venir a
“ la unión nacional. Ningun motivo de guerra po-
“ drá sobrevenir entences; y tanto los pueblos que
“ aceptaren el régimen constitucional, como los
“ que lo rehusaren, vivirán bajo la sombra de la
“ paz ”.

“ Todo lo indicado lo registrará con más exten-
“ sión el señor general Quiroga en el manifiesto
“ del Congreso a las provincias, que el infras-
“ crito tiene el honor de acompañarle. Este ma-

“ nifiesto, cuya lectura es digna de todo buen ciudadano, es la expresión del sentimiento uniforme del cuerpo nacional, está garantido por el voto unánime y por las firmas de tantos honorables diputados de todas las provincias, dignos de ser escuchados por el interés que tienen en la suerte de una patria que han defendido con su espada, o que han hecho florecer con sus luces.

“ Ultimamente, para que nada quede por hacer, a fin de restituir la tranquilidad y la paz nacional, el Congreso, poseído de un sentimiento generoso y paternal, ha sellado la obra de la Constitución, dictando una ley de olvido y de amnistía general que borre los sucesos y cubra con un velo densísimo todos los hechos anteriores a su publicación.

“ Es imposible que el señor general Quiroga no perciba en esta conducta franca y honorable la buena fe del Congreso nacional. Asegurado con tan solemnes garantías puede retirar sus fuerzas de La Rioja, sin el menor recelo de que sean atacadas por las de otros pueblos; mientras que aquella provincia, en quietud y en paz, examine la Constitución y determine de su suerte. No hay desde hoy un motivo de continuar una guerra desoladora, y cuando el país sostiene otra peligrosa con un enemigo de su independencia. El Congreso general lo espera así de los pueblos y de los individuos que han tomado las armas unos contra otros, y está persuadido que hablándoles a nombre de nuestra cara patria, a la que él solo representa, será escuchado y “ entrarán a decidir de su suerte por la fuerza de la razón y no por la funesta fuerza de las ar-

“mas”. Con este objeto, han partido varios hon-
 “norables representantes a las provincias, y ha-
 “rán a los jefes que tienen las armas en la ma-
 “no esta misma invitación que yo tengo el honor
 “de hacer al señor general Quiroga. Ella es dig-
 “na de las paternales solitudes del Cuerpo Na-
 “cional y digna de ser escuchada por el señor ge-
 “neral a quien se dirige. El infrascripto se pro-
 “mete que no será desatendida; y aun añade que
 “está dispuesto a una conferencia ingenua y pa-
 “cífica según las seguridades que al intento se sir-
 “va darle, con el único fin de conseguir que el
 “señor general Quiroga por su parte se apresure
 “a dar un día de júbilo a esta patria afligida con
 “tantas calamidades.

“El que suscribe, esperando pronta contesta-
 “ción, asegura al señor general que, cualquiera
 “que fuera su resolución sobre esta importante
 “materia, no por eso serán menores las conside-
 “raciones con que lo distingue.—Mendoza, enero
 “21 de 1827.—*Dalmacio Vélez* ”. (1)

Quiroga devolvió esta nota; y escribió al pie del
 pasaporte del conductor lo que va a leerse, copiado
 letra por letra:

“Regresa Cecilio Berdeja *ala* Ciudad de Men-
 “dosa *condusiendo* el pliego que *con dujo dela*
 “Diputación del Congreso General: en razón de
 “que el que *abla* no se halla en el *caso de ver co-*
 “*municaciones de yndividuos* que dependen de
 “una autoridad que *Tiene* dadas órdenes para
 “que se le haga la *guerra*, pero si está en el de
 “*Contestar* con las *hobras* pues no conoce peligros

(1) Comunicaciones del Sr. Vélez dirigidas desde Men-
 doza al Congreso, sobre el resultado de su comisión cerca
 de las autoridades de San Juan. (Buenos Aires, Imprenta
 Argentina, 1827).

“ que le arredren y se *alla* muy distante de ren-
“ dirse alas *Cadenas Con* que se pretende ligarlo al
“ *pomposo carro* del Despotismo. Campamento
“ en el Pozito, enero 22 de 1827.—*Juan Facundo*
“ *Quiroga*.—

Estos documentos caracterizan la situación.

De una parte, la cortesanía llevada al exceso de discernirle oficialmente al ensangrentado caudillo el título de general argentino como los romanos le dieron a Atila el de General de Roma, para buscar una avenencia, un *modus vivendi*, que pos-tergando la solución del problema orgánico-nacional detuviese las desolaciones de la guerra civil, la apagase, devolviese la tranquilidad a los pueblos, la armonía a los gobiernos; y por estos medios permitiera concentrar las fuerzas vivas del país entero, para salvar la honra, la gloria y la integridad de la patria común, empeñada en una guerra extranjera.

De la otra parte, la grosería del hombre selvático, de instintos feroces, que ninguna idea moral modifica, que ningún vínculo social contiene; la desconfianza y el espíritu obcecado y vengativo del bárbaro que no reconoce más ley ni más autoridad que la de la fuerza material, que todo lo juega al azar de esa fuerza, y encerrado en el localismo más estrecho y oscuro, se mantiene alejado de la esfera en que ejercen su acción los intereses generales y las amplias aspiraciones de la nacionalidad.

Ante los actos de Bustos, de Ibarra y de Quiroga, que impidieron que las mismas juntas que estaban bajo su influencia hicieran el simulacro de examinar la Constitución que el Congreso les sometía, se desvanecieron todas las ficciones que había alimentado la oposición, y la situación se presentó en toda su desnudez y en su verdad.

Eran los caudillos preponderantes—ellos solos—los que se oponían a la organización nacional—los que la hacían imposible,—los que para hacerla imposible, perseveraban en la guerra civil hasta dominar a sangre y fuego a todas las provincias que no se les habían sometido, hasta aislar a Buenos Aires para abatirla, y derrocar a los poderes nacionales, colocándolos entre el caudillaje triunfante y el enemigo extranjero, ante el cual se les debilitaba y se les desautorizaba.

Sometido San Juan por las armas y San Luis por el miedo, Quiroga entregó Mendoza al fraile Aldao, su émulo en crueldades, en atrocidades; y dominada Catamarca, en pocos meses después lo estuvieron también Tucumán y Salta.

Bustos, por su parte, se dirigió a los diplomáticos extranjeros, residentes en Buenos Aires, participándoles la separación de Córdoba, declarando que no reconocía ninguna de las leyes dictadas por el Congreso, y que todo tratado celebrado con el "Presidente de Buenos Aires" no ligaba a aquella provincia ni le imponía el menor compromiso.

Estableció también un bloqueo terrestre, estacionando fuerza armada en el Saladillo con el encargo de impedir el paso de tropas de carretas y arrias, cortando las relaciones comerciales entre Buenos Aires y los pueblos del interior, y mandó detener los correos de la carrera para interrumpir hasta la correspondencia epistolar.

Bueno es recordar siempre que estas hostilidades se dirigían contra el ejecutivo, encargado de dirigir la guerra nacional; y que con relación a esta guerra ellas tendían, en el *interior*, a privarlo de recursos *para hacer la guerra*, y en el exterior, a desautorizarlo *para hacer la paz*.

VII

La oposición no hizo esfuerzo alguno para evitar la funesta situación que se produjo.—Apreciación de las causas por que la oposición se la atribuía a Rivadavia.—Creación del Ejecutivo Nacional.—Milicias Provinciales.—Presidencia de la República.—Banco Nacional.—Remoción de los Diputados Nacionales.—La Capital Nacional.—El Coronel La Madrid en Tucumán.—La oposición persiste en no querer su propio triunfo dentro de la Constitución y en derrocar a los Poderes Nacionales por la conjunción de la guerra civil con la guerra extranjera.—Bustos y Quiroga.—Rivadavia no quiere hacer una paz ignominiosa con el Brasil ni resolver por la fuerza la cuestión orgánica.—Abandona, en consecuencia, la escena pública, resignándose al aislamiento entre sus amigos y al ostracismo a que le condenaron los que no lo eran.—El Coronel Dorrego, Gobernador de Buenos Aires.—La oposición asume la responsabilidad de la guerra y de la organización del país.—Las predicciones de la historia.

La oposición de Buenos Aires no hizo esfuerzo alguno para evitar esta funesta situación o porque no lo quiso, o, más probablemente, porque debió sentirse impotente para doblegar la voluntad de los caudillos.

Y no haciéndolo, fué consecuente consigo misma, aceptando ante sus contemporáneos y ante la posteridad el desenlace que ella había preparado.

Ella provocó la resistencia de los caudillos; ella la envalentonó dándole tribuna en el Congreso y en la imprenta, y todos los pretextos y todos los

argumentos con que intentó justificarse; ella, en fin, derramó con mano pródiga, en todo el país, el veneno de la disolución.

Hemos hecho esta apreciación tomando como base de criterio los mismos documentos que esa oposición nos ha dejado. Ella habla en nuestras páginas, y al juzgarla en los debates de la Constitución, hemos reproducido fielmente sus propias palabras sobre los tópicos más esenciales.

Habíamos vivido y conversado en intimidad con los personajes de mayor importancia en la administración Rivadavia; pero hemos prescindido de lo que les oímos, porque aunque estuviéramos seguros de que nuestra memoria reproducía fielmente sus palabras, éstas, aisladas de todo justificativo, no podrían tener, por respetables que las personas eran, más valor que el que se atribuye legalmente a las declaraciones en causa propia.

Estando a los documentos, ya hemos visto cuáles eran las causas por que la oposición atribuía a Rivadavia la disolución, la guerra civil, el rechazo sin límite de la Constitución.

La creación del Poder Ejecutivo nacional se verificó durante la administración del general Las Heras, en quien quedó depositado; y la guerra inminente con el Brasil, lo indujo, y con razón, a solicitar que se le fuera poniendo en la plenitud de las facultades que le correspondían y eran necesarias; y como se le ha hecho cargo al señor Rivadavia de haber buscado en esa guerra un medio para concentrar el poder, bueno es decir que él estaba en Inglaterra y que sus amigos aquí no tomaron parte alguna en los trabajos que la acercaron y la precipitaron. Los argentinos que a eso concurren, estuvieron, en su mayor parte, en las

filas de la oposición que encabezó el señor Dorrego, lo que explica por qué algunos de ellos vinieron a representar a la provincia oriental en el Congreso. Afirmamos esto en presencia de los documentos más fehacientes.

Como ya lo hemos dicho en otro lugar, la ley de 25 de enero de 1825, (invocada siempre como violada por los poderes nacionales), declaraba que cuanto concernía a la independencia, integridad, defensa y prosperidad nacional, era del resorte privativo del Congreso, y que éste pediría progresivamente las disposiciones que se hiciesen indispensables sobre los objetos mencionados; de acuerdo con lo cual el señor Las Heras y sus ministros los señores García y Balcarce, solicitaron: 1.º que se declarasen, como se declararon, nacionales *todas las tropas de línea veteranas, o pagadas como permanentes* en las provincias del Río de la Plata, y que como tales, se pusieran a disposición del Poder Ejecutivo nacional; y 2.º, *que quedasen a disposición del Poder Ejecutivo nacional todas las milicias existentes en el territorio de la nación.*

Los amigos de Rivadavia, especialmente el doctor Agüero y don Valentín Gómez, fueron los que se opusieron a este segundo proyecto "que como ley ordinaria" ponía la totalidad de "las milicias provinciales" a disposición del ejecutivo nacional; sólo la admitían como ley de circunstancias, así expresado en ella misma.

No fueron, pues, ellos los que intentaron desarmar, por entero, a todas las provincias, ni los que, con ese fin, pretendieron extender sobre ellas,

en todos los tiempos, el brazo militar del ejecutivo nacional (1).

Tampoco fueron ellos los que prepararon ni precipitaron el advenimiento de la presidencia.

Fué el mismo gobierno de Buenos Aires, encargado del P. E. N. el que declaró al Congreso, que la experiencia que había adquirido y la naturaleza de los sucesos que habían sobrevenido, le convencían de que era absolutamente incompatible la reunión de las dos autoridades; iniciando en estos términos la necesidad y la conveniencia de que se le diese a la nación un gobierno propio y eficiente. Y esto,—nada más,—es lo que hizo el Congreso apenas lo creyó oportuno.

La única diferencia entre el antiguo y el nuevo Poder Ejecutivo nacional, consistió en el cambio de la persona, no resultando electo, como antes se había esperado, el señor general Las Heras; y en la mudanza del título, pues al señor Rivadavia se le nombró presidente de las provincias unidas del Río de la Plata, por el tiempo que estableciera la Constitución, el que se le computaría desde el día en que tomase posesión.

El propósito, clarísimo, era darle al Poder Ejecutivo la fuerza de la permanencia, indispensable en aquellas circunstancias para dominar las dificultades en que había colocado al país la guerra exterior en que ya estaba empeñado.

Creemos que quizá habría encontrádose una forma que encerrando la idea de la duración, diera menos pretextos a los descontentos por la persona electa; pero si hubo error de forma, no hubo innovación alguna sustancial, y por errores que no son

(1) Sesión del Congreso núm. 71, de 27 de Diciembre de 1825.

de sustancia no se puede, patriótica y cuerdamente, agitar al país y mucho menos precipitario en las calamidades de la guerra civil.

Ni el título ni el tiempo le daban atribuciones; con ese o con otro título, por más o por menos tiempo, el Ejecutivo no tendría más facultades que las que le habían dado o le diesen las leyes del Congreso.

Por otra parte, las provincias a cuyo examen debía someterse la Constitución, podían admitirla sub-conditione, y por una condición limitar el tiempo de la presidencia; podían decir, por ejemplo, que jurada la Constitución se procedería en la forma que ella establecía a la elección del primer presidente constitucional, lo que era regular y a lo que ni el Congreso ni el señor Rivadavia habrían resistido, como ya lo hemos dicho. Y si resistían entonces, las provincias en disidencia tendrían razones que antes les faltaban, aunque nunca las bastantes para llevar al país a la disolución y a la barbarie.

La ocasión en que podían poner aquella condición, que todo lo remediaba legal y pacíficamente, debía ofrecérseles pronto y, en efecto, se les ofreció dentro del primer año de la presidencia del señor Rivadavia.

El señor Rivadavia ni presentó ni sostuvo en el Congreso la creación del Banco Nacional. La presentó el gobierno del señor Las Heras, e insistió por la sanción, y la obtuvo, su ministro el señor García.

Con esa ley, como con las otras, la oposición trató de promover y de mantener la sublevación de los caudillos contra el Congreso y la presidencia; y el artículo que establecía en el Banco la Casa de Mo-

neda Nacional les dió medios eficaces para conmo-
ver en La Rioja contra los poderes nacionales al
caudillo Juan Facundo Quiroga, porque a los es-
fuerzos de los opositores políticos se unieron los de
los capitalistas y comerciantes interesados en la Ca-
sa de Moneda de aquella provincia.

El proyecto del Banco Nacional, sancionado en
1826, estaba redactado desde 1824, y, como puede
verse en el capítulo que le consagramos, pertenece
a una comisión compuesta del doctor Agüero (quien
sosteniéndolo en el Congreso patrocinaba su propia
obra) del doctor López (don Vicente) y del señor
Aguirre; y estos tres señores son los autores del
artículo que declaró facultad nacional, como lo es,
la de acuñar moneda.

Don Braulio Costa y sus socios habían estado
convenidos en ese artículo, cuando se redactó el
proyecto en 1824; pero más tarde cambiaron de
opinión luego que La Rioja les permitió fundar
allí casa de amonedación; y para usar y abusar
de esa concesión se ligaron pecuniariamente con
Quiroga, se entendieron con Bustos, y, mal inspi-
rados al desligar sus intereses particulares de los
intereses colectivos del país, fomentaron la guerra
civil y concurrieron a romper los vínculos naciona-
les.

Respecto a haber desconocido en las provincias
la facultad de remover a los diputados, no es nece-
sario demostrar que, aunque elegidos por las pro-
vincias, desde que se incorporaron al Congreso los
diputados eran *nacionales*, y que en este carácter
no podían ser juzgados ni expulsados por las au-
toridades provinciales. Esto es axiomático.

La ley de la capital es la única, de las que sir-
vieron de pretexto a la resistencia, que fué pro-

puesta y sostenida por el señor Rivadavia. Estudiando esta ley en otro capítulo, nos bastará indicar aquí que Buenos Aires era la capital histórica de la nación; que nunca había existido el gobierno general fuera de esa capital, porque sólo en ella podía tener seguridad y acción eficaz; que sólo disponiendo los gobiernos generales de los recursos acumulados en ese centro por la sucesión de los tiempos, habían podido dominar todos los grandes conflictos nacionales y conquistado la independencia; que disponiendo de ellos el gobierno encargado del Poder Ejecutivo nacional había dado principio a la guerra del Brasil; y que para hacerla con vigor, de ellos necesitaba disponer, ampliamente, el Poder Ejecutivo nacional que le reemplazaba; que no se trataba de *hacer* una capital, sino de tomar posesión de la capital hecha para atender en ella, y con ella, a la seguridad de la Nación, tal como lo habían hecho los gobiernos nacionales que le habían precedido; que no podía pensarse, ni nadie pensaba seriamente en crear una capital nueva fuera de Buenos Aires, y que dentro de Buenos Aires ni estaba estudiada ni legalmente establecida la coexistencia de las autoridades nacionales y provinciales, *realmente separadas*; que esa coexistencia era una verdadera novedad, cuyas dificultades no se conocían, pero que, de cierto trabaría la acción nacional, que jamás se había necesitado más íntegra, más libre y más rápida para resguardar la integridad y la gloria de la nación.

Bajo este solo aspecto, entregar la capital a la jurisdicción exclusiva de la nación, era un interés nacional evidente y que debía atenderse sin retardo, porque no lo permitían las circunstancias de la guerra.

Si alguno tendría derecho a quejarse de la forma en que atendiendo a esa necesidad y a las de la organización del país, se tomaba posesión de la capital histórica, no eran, sin duda, las otras provincias. Ellas habían alegado siempre que Buenos Aires se había apropiado todos los elementos acumulados en esta ciudad, que era la puerta exterior y el centro comercial de todo el país; y esos elementos se declaraban de propiedad de todos, declarándolos nacionales.

Esto, lógicamente, debía desarmar, bien lejos de armar, a las provincias contra Buenos Aires.

Tales eran las leyes contra las que se sublevaban los caudillos principales con la cooperación de la oposición de Buenos Aires, y de las cuales sólo la de la capital pertenece a la presidencia del señor Rivadavia.

Ellas no eran tan malas; pero aunque lo fueran, a ninguna provincia le habían sido impuestas; como lo hemos dicho, las que no habían querido admitirlas, no las habían admitido ni ejecutado.

Además, si la opinión que les era adversa, era mayoría en el país, ella tenía, dentro de la Constitución, el medio legal de derogarlas.

Acusaban también a la presidencia de Rivadavia, de que el coronel La Madrid se había apoderado del gobierno de Tucumán, de que ese acto había alarmado a los caudillos de otras provincias, que se consideraron amenazados y se armaron, de lo que resultó la guerra civil, mediante la cual el gobierno nacional había dado auxilios a algunas provincias.

En primer lugar, fué el gobierno del general Las Heras el que envió a Tucumán al coronel La Madrid, natural de aquella provincia, en la que era

muy relacionado y apreciado; y fué también durante el mando del señor Las Heras que La Madrid se apoderó del gobierno de Tucumán. Si ese fuera el acto inicial de las perturbaciones del interior, corresponde a la administración del general Las Heras.

El gobierno nacional, que tenía que atender a los peligros que corría la integridad nacional, ya quebrantada en Tarija, no podía dejar de auxiliar a ciertas provincias, especialmente a la de Salta, donde se encontraba el general Arenales, ya encargado por el gobierno del general Las Heras de la guarda de la frontera con Bolivia.

Natural era que amparase a las provincias que prestaban obediencia a la autoridad nacional, y en las que, además, podía levantar parte de las tropas que necesitaba para la guerra exterior.

Estudiando este punto, el cargo que resulta contra el señor Rivadavia es el de no haberlas amparado tanto como podía y tanto como debía.

Y cargo gravísimo, porque para que la organización nacional y la guerra exterior fuesen simultáneamente hacederas, era indispensable que se conservase la paz interior, y la paz interior no era posible sino manteniendo a los caudillos provinciales dentro de los límites de su jurisdicción territorial; al primero que los traspusiera, debía contenérsele y reprimírsele enérgicamente, concentrando sobre él, con rapidez, todos los elementos de que la autoridad nacional podía disponer y que eran sobrados en los primeros días de la presidencia. El nudo gordiano de la situación estaba ahí.

Pero aquello, que era un deber primordial, ni se intentó; y los caudillos, envalentonados por la impunidad absoluta, y no teniendo ninguna de las

consideraciones morales y patrióticas que producían la abstención o la parquedad de la acción nacional, fueron ensanchando la esfera de la suya hasta abarcar y dominar a todas las provincias.

Haber caído con todo el poder nacional sobre el primero que se extralimitase, habría sido aventurar algo; pero no hacerlo, era aventurarse a perderlo todo: y lo perdieron.

Haberlo perdido en la forma en que se perdió, demuestra lo infundado del cargo de que nos ocupamos.

Pero encendida la guerra civil por esta o por la otra causa, por estos o por los otros hombres, lo evidente era la necesidad suprema de hacerla cesar, especialmente cuando el país estaba comprometido en una guerra extranjera.

Cuando esa guerra amenazó a la misma capital, el Congreso, el presidente, el partido político que lo sostenía, invocaron el patriotismo argentino para conjurar tamaño peligro y vinieron a tomar su puesto de honor varios soldados gloriosos, separados políticamente del señor Rivadavia.

Si en aquel momento el señor Dorrego los hubiera imitado, si hubiera desnudado su espada, que era la espada de un guerrero de la independencia, la espada de un valiente, el país entero se habría electrizado, los propios caudillos no habrían podido resistir al sentimiento nacional sobrepuesto a todas las disidencias internas en la persona del jefe reconocido de la oposición; el enemigo extranjero se habría sentido vencido en presencia de los argentinos, que en el peligro de su patria sabían vencerse a sí mismos; y la cuestión interna, levantada por ese acto del terreno cenagoso y sangriento en que estaba colocada, si no hubiera encontrado una solu-

ción conciliadora, se habría depurado y dignificado.

Pero esto eliminaba uno de los elementos que debían producir el derrocamiento de los poderes nacionales, que difícilmente podrían resistir, como lo dejamos indicado, a la conjunción de la guerra civil y de la guerra extranjera.

¡Y la conjunción se mantuvo inexorablemente!

Los cálculos fríos de la política suelen ser coronados por el éxito; pero nunca se incorporan a la vida de una nación, ni se dilatan y fecundan en el porvenir los sucesos de una política en que no se han sentido los latidos del corazón, ni los impulsos abnegados del patriotismo.

Aquel peligro a que venimos refiriéndonos, se desvaneció por dos victorias espléndidas, Ituzaingó y Juncal; y por fortuna del partido del señor Rivadavia, que podía haberse desvanecido, la historia encuentra en sus labios, después del triunfo, los llamamientos a la conciliación que habían pronunciado antes de obtenerlo.

El *Mensajero*, que era su órgano más ardoroso, escribía al pie del primer parte del General Alvear, vencedor de Ituzaingó, las siguientes palabras:

“ ¡Argentinos! ¿A qué está destinada nuestra patria? Unámonos; este día sea el día de la cordialidad y de la paz; y esta República, destinada a cosas grandes, será la mansión del orden y de la gloria. ¡Viva la patria! ”

La oposición se mantuvo sorda e intransigente; y buscó en la victoria misma nuevos temas para censurar y acusar al Gobierno y al General en Jefe del ejército vencedor.

Las provincias disidentes, de cuyos actos se hizo solidaria la oposición, justificándolos, no sólo se

habían rehusado y se rehusaban a compartir los sacrificios que imponía la guerra nacional, sino que hostilizaban al Gobierno encargado de sostenerla; y cuando sin ellos y a pesar de sus hostilidades ese Gobierno la mantiene con gloria y conserva bien alto el honor de las armas argentinas, los mismos que trataron de reducirlo a la impotencia, sin reparar que estaba a manos con el enemigo extranjero, asumen el rol de censores y le censuran y acusan porque hizo poco, o porque no hizo todo lo imaginable.

Así era la oposición contra Rivadavia; así son las oposiciones sistemáticas; y quien dice sistemáticas dice sin conciencia, capaces de negar la luz del sol, porque tanto vale negar la luz de la inteligencia que se derrama en los actos y en las palabras de los elegidos.

Si la oposición a Rivadavia hubiera obrado con conciencia, habría obrado con sabiduría, porque, como lo dijo Lamartine, la conciencia es la más elevada sabiduría humana.

La Constitución, en los términos en que el Congreso la sometía al examen de las Juntas Provinciales, le entregaba a la oposición todos los medios de pacificar al país.

Cuando ya sus caudillos dominaban la mayoría (más de dos tercios), de las provincias, el Congreso ponía el destino de la Constitución en manos de ellas mismas.

Si dos tercios la aceptaban, regiría para ellas. Las que no lo aceptasen, no se les impondría; ellas, conservando el derecho de ingresar al orden constitucional si con el tiempo creían convenirles, se gobernarían mientras quisieran, con independencia, como mejor les pareciera; quedando, entretanto,

restablecida la paz entre todas ellas, y las cordiales relaciones en que debían vivir y conservarse.

Las provincias podían también aceptar "condicionalmente", como así fué declarado en el Congreso, y como se subentendía sin que lo declarasen; y en la situación del país, ni el Congreso resistiría condiciones aceptables dentro de una organización regular cualquiera, ni la persona del señor Rivadavia habría sido una dificultad.

Además, y sobre todo, si eran, como decían, la mayoría del país (y dominadas como estaban las provincias por los caudillos, esa mayoría, y muy grande, resultaría de *hecho* en los escrutinios provinciales), la Constitución les era aceptable porque, dentro de ella, como lo dejamos tan repetido, tenían el poder de derogar las leyes generales y el de reformar la misma Constitución, puesto que la reforma podía hacerse en cualquier tiempo.

En estas condiciones, no les quedaba ni sombra de pretexto para continuar dando su apoyo moral a la resistencia armada y a las atrocidades de la guerra civil.

En esta situación, los hombres de Buenos Aires debieron ir a las provincias y esforzarse en hacerles comprender a los caudillos que en el interés egoísta de la misma oposición convenía desarmar la guerra civil y apoderarse de los medios legales y pacíficos que se les ofrecían y que, bien manejados, les iban a dar todos los resultados legítimos a que habían podido aspirar, puesto que dispondrían de las urnas electorales de un número de provincias que les aseguraba mayoría inmensa, dueña de todos los poderes dentro del organismo Constitucional.

Si no podían reducir a los caudillos, y tenían que sacrificarles la organización inmediata del país, re-

chazando la constitución, debieron siquiera empeñarse en que ese rechazo revistiese al menos las formas externas de un procedimiento regular.

Estas formas, por más amoldables que fueran a la voluntad de los caudillos, les imponían el concurso de las Juntas Provinciales, y este concurso establecía *en principio* que un hombre solo no representaba legalmente al pueblo de la provincia ni podía, por sí sólo, decidir de su destino.

No salvaron siquiera este principio; dejaron eliminar a las Juntas Provinciales, precisamente en el caso en que ellas debían ejercer la más alta de sus funciones, y aceptaron que los caudillos Bustos, Ibarra y Quiroga impidieran el examen de la Constitución, despidieran descortésmente a los Representantes del Congreso, y sustituyéndose al pueblo y a las Juntas, decidieran por sí y ante sí la cuestión orgánica, estableciendo descaradamente su omnipotencia personal, que era la de la fuerza bruta.

Desde entonces, los caudillos lo pudieron y lo hicieron todo, a su manera, sin reato ni miramiento alguno: la oposición de Buenos Aires no podía, como es de suponer que lo deseaba, ni evitar ni modificar las enormidades que se cometieron.

Bustos, no contento con segregarse y con impedir que el ejército en campaña no pudiera recibir ningún contingente de las provincias interiores, llevó su hostilidad, como se ha visto, hasta comunicar a las naciones extranjeras que los tratados que celebrase el Presidente de "*Buenos Aires*" no ligarían, en manera alguna, a la provincia de Córdoba ni le impondrían el menor compromiso; tratando por estos actos de desautorizar al Ejecutivo Nacional tanto para la guerra como para la paz, aunque a precio de darle al Brasil toda la fuerza moral de

que pudiera despojar a la República Argentina; pues eran sus destinos, y no los de su gobierno, los que estaban comprometidos en la guerra exterior.

El más vulgar patriotismo basta para calificar este acto como necere.

Quiroga, por su parte, con sus atentados, con sus crueldades, con sus atrocidades, barbarizó la guerra interior. En ninguna se encontrará mayor barbarie.

Hemos buscado, con el deseo de encontrarlo, un acto, siquiera una palabra, que nos permitiera decir que la oposición civil condenó alguno de los atentados de los caudillos.

No la encontramos en parte alguna; al contrario, la oposición continuó en Buenos Aires combatiendo acerbamente a los Poderes Nacionales, explicando y justificando el rechazo de la Constitución, dando razón en todo a los caudillos, cohonestando sus excesos y ocultando o negando sus enormidades, cuando no era posible ni intentar cohonestarlas.

La solidaridad de los opositores de aquí con los régulos del interior no aparece quebrantada un solo instante. La una y los otros se mantuvieron hasta el fin identificados en el propósito de derrocar violentamente a los poderes nacionales, costase lo que costase.

Ahí están los periódicos de la oposición: ellos justificarán siempre lo que acabamos de decir.

Unificadas las armas civiles de la oposición con las lanzas sangrientas del caudillaje, ya preponderante, la persona de Rivadavia debía desaparecer; porque no era hombre capaz de firmar una paz ignominiosa para tener disponible el ejército nacional; ni quedándole disponible por una paz honorable, de servirse de él para imponer por la fuerza de las bayonetas lo que sólo quería imponer por el

convencimiento, por la fuerza de la razón. Su partido podría emplear la fuerza: él no. Había dicho que no lo haría; y cuando su partido, después de un descenso, quiso reaccionar por la fuerza contra la fuerza que lo había derrocado, no pudo contar con su cooperación ni con su aprobación.

El no podía desconocer cuál era la situación a que había llegado su país; las provincias no tenían elementos para vivir por sí mismas en el aislamiento; pero los caudillos que se habían enseñoreado en ellas, eran adversos a todo vínculo nacional, porque la unificación, en cualquier forma y en cualquier grado, tendría que limitar su poder personal, y siendo naturalmente adversos a la unificación y no reconociendo más autoridad ni más poder que el de la fuerza, sólo la fuerza podía someter y unificar.

Quizá comprendió también que no era el Ejército regular el que podía desempeñar esa tarea; porque su organización y su disciplina se quebrantarían por las operaciones y los fraccionamientos que impone la guerra irregular; y puesto en contacto con los malos ejemplos y las seducciones de la vida licenciosa y aventurera de los montoneros, podía disolverse, como ya había acontecido.

Y si esto comprendió, de ello pudo deducir que la obra de la unificación, que era ineludible, sólo podía realizarse por la fuerza absorbente de algún caudillo, astuto o afortunado, que estableciese su predominio personal, avasallando a los otros caudillos.

Pero sea de esto lo que fuere, el hecho es que Rivadavia no quiso aceptar ni presidir la lucha organizada en el terreno de la fuerza; y que cuando esa lucha fué la única posible, abandonó la escena

pública, se resignó al aislamiento entre sus amigos y al ostracismo a que lo condenaron los que no lo eran; comprobando con esta doble resignación la lógica y la unidad de su vida.

Separado Rivadavia,—restablecida en su integridad la provincia de Buenos Aires;—confiado su Gobierno al coronel Dorrego, quien recibió de las otras provincias el encargo de dirigir la guerra y las relaciones exteriores, la oposición que él encabezaba asumió la responsabilidad de la guerra nacional y la de organizar el país bajo el régimen que llamaban *federal*, y que no era, de hecho, mas que un vínculo de alianza imperfecta entre los gobernadores. El ideal de la perfección, para los hombres más adelantados de la oposición triunfante, era la federación norteamericana de 1778.

En este momento histórico, y después de haber recorrido, analizando, estudiando y discutiendo los sucesos que pusieran en manos de la oposición los destinos de este país, digamos, con la autoridad de la historia de los otros pueblos, la verdad que más adelante veremos tan deplorablemente confirmada.

La Constitución de 1826 no produjo mal alguno: no podía producirlo. Al contrario, si la oposición la hubiera aceptado, aun como ensayo, con ella se hubieran organizado las provincias argentinas en nación libre, y esa misma oposición habría podido gobernarla como gobierno regular.

Cualquiera Constitución es buena en sí misma, si reconoce y consagra los derechos civiles del hombre y los derechos cívicos del ciudadano, garantizando su ejercicio.

Pero su bondad depende de los hombres. Con las mismas instituciones, ellos pueden hacer el bien o el mal.

Y es tan profunda nuestra convicción en este punto, que cuando vemos promover o decretar la reforma de alguna constitución sudamericana, decimos, sin averiguar lo que quieren reformar: *¡labor inútil!, reformad a los encargados de ejecutarla, y educad al pueblo.*

Oigamos las predicciones de la historia.

Ya hemos recordado lo que hicieron los constituyentes de los Estados Unidos en 1787, en el día en que debían firmar la Constitución que no tenía el asentimiento completo de nadie.

Hamilton, el primer promotor de la convención, era el más descontento de todos, porque la Constitución era *demasiado* democrática: Franklin la desaprobaba porque no lo era “bastante”. Washington dudaba que pudiera ser practicable. Pero no creyendo ninguno de ellos en la infalibilidad de su propio juicio, no teniendo otra pasión que la del bien público, ni otras inspiraciones que las del patriotismo, convencidos de que cualquiera Constitución era mejor que la disolución, obraron con sabiduría, porque obraron con conciencia, y diciendo: “Ensayemos la Constitución, con buena voluntad corregiremos sus defectos”, la aceptaron, sacrificando sus opiniones personales, y fueron a sus Estados a propiciarle los sufragios del pueblo.

Sobre el sillón de la presidencia de la Convención Constituyente, que ocupaba Washington, existía en una pintura la imagen del Sol, y en el momento en que se consumaba el acto por el cual los que no aprobaban la Constitución, la aceptaban para salvar al país, Franklin, señalando el cuadro, exclamaba: “¡Cuántas veces en el curso de estas sesiones, y en vista de nuestras alternativas de temor y esperanza, he mirado aquella pintura

“ sin poder darme cuenta si era una salida o una
“ puesta de sol! ¡Mas ahora tengo la incompara-
“ ble dicha de ver que no es un Sol que se pone,
“ sino un Sol que se levanta!”

Y se levantaba, en verdad, y nada ha perturbado su ascensión, porque aceptada la Constitución por la mayoría de los Estados, Washington, como primer Presidente, se encargó de hacer funcionar el organismo, de cuya practicabilidad había dudado, y la buena voluntad de todos, demostrando lo fiable de los juicios a priori, dió cohesión a los elementos que ensayaban la vida nacional, los hizo aptos para los más elevados fines de la asociación humana, y consolidó en América esa grande República que cubre con su estrellada bandera cincuenta millones de hombres libres.

“ Grandiosa lección, dice Laboulaye, que nos
“ enseña que no hay Constitución en la cual no
“ pueda establecerse la libertad, si la ponen por
“ obra hombres de corazón, que desean ante todo
“ el bien público. Este es el lado más bello de la
“ revolución americana, que ha dado un noble
“ ejemplo al mundo, mostrándole hombres de bien,
“ divididos por opiniones, pero reunidos por el pa-
“ triotismo, y sin más afán que el de asegurar la
“ libertad de su país. Esto es lo que constituye la
“ gloria de Hamilton, Madison, Franklin, y del
“ primero entre todos, Washington.”

La Francia, aliada de los Estados norteamericanos, no pudo, como ellos, constituir la República, ni conciliar, bajo ninguna forma amplia y durable, el orden con la libertad.

“ ¡Qué contraste, exclama Laboulaye, por el la-
“ do de lo bueno, con los hombres de la Constitu-

“ ción francesa! En ésta sólo encontramos parti-
“ dos que se hacen una guerra encarnizada; gen-
“ tes que representan un sistema, que se muestran
“ despiadados con quien no discurre exactamente
“ como ellos. No me refiero a las diferencias que
“ separaron a los girondinos y jacobinos; porque,
“ en verdad, cuanto más he querido saber en qué
“ consistía, tanto más difícil me ha sido compren-
“ derlas; no quiero tomar por lo serio la acusación
“ de *federalismo* que se inventó para hacerlos gui-
“ llotinar, pero me es enteramente imposible des-
“ cubrir lo que políticamente separaba a Danton
“ de Robespierre; sólo veo en sus sangrientas lu-
“ chas odios feroces y ruines envidias. No fueron
“ las ideas las que separaron aquellos hombres,
“ fueron las pasiones, de las que fué víctima la
“ Francia. ”

Los partidos de odios, de envidias y de pasiones personales, son los que preparan el advenimiento de los despotismos por medio del cansancio y de los males sociales que ocasionan con sus intransigencias, que hacen inextinguible el fuego de las discordias, con sus agitaciones estériles, con sus conspiraciones permanentes y sus anarquías calamitosas.

El despotismo, como todos los fenómenos sociales, reviste el carácter y las formas del elemento que prepondera en el desequilibrio o en la descomposición que lo produce.

Así en Francia, el despotismo cesarino, al despojarla de la libertad que ella no había sabido consolidar como gobierno, la enceneguicó, envolviéndola en los resplandores de la gloria militar y llevando hasta los helados confines de la Europa la bandera tricolor que simbolizaba la más portentosa y emancipadora revolución del siglo; al paso que aquí,

donde triunfaban los caciques provinciales con las turbas semibárbaras que representaban y acaudillaban, la tiranía, que debía sobrevenir, inevitablemente, tenía que ser, como ellas, atrasada, cruel, sanguinaria, enemiga de la sociedad culta, que había sido vencida, repulsiva de todo elemento y de todo contacto civilizador.

INDICE

	Pág.
Andrés Lamas	4
Bernardino Rivadavia, por A. Melián Lafinur . . .	7

RIVADAVIA Y SU TIEMPO

Introducción	33
------------------------	----

Primera época (1810-1812)

CAP. I.—D. Bernardino Rivadavia y el Dr. D. Mariano Moreno, en el Cabildo abierto. 22 de Mayo de 1810.—El Dr. Moreno, Secretario de la 1.ª Junta: Concentra la acción del Gobierno y la hace eficiente para ahogar vigorosamente la reacción, y para llevar las armas revolucionarias hasta el Alto Perú.—Pone en manos del pueblo el Contrato Social de Rousseau: descomposición de la sociedad colonial: la revolución reviste carácter social, adquiere el nervio de la acción popular y la fuerza expansiva de los principios democráticos.—El Dr. Moreno resiste la incorporación al Gobierno de los Diputados de las Provincias.—Es vencido.—Incorporación de los Diputados.—Separación del Dr. Moreno.—Los sucesos le dan razón.—Se debilita la acción del Gobierno.—Desastres y peligros de la revolución.—La segunda Junta reconoce la necesidad de vigorizar la acción ejecutiva y la delega en un Triunvirato, del que nombra Secretario a D. Ber-

nardino Rivadavia.—Rivadavia toma en este Gobierno la misma posición que tuvo el Dr. Moreno en la Junta de Mayo.—La segunda Junta, que toma el título de Conservadora, expide un Estatuto que le subordina la acción del Triunvirato. Este lo resiste, disuelve la Junta y promulga un nuevo Estatuto, por el que toma el título de "Gobierno superior de las Provincias del Río de la Plata".—Por este Estatuto se crea una Asamblea General, que funcionaría hasta la reunión del Congreso que debía convocarse.—Reunida esta Asamblea, declara corresponderle la autoridad "suprema".—El Triunvirato la disuelve.—Rivadavia, como el Dr. Moreno, juzga indispensable la concentración de la acción gubernativa para dominar los peligros de la revolución. Obtiene, como la Junta de 1810, la justificación del éxito.

63

CAP. II.—Complicaciones Exteriores.—Política de la Princesa Doña Carlota Joaquina, contrariada por el Embajador Inglés Lord Strangford.—Auxilios dados a Montevideo.—Insuficiencia de esos auxilios y apurada situación de la plaza.—Entrada del Ejército Portugués a la Banda Oriental.—Lord Strangford alarma al Embajador Español Casa Irujo sobre las miras de los Portugueses: se entiende con D. Manuel de Sarratea, Agente de Buenos Aires: Amenaza al Príncipe Regente con una ruptura de relaciones si no retira su Ejército de la Banda Oriental: Por esos medios se llega en Río de Janeiro a convenir en un armisticio, obligando a Buenos Aires a someterse a lo que acordasen la Inglaterra y el Portugal con la Regencia de España.—Buenos Aires inutiliza ese acuerdo, despertando en el General Elío las desconfianzas contra los Portugue-

ses; y negocia con él un tratado de pacificación, mediante el cual retira su Ejército de la Banda Oriental, quedando obligado Elío a hacerla evacuar por los portugueses. —Este tratado desagrade a todos, a Artigas, a la Corte Portuguesa, a la princesa Carlota, a los españoles del Alto Perú y de Montevideo. —Retirada de Artigas, manteniéndose en hostilidad con los Portugueses. —El Gobierno Portugués recibe el tratado como una injuria. —Resuelve detener su Ejército en la Banda Oriental y ordena a su General que exija del Gobierno de Buenos Aires condignas reparaciones, autorizándole, además, para que se entienda con Vigodet, Gobernador de Montevideo, y con el General Goyeneche, comprometiéndose por este acto en las intrigas de la princesa Carlota: Reclamación del General Portugués, con el carácter de ultimátum. —Contestación dignísima del Gobierno de Buenos Aires. —Ruptura inminente con los Portugueses.

77

- CAP. III. —El General Artigas solicita auxilios para continuar hostilizando a los portugueses. —El Gobierno resuelve dárselos y lo comunica al Gobernador Vigodet, reclamándole su concurso, en cumplimiento del tratado, para obligar a los portugueses a que evacúen el territorio. —Vigodet lo rehusa, declarando que estará con los portugueses contra Artigas. —Se hace evidente la coalición de los españoles y portugueses. —El Gobierno de Buenos Aires acepta la ruptura con los unos y con los otros, identificando la causa de la revolución con la defensa de la integridad territorial. —Esta política firme, era hábil. —Desconcierta al Gobierno Portugués, imponiéndole una guerra en favor del restablecimiento de la dominación

española, a la cual no podría arrancarle la Banda Oriental, que era el objetivo secular de su política.—Cambio fundamental.—Anulación de la Carlota.—Restablecimiento de la influencia de Lord Strangford.—Resolución de ponerse en paz con Buenos Aires.—Misión de Rademaker con ese fin.—Se concluye un armisticio ilimitado.—Altivez del Gobierno de Buenos Aires.—Su superioridad moral.—Desagrado y dificultades que encuentra el armisticio.—Cómo desaparecen.—El armisticio ratificado tiene todos los efectos de un tratado.—Importa un gran triunfo.	95
CAP. IV.—Restablecimiento de la disciplina militar.—Sublevación del Regimiento de Patriotas.—Represión severa.—Labor incesante del departamento de la guerra a cargo de D. Bernardino Rivadavia.—Enumeración de los trabajos más importantes.—Se levanta el espíritu público: donaciones populares para la adquisición de armamento.—Las señoras de Buenos Aires.—Cambio radical en la situación militar.	113
CAP. V.—Conjuración de los españoles encabezada por D. Martín de Alzaga.—Elementos de que podía disponer.—Las disidencias de Chiclana y Pueyrredón, miembros del Gono, retardan el descubrimiento.—Actitud de Rivadavia: serena e inteligente energía: él solo dispone las primeras prisiones y extiende la primera sentencia de muerte.—Con la ejecución del primer conjurado, los patriotas se ponen en acción, se arman y dominan las calles; la conjuración queda desconcertada y los conjurados aislados, aterrados e impotentes.—Ahogada la reacción en la sangre de Alzaga y de muchos de sus cómplices, Rivadavia impide que las ejecuciones y los procesos excedan el límite de	

la necesidad.—Identidad de propósito, de acción y de resultado.—Liniers y Alzaga.—Moreno y Rivadavia.—Dependencia en que se encuentran los sucesos, la gloria militar y el aparecimiento de los grandes Capitanes de la inteligencia y de la acción de los hombres civiles.	121
CAP. VI.—Creación de la escarapela nacional.—Abolición del paseo del Estandarte Real.—Naturalización de extranjeros.—Primera carta de ciudadanía.—Fórmula de la que se concedía a los Españoles.—Se consideran como extranjeros el comercio y los puertos de España y sus dependencias.—Por estos actos queda declarada la independencia.—Aplicación práctica y gubernamental de los principios abstractos proclamados por la revolución.—Se reconocen como bases orgánicas las del sistema representativo.—El Doctor Moreno no establece la libertad de imprenta: sus motivos.—Rivadavia la proma.—Decreto de 26 de Octubre de 1811.—Introduce el juicio por jurados.—Explicación de este decreto dada por Rivadavia en 1822.—Decreto reconociendo y garantiendo los derechos individuales.—Supresión de la Real Audiencia.	129
CAP. VII.—Libertad del comercio de los extranjeros.—Inmigración.—Supresión del tráfico de esclavos.—Estímulos para la inmigración y colonización.—Reforma fundamental de la legislación aduanera.—Abolición de los estancos.—Impuesto sobre los artículos destancados. Primera disposición argentina sobre moneda.—Impuesto sobre herencias y legados.—Reforma rentística.—Economías.—Aduanas terrestres.—Mejora de la hacienda pública.—Publicación de cuentas.—Iniciación del Banco de Descuentos, de una compañía de seguros y de asociaciones	

particulares, de nacionales y extranjeros, para objetos de utilidad nacional.—Plano topográfico y sistema agrario.—Fusiones del Estado.—El hombre y la producción.—Solicitación de profesores europeos.—Establecimiento literario.—Enseñanza de la economía política.—Suscripción pública para el Establecimiento literario—Primeros suscriptores.	157
--	-----

Segunda época (1826-1827)

CAP. I.—Discusión en el Congreso sobre régimen de Gobierno.—No se debaten principios ni sistemas.—Fraccionamiento, despoblación, pobreza y atraso de las provincias.—El Diputado Dorrego, para hacer posible la organización federal que sostiene, propone varias agrupaciones de provincias para que cada grupo forme un Estado.—D. Valentín Gómez, órgano de la mayoría, acepta esta indicación, pero los diputados de la minoría la repelen.—Ante esta repulsa, Dorrego abandona su indicación, y se adhiere a los que pretendían la organización federal de las provincias en la situación en que se encontraban.—Discusión sobre los elementos que tenían las provincias para constituirse en Estados federales.—Apreciaciones sobre este debate.—Resultados posteriores que las comprueban.	1/3
CAP. II.—Se invoca en favor de la federación la opinión de los pueblos.—Atribúyese a la Constitución de 1819, que la contrariaba, la anarquía y la disolución del año 20.—Páginas históricas que restablecen la verdad.—Los pueblos no pueden expresar su opinión.—Los caudillos constituidos en órganos de los pueblos inconsultos y anulados por la violencia y el fraude oficial.—Aunque los pueblos pudieran expresar su voluntad, les	

faltaba preparación para apreciar la diferencia de régimen.—Estado de los pueblos.—Distinción entre las poblaciones urbanas y rurales.—Fuentes del poder de los caudillos.—Origen y significado de la federación que proclamaban.—La Federación era la disgregación favorecida por el odio a Buenos Aires.—Solidaridad entre los centros y clases cultas de las provincias y su Capital tradicional.—Opinión del General San Martín.—La Federación representada por los caudillos y por las desgracias nacionales, les inspira terror y odio.—La misma oposición federal, lo reconoce en el Congreso.

197

- CAP. III.—La Constitución de los Estados Unidos transportada a la América Española, no había podido funcionar, conservando el orden y la libertad.—¿Por qué?—Opiniones de Tocqueville y de Webster.—Razonamientos de los escritores de la época de Rivadavia.—Cómo llegaron los Norteamericanos a la unidad del régimen nacional.—Los federales argentinos confundían el vínculo federal de 1778, que puso en peligro de disolución a los Estados Unidos, con la Constitución de 1787, que los salvó y consolidó.—La opinión del Doctor Alberdi.—La oposición argentina no imita el patriótico ejemplo de los constituyentes Norteamericanos.—Al contrario, es sistemática y personal: autoriza y sostiene cuanto hacen los Gobernadores, hasta la denegación de los contingentes para la guerra nacional.—Enaltece al General Bolívar.—Se solicita su intervención en la cuestión interna, a pesar de que Bolívar era ultra-unitario, y constituía, por su doctrina y por sus actos, un peligro para la integridad territorial y las libertades argentinas.—Alucinación de las oposiciones que se adhieren al poder personal.

223

- CAP. IV.**—Abstención del Presidente Rivadavia durante los debates de la Constitución.—Sus Ministros no intervienen en ellos.—Sanccionada la unidad de régimen, Rivadavia manifiesta su opinión.—Según ella, debía dárseles a las provincias, además de la administración de sus rentas peculiares y de la provisión de los empleos locales, la facultad de elegir o de intervenir en la elección de sus Gobernadores.—Mensaje, de acuerdo con esa opinión, acompañando el proyecto de la Ley Orgánica.—Explicaciones dadas por la prensa.—Rivadavia no era hombre de partido.—Introducidas en la Constitución las bases del régimen federal, ella toma el carácter de mixta o de transacción que tiene la de los Estados Unidos.—Estudio comparativo de las Constituciones Argentinas de 1826 y 1853. 251
- CAP. V.**—La Constitución era sensata, y patrocinaba la paz.—Así lo entendía Rivadavia y el Congreso.—La Constitución sometida al examen y decisión de los pueblos; no se le impone a ninguno, ni aún aceptada por dos terceras partes; la aceptación sería llana o condicional, y en cualquier caso, los pueblos podían quedar en paz y buenas relaciones.—No se dejaba pretexto para mantener la disidencia y mucho menos la guerra civil.—Nuevos peligros de la guerra exterior.—Para conjurarlos, el Presidente y el Congreso hacen un llamamiento al patriotismo argentino.—Es desoído.—Debates en el Congreso.—Combaten como afrentosas las leyes de olvido.—Mantienen la oposición intransigente y la guerra civil.—Impiden todo avenimiento y toda organización nacional. 271
- CAP. VI.**—El éxito de la misión de los Diputados del Congreso dependía de que los caudillos les permitieran someter la Constitución al

examen de las Juntas Provinciales.—Interés que debía tener la oposición en que las Juntas lo verificasen con la mayor apariencia de libertad.—El Diputado Gorriti en Córdoba.—La Junta, que estaba en receso, es representada por una Comisión, con la cual discute los puntos esenciales de su misión, solicitando la convocatoria de la Junta.—La Comisión Legislativa y el Gobernador Bustos declaran que Córdoba, desligada del pacto nacional, no entra en el examen de la Constitución, y ordena que el Comisionado del Congreso regrese en el término de 48 horas.—La opinión de Córdoba es favorable a la organización nacional.—El Diputado Tezanos Pinto en Santiago del Estero: Ibarra lo recibe en camisa y calzoncillos.—Conferencia del Comisionado con Ibarra.—Este le devuelve la Constitución, ordenándole que regrese en 24 horas.—El Diputado D. Dalmacio Vélez se dirige a Quiroga.—Este devuelve cerrada la comunicación en la forma y en los términos más inconvenientes.—Los caudillos se sustituyen a las Juntas y resuelven—ellos solos—por sí, y ante sí, la cuestión orgánica.—Hostilidades para imposibilitarle al Ejecutivo Nacional la guerra y la paz exterior. . . .

301

CAP. VII.—La oposición no hizo esfuerzo alguno para evitar la funesta situación que se produjo.—Apreciación de las causas por que la oposición se la atribuía a Rivadavia.—Creación del Ejecutivo Nacional.—Milicias Provinciales.—Presidencia de la República.—Banco Nacional.—Remoción de los Diputados Nacionales.—La Capital Nacional.—El Coronel La Madrid en Tucumán.—La oposición persiste en no querer su propio triunfo dentro de la Constitución y en derrocar a los Poderes Nacionales por la conjunción

de la guerra civil con la guerra extranjera. —Busto y Quiroga.—Rivadavia no quiere hacer una paz ignominiosa con el Brasil ni resolver por la fuerza la cuestión orgánica. —Abandona, en consecuencia, la escena pú- blica, resignándose al aislamiento entre sus amigos y al ostracismo a que le condena- ron los que no lo eran.—El coronel Dorre- go, Gobernador de Buenos Aires.—La opo- sición asume la responsabilidad de la gue- rra y de la organización del país.—Las pre- dicciones de la historia.	335
--	-----

Revista de Filosofía

CULTURA · CIENCIAS · EDUCACIÓN

Publicación bimestral dirigida por JOSE INGENIEROS

APARECE EN VOLÚMENES DE 150 A 200 PÁGINAS

Estudia problemas de cultura superior e ideas generales que excedan los límites de cada especialización científica. No edita artículos literarios, políticos, históricos ni forenses.

Desea imprimir unidad de expresión al nascente pensamiento argentino, continuando la orientación cultural de Rivadavia, Echeverría, Alberdi y Sarmiento.

Ha publicado artículos de *Florentino Ameghino, José M. Ramos Mejía, Agustín Alvarez, Joaquín V. González, Rodolfo Rivarola, Ángel Gallardo, Pedro N. Arata, Jorge Duclout, Carlos O. Bunge, Francisco de Veyga, J. Alfredo Ferreyra, Víctor Mercante, Julio Méndez, Enrique Martínez Paz, Gregorio Araoz Alfaro, Carlos Ameghino, Martín Doello Jurado, Salvador Debenedetti, Juan W. Gez, Ricardo Rojas, Maximio S. Victoria, Alfredo Colmo, Alicia Moreau, Emilio Zuccarini, Augusto Bunge, Vicente D. Sierra, Raúl A. Orgaz, Teodoro Becú, Ramón Melgar, Julio Cruz Ghio, Nerio A. Rojas, A. Alberto Palcos, José M. Monner Sanz, etc., etc.*

Las personas estudiosas que deseen recibir la REVISTA deben adjuntar el exiguo importe de la suscripción, estrictamente reducido a los gastos tipográficos y postales. En esa forma simplificarán la tarea administrativa.

Suscripción anual: 10 \$ m/n.

Exterior, anual: 5 \$ oro.

Redacción y Administración: CALLE VIAMONTE 763

BUENOS AIRES

"La Cultura Argentina"

EDICIONES DE OBRAS NACIONALES

Dirigidas por el Dr. JOSÉ INGENIEROS

Libros de 450 páginas, formato 23×15

Precio de venta: \$ 2 m/n.

Mariano Moreno	—	Escritos políticos y económicos.
Domingo F. Sarmiento	—	Conflicto y armonías de las razas.
José M. Ramos Mejía	—	Las Neurosis de los Hombres célebres.
Juan M. Gutiérrez	—	Origen y Desarrollo de la Enseñanza Pública Superior.

EN PRENSA :

Juan B. Alberdi	—	Estudios económicos.
Florentino Ameghino	—	Filogenia.
José M. Ramos Mejía	—	Obras completas.



Libros de 300 páginas, formato 18×12

Precio de venta: \$ 1 m/n.

Esteban Echeverría	—	Dogma Socialista y Plan Económico.
Juan B. Alberdi	—	El crimen de la guerra.
Juan B. Alberdi	—	Bases.
Domingo F. Sarmiento	—	Farundo.
Andrés Lamas	—	Rivadavia.
Florentino Ameghino	—	Doctrinas y descubrimientos.
Agustín Álvarez	—	La Creación del mundo moral.

EN PRENSA :

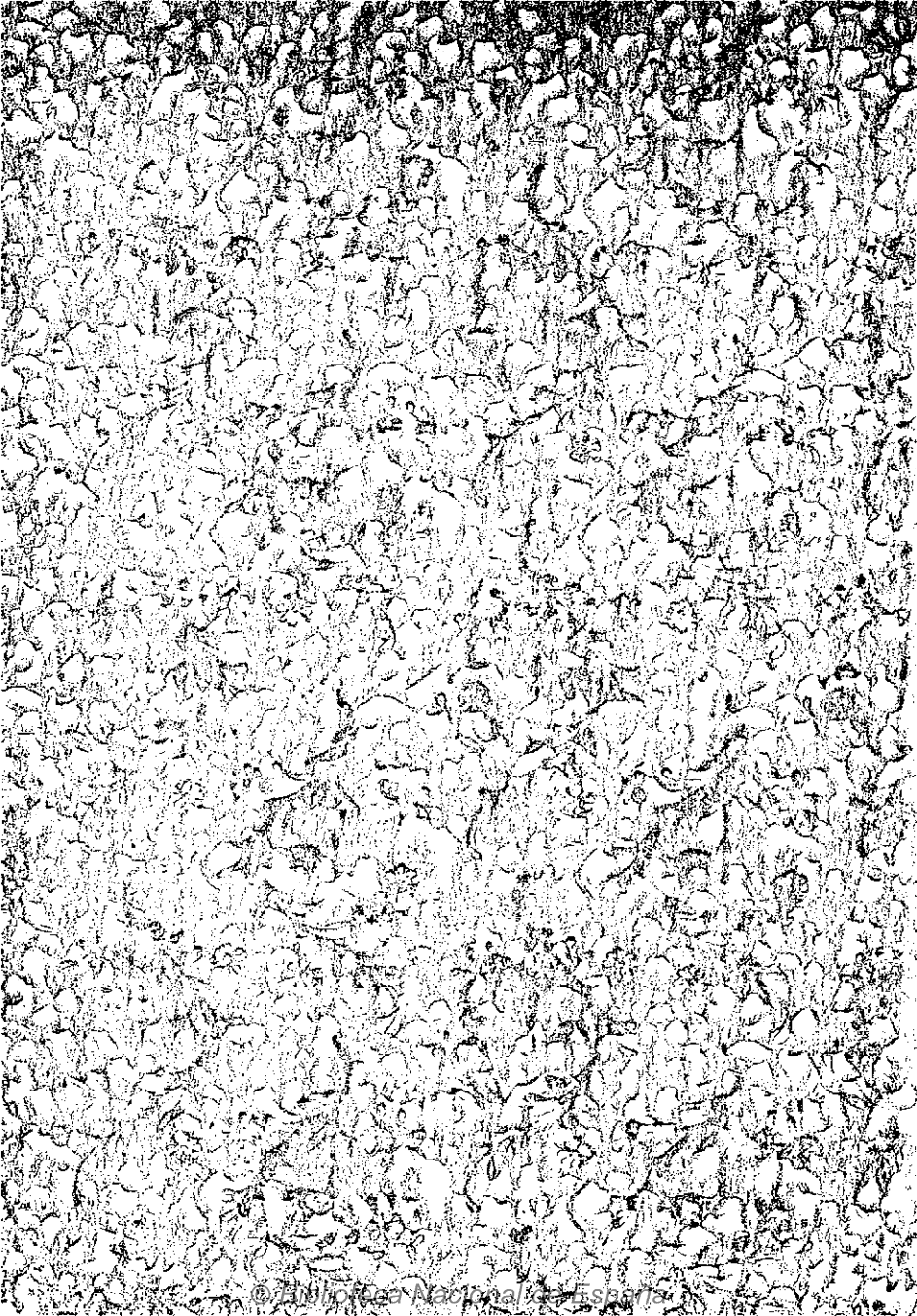
Olegario V. Andrade	—	Poesías completas.
Aristóbulo del Valle	—	Oraciones magistrales.
Agustín Álvarez	—	¿Adonde vamos?
Domingo F. Sarmiento	—	Argirópolis.
Francisco Ramos Mejía	—	El Federalismo Argentino.

- «La Cultura Argentina» no tiene subvenciones ni vende ejemplares a las reparticiones públicas.
- «La Cultura Argentina» edita en el país y vende los libros a precio de costo.
- «La Cultura Argentina» persigue fines educativos y no es una empresa comercial.

Las ediciones están de venta en todas las librerías.
Pedidos a la Administración general:

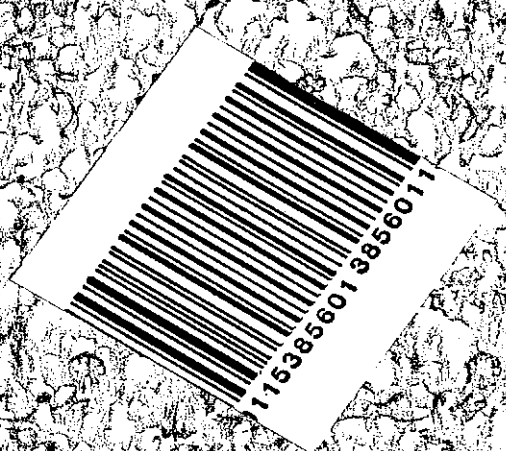
CASA VACCARO - Av. de Mayo 646

BUENOS AIRES





1102912318



1153856013856011